

MILLCAYAC



REVISTA DIGITAL DE CIENCIAS SOCIALES

www.millcayacdigital.uncu.edu.ar



Líneas temáticas

Género y Derechos Humanos
Estado y Movimientos Sociales
en Nuestra América
Bienes Comunes y Sociedad
Comunicación, Arte y Cultura

Dossier

Política y Producción del Conocimiento
en América Latina

Obra *El mirador del sol* (escultura en mármol - 2010).
Fausto Marañón (Fotografía: Daniel Romero)



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



FCPYS
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CPu

CENTRO DE
PUBLICACIONES

Millcayac

Revista Digital de Ciencias Sociales

VOLUMEN IV - NÚMERO 7 - SEPTIEMBRE 2017



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



FCPYS
FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CPu

CENTRO DE
PUBLICACIONES



Millcayac - Revista Digital de Ciencias Sociales
www.millcayacdigital.uncu.edu.ar
Volumen IV - Número 7 - 2017

ISSN: 2362-616X

Editada por el Centro de Publicaciones. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales. Universidad Nacional de Cuyo

Centro Universitario. M5502JMA. Mendoza, Argentina
Tel. +54 261 4135008. Interno: 2013
centropublicaciones@fcp.uncu.edu.ar - revistamillcayac@gmail.com



Licencia Creative Commons

Millcayac - Revista Digital de Ciencias Sociales es distribuido bajo una
Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual
4.0 Internacional



AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Decana: Mgter. Claudia Alejandrina García

Vicedecana: Mgter. Silvia Mónica García

Directora del Centro de Investigaciones Científicas: Lic. Esp. Andrea Blazsek

Directora del Centro de Publicaciones: Dra. Rosana Rodríguez

Directora de Millcayac-Revista Digital: Dra. Rosana Rodríguez

CUERPO EDITORIAL

Directora y Editora jefa: Dra. Rosana Rodríguez

Directora: Dra. Rosana Rodríguez

Editora Técnica: Victoria Pasero

Comunicación e imagen: Lic. Julieta Vignale

Diseño/diagramación/compaginación de texto: Victoria Pasero y Lautaro Rodríguez Ñancu

Corrección de estilo: Raquel Ferreyra

Traducción español-inglés: Téc. Camila Berthold

Soporte técnico: Sistema Integrado de Documentación (SID-UNCuyo), Lic. Juan Cruz

Groisman y Bib. Adrián Méndez

Personal de apoyo: Alejandra Aceval



COMITÉ CIENTÍFICO EDITORIAL

Dr. Pablo Alabarces. CONICET. Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Dra. Teresa Elizabeth Cueva Luna. El Colegio de la Frontera Norte. México

Lic. Prof. Lidia Fernández. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dr. Julio Gambina. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dra. Beatriz Garrido. Universidad Nacional de Tucumán. Argentina

Prof. Dra. Alicia González-Saibene. Universidad Nacional de Rosario. Argentina

Mgter. Claudia Laudano. IDIHCS. CONICET. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Dra. Carmen Monreal Gimeno. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. España

Dra. Anahí Viviana Mastache. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Mgter. Mariel Lucero. Universidad de Congreso. Universidad Champagnat. Argentina

Mgter. Mario Maure. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina

Dr. Cristian Parker. Universidad de Santiago de Chile. Instituto de Estudios Avanzados. Chile

Dr. Juan Piovani. CONICET. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Argentina

Dr. Hernán Pruden. Universidad Mayor de San Andrés. Bolivia

Dra. María Dolores Ramos Palomo. Universidad de Málaga. España

Dra. Eva Rodríguez Agüero. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina

Mgter. María del Pilar Rodríguez. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina

Dra. Rosana Rodríguez. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina

COMITÉ ASESOR EDITORIAL

Dra. Ana Arias. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dra. Miriam Bilbao. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina

Dr. Marcelo Borrelli. CONICET. Universidad Nacional de Buenos Aires. Argentina

Dr. Nazareno Bravo. INCIHUSA. CONICET. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina

Dra. Melisa Campana. Universidad Nacional de Rosario. Argentina

Mgter. Martín Elgueta. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina

Mgter. Ana Marcela Ficcardi. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina

Dra. Rosana Guber. CONICET. Instituto de Desarrollo Económico y Social. Argentina

Lic. Nicolás Lobos. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina



COMITÉ DE EVALUADORES/AS

Dra. Anabella Carolina Abarzúa Cutroni. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina

Dra. María Cecilia Abdo Ferez. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Universidad Nacional de las Artes. Argentina

Dra. María Victoria Álvarez. Universidad Nacional de Rosario. Argentina

Lic. Fermín Álvarez Ruiz. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Mgter. Luciano Anzelini. Universidad Nacional de Quilmes. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Mgter. Melisa Argento. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dr. Carlos Barros Guimeráns. Universidad de Santiago de Compostela. España

Dra. María Noel Bulloni Yaquinta. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Argentina

Dra. Jimena Caravaca. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Desarrollo Económico y Social. Argentina

Dr. Rocco Carbone. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto del Desarrollo Humano. Universidad Nacional de General Sarmiento. Argentina

Mgter. Nelson Cardozo. Universidad de Buenos Aires. Universidad Argentina de la Empresa. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Argentina

Lic. José María Casco. Universidad Nacional de La Matanza. Universidad Nacional de San Martín. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dr. Daniel Alejandro Cieza. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dr. Nicolás Santiago Dallorso. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dr. Nicolás Diana Menéndez. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina

Dr. Agustín Ferraro. Universidad de Salamanca. España

Mgter. Ignacio González Bozzolasco. Universidad Evangélica del Paraguay. Paraguay

Mgter. Marcela Guerrero. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Argentina

Dr. Carlos Huneus. Universidad de Chile. Chile

Dr. Walter Omar Kohan. Universidad del Estado de Río de Janeiro. Brasil. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Argentina

Dr. Santiago Leiras. Universidad de Buenos Aires. Universidad de Belgrano. Argentina

Dr. Miguel Leone. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dr. Federico Lorenc Valcarce. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Argentina

M.C. María Cecilia Montemayor Marín. Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo de Tamaulipas. México

Dr. Juan Montes Cató. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dr. Francisco Orgaz Agüera. Universidad Tecnológica de Santiago. República Dominicana

Dr. Gustavo Parra. Universidad Nacional de Luján. Argentina
Dra. Lorena Poblete. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de San Martín. Argentina

Dra. Gabriela A. Pontoni. Universidad Nacional de La Matanza. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Argentina

Dr. Fernando Quesada. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina

Lic. Charles Quevedo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Paraguay

Dra. Ana María Raimondo. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Argentina

Mgter. Mónica Isabel Riveros de Corradi. Universidad Nacional de San Juan. Argentina



Mgter. Gina Paola Rodríguez. Universidad Nacional de Colombia. Colombia

Lic. Julia Virginia Rofe. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dra. Gabriela Beatriz Sica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de Jujuy. Argentina

Dr. Facundo Solanas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dr. Gustavo Sorá. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Antropología de Córdoba. Argentina

Dra. Soledad Stoessel. Centro Científico Tecnológico La Plata. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Argentina

Dr. Carlos René Unda Lara. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador

Dra. Luz Coromoto Varela. Universidad de Los Andes. Venezuela

Dra. Patricia Ventrìci. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina



ÍNDICE

EDITORIAL

Datos editoriales	1
Prólogo	11
<i>Rosana Rodríguez</i>	

DOSSIER: POLÍTICA Y PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINA

Presentación	15
<i>Paola Bayle y Lorena Soler</i>	

Artículo: Regímenes Políticos de Conocimiento: tecnocracia y democracia en Chile y Uruguay	17
<i>Adolfo Garcé García y Santos</i>	

Artículo: <i>Think tanks</i> , democracia y partidos políticos. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga durante la reforma constitucional colombiana (1986-1992)	49
<i>Ana Belén Mercado</i>	

Artículo: El consenso económico-social democrático fue posible. El papel de los economistas de CIEPLAN en el Chile de la transición (1988-1991)	71
<i>Juan Jesús Morales Martín y Camilo Garber Fuentes</i>	

Artículo: O papel dos <i>think tanks</i> pró-mercado na difusão do neoliberalismo no Brasil	95
<i>Camila Rocha</i>	

Artículo: <i>Think tanks</i> , intelectuales y derechas. El rol de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en Venezuela y Argentina (2015-2017)	121
<i>Julieta Grassetti y Florencia Prego</i>	

Artículo: La edición como intervención cultural, comercial y política: best-sellers políticos del director de Random House-Sudamericana en el kirchnerismo	141
<i>Ezequiel Saferstein</i>	

Misceláneas: Las ciencias sociales y los intelectuales en la perspectiva de las derechas latinoamericanas hoy	165
<i>Verónica Giordano</i>	



ESTADO Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN NUESTRA AMÉRICA

Artículo: El trabajo en Argentina como centro de la cuestión social y constructor de relaciones sociales 181

Carlos María Ciappina y Paula Meschini

Avance de investigación: La relación entre los niveles educativos y la precarización laboral en los/as obreros/as de bodegas del Gran Mendoza (2003 y 2014) 205

Mariana Ayelén Pereyra

Artículo: Sujetos políticos, dignidad y movilización. Aportes de Arturo Roig al estudio latinoamericano de los movimientos sociales y las identidades políticas 213

Romina Accossatto

Artículo: El protagonismo político del sindicalismo en la ciudad de Rosario (2003-2007) 235

Esteban Iglesias y Juan Bautista Lucca

Reseña: El oficio de la historia o “la historia del oficio” 261

Jorge Rubén Afarian

BIENES COMUNES Y SOCIEDAD

Artículo: El trabajo de educación ambiental en la comunidad rural de Alegría de Pío, Provincia de Granma, Cuba 267

Elsa L. Hernández Sabourín, Herlinda Remón Castillo, Jesús F. Garcés Fonseca y Fidel A. González Peña

COMUNICACIÓN, ARTE Y CULTURA

Ensayo: Las plazas de Mendoza como patrimonio de la sociedad 287

María Carolina Ozollo, Cecilia Baldini Domenech, Bárbara Gisel Márquez y Florencia Santos Fassi

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Artículo: Una mirada a las concepciones sociales de las infancias en las constituciones y códigos del menor de Bolivia (1950-1980): minoridad y situación irregular 295

Weimar Giovanni Iño Daza





PRÓLOGO

Las transformaciones que ha vivido el planeta como consecuencia de la reconcentración del poder y de la creciente mercantilización de todas las esferas de la vida (...) han tenido efectos profundos en los modos y procesos de producción de conocimiento en las sociedades contemporáneas

Edgardo Lander (2006: 47)

Millcayac Revista Digital de Ciencias Sociales Vol. 4, Número 6, presenta el dossier “Política y producción del conocimiento en América Latina”. La consolidación e institucionalización de la producción de conocimiento científico en América Latina en las últimas décadas se dieron en simultáneo con un acelerado proceso de internacionalización, con consecuencias importantes para las ciencias sociales desarrolladas desde el Cono Sur.

Las nuevas políticas neoliberales de ajuste impactan en la academia y en el campo intelectual y generan una mercantilización del proceso de producción, apropiación, regulación y distribución del saber, sin embargo, en ese proceso al mismo tiempo se desarrollaron propuestas alternativas a las redes *think tanks* neoliberales como son las nuevas formas de indagación científica no regidas por las normas del mercado ni por las regulaciones de propiedad intelectual, tales como las que provienen del reconocimiento de los saberes de las poblaciones indígenas y campesinas, de los movimientos sociales, las organizaciones de mujeres, feministas, entre otras.

Las relaciones de poder y dominación permean la actividades académicas científicas mediante procesos y métodos sofisticados, tales como el ranking universitario, la imposición de agendas temáticas, los sistemas de indexación de revistas científicas, las instituciones financiadoras, delineando la agenda global del conocimiento y reforzando lo que algunos/as autores/as han denominado el fenómeno de la “dependencia académica” de las regiones periféricas, como América Latina, bajo la órbita del sistema académico mundial modelado por Estados Unidos.

Es por ello que el dossier presenta una serie de trabajos que abordan temáticas muy diversas que favorecen el debate en torno de las redes de *think tanks* neoliberales, los nuevos agentes de producción de ideas, el saber experto y el saber intelectual, las ideologías y el tipo de financiamiento, los regímenes políticos del saber y el lugar de las ciencias sociales en América Latina.

De este modo, abre el dossier el artículo *Regímenes Políticos de Conocimiento: tecnocracia y democracia en Chile y Uruguay*, de Adolfo Garcé García y Santos, quien enfatiza la relación entre saber y poder a partir del recurso comparativo de las tipologías de Regímenes Políticos de Conocimiento aplicadas a los procesos democráticos de Chile y Uruguay.

A continuación se presenta el trabajo *Think tanks, democracia y partidos políticos: El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga durante la reforma constitucional colombiana (1986-1992)*, en él Ana Belén Mercado indaga sobre la incidencia de la *think tanks* en la política colombiana desde los años 80, analiza la influencia en la reforma de la Constitución y en los procesos democráticos y de participación política por parte del Instituto de Ciencia Política de Colombia, que adquiere un papel central en la producción de sentido neoliberal, bajo la apariencia de neutralidad, racionalidad y desapego de los partidos políticos.



El artículo *El consenso económico-social democrático fue posible. El papel de los economistas de CIEPLAN en el Chile de la transición (1988-1991)*, de Juan Jesús Morales Martín y Camilo Garber Fuentes, analiza las transformaciones que experimenta el grupo de expertos economistas de CIEPLAN en Chile de la transición mediante la construcción de consensos económicos que impactan fuertemente en la situación política actual respecto de la transición política chilena. Los expertos se constituyeron en actores clave, como un *think tank* de ese proceso inspirado en el “saber tecnocrático”, encargados de promover la integración de la economía chilena con la economía mundial instalando un discurso hegemónico alrededor de la gobernabilidad democrática.

Camila Rocha presenta su propuesta denominada *O papel dos think tanks pró-mercado na difusão do neoliberalismo no Brasil*, en ella analiza la década de los 90 en Brasil y el poder de los primeros *think tanks* promercado en la difusión del ideario neoliberal desde la transición democrática hasta el ascenso a la presidencia de Henrique Cardoso.

Think tanks, intelectuales y derechas. El rol de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en Venezuela y Argentina (2015-2017) es el título de Julieta Grassetti y Florencia Prego para el análisis de las condiciones sociales e históricas de la relación política y conocimiento. Las autoras ponen el acento en la incidencia de los *think tanks* y sus vinculaciones transnacionales con las derechas en América Latina mediante el estudio de la Fundación para el Análisis de Estudios Sociales (FAES) en Venezuela y Argentina.

Ezequiel Saferstein desarrolla en *La edición como intervención cultural, comercial y política: best-sellers políticos del director de Random House-Sudamericana en el kirchnerismo*, el mercado editorial que hegemonizó la producción, circulación y difusión de libros sobre coyuntura política. Su estudio se enfocará en el director editorial de Random House entre 2005-2012. Indaga en los fundamentos sociales y materiales de la circulación, los vínculos entre la edición, la intervención intelectual y la política, a través de la instalación de temáticas en la esfera pública. Su trabajo permite comprender la intervención intelectual y política del mercado editorial actual, definido por una lógica mercantil que da cuenta de la disputa de poder en el campo político.

Finalmente Verónica Giordano presenta la miscelánea *Las ciencias sociales y los intelectuales en la perspectiva de las derechas latinoamericanas hoy*. La autora aborda la construcción de una comunidad de ideas en América Latina a partir del libro *Mujer, sexualidad, internet y política* de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto. En dicho libro encuentra las ideas motoras del marketing comunicacional y los postulados políticos del relato PRO y la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, en torno de seducir con campañas políticas al “nuevo electorado latinoamericano”.

Inicia el eje de Estado y Movimientos Sociales en Nuestra América el artículo *El trabajo en Argentina como centro de la cuestión social y constructor de relaciones sociales*, de Carlos María Ciappina y Paula Meschini. El objetivo es repensar viejos problemas y recuperar distintas matrices conceptuales para reflexionar sobre el valor del trabajo en sociedades salariales que aún persisten a pesar de la embestida del neoliberalismo, cuyo gran enemigo es el trabajo asalariado, que en Argentina tiene una fuerte significación y múltiples implicancias subjetivas y colectivas en la vida cotidiana y en especial en los sectores populares.

Así los/as autores/a afirman que frente a este universo compacto y abigarrado y su infame maquinaria de exclusión pueden tejerse zonas de refugio. Zonas que presenten alternativas



para hacer frente a los nuevos procesos con respuestas imaginativas. El trabajo ocupa el centro mismo de la cuestión social, y se convierte en clave para pensar e intervenir en las sociedades actuales, siendo un eje constitutivo y central de cualquier proyecto de desarrollo en América Latina.

Siguiendo con el análisis del mundo laboral contamos con el avance de investigación de Mariana Ayelén Pereyra *La relación entre los niveles educativos y la precarización laboral en los/as obreros/as de bodegas del Gran Mendoza (2003 y 2014)*, en la que indaga sobre las consecuencias y los recorridos de la expansión del trabajo flexible desde los 90 en Argentina y, con esto, los requisitos educativos para acceder al empleo se elevan. En las industrias vitivinícolas mendocinas, la precarización laboral y el trabajo informal han crecido, por lo cual encontramos trabajadores/as con diferentes niveles educativos en puestos de operarios.

Romina Accossatto, en su texto *Sujetos políticos, dignidad y movilización. Aportes de Arturo Roig al estudio latinoamericano de los movimientos sociales y las identidades políticas*, realiza una aproximación a los elementos conceptuales de la obra del filósofo mendocino para el estudio de las particularidades regionales de la acción colectiva y la construcción de identidades políticas, teniendo en cuenta que como contestación a los efectos regresivos de las políticas neoliberales América Latina se ha constituido, en las últimas décadas, en el escenario de emergencia de nuevos sujetos políticos y movimientos sociales. Los impulsos humanizadores que emergieron y emergen de nuestras tierras se manifiestan como la voz de los sectores olvidados, oprimidos y explotados que, a través de sus luchas, reclaman su reconocimiento como sujetos. El artículo se enfoca en las nociones de Roig que permiten potenciar el análisis de la emergencia de subjetividades políticas contestatarias: la noción de “a priori antropológico” y la existencia de una “moralidad de la emergencia” que se manifiesta a través de una dinámica discontinua, a partir de “comienzos y recomienzos”. La autora desarrolla que en la emergencia de una identidad común, no es suficiente que los sujetos compartan orientaciones, diagnósticos y campos de acción, sino que se construye una instancia previa, un necesario momento ético-político de auto e interreconocimiento de la dignidad humana que orienta y da sentido a las acciones colectivas.

Esteban Iglesias y Juan Bautista Lucca son los autores de *El protagonismo político del sindicalismo en la ciudad de Rosario (2003-2007)*, artículo que tiene como objetivo complementar los aportes relativos a la producción de alcance nacional acerca de la recomposición política del gremialismo durante el período que inició el ciclo político kirchnerista y de la pos-convertibilidad económica en Argentina, presentando las singularidades y continuidades de los derroteros subnacionales. A través de una estrategia cualitativa, se desarrollan las definiciones identitarias e institucionales en una ciudad donde la singularidad de la conflictividad y activación sindical estuvo liderada principalmente por aquellos sectores vinculados al empleo público, e incluso por fuera del arco cegetista.

El oficio de la historia o “la historia del oficio” es el provocador título de la reseña que hace Jorge Rubén Afarian del libro de Lila Caimari *La vida en el archivo. Goces, tedios y desvíos en el oficio de la historia*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 144 p. (2017). Inspiradora, así califica a la obra, la que además es una guía técnica y ética sobre la relación entre el o la historiador/a y el archivo. Asegura Afarian que “los relatos en primera persona de las experiencias y sensaciones de la autora nos enseñan numerosas cuestiones que no se aprenden en los libros de metodología”, y



de la relación de la historia con el archivo y las modificaciones que experimentan con el avance de las nuevas tecnologías.

En el eje de Bienes comunes y Sociedad, el artículo *El trabajo de Educación Ambiental en la comunidad rural de Alegría de Pío. Provincia de Granma, Cuba*, Elsa Lázara Hernández Sabourín, Herlinda Remón Castillo, Jesús Fernando Garcés Fonseca y Fidel Alejandro González Peñade afirman que la acelerada disminución de la diversidad biológica es uno de los principales problemas ambientales en Cuba y en el mundo. En su texto, los integrantes del Departamento de Biología de la Universidad de Gramma explican las tareas que realizaron en un pequeño pueblo, de 207 personas, enclavado en una zona rural, tras diagnosticar un insuficiente conocimiento de la biodiversidad y la necesidad de su conservación. El relevamiento reconoce como escasos los saberes de los pobladores sobre la flora y fauna local, la deforestación, la caza indiscriminada y desconocimiento de la legislación ambiental. El trabajo aportó la realización de inventarios, entre otras cosas, de la flora y fauna y los resultados propiciaron acciones educativas específicas para el rescate de valores naturales, culturales, históricos, políticos y económicos del lugar.

Comunicación, Arte y Cultura incluye el ensayo *Las plazas de Mendoza como patrimonio de la sociedad*, de María Carolina Ozollo, Cecilia Baldini Domenech, Bárbara Gisel Márquez y Florencia Santos Fassi. Así como se evidenció en el pasado un *romance* entre las personas de la región cuyana argentina y sus espacios verdes, en la actualidad se constata cierto desapego, desinterés y hasta vandalismo en estos espacios. Con el avance de la urbanización estos sitios específicos fueron perdiendo protagonismo y una disminución del sentido de pertenencia. Los espacios verdes marcados por la transformación de la provincia de Mendoza son de una importancia clave para la cultura y la idiosincrasia de los/as habitantes, ya sea por su uso social y recreativo, como también por los vastos servicios ambientales que brindan.

En el texto seleccionado para el eje de Género y Derechos Humanos *Una mirada a las concepciones sociales de las infancias en las constituciones y códigos del menor de Bolivia (1950-1980): minoridad y situación irregular*, Weimar Giovanni Iño Daza sostiene que la minorización y situación irregular son construcciones sociales definidas desde el Estado y los gobiernos, mediante los procesos de judicialización e institucionalización. Un largo camino recorre el trabajo respecto de la construcción social de las infancias como “sujetos de derechos”, bajo la influencia de los marcos jurídicos internacionales, los movimientos de activistas, la actuación de instituciones supranacionales y regionales. El autor analiza las concepciones sociales que tuvo el Estado sobre las infancias en Bolivia, sobre todo en las leyes y reglamentaciones institucionales que se aplicaron durante el nacionalismo (1952-1964) y en los gobiernos militares (1964-1982). En ambos contextos se desplegaron marcos jurídicos destinados a la protección de la infancia, ejemplo de ello son los Derechos del Niño Boliviano de 1955, los Códigos del Menor de 1966 y 1975 e invita a problematizar sobre el sentido de las infancias como “sujetos de derechos” en el actual marco jurídico e institucional adultocéntrico.



PRESENTACIÓN DOSSIER POLÍTICA Y PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINA

El presente dossier es fruto de una serie de actividades conjuntas de docentes, investigadores y estudiantes que coincidimos en los estudios en torno a América Latina. El primer punto de contacto surgió a partir del interés común por los estudios en América Latina, que también derivaron en asumir tareas de gestión académica en esta área. Ambas coordinadoras del dossier son responsables de la gestión académica de posgrado de estudios en la región: Paola Bayle, de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNCuyo), y Lorena Soler, de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Son además investigadoras del CONICET y docentes en las respectivas facultades. En el marco de estas responsabilidades de gestión y docencia, se integra la Subcomisión de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea (RIHALC), otro espacio institucional que genera diálogos, proyectos y amistades.

Fue así que surgió la posibilidad de coordinar el simposio *Intelectuales, expertos/as y profesionales en la configuración de las relaciones entre el saber y la política en América Latina*, en el XIII Seminario Argentino Chileno y VI Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales, organizado por el Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo en marzo de 2016). La idea fue confluir en una temática que sirviera de puente entre los tópicos de los grupos de investigación (Grupo de Sociología Histórica de América Latina, GEHSAL, y Programa de Investigaciones sobre Dependencia Académica en América Latina, PIDAAL), invitando, asimismo, a quienes pudieran aportar al debate desde otros espacios. El simposio resultó ser un momento fructífero en intercambios y debates.

En aquellos días de marzo de 2016, expusimos nuestros trabajos, principalmente, en dos ejes: por un lado, encontramos un grupo de intervenciones focalizadas en las particularidades de quienes actúan, en la actualidad, en el campo del poder estatal y son responsables de políticas de corte neoliberal en la región. En este sentido, se trabajaron redes intelectuales, *think tanks*, editoriales, ideologías y financiamiento, entre otras. Además, se analizaron procesos al interior de los campos académicos del Cono Sur de América Latina, particularmente el lugar de las Ciencias Sociales en la distribución de las capacidades de investigación y trabajos científicos colaborativos. Hubo, asimismo, ponencias que profundizaron históricamente el complejo vínculo entre saber experto y poder político, mostrando las particularidades en distintos casos nacionales.

Como resultado de este intercambio, comenzó a germinar la idea de una publicación conjunta que se cristaliza finalmente en este dossier. En el camino, generamos otros espacios y momentos de encuentros. En el nivel de docencia y en el marco de las respectivas maestrías, realizamos clases conjuntas, circulación de estudiantes y proyectamos la conformación de



nuevos cursos. En términos de participación en eventos académicos, otra instancia de diálogo tuvo lugar en las Terceras Jornadas de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (Mendoza, junio de 2017) en torno a la mesa *El campo de estudios latinoamericanos: debates, temas y problemas comunes en suelo nuestroamericano* y, finalmente, en las XVI Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia (Mar del Plata, agosto 2017) continuó el debate sobre saber y poder en América Latina, propiciando un espacio sólido para la reflexión de la especialidad.

Este breve itinerario da cuenta de un posicionamiento político compartido alrededor de la necesidad de encontrar espacios de diálogo, intercambio académico, redes de colaboración y debate sobre temas que se visibilizan como urgentes en la agenda de las Ciencias Sociales de hoy. La avanzada de las políticas de ajuste en distintas áreas de nuestros países conosureños (sociales, científicas, educativas, entre otras) nos invita y obliga a reflexionar sobre los orígenes y la génesis de quienes hoy son responsables de nuestro presente y futuro.



Adolfo Garcé García y Santos

Instituto de Ciencia Política. Universidad de la República. Uruguay

adolfo.garce@cienciassociales.edu.uy

REGÍMENES POLÍTICOS DE CONOCIMIENTO: TECNOCRACIA Y DEMOCRACIA EN CHILE Y URUGUAY

Resumen: Los expertos suelen enfatizar el parecido entre las democracias de Chile y Uruguay. En efecto, tienen desempeños muy similares en las mediciones de calidad de la democracia. Además, las dos han sido construidas, a lo largo del siglo XX, sobre partidos fuertes y una extensa clase media. Sin embargo, presentan una diferencia significativa en el vínculo entre saber y poder. Por eso mismo, ofrecen una excelente oportunidad para poner a prueba la tipología de Regímenes Políticos de Conocimiento elaborada en Garcé (2014) a partir de Campbell y Pedersen (2011, 2014). La chilena es una democracia elitista y tecnocrática, que recela de la participación popular. La uruguaya es una democracia participativa pero hostil a los expertos. En Chile la calidad de las políticas sufre por falta de participación popular, en Uruguay, en cambio, por la fragilidad del nexo entre investigación y políticas públicas. Para entender esta diferencia clave hay que remontarse al siglo XIX y a los respectivos procesos de democratización

Palabras clave: regímenes políticos de conocimiento, tecnocracia, democracia, Chile, Uruguay

Political Knowledge Regimes: Democracy and Technocracy in Chile and Uruguay

Abstract: Experts often point out the similarity between the democracies of Chile and Uruguay. In fact, they have similar performances in quality of democracy index measurements. In addition, both democracies have been built, during the twentieth century, on strong parties and a large middle class. However, they show a crucial difference in the link between knowledge and power. For this reason, they offer an excellent opportunity to test the typology of Political Regimes of Knowledge elaborated in Garcé (2014) from Campbell and Pedersen (2011, 2014). The Chilean democracy is elitist and technocratic, which fears popular participation. On the other hand, the Uruguayan democracy is participatory, but hostile to the experts. In Chile, the quality of policies suffers from lack of popular participation. In Uruguay, in contrast, it suffers due to the fragility of the nexus between research and public policies. To understand this key difference, one must go back to the nineteenth century and to the respective processes of democratization.

Keywords: political knowledge regimes, technocracy, democracy, Chile, Uruguay



Introducción

Suele decirse que Chile y Uruguay son democracias parecidas. En términos comparados, además de contarse entre las más estables, las dos presentan niveles destacados en los indicadores más habituales de calidad democrática. Sin embargo, en un sentido muy específico y relevante, son sensiblemente distintas. Saber y poder se relacionan de modo muy diferente en los dos sistemas políticos. En Chile, desde siempre, la voz del experto se escucha fuerte y clara. El conocimiento especializado es usado generalmente como estrategia de construcción de acuerdos entre partidos. Entre saber y poder existe una conexión estrecha. En Uruguay, en cambio, desde los primeros tiempos de construcción del Estado se verifica una situación opuesta. Los ciudadanos tienen potentes mecanismos para hacer pesar sus preferencias en las políticas públicas. Pero los expertos no. El conocimiento especializado es usado como arma en la competencia política y la lucha por espacios de poder. Entre saber y poder, en definitiva, hay más conflicto que cooperación. Ambos países, como se verá, tienen regímenes políticos de conocimiento diferentes.

Este argumento se desarrolla del modo siguiente, además de esta introducción y del capítulo de conclusiones, el texto se compone de tres secciones. En la primera se justifica la pertinencia de la comparación entre las democracias de Chile y Uruguay y se presenta la definición de Régimen Político de Conocimiento (de aquí en adelante, solamente RPC). En la segunda, se realiza un recorrido por las respectivas historias políticas buscando poner de manifiesto las diferencias existentes en el vínculo entre saber y poder, remitiéndolas al proceso de conformación de los Estados nacionales. En la tercera, se aplica la definición de RPC a los dos países y se presenta evidencia adicional.

Métodos y conceptos

Métodos: Uruguay y Chile como most similar cases

La literatura reciente sobre sistemas políticos latinoamericanos suele enfatizar el parecido entre las democracias chilena y uruguaya (Luna, Juan Pablo, y Alcántara, Manuel, 2014:137). Efectivamente, hay al menos tres similitudes muy visibles, referidas a dimensiones distintas: (i) trayectoria



histórica, (ii) desempeño comparado y (iii) bases funcionales y sociales. En primer lugar, las trayectorias históricas durante el siglo XX son similares. Luego de recorrer caminos distintos en el siglo XIX (concentración del poder y estabilidad política en Chile, dispersión del poder e inestabilidad política en Uruguay,) y de sendos golpes de Estado (en 1927 con Ibáñez, en Chile; en 1933 con Terra, en Uruguay), ambos países se distinguieron por hacer funcionar sus respectivos sistemas democráticos razonablemente bien por más de treinta años (desde 1932 en Chile, desde 1942 en Uruguay). Durante los 60 sus sistemas de partidos experimentaron transformaciones significativas y similares. En particular, en los dos países los partidos de izquierda lograron incrementar notablemente su influencia y concretaron estrategias frentistas exitosas. Ambas democracias, llevando hasta el límite la convergencia histórica, se derrumbaron en 1973. En los dos países los militares tuvieron una participación protagónica tanto en el quiebre de las democracias como en los regímenes autoritarios que las reemplazaron. En los dos casos, los militares se apoyaron en un equipo de economistas para gobernar la economía, virando desde el enfoque estatista predominante a mediados de siglo al liberalismo que signará la economía política de la región en los 90. En los dos países hubo que esperar a los 80 para asistir a nuevos procesos de transición, esta vez desde el autoritarismo a la democracia. Tanto en Chile como en Uruguay las transiciones fueron pactadas y les permitieron a los militares conservar una cuota de poder.

En segundo lugar, desde el punto de vista comparado ambas democracias tienen resultados similares como muestran las sucesivas mediciones de calidad de la democracia. En términos de Mikel Barreda: “Chile, Uruguay, Costa Rica y Panamá son los países con un nivel de calidad democrática más elevado, especialmente los tres primeros” (2011:275). Y agrega:

Esta clasificación de los países de América Latina según su grado de calidad democrática se aproxima a otras que han elaborado algunos investigadores (Altman y Pérez-Liñán, 2002; Levine y Molina, 2007).

Las semejanzas conciernen, sobre todo, a los casos extremos: de forma unánime se sitúa a Chile, Costa Rica y Uruguay en el grupo de mayor nivel de calidad democrática (2011:275-276).

De todos modos, en las mediciones de *Economist Intelligence Unit* (EIU), a diferencia de Costa Rica y Uruguay, Chile no forma parte del grupo de “democracias plenas” (EIU 2014: 4, tabla 2).

En tercer lugar, ambas democracias se apoyaron a lo largo del siglo XX en sistemas de partidos fuertes, estables, altamente institucionalizados (Alcántara 2004:31,39). Los partidos han sido la “columna vertebral” de la relación entre la política y la sociedad chilena (Garretón 1983: 31-32, Valenzuela 1995) y los “actores centrales” de la democracia uruguaya (Caetano, Rilla y Pérez Antón 1988, Lanzaro 2012, Buquet y Chasqueti, 2004). Resumiendo esta rasgo, tempranamente señaló Liliana de Riz:

En aquellos regímenes políticos en que algunas de las premisas centrales de la organización liberal democrática se cumplieron (como Chile y Uruguay), los partidos funcionaron como agentes centrales del sistema político al punto de que todo el sistema funcionó como sistema de partidos (1989: 42).

Desde el punto de vista social, ambas democracias se han apoyado en el desarrollo de una amplia clase media. La expansión de la clase media en Chile, según Rodríguez Weber(2014), se inició en la década del 30:

Según los resultados que hemos obtenido, entre 1938 y 1970 Chile vivió un segundo período de distribución progresiva del ingreso. El mismo vino de la mano de una serie de transformaciones estructurales, tanto económicas como sociales e institucionales, que, siguiendo a Vial Correa (2010), hemos dado en llamar la República Mesocrática. Este concepto busca captar a la vez las transformaciones en la estructura económica y la aparición de un conjunto de nuevos arreglos institucionales entre actores políticos y sociales.

El mismo proceso de mejora de la distribución del ingreso y de desarrollo de las clases medias ocurrió en Uruguay. Los sectores medios ya eran importantes numéricamente en Uruguay a comienzos del siglo XX. Según estimaciones de Solari “entre 25 y 30% de la población de la República se reclutaba ya en las clases medias” (1967:61). Durante el medio siglo siguiente la clase media se expandió de la mano de diversos procesos (industrialización, empleo público, regulación laboral, desarrollo sindical). En 1964, Solari estimaba que “las clases medias estarían constituidas



aproximadamente por los dos tercios de la población del país” (1991:102). Según los datos de Rodríguez Weber (2014) el crecimiento económico de los dos países no fue muy intenso durante el siglo XX cuando se lo compara con otros países de la región o del resto del mundo. Pero el salario de los trabajadores aumentó y la desigualdad bajó. En Chile, el crecimiento del salario se aceleró a partir de 1955. En Uruguay, los salarios mejoraron a partir la instalación de los Consejos de Salarios en 1943 y hasta mediados de la década del 60. En Chile el Gini bajó de 0,61 en 1933 a 0,43 en 1974. En Uruguay, el Gini pasó de 0,43 en 1919 a 0,30 en 1962.

Regímenes políticos de conocimiento: definición y tipología

Poco a poco, la literatura sobre uso de evidencia en las políticas públicas ha ido identificando e intentando explicar las diferencias entre las naciones desde el punto de vista de cuánto y cómo sus respectivos sistemas políticos utilizan conocimiento especializado en las políticas públicas. Algunos países (como Alemania o Francia) exhiben, a lo largo del tiempo, una alta propensión al empleo de información y resultados de investigación en las políticas públicas. Ciudadanos y gobernantes consideran que el conocimiento es “objetivo” y que, por lo tanto, puede servir de base para la construcción de acuerdos amplios sobre políticas públicas. En otros países (como Estados Unidos), en cambio, existen importantes desencuentros entre el mundo de la investigación y el de la decisión. El conocimiento especializado, lejos de ser considerado “neutral”, es percibido por los actores en pugna como un arma en la lucha por el poder.

Debemos a John Campbell y Ove Pedersen los principales avances teóricos y empíricos recientes en esta agenda de investigación. Estos autores, en aproximaciones sucesivas, han venido desarrollando el concepto de régimen de conocimiento (KR, por sus siglas en inglés):

Los regímenes de conocimiento son la maquinaria organizativa e institucional que genera datos, investigaciones, recomendaciones políticas y otras ideas que influyen en el debate público y la formulación de políticas (Campbell y Pedersen, 2014:6, T.d.E).

Según ellos, para definir el KR de un país hay que estudiar dos variables estructurales: el régimen de políticas públicas (*policy-making regime*) y la variedad de capitalismo.



Ambas variables inciden en el tipo de Unidades de Investigación (UI) existentes y en la dinámica de ideas y conocimiento especializado.

El concepto de KR representa un gran paso adelante. Ofrece un marco analítico global que permite construir una tipología de producción y uso de conocimiento en políticas. Pero tiene dos limitaciones importantes. En primer lugar, pone el foco analítico en explicar el lado de la oferta de investigación. Tanto el lado de la demanda como las instituciones y actores que median entre oferta y demanda quedan en un segundo plano. En segundo lugar, está demasiado pendiente de los rasgos de la economía. Este énfasis en la estructura económica y sus actores centrales (las empresas) hace que queden en un segundo plano las instituciones políticas y sus organizaciones clave (los partidos políticos).

Para entender el tipo de conocimiento especializado y su dinámica política no es tan importante entender cómo está regulado (o no) el mercado económico, sino descifrar cuáles son los factores que estructuran el mercado político. El RPC propuesto en Garcé (2014) conserva una de las dos dimensiones analíticas de la tipología de Campbell y Pedersen (*policy making regime*) pero sustituye la variedad de capitalismo por otra, que desplaza decididamente la argumentación desde las características de la economía nacional a las de la sociedad y sus patrones culturales. La tipología de RPC es la siguiente:

Cuadro 1. Tipología de Regímenes Políticos de Conocimiento

		Valoración general de la ciencia en el sistema político (Tradicón cultural predominante)	
		Racionalismo Iluminismo	Pragmatismo Anti-intelectualismo
Tipo de Policy Making Regime	Centralizado	I ELITISMO TECNOCRÁTICO (Chile)	III MAYORITARISMO PLEBEYO (Argentina)
	Descentralizado	II PLURALISMO TECNOCRÁTICO (Brasil)	IV PLURALISMO PLEBEYO (Uruguay)

Fuente: Garcé (2014).

El concepto Régimen Político de Conocimiento, portanto, no denota solamente cómo está conformado el conjunto de unidades de investigación que produce información e ideas



para las políticas públicas. Caracteriza, asimismo, cuánto y de qué forma específica esos insumos son demandados y efectivamente empleados en decisiones y políticas. Importa la oferta de conocimiento. Pero tanto como la oferta, interesa entender la demanda y su uso concreto.

Saber y poder en Chile y Uruguay

Chile

Es ampliamente sabido que casi un centenar de economistas chilenos posgraduados en Chicago (gracias a un acuerdo de cooperación suscrito en 1956 entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago) jugaron un papel clave en el gobierno durante el régimen autoritario presidido por Augusto Pinochet. Los llamados *Chicago boys*, sobre fines del 60, redactaron un extenso documento (conocido como *el ladrillo*) en el que formulaban su propuesta de reforma económica. Pocos años más tarde, gracias al inmenso poder que les delegara Pinochet, tuvieron la oportunidad de implementar esas ideas (Montecinos, 1998; Silva, 2008; Gárate Chateau, 2012).

Es un poco menos conocido, aunque también ha sido objeto de estudio, que el papel de los economistas siguió siendo decisivo más tarde, a partir de 1990, tanto en los gobiernos de la Concertación como durante el mandato del presidente Piñera (Silva, 1991; Montecinos, 1998; Silva, 2008; Gárate Chateau, 2012; Huneeus, 2014). Patricio Silva, muy tempranamente, advirtió que los economistas seguían teniendo un protagonismo extraordinario: argumentó que los *Chicago boys* de Pinochet habían sido sustituidos por los *monjes de CIEPLAN* (Corporación de Estudios para Latinoamérica) (Silva, 1991; Maillet, Toro, Olivares y Rodríguez, 2016). Los 25 años siguientes confirmaron que lo que podía parecer una excepción funcionaba como regla. Economistas formados en universidades de primer nivel (generalmente estadounidense) no solo ocuparon cargos fundamentales en los sucesivos gabinetes, además, desempeñaron un papel clave en las negociaciones de reformas como articuladores del consenso.

Este punto es especialmente importante porque ofrece un contraste fuerte respecto de la década previa al golpe. Durante los 60 los economistas ya venían recorriendo el

camino de su “irresistible ascenso” (Markoff y Montecinos, 1994). El énfasis en el “desarrollo económico” propio de la Alianza para el Progreso y de las ideas cepalinas había dado un fuerte impulso al campo de la Economía y prestigiado a sus cultores. Tanto Frei como Allende convocaron y empoderaron a los especialistas en desarrollo económico. Pero en ese contexto, de creciente polarización política, la Economía era un territorio de disputa entre los actores. Cepalinos y marxistas, dependentistas y liberales, todos ellos tenían credenciales académicas pero visiones muy distintas sobre cómo gobernar la economía. El conocimiento especializado se nutría de la polarización pero, al mismo tiempo, la alimentaba.

No hay duda en cuanto a que la experiencia de la dictadura dejó una huella muy profunda en el modo de uso del conocimiento especializado en Chile. La Economía, en particular, pasó de legitimar antagonismos y propuestas de cambios revolucionarios (la “revolución en libertad” de Eduardo Frei Montalva, la “vía chilena al socialismo” de Salvador Allende, la “revolución capitalista” de los *Chicago boys*) a facilitar consensos y habilitar negociaciones. Pero los *Chicago boys* no representan el punto de partida del prestigio del saber, en general, y de la ciencia económica, en particular. Si en Chile el saber de los expertos llegó a jugar un papel tan importante en la construcción de la polarización en los sesenta es porque la élite chilena siempre le asignó un lugar de especial prestigio.

La pensión chilena a convocar a los expertos nunca se detuvo en las fronteras nacionales. Cuando no había suficiente masa crítica dentro del país, los gobernantes no vacilaban en mirar hacia fuera. Albert Hirschman, al analizar el “estilo” chileno de lidiar con la inflación en *Journeys Toward Progress*, repasó tres eventos separados por un siglo. En 1855, invitado por el gobierno, llegó a Chile el economista francés Jean Gustave Courcelle-Seneuil para desempeñarse como asesor del Ministerio de Hacienda y profesor de Economía en la Universidad de Chile. Además de dejar su huella en el plano doctrinario, redactó varias leyes muy importantes, como la Ley de Bancos de 1860. En 1925, el economista estadounidense Edwin Kemmerer, en tiempo récord, logró la aprobación de un conjunto de medidas para combatir la inflación. Entre ellas, nada más ni nada menos que una innovación institucional de gran escala: la creación de un Banco Central. Ambos



episodios fueron destacados por Hirschman como casos de asesoramientos externos excepcionalmente influyentes (1964: 186-188, 199-200). El tercero de estos episodios de recurso a expertos extranjeros para encontrar “la solución” al problema de la inflación se registró en 1955. Luego de considerar otras alternativas (entre ellas la de invitar nada menos que a Pierre Mendès-France, el gobierno contrató a la firma Klein-Saks que había asesorado en Perú). En el plano estrictamente técnico, según Hirschman, la “misión” no arrojó ninguna propuesta nueva. Pero jugó un papel político muy importante:

De ser cierto que es soberano quien decide la situación crítica, cabe afirmar que por un breve plazo en 1955 y 1956 la misión Klein-Saks adoptó el atributo de soberanía al forjar la nueva coalición política (Hirschman, 1964:234-235).

Pero la avidez de la élite chilena por los especialistas extranjeros en Chile no se limita a los desafíos del desarrollo económico. Es muy visible también en otras arenas de políticas. Tres ejemplos tempranos del campo de la educación ayudan mucho a ilustrar la dimensión de esta predisposición. Andrés Bello, venezolano de nacimiento pero nacionalizado chileno, luego de su extensa estadía en Londres se radicó en 1828 en Chile a partir de gestiones realizadas por Mariano Egaña (ministro de Relaciones Exteriores) a pedido del presidente Francisco Antonio Pinto (Amunátegui Solar, 1939: 14; Jaksic, 2001: 123). Bello dejó un legado profundo y visible en las instituciones y la cultura chilena. Entre otros aportes redactó la ley de creación de la Universidad de Chile de la que fue primer rector (entre 1842 hasta su muerte en 1865). En 1842, Manuel Montt, ministro de Justicia e Instrucción Pública del gobierno de Chile, solicitó a Domingo Faustino Sarmiento, argentino exiliado en Santiago, que fundara la Escuela Normal de Preceptores (la primera de su tipo de América Latina). Poco después, entre 1845 y 1848, el gobierno chileno lo envió a Europa y Estados Unidos para conocer distintos modelos de educación primaria. Sobre fines del siglo XIX fue el turno de los profesores alemanes. La iniciativa correspondió al educador Valentín Letelier, figura clave del positivismo chileno. En 1889 se fundó el Instituto Pedagógico, primera institución dedicada a la formación de profesores en Chile. La impronta alemana fue decisiva: “La dirección del instituto fue entregada al alemán Federico Johow y en su primera planta docente participaron profesores venidos de

Alemania” (Avalos, 2004:1).

Recapitulemos rápidamente. Pinochet delegó la orientación de su “revolución capitalista” en los economistas formados en Chicago. Antes y después de la dictadura pinochetista los economistas jugaron un papel importante. Cada vez que lo consideraron necesario, los gobernantes acudieron a expertos extranjeros, en los campos más distintos, desde la política monetaria a la política educativa, desde Bello a Kemmerer, pasando por Sarmiento y Courcelle-Seneuil. Desde Portales hasta Piñera, desde el siglo XIX al XXI, con independencia del tipo de régimen y de la ideología del partido político en el gobierno, los expertos y sus saberes han jugado un papel muy importante en las políticas públicas. A veces apelaron a técnicos sin ningún tipo de lealtad partidaria (la literatura los etiqueta como tecnócratas). Otras veces convocaron a expertos con vínculos políticos tenues pero reconocidos. Otras veces, designaron en altos cargos a líderes políticos con credenciales académicas de prestigio: son los *tecnopols* (Joignant, 2011). Pero, de una forma o de otra, siempre han rondado el poder y dejado su huella en las políticas públicas.

En busca del origen: democracia *top-down*

Para entender el estrecho vínculo entre saber y poder en Chile hay que remontarse al siglo XIX. La élite que construyó las instituciones políticas chilenas, además del poder político, disfrutaba del poder económico y cultural. Los primeros gobernantes del Chile independiente provenían de la clase alta colonial¹. Muchos de ellos habían estudiado en la Real Universidad de San Felipe, que inició sus actividades docentes en 1758 con el objetivo de sustituir a las universidades de matriz religiosa (instaladas un siglo antes) en la formación de profesionales. La actuación política no los inhibió de atender sus negocios privados como evidencia el caso del propio Portales, fundador del Estado chileno². Todos los hombres de negocios pertenecían, desde luego, a la clase alta. Pero los que tenían más influencia de todos, los “chilenos que importaban en la vida política y quienes poseyeron abrumadoramente más influencia que cualquier otro sector de la sociedad en la formación de la república” fueron los “chilenos educados”, un pequeño sector ilustrado de clase alta (Collier, 2005:30). El Estado chileno, desde el principio, asoció estrechamente

¹ Whitehead, discutiendo el fenómeno tecnocrático en América Latina, argumentó que existe una importante continuidad en términos sociológicos entre la élite colonial y la que lideró la construcción de las nuevas repúblicas: “Durante el primer siglo aproximadamente después de la independencia, la mayoría de las elites políticas latinoamericanas continuaron siendo reclutadas abrumadoramente de entre un estrecho estrato social que, a pesar de que difería en forma, conservaba típicamente continuidades sociológicas significativas con su precursor colonial” (Whitehead, 2000:25, T.d.E). Es evidente que vale para el caso chileno.

² Portales no quiso terminar sus estudios en el Instituto Nacional (el germen de la Universidad de Chile). Se dedicó a los negocios y a reconstruir, desde diversos cargos públicos, el “principio de autoridad”. Aunque su actuación pública abarcó apenas una década y pese a que nunca quiso ocupar la presidencia, la historiografía chilena le asigna un papel fundamental en la construcción del Estado. En todo caso, dejó como legado principal la obsesión por el orden, como objetivo, y por la concentración del poder, como instrumento. No era indiferente al papel del saber. Por eso, durante los 30, se verificaron iniciativas que revelan una alta valoración del saber. Además de reclutar, como ya se dijo a Andrés Bello en 1829, el Estado chileno contrató en 1830, por iniciativa de Portales, al experto francés Claudio Gay, a quien le encargó realizar un relevamiento de flora y fauna, y el establecimiento y dirección del Museo de Historia Natural de Chile.



saber y poder. Pero este vínculo se estrechó de modo significativo y definitivo durante la segunda mitad del siglo XIX. La influencia del positivismo en su versión comtiana, en este sentido, fue decisiva. El positivismo, en sus distintas corrientes, empezó a circular en América Latina desde la década del 30 del siglo XIX, pero su impronta fue más sensible entre 1850 y 1920 (Cancino, 2011:61). Según Ardao, aunque ningún país de la región escapó a su “influjo”, la intensidad y modalidad de su influencia reconoce variedades (2008:54). En México, Brasil y Chile, por ejemplo, el positivismo dejó una marca especialmente profunda en la educación y la política (Jaksic, 1989: 41). El introductor del positivismo en Chile fue José Victoriano Lastarria. A diferencia de otros intelectuales (como los hermanos Jorge y Juan Enrique Lagarrigue, que suscribieron completamente al pensamiento de Augusto Comte), Lastarria hizo una lectura crítica, heterodoxa, suturando el positivismo con el liberalismo político.

Letelier, otro “heterodoxo”, discípulo de Lastarria, será el más influyente de los intelectuales positivistas de la época. También él intentó suturar liberalismo y positivismo. Según Leopoldo Zea: “Letelier sigue ... fiel a la ideología política de Lastarria y su generación... Libertad apoyada en la realidad, en la experiencia, en la ciencia” (107). La ciencia, como en Comte, estaba llamada a devolverle a la sociedad la unidad perdida: “En medio de la agitación moral de las sociedades contemporáneas, donde todos nos divide, la religión, la política, el arte, no hay sino una cosa que nos une, la ciencia...” (Citado por Brunner, 1984:71). Educador, fundador de instituciones, precursor de la sociología chilena, parlamentario, filósofo, rector de la Universidad, dejó una profunda huella en la cultura chilena (Brunner, 1984:74)³.

Los positivistas más influyentes, por tanto, no fueron conservadores sino liberales. Buscaban ampliar la libertad individual y no el poder del Estado. En ese sentido, se alejaban de Portales y su legado como ha dicho Patricio Silva (2008:24). Sin embargo, por otro lado, reforzaron la tendencia a asociar saber y poder, “buen gobierno” con utilización de conocimiento científico, que ya estaba presente en el Estado portaliano. En suma, durante el siglo XIX en Chile cristalizó una determinada concepción respecto del papel del conocimiento en la política. Según esta visión, la política requiere orden como impuso Portales. El orden, desde este punto de vista, es condición necesaria para el buen gobierno.

³ Según él, el verdadero estadista debía gobernar científicamente: “La base, en efecto, de todo gobierno culto, es el principio radicalmente científico de la regularidad social, en virtud del cual los estadistas pueden legislar para lo futuro sin que los acontecimientos desmientan las provisiones y los cálculos” (citado por Brunner, 1984:100). A través de la ciencia podrían superarse los conflictos y construirse consensos, ingresando a la etapa “positiva” de la “armonía científica” en el juego político (Moraga, 2014:61). Decía Letelier: “Así como no hay una aritmética liberal y otra radical y otra conservadora, sino que la sola y misma ciencia de los números sirve a todos los partidos, así también no hay ni puede haber más que una sola ciencia política, cuyos principios generales sirvan a todos de norma y guía” (citado por Zea, 1976:108).

Pero no es suficiente. Además, se precisa conocimiento. El buen gobierno demanda conocimiento, expertos, chilenos o extranjeros. El buen gobierno requiere información, estudio, ciencia. Así nació la república chilena. A lo largo del siglo XX se fue democratizando (fue ampliando la base electoral). Pero la configuración del vínculo entre saber y poder, forjada en los primeros tiempos, persistió.

El proceso de democratización no quebró esta pauta inicial. Chile es un caso típico de construcción *top-down* de la democracia. No es una democracia construida contra la élite sino por la élite. Chile recorrió el camino que Robert Dahl en Poliarquía reconoció en otras naciones: primero el régimen se liberalizó (se generó una competencia dentro de la élite y se habilitó la alternancia entre distintas minorías); más tarde, se fue ampliando (y muy lentamente) la participación electoral⁴. La marca inicial, la estrecha asociación entre poder y saber se reprodujo a lo largo del tiempo.

Uruguay

También en Uruguay hubo, como en la dictadura chilena, *Chicago boys*. Pero tuvieron una influencia sensiblemente menor. En vez de casi un centenar, como en Chile, en Uruguay los economistas neoliberales que cooperaron con el régimen fueron menos de una decena. La inmensa mayoría de los pocos economistas uruguayos que llegaron a graduarse durante la década del 60 eran o desarrollistas o dependentistas. El único centro de formación de economistas era la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. En esta facultad, el enfoque liberal quedó rápidamente eclipsado por los enfoques ya referidos (Garcé, 2015). Solamente uno de los economistas formados antes del quiebre de la democracia había cursado un programa de doctorado (Alejandro Végh Villegas).

Volviendo a la dinámica de las ideas económicas, en verdad, el lento ascenso del liberalismo económico en Uruguay se registró fuera del ámbito universitario, en la pequeña Oficina de Planeamiento y Presupuesto instalada en 1967. Desde 1968 en adelante, un puñado de economistas que habían sido formados en el pensamiento cepalino y participado en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (preparado entre 1961 y 1965 en el marco de la Alianza para el Progreso), influidos fundamentalmente

⁴ Tan lento fue el crecimiento del demos que, en las elecciones presidenciales de 1970, en un contexto de gran politización y polarización, votó solamente 55% de la población en edad de hacerlo.



por Alejandro Végh Villegas (el Hernán Büchi uruguayo) y por el “milagro brasileño” y el pensamiento de Roberto Campos, fueron abandonando la confianza en la planificación estatal y aproximándose a la “inteligencia del mercado” (Garcé, 2002). Pero muy pocos de ellos, una vez convertidos al neoliberalismo, aceptaron cargos del régimen militar.

No hubo, por tanto, “masa crítica” como en Chile. Pero, además, los *Chicago boys* uruguayos tenían poca autonomía para tomar decisiones. En verdad, debían negociar permanentemente con los jefes militares, muchos de los cuales tenían convicciones más estatistas y proteccionistas (Robledo, 2002). Los militares uruguayos, a diferencia de sus pares chilenos y a pesar de la “afinidad electiva” con los expertos que señalara en su momento Guillermo O’Donnell, no estaban dispuestos a delegar el poder en los expertos:

A último término (...), fue la propia corporación militar la que se reservó el mando supremo. Diversas instancias, crecientemente institucionalizadas, dieron origen al predominio de los militares en la conducción política y a su constitución (Rial, 1986).

El control político sobre las orientaciones de las políticas públicas se mantuvo a partir de la restauración de la democracia en 1985 durante las tres décadas siguientes. Desde luego, como en otras partes también en Uruguay se verificó el ascenso de los economistas. Pero no fue “irresistible”. Muy por el contrario, fue resistido: acotado, moderado, amortiguado, controlado políticamente. Durante los sucesivos gobiernos desde 1985 hasta el presente, en líneas generales puede decirse que los economistas tomaron el control de los cargos clave en el gobierno de la economía. Pero rara vez les correspondió ocupar cargos en otras carteras ministeriales. A la hora de conformar los gabinetes predominó, como siempre, la negociación política entre partidos y fracciones.

El predominio de la lógica política sobre la técnica, que se pudo observar tanto durante la dictadura como durante las décadas siguientes, no era una novedad. Un ejemplo extraordinario de hasta qué punto el poder impera sobre el saber lo ofrece la experiencia de la planificación indicativa a comienzos de los 60. En 1961, una vez firmada la Carta de Punta del Este que puso en marcha la Alianza para el Progreso, el gobierno uruguayo se apresuró a montar un equipo técnico para que formulara los planes de desarrollo que permitirían obtener el financiamiento prometido por los Estados Unidos.

Era tal la debilidad de los sistemas de información del Estado uruguayo (no había cuentas nacionales, ni censos de población, ni registro de la deuda externa) que el equipo de planificación demoró cinco años en finalizar la elaboración de los planes. El PNDES, aprobado formalmente en 1966, nunca se aplicó *in totum*, tal como había sido concebido. Los partidos políticos no lo ignoraron, pero lo sometieron a un examen crítico muy severo. Con el tiempo, fueron tomando de ese proyecto global de cambios estructurales propuestas específicas, adaptándolas a sus tradiciones ideológicas y estrategias de supervivencia política (Garcé, 2002).

En la tarea de planificación participaron muchos expertos extranjeros, generalmente liderando los grupos de trabajo en las distintas áreas porque no había en el país recursos humanos formados en la técnica de planificación. Pero la participación de estos expertos extranjeros, en vez de contribuir a legitimar el trabajo de planificación, incrementó los recelos en la élite política de la época. No hubo una política sistemática de reclutamiento de expertos extranjeros al estilo de la que puede observarse en Chile. Aunque, a fines de la década del 20, tenía problemas monetarios y cambiarios tan acuciantes como los de otros países de la región, el gobierno uruguayo no apeló a ningún *money doctor*, ni a Edwin Kemmerer (como Chile) ni a Otto Niemeyer (como Argentina o Brasil). Tampoco hubo ninguna misión similar a Klein-Saks en los 50, a pesar de la agudización del fenómeno inflacionario.

En busca del origen: democracia *bottom-up*

La democracia uruguaya siguió inicialmente una trayectoria muy distinta a la chilena. No es producto de la élite, ni nació signada por la obsesión del orden. La democracia uruguaya, en cambio, es hija del conflicto entre “bandos político-militares” con fuerte arraigo popular que, al no poder derrotarse militarmente, debieron aprender a compartir el poder siguiendo una lógica que la ciencia política contemporánea ha caracterizado como “consensualista” (Buquet y Chasqueti, 2004).

Así como para entender la evolución de la política chilena hay que tomar nota de las características de la élite desde los tiempos del ministro Portales, para comprender la política uruguaya hay que detenerse a estudiar los partidos que la forjaron. Los historiadores aceptan que el Partido Colorado



⁵ El contraste entre la Constitución, que excluía del Parlamento a los militares, y la vigencia del apoyo popular a los caudillos generó una dinámica política por la cual, una y otra vez, los caudillos de un bando iban a la guerra para derribar gobiernos encabezados por los del otro (Pérez Antón, 1988).

⁶ Los dos más recordados por la historiografía se registraron en 1847 y 1851. En 1847, en plena Guerra Grande, los *doctores* colorados decidieron desterrar al principal caudillo colorado de la época, Fructuoso Rivera. El Estado no se consolidaría, la economía prosperaría y la cultura no florecería hasta que el caudillismo fuera erradicado. La misma concepción imperó en la llamada “política de fusión” (1851-1855): la élite ilustrada renegaba de las “divisas” y reclamaba una política apoyada en doctrinas y no en lealtades personales.

⁷ Julio Herrera y Obes, uno de los más conspicuos representantes de la élite doctoral, dejó un claro testimonio de esta crucial transformación: “Si es necesario transformar y disolver a los partidos, es necesario que esa transformación se opere dentro de los partidos mismos por el roce silencioso del tiempo y de las ideas. Empezar por segregarse de los partidos para dirigirlos; empezar por declararse sus enemigos para exigir, además, obediencia y respeto es una pretensión insensata” (citado en Garcé, 2000: 65).

y el Partido Nacional nacieron formalmente en la Batalla de Carpintería en 1836. Los partidos se conformaron, por tanto, en torno a los principales caudillos militares de la época: Fructuoso Rivera, colorado; Manuel Oribe y Juan Antonio Lavalleja, ambos blancos. Los caudillos, por regla general, no formaban parte de la élite económica y cultural de la época. Estaban, además, formalmente excluidos del parlamento. Sin embargo, podían sí ejercer la Presidencia de la República⁵.

Los caudillos orientales tenían un respaldo popular notable. El liderazgo caudillista, de hecho, levantaba las severas restricciones a la participación impuestas por las normas constitucionales. Acompañaban a los caudillos y, por tanto, se iban incorporando a las estructuras de los partidos políticos en gestación, los pobres e iletrados, los que no estaban incluidos en el demos delimitado por la primera constitución. Los partidos, por tanto, nacieron incluyendo, favoreciendo la participación, generando una estrecha empatía entre los líderes y la población más humilde (Pérez Antón, 1988).

Pero los caudillos despertaban una fuerte resistencia en la élite ilustrada. Los *doctores*, como los conoce la historiografía, en sintonía con la severa crítica de Sarmiento en *Facundo*, hubieran querido prescindir de los caudillos. De hecho, durante las primeras cuatro décadas de vida independiente no ahorraron esfuerzos orientados en esta dirección⁶. A pesar de su empeño fracasaron en su intento. Los *doctores*, con el tiempo, debieron asumir su derrota y el arraigo de las “divisas”. A partir de la década del 70 la élite universitaria se fue resignando a subordinarse a los dirigentes con arraigo popular. Los abogados y universitarios, que habían procurado reemplazar a las divisas, terminaron insertándose en ellas⁷.

Según Arturo Ardao este giro de la élite ilustrada hacia el pragmatismo es inseparable del ascenso del positivismo (2008:175-184). A diferencia de Chile, donde predominó la versión de Augusto Comte, en Uruguay la doctrina positivista más influyente fue el “evolucionismo” de Herbert Spencer. Según Ardao, la influencia del positivismo no fue tan profunda ni visible como en Brasil o México. Pero

... proporcionó a las clases dirigentes de fines del siglo el sentido sociológico que faltó a las generaciones principistas, aportó métodos nuevos al tratamiento de los problemas nacionales, contribuyó a modificar el clima de nuestras viejas luchas partidarias (2008:175-176).



El positivismo en Uruguay tuvo un reinado breve. Ya en 1890 comenzó a batirse en retirada dentro de la universidad. A fines de esa década, la irrupción del “magisterio” de José Enrique Rodó y Carlos Vaz Ferreira marcó el inicio de una nueva etapa en la cultura nacional. A pesar de su breve hegemonía, el evolucionismo facilitó el acercamiento de la élite ilustrada a los nacientes partidos de base popular. Pero la convergencia entre los viejos adversarios no eliminó la fricción entre ambos. Los doctores ingresaron a los partidos buscando cambiarlos, modernizarlos, “civilizarlos”. Pero la lógica política del caudillismo (personalista, particularista, más orientada a conquistar el poder que a ejercerlo con arreglo a principios y doctrinas) era, y siguió siendo, extraordinariamente potente.

Así nacieron y prosperaron los partidos uruguayos. No fueron partidos de élite. Se conformaron en torno a los caudillos. No privilegiaron las doctrinas y los principios sino la comunicación con sus bases populares y la lucha por el poder. Los universitarios se resignaron a este rasgo estructural de la política uruguaya. La mayoría de ellos optaron por subordinarse a la hegemonía caudillista para poder concretar aportes cívicos relevantes. La minoría se alejó de los partidos y siguió reclamando, como en tiempos de la “política de fusión”, partidos “de ideas”. Pero ni los que aceptaron cooperar con los caudillos desde el interior de los partidos ni los que prefirieron permanecer al margen, lograron evitar conflictos y cortocircuitos. La tensión entre saber y poder quedó instalada desde el comienzo. Y persiste hasta hoy.

Regímenes Políticos de Conocimiento de Chile y Uruguay

Hasta ahora se ha presentado evidencia teórica sobre las diferencias en el vínculo entre saber y poder en los dos países. Corresponde, ahora, recuperar las dos dimensiones de la tipología de RPC presentada en la sección inicial de este artículo.

Valoración de la ciencia

No todas las sociedades confían del mismo modo en las *luces* de la razón. No todas las élites gobernantes creen



con igual intensidad en el aporte de la ciencia a los procesos decisorios. La Encuesta Mundial de Valores permite construir una aproximación a la diferencia entre Chile y Uruguay en relación con la valoración del conocimiento experto. La cultura política chilena es más tecnocrática que la uruguaya. El 46% de los chilenos tiene una opinión positiva respecto de “tener expertos, no un gobierno, para que tomen decisiones de acuerdo a lo que creen que es mejor para el país”. En Uruguay, mientras tanto, consideran que esto es “muy bueno o bastante bueno” el 38%⁸. Es perfectamente posible que haya diferencias más importantes en esta dimensión entre ambas élites políticas. El desarrollo de las ciencias sociales en Chile ha sido más temprano e intenso que en Uruguay. Y el alto grado de formación académica de los gobernantes chilenos contrasta con el perfil habitual de los gobernantes uruguayos.

⁸ Datos elaborados por Camilo López (ICP-FCS-UDELAR) agregando los datos de las “olas” del lapso 1981-2004. Las respuestas posibles son Muy Bueno, Bastante Bueno, Bastante Malo, Muy Malo (además de Sin Respuesta y No Sabe). Ver: www.worldvaluessurvey.org

Desarrollo de las ciencias sociales

En términos generales, las ciencias sociales chilenas han tenido un desarrollo más temprano y enérgico que las uruguayas (Garretón et al., 2005). La Economía como disciplina vivió un proceso muy lento de conformación. En 1932, y sobre la base de la vieja Escuela de Comercio, se instaló la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. A lo largo de la década siguiente se van conformando, en su interior, los primeros centros orientados a la investigación. Sin embargo, la disciplina tardó mucho más en despegar. Hay que esperar a la década del 60, y al intenso proceso de formación de recursos humanos activado por el ejercicio de planificación ya mencionado, para asistir a la consolidación de la Economía (Garcé, 2002, 2015). El programa de becas desplegado por el BCU a partir de comienzos de los 90 dio un impulso muy importante a la elevación de los estándares de formación y a la internacionalización de la disciplina.

Algo similar ocurrió con la Sociología. Aunque la primera cátedra de Sociología en Uruguay se crea por ley en 1913 dentro de la Facultad de Derecho (Garretón et al., 2005: 566), la institucionalización de la disciplina fue más tardía que en Argentina, Brasil y Chile (De Sierra, 2013:232). Los primeros cultores de la sociología fueron en su mayoría “abogados o juristas en su origen, y no vivían de las Ciencias Sociales (caso de Isaac Ganón, Aldo Solari, Jorge Garmendia, Carlos

Rama, etc.)” (De Sierra, 2013:232). La creación del Instituto de Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho, en 1958, constituye un punto de inflexión fundamental en la evolución de esta disciplina. En 1969 el ICS se “refunda”. Todos los cargos más importantes fueron ganados por profesores formados en el exterior (Carlos Filgueira, Alfredo Errandonea (h) y Gerónimo de Sierra). Este momento marca el comienzo del fin de la “sociología de cátedra”. El proceso de institucionalización de la sociología dentro de UDELAR fue interrumpido por la dictadura. La sociología continuó su avance en centros académicos privados y, al restablecerse la democracia, volvió a prosperar en la Universidad. La creación de la Facultad de Ciencias Sociales en 1991 le dio su impulso definitivo.

La ciencia política, por su lado, también tuvo un desarrollo tardío. La primera cátedra se instaló recién en 1958 en la Facultad de Derecho. Pero hay que esperar al fin de la dictadura para que se instale el Instituto de Ciencia Política dentro de la Facultad de Derecho (1985). La investigación sistemática empezó recién en los 90, y se apoyó en los cimientos colocados por autores como Aldo Solari y Carlos Real de Azúa, y en los aportes de la acumulación tanto empírica como conceptual generada por la Historia Política (Garcé, 2005). La reflexión sobre la construcción de la democracia uruguaya, sobre el carácter de sus partidos y la lógica de sus instituciones constituyeron, desde el principio, la columna vertebral de la disciplina. Los problemas de la administración pública, en cambio, aparecerán como desafío teórico y empírico recién a fines del siglo XX.

En Chile las tres disciplinas mencionadas comenzaron antes. Aunque la primera Cátedra de Economía se crea en la Universidad de Chile en el siglo XIX (con Courcelle-Seneuil como titular desde 1855), la primera Facultad de Comercio y Ciencias Económicas se estableció dentro de la PUC (en 1924). En 1935, la Universidad de Chile creó su propia facultad. La principal diferencia entre ambas es que la de la Universidad de Chile tuvo, desde el primero momento, una estrecha relación con el Estado. Además de CORFO, cuyo papel ha sido señalado reiteradamente, al menos otras dos agencias del Estado jugaron un papel decisivo en el impulso a la Economía. El Banco Central, creado en 1925 a instancias del Edwin Kemmerer, se convirtió en una plataforma muy importante para la construcción de una amplia red de contactos internacionales (Montecinos, 2009: 157). ODEPLAN,



la agencia de planificación instalada en 1965 en el marco de la Alianza para el Progreso, dio un impulso muy fuerte tanto a la demanda desde el Estado como a la formación de economistas mediante becas (Montecinos, 2009: 159, 186).

La sociología chilena hunde sus raíces en la obra de los principales representantes del positivismo en Chile. Los “ideales explicativos” de los pioneros de la sociología chilena fueron continuados, a principios del siglo XX, por Guillermo Viviani y Agustín Venturino (Brunner, 1984: 122-123). Hasta la irrupción de una nueva generación a comienzos de la década del 50 que puso fin a la era de la “sociología de cátedra”, la corriente principal fue el ensayo social. La instalación del Instituto de Investigaciones Sociológicas en la Universidad de Chile (1946) y la conformación de la Sociedad Chilena de Sociología (1951) son dos hitos fundamentales en la consolidación de la disciplina. Así como la instalación de CEPAL en Santiago (1949) favoreció el fortalecimiento de la Economía, la de FLACSO (1957) contribuyó a la formación de la “masa crítica inicial” en sociología (Garretón, 2005: 375). La cercanía entre ambas instituciones, además, favoreció sinergias. A comienzos de los 60 la sociología empezó a hacer oír su voz en CEPAL con José Medina Echavarría, el principal introductor de Max Weber en América Latina, como figura central.

Como en Uruguay, la ciencia política se institucionalizó después de las otras dos disciplinas. Pero, como la Economía y la Sociología, en Chile lo hizo antes que en Uruguay. En 1954 se creó el Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad de Chile. En 1957 uno similar en la Universidad de Concepción. En 1970, se puso en marcha el Instituto de Ciencia Política de la PUC. La ciencia política chilena, por tanto y a diferencia de la uruguaya, nace orientada al Estado, en la tradición “énarchista” francesa: “Los primeros egresados como administradores públicos acometerían importantes tareas ejecutivas en los distintos niveles de la Administración Pública” (Rehren y Fernández, 2005:41). Dentro de FLACSO, la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública dio un impulso adicional a la disciplina ofreciendo una “sólida preparación en teoría política, metodología de la investigación y estadística” (Rehren y Fernández, 2005:42).

Formación académica del personal de gobierno

El personal de gobierno chileno, como regla general, tiene un alto estándar de formación académica. No se



concibe un gobernante sin formación universitaria. Los datos reportados por Joignant son muy ilustrativos (2001b:16). En su estudio del perfil del personal político de los cuatro primeros gobiernos de la Concertación, sobre un total de más de 333 individuos encuestados, encontró que 67% obtuvo un título de posgrado. De ellos, 40% realizó su posgrado en Estados Unidos. Muy frecuentemente, además, en el caso de los ministros, han tenido actuación en *Think Tanks* ligados a los partidos gobierno (Olivares, González-Bustamante, Meneses y Rodríguez, 2014).

En Uruguay el panorama es completamente distinto. Los ministros suelen tener un título universitario. Pero rara vez tienen títulos de posgrados. Esta tendencia se verifica incluso entre los ministros de Economía y Hacienda. Desde 1974 en adelante, Uruguay tuvo solamente tres ministros con doctorados en Economía: Alejandro Végh Villegas (al inicio y al final de la dictadura), Fernando Lorenzo (Carlos III – Madrid) y Mario Bergara (Berkeley), ambos durante la presidencia de José Mujica. Los tres ocuparon el cargo más importante en el gobierno de la economía (ministro de Economía y Hacienda).

A diferencia de Chile, en Uruguay es muy infrecuente que los demás cargos ministeriales sean ocupados por economistas. Enrique Iglesias (contador-economista UDELAR) fue ministro de Relaciones Exteriores durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti y antes de asumir como presidente del BID (entre 1985 y 1988). Samuel Lichtensztejn (contador-economista UDELAR, posgrado en ILPES) fue ministro de Educación y Cultura (después de ser rector de UDELAR) durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti. Daniel Olesker (licenciado en Economía UDELAR, máster en Lovaina) fue ministro de Salud Pública durante los primeros dos años de la presidencia de José Mujica y ministro de Desarrollo Social durante los últimos años de ese mismo período de gobierno.

Régimen de elaboración de políticas

El régimen de elaboración de políticas (*policy-making regime*) incide en el tipo de uso del conocimiento en las políticas. Como argumentan Campbell y Pedersen, cuando es abierto y descentralizado, ofrece a los actores políticos y sociales la oportunidad de incidir en el rumbo de las políticas haciendo un uso instrumental del conocimiento especializado



disponible. Por el contrario, cuando es cerrado y centralizado, quienes toman las decisiones tienen las manos más libres para elegir qué saberes tomar en cuenta ya sea para elaborar las políticas o para legitimar opciones realizadas *ex ante*.

Tanto el Estado chileno como el uruguayo son centralizados. Santiago de Chile y Montevideo han dejado poco espacio para la emergencia de poderes locales. Desde luego, cada capital ha debido encontrar la forma de incluir a los poderes regionales. En Chile, como ha argumentado Cartes, no es posible explicar la construcción del Estado “fuerte y centralizador” sin la incorporación de las regiones:

Los conflictos interprovinciales explican las tensiones de la Patria Vieja y los debates del período llamado de ensayos constitucionales; en los años siguientes, la incorporación o cooptación de fuerzas y líderes regionales por el gobierno central equilibró los intereses, lo que permitió la construcción de un Estado “fuerte y centralizador” según la pretensión portaliana (2014:63).

En Uruguay terminó ocurriendo un proceso similar. Montevideo debió pactar con “el interior”. La coparticipación, que sentó las bases de la estabilidad política a partir de la Paz de Abril de 1872, en última instancia, operó como un reparto de poder político entre territorios distintos. La centralización inicial, más allá de cooptaciones y pactos, de avances y retrocesos, se mantuvo a lo largo del siglo siguiente.

En la tipología de Campbell y Pedersen los países de estructura federal tienen un régimen de producción de políticas más abierto que los países de estructura unitaria. En los casos de Chile y Uruguay, dos países que no son federales y que han centralizado el poder en sus capitales, esto no necesariamente es así. La centralización administrativa en la capital no implicó clausura del *policy-making regime*. El régimen de producción de políticas chileno ha sido más cerrado que el uruguayo. El Estado chileno ha sido, y sigue siendo, menos permeable que el Estado uruguayo a presiones y demandas sociales. En términos generales, es un Estado más profesional que el uruguayo. El Estado chileno se acerca al modelo alemán o francés de burocracia. El uruguayo se construyó al estilo estadounidense, con más *spoils system* que meritocracia.

El Estado chileno, de todos modos, no ha sido perfectamente hermético. Tuvo, a lo largo de la historia, un tipo de apertura diferente, sesgado, asimétrico. En Chile, salvo durante el gobierno de Allende, la élite económica tuvo

un acceso a los circuitos de toma de decisiones más fácil y directo que el resto de los grupos de presión. Esto es obvio para la larga fase del “Estado portaliano” que comienza en 1830 y que, según Mario Góngora (1981:11), finaliza en 1891, y fácilmente comprensible para la etapa que Fernández (2003) denomina “Estado excluyente” (1891-1931). Pero, con otros matices, siguió siendo cierto para la etapa del “Estado de compromiso”. Incluso Tomás Moulian admite que “el bloque dominante” no fue “hegemónico”. Debió, según él, hacer concesiones. Pero las políticas públicas, incluso cuando elaboraron complejos compromisos entre grupos sociales en conflicto, siguieron una lógica *top-down*⁹. Según Silva, el “Estado de Compromiso” fue posible gracias al papel concedido por los actores en pugna a los ingenieros, la tecnocracia de la época:

Por estas razones, la consolidación de la tecnocracia pública desde finales de los años 30 no puede ser considerada como desvinculada del establecimiento del Estado de Compromiso —así es como la democracia chilena fue conocida— porque era una expresión vital de ese compromiso. Desde esta perspectiva se puede argumentar que, como resultado de un equilibrio particular de fuerzas y de la necesidad de subsistencia por parte del sistema político, la tecnocracia pública chilena se convirtió en un facilitador clave de la democracia en el país (2008:85, T.d.E).

En Chile, según Góngora, el Estado antecede a la Nación (1981:11). En Uruguay, en cambio, el Estado es una construcción tardía (se consolida como tal entre 1875 y la guerra de 1904). En Chile el Estado se impone. En Uruguay, el Estado responde. Entre Estado y Sociedad ha habido, históricamente, una frontera delgada. Tanto los individuos como los grupos han disfrutado de amplios canales de acceso a los decisores. En palabras de Lanzaro: “La multiplicidad de mediaciones conforma un tejido extenso de accesos al Estado” (1986:67). El uruguayo no es un Estado distante, alejado de la sociedad, a resguardo de reclamos y demandas de ciudadanos y grupos. Al contrario: es un Estado cercano, conectado, sensible a las presiones del entorno. Su porosidad no se explica solamente por su menor calidad técnica o por haber apelado al clientelismo como modalidad predominante de reclutamiento de los funcionarios a lo largo de buena parte de su historia. Se explica, especialmente, por el tipo de partidos que le dieron forma y lo gobernaron.

⁹ La preeminencia del Estado sobre la sociedad, del poder político sobre el poder económico, no debería llamar la atención. Esto fue así desde el principio. Recuérdese que para el propio Portales, de nuevo según Góngora, el Estado debía apoyarse en una “aristocracia de señores feudales”, “pero esa clase debería estar sujeta obedientemente al gobierno, por su propio interés en el orden público” (1981:15).



En Chile, como en Francia o Alemania, el Estado se las ingenió para tomar mayor distancia de los grupos y sus presiones. Por eso tendió a prevalecer (salvo a fines de los 60, época de “inflación ideológica” y de incremento de la polarización) un conocimiento considerado *neutral*, apto para construir acuerdos y generar consensos. Las políticas siguen una lógica *top-down*. La apelación al conocimiento especializado las legitima. En cambio el Estado uruguayo, como el estadounidense, ofrece múltiples oportunidades para que los actores incorporen sus intereses y dejan la huella de sus preferencias. El conocimiento especializado es un arma en la lucha por la influencia en las políticas y por el poder. En Estados Unidos los actores centrales son los grupos de interés y las empresas. En Uruguay son los partidos y sus fracciones.

En suma. El caso chileno es un buen ejemplo de RPC tecnocrático. La combinación de centralización y racionalismo genera un uso intenso de la investigación social desde el Estado. El conocimiento académico es muy importante como trampolín para las carreras políticas y condición *sine qua non* para ocupar cargos de gobierno. Los partidos apelan frecuentemente a los expertos y tienden a delegarles responsabilidades importantes en la definición de las políticas. En Uruguay, por el contrario, la combinación de pluralismo y antiintelectualismo genera un uso bajo e instrumental del conocimiento especializado en las políticas. El pluralismo favorece la conformación de un mercado de ideas competitivo. Pero la política prevalece sobre la racionalidad técnica. El conocimiento especializado es un arma en la lucha por el poder.

Principales conclusiones y debates pendientes

Chile moderno es Portales con Lastarria, “orden y progreso”, “por la razón o por la fuerza”. Uruguay es “montonera” y coparticipación, Rivera y Oribe, “doctores” compitiendo y al mismo tiempo sirviendo a “caudillos”. La política chilena nació elitista y conservó ese rasgo. La política uruguaya, en cambio, nació y sigue siendo plebeya e inclusiva. En Chile, en tiempos de la República temprana, la lucha por el poder circuló dentro de la élite (v.g. “pelucones” versus “pipiolos”, conservadores y liberales). En Uruguay, en el mismo momento, el conflicto político central transcurría entre bandos político-militares liderados por caudillos de

fuerte raigambre popular. La élite chilena logró imponer rápidamente el orden y sentar las bases del Estado moderno. La élite uruguaya, en cambio, fracasó en ese empeño durante décadas. La política chilena se estructuró sobre el valor del orden. La uruguaya sobre el de la representación.

Aunque las historias políticas de ambos terminarán teniendo en el siglo XX puntos de coincidencia llamativos, sus configuraciones iniciales son muy diferentes. En Chile, saber y poder han tenido, desde el comienzo, una relación muy estrecha. La élite que construyó el Estado reunía poder político, económico y cultural. Desde el comienzo, como ya fue dicho, el valor del orden fue el más importante. Pero el orden, en la visión de la élite, requería el auxilio del conocimiento. Esto ayuda a entender por qué Comte fue tan bien recibido en Chile. Las metas de “orden y progreso” perseguidas mediante el instrumento de la “ciencia”, tan elocuentemente formulados en esa versión del positivismo, expresaban bien la visión del “buen gobierno” que ya se había ido configurando en los primeros años de vida independiente. El recurso sistemático a los “los que saben”, a tecnopols o tecnócratas según las épocas es, en última instancia, una manifestación de esta convicción.

La élite ilustrada uruguaya no era menos afrancesada que la chilena. Sin embargo, optó por nutrirse de Spencer y no de Comte. Los acercaba al primero su visión evolucionista, y los alejaba del segundo su dimensión autoritaria. Como en el resto de América Latina el positivismo dejó su marca. En particular, fue muy influyente entre 1875 y 1890. Durante ese breve lapso facilitó la convergencia entre caudillos y doctores. En concreto, hizo posible que los segundos aceptaran los hechos, la evidencia histórica, la vigencia y arraigo del fenómeno caudillista, y se subordinaran a los segundos. Pero la tendencia a la convergencia no resolvió el pleito inaugural entre saber y poder. El puente entre la élite ilustrada y los partidos fue y sigue siendo estrecho e inestable. Intelectuales y expertos suelen recostarse en los partidos. Aceptan un dato obvio de la realidad: los partidos son los actores centrales de la política uruguaya. Pero rara vez están a gusto dentro de las estructuras partidarias. El caudillismo inaugural persiste. El malestar *doctoral* también.

La chilena es una democracia elitista y tecnocrática, que recela de la participación popular. La uruguaya es una democracia participativa pero hostil a los expertos. La voz



del ciudadano suele ser poco escuchada en Chile. La visión del experto se impone tanto en el gobierno como en el debate público. En Uruguay la ciudadanía tiene otros medios para hacerse oír. Los partidos han sido, desde el siglo XIX, sensibles a sus demandas y preferencias. Pero los expertos tienen una influencia limitada en el gobierno y las políticas públicas. En Chile la calidad de las políticas sufre por falta de participación popular. En Uruguay por la fragilidad del nexo entre investigación y políticas públicas. Comparada con Uruguay, la democracia chilena revela todo su elitismo. A su vez, cuando se la compara con la chilena, la democracia uruguaya no puede disimular cierta indigencia técnica.

Chile y Uruguay constituyen buenos ejemplos de Regímenes Políticos de Conocimiento diferentes. En Chile el conocimiento juega un papel clave. No se concibe un gobernante que no tenga una buena formación académica y que no esté rodeado de expertos. El conocimiento legitima, empodera, tiende puentes entre partidos y grupos con intereses distintos. Hay una demanda intensa: seguramente esto ayude a entender por qué existe “masa crítica” en las políticas que se consideran más importantes. En Uruguay el papel del conocimiento es secundario. No son necesarias las credenciales académicas para ocupar puestos de relevancia, ni siquiera en los cargos vinculados al gobierno de la economía. La legitimidad descansa en otros pilares: la sensibilidad, la honestidad, la capacidad de representar. El conocimiento maximiza el poder de cada actor en la disputa política. Hay poca demanda: será por eso que la oferta de conocimiento especializado es, comparada con la chilena, sensiblemente menor. Las unidades de investigación son más débiles y el desarrollo de las ciencias sociales más reciente.

Debates pendientes

Quedan pendientes al menos tres debates. El primero refiere a la dinámica temporal del régimen político de conocimiento. Desde luego, ni en Chile ni en Uruguay el papel del conocimiento y el poder político de los expertos han permanecido perfectamente estables a lo largo del tiempo. Según Silva, la sociedad chilena ha experimentado momentos de mayor y de menor “demanda” tecnocrática, acompañando la peripecia del prestigio de los partidos y sus líderes (cuando los partidos se deslegitiman, sugiere Silva, los tecnócratas

avanzan hacia el poder). En Uruguay la crisis económica de los 50 favoreció un “giro tecnocrático” que tuvo en la experiencia de la planificación de los años 60 un momento muy visible. En ambos países, además, la experiencia del autoritarismo dejó una marca importante respecto de la importancia de incrementar la calidad técnica de las políticas públicas. En el futuro, habrá que elaborar mucho más cuidadosamente sobre continuidades y cambios. En ese sentido, la coyuntura de ambos países invita a la reflexión. ¿No estaremos asistiendo, a comienzos del siglo XXI, a un punto de inflexión en ambos regímenes de conocimiento? ¿No se estará democratizando el RPC chileno? No pueden darse respuestas definitivas. Pero está claro que durante la última década, especialmente a partir del desafío planteado por el movimiento estudiantil, existe una tendencia a hacia un *policy-making* más inclusivo y participativo (Moreno, 2010). ¿No estará aumentando el papel del saber en la democracia uruguaya? De hecho, durante los gobiernos del Frente Amplio, un equipo económico de credenciales académicas muy superiores al estándar nacional logró mantenerse en el poder a pesar desafíos y presiones desde el propio partido de gobierno.

El segundo debate pendiente refiere al vínculo entre régimen político de conocimiento y estructura social. Según Silva, el fenómeno tecnocrático en Chile es expresión de los valores de la clase media:

Uno de los argumentos centrales desarrollados en este libro es que, tanto el origen como el desarrollo ulterior del fenómeno tecnocrático en Chile durante la mayor parte del siglo XX, han estado íntimamente relacionados a la emergencia y posterior supremacía de la clase media (2008:219, T.d.E).

La asociación histórica es muy discutible. La tecnocracia en Chile es muy anterior a la conformación de una clase media propiamente dicha. La oligarquía chilena de principios del siglo XIX ya era, en cierto sentido, tecnocrática. Tampoco hay una relación causal. La existencia de una amplia clase media no explica el desarrollo de la tecnocracia. La comparación con Uruguay en este sentido ofrece una evidencia categórica. Si el desarrollo de la clase media fuera causa necesaria y suficiente deberíamos tener también un resultado idéntico en Uruguay, cuya clase media es anterior en el tiempo y más amplia en proporción que la chilena. Como hemos argumentado extensamente a lo largo de este texto no es el caso. En Uruguay



hay clase media pero no hubo ni hay tecnocracia.

Además de los dos anteriores, queda pendiente otro debate teórico, pero de carácter normativo. Me refiero al vínculo teórico y empírico entre tecnocracia y democracia. Patricio Silva abonó la tesis de la complementariedad entre democracia y tecnocracia:

Por un largo tiempo, la tecnocracia chilena vivió bajo la fuerte protección de los gobiernos y los presidentes, quienes han intentado reducir la influencia de los grupos de presión en la creación de nuevas políticas públicas. Aunque, en mi opinión, el aislamiento de la tecnocracia contribuyó de manera positiva al funcionamiento de la democracia chilena, y ha contribuido todavía más en la consolidación del régimen democrático actual, el momento presente parece demandar vínculos más estrechos entre la tecnocracia y los ciudadanos (2008:234, T.d.E).

Desde su perspectiva la tecnocracia, cuando vela por el interés general, puede estar al servicio de la ciudadanía.

Recientemente, Eduardo Dargent se sumó a este debate insistiendo en dos argumentos a favor de la autonomía de los expertos. El primero es de carácter político y refiere al vínculo con los ciudadanos. Los tecnócratas, sostiene, pueden responder a las preferencias ciudadanas incluso mejor que los líderes políticos:

Aunque las tecnocracias pueden tener características poco democráticas que reducen la calidad democrática, los expertos pueden ser más receptivos a las demandas de los ciudadanos que los políticos electos. Estos últimos, por lo general, son indiferentes a las necesidades de los ciudadanos, ya que sus intereses son conseguir recursos de clientelismo y lograr alcanzar sus intereses particulares, lo que los lleva a ignorar las preferencias ciudadanas/públicas (2015:167, T.d.E).

El segundo argumento es de carácter técnico y refiere a la eficacia y eficiencia de las políticas públicas:

En ciertos aspectos, los expertos son saludables en aquellas regiones caracterizadas por la política de clientelismo, la inestabilidad del régimen, y burocracias débiles. Este libro muestra que los tecnócratas pueden, a veces, tener efectos similares al retener los impulsos de los políticos motivados por el clientelismo/mecenazgo y fortaleciendo las instituciones en las regiones donde los políticos son ampliamente conocidos por su irresponsabilidad a la hora de elaborar las políticas (2015:166-167, T.d.E).



Encontrar combinaciones virtuosas de saberes ciudadanos e insumos técnicos no parece muy sencillo. De hecho, en ninguno de los dos países hay un balance óptimo entre la voz de la ciudadanía y la de los expertos. En Chile, la calidad de las políticas sufre por ausencia de participación ciudadana. En Uruguay, por la debilidad de los sustentos técnicos. Chile no precisa más tecnocracia. Necesita solamente más democracia. Uruguay no precisa más democracia. Necesita esencialmente más tecnocracia. Cada país tiene su propio régimen político de conocimiento. En cada caso hay que investigar, caso por caso, qué es lo que está faltando. A cuenta de las investigaciones sobre otros países podría formularse la generalización siguiente: el principal déficit de la mayoría de los países latinoamericanos no es la falta de tecnocracia sino la debilidad de las instituciones que deberían empoderar a los ciudadanos. Las democracias en América Latina suelen ser más tecnocráticas que plebeyas. Si esto es correcto, fortalecer la tecnocracia solamente puede conducir a debilitar las de por sí débiles raíces del autogobierno en la región.

Bibliografía

- ALCÁNTARA, Manuel (2004). *Partidos políticos en América Latina: Precisiones conceptuales, Estado actual y retos futuros*. Barcelona: CIDOB.
- ALTMAN, David, y PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal (2002). Assessing the Quality of Democracy: Freedom, Competitiveness and Participation in Eighteen Latin American Countries. En *Democratization* (2), pp. 85-100.
- ARDAO, Arturo (2008). *Espiritualismo y positivismo en el Uruguay*. Ediciones Universitarias: Montevideo.
- BARREDA, Mikel (2011). La calidad de la democracia. Un análisis comparado de América Latina. En *Política y gobierno* XVIII(2), pp. 265-295.
- BRUNNER, José Joaquín (1984). Estudios del campo científico IV: La sociología chilena antes de su fase de profesionalización plena. En *Documentos de Trabajo*, FLACSO.
- BUQUET, Daniel, y CHASQUETTI, Daniel (2004). La democracia en Uruguay: una partidocracia de consenso. En *Política* 42, pp. 221-247.
- CAETANO, Gerardo; RILLA, José, y PÉREZ, Romeo (1988).



- La partidocracia uruguaya. Historia y teoría de la centralidad de los partidos políticos. En *Cuadernos del CLAEH*, 44, Montevideo, pp. 36-61.
- CAMPBELL, John L.; y PEDERSEN, Ove (2011). Knowledge Regimes and Comparative Political Economy. En BÉLAND, Daniel, y COX, Robert H. (ed.). *Ideas and Politics in Social Science Research*. Oxford: Oxford University Press, pp. 167-190.
- CAMPBELL, John L.; y PEDERSEN, Ove (2014). *The National Origins of Policy Ideas: Knowledge Regimes in the United States*. France, Germany and Denmark Princeton: Princeton University Press.
- CANGINO, Hugo (2011). El Proyecto Positivista en América Latina: Valentín Letelier y la defensa del Estado Docente en Chile. En *I Actas del Encuentro Internacional de Historia: Ideas. Ideologías e intelectuales en América Latina: Independencia e interdependencias*. Universidad Nacional de Trujillo, Perú, pp. 59-69.
- CARTES, Armando (2014). "Un gobierno de los pueblos". *Relaciones Provinciales en la Independencia de Chile*. Valparaíso: Ediciones Universidad de Valparaíso.
- COLLIER, Simón (2005). *La construcción de una república. 1830-1865. Política e ideas*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- DARGENT, Eduardo (2015). *Technocracy and Democracy in Latin America. The experts Running Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DE RIZ, Liliana (1989). Política y partidos. Ejercicio de análisis comparado: Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. En CAVAROZZI, Marcelo, y GARRETÓN, Manuel Antonio (eds.). *Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones en el cono Sur*. Santiago: FLACSO, pp. 35-78.
- DE SIERRA, Gerónimo (2013). Ciencias sociales en Chile y Uruguay. En TRINDRADE, Helgio (coord.). *Ciencias Sociales en América Latina*, Buenos Aires: Eudeba, pp. 321-237.
- ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (2014). *Democracy Index 2014. Democracy and its discontents*. Disponible en: https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0115
- GÁRATE CHATEAU, Manuel (2012). *La revolución capitalista de Chile. Desde la tradición del liberalismo decimonónico (1810-1970) a la búsqueda de una utopía neoconservadora (1973-2003)*. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado.
- GARCÉ, Adolfo (2000). Tres fases en la relación entre

- intelectuales y poder político en Uruguay. En DE ARMAS, Gustavo, y GARCÉ, Adolfo (coords.). *Técnicos y Política*, Montevideo: Trilce.
- GARCÉ, Adolfo (2002). *Ideas y competencia política en Uruguay (1960-1973). Revisando el "fracaso" de la CIDE*. Montevideo: Trilce.
- GARCÉ, Adolfo (2005). La Ciencia Política en Uruguay: Un desarrollo tardío, intenso y asimétrico. En *Revista de Ciencia Política* 25(1). Santiago de Chile, pp. 232-244.
- GARCÉ, Adolfo (2014). Regímenes políticos de conocimiento: Construyendo un nuevo concepto a partir de eventos de cambio seleccionados en políticas públicas del gobierno de Tabaré Vázquez (Uruguay, 2005-2009). En *Revista de Ciencia Política* 34(2), pp. 439-458.
- GARCÉ, Adolfo (2015). La profesión económica, los economistas y la política en Uruguay. En MONTECINOS, Verónica, y MARKOFF, John. *Economistas en las Américas. Profesión, ideología y poder político*, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2015, pp. 421-470.
- GARRETÓN, Manuel Antonio (1983). *El proceso político chileno*. Santiago de Chile: FLACSO.
- GARRETÓN et al, 2005. Social sciences in Latin America: a comparative perspective – Argentina, Brazil, Chile, Mexico and Uruguay. En *Social Science Information*, Vol 44(2 & 3), pp. 557-593.
- GÓNGORA, Mario (1981). *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile*. Santiago: Ediciones la ciudad.
- HIRSCHMAN, Albert (1964). *Estudios sobre política económica en América Latina. (En ruta hacia el progreso)*. Aguilar. Madrid. 1964.
- HUNEEUS, Carlos (2014). *La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet*. Santiago de Chile: Taurus.
- JAKSIC, Iván (1989). *Academic Rebels in Chile: The Role of Philosophy in Higher Education and Politics*. New York: State University of New York Press.
- JAKSIC, Iván (2001). *Andrés Bello, la pasión por el orden*. Santiago: Editorial Universitaria.
- JOIGNANT, Alfredo (2001b). *Las élites gubernamentales como factor explicativo de un modo político y económico de desarrollo: el caso de Chile (1990-2009)*. Avances de Investigación, 58, Madrid: Fundación Carolina.
- JOIGNANT, Alfredo (2011). The Politics of Technopols: Resources, Political Competence and Collective Leadership in Chile, 1990-2010. En *Journal of Latin American Studies* 43, pp. 517-546.



- LANZARO, Jorge (1986). *Sindicatos y sistema político. Relaciones corporativas en el Uruguay 1940-1985*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.
- LANZARO, Jorge (2012). Continuidad y cambios en una vieja democracia de partidos. Uruguay 1910-2010. En *Cuadernos del Claeh* N° 100, 3, pp. 37-77.
- LEVINE y MOLINA (2007). La calidad de la democracia en América Latina: una visión comparada. En *América Latina Hoy* 45, pp. 17-46.
- LUNA, Juan Pablo, y ALCANTARA, Manuel (2004). Estructuración ideológica y competencia programática: Los partidos Chilenos y Uruguayos en perspectiva comparada. En *Revista de Ciencia Política*, 24(1), pp. 128-168.
- MAILLET, Antoine; TORO, Sergio; OLIVARES, Alejandro, y RODRÍGUEZ, María Ignacia (2016). Los monjes fuera del monasterio: CIEPLAN y su producción intelectual durante cuatro décadas de política chilena. En *Política*, 54(1), pp. 189-218.
- MARKOFF, John, y MONTECINOS, Verónica (1994). El irresistible ascenso de los economistas. En *Desarrollo Económico* 34 (133), pp. 3-29.
- MONTECINOS, Verónica (1998). *Economists, Politics and the State: Chile 1958-1994*. Amsterdam: CEDLA.
- MONTECINOS, Verónica (2009). Economics: the Chilean story. En MARKOFF, John, y MONTECINOS, Verónica, *Economists in the Americas*. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing, pp. 142-194.
- MORAGA VALLE, Fabio (2014). Más administración que política: Valentín Letelier y la formación de las ciencias humanas en Chile (1870-1917). En *Revista Tiempo Histórico*, 8, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, pp. 49-72.
- MORENO, Marco (2010). Think tanks en Chile: estilos y prácticas tecnocráticas en la formación de políticas. En *Revista Enfoques* 13 (12), pp. 103-125.
- OLIVARES, Alejandro; GONZÁLEZ-BUSTAMANTE, Bastián; MENESES Javiera, y RODRÍGUEZ, Matías (2014). Los think tanks en el gabinete: una exploración del caso chileno (2006-2014). En *Revista de Sociología*, 29, pp. 37-54.
- PÉREZ ANTÓN, Romeo (1988). Cuatro antagonismos sucesivos: la concreta instauración de la democracia uruguaya. En *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 2(1), pp. 41-59.
- REHREN, Alfredo, y FERNÁNDEZ, Marco (2005). La evolución de la ciencia política en Chile: escuelas, mercado y tendencias.

- En *Revista de Ciencia Política* 25(1), pp. 40-55.
- RIAL, Juan (1986). Las FFAA como partido político sustituto. El caso uruguayo. 1973-1984. En *Nueva sociedad*, 81, pp. 106-116.
- ROBLEDO, Lara (2002). Técnicos y militares en Uruguay. Política Económica: saber y deber en conflicto 1973-1984. Monografía final, Licenciatura en Ciencia Política, ICP-FCS-UDELAR.
- RODRÍGUEZ WEBER, Javier (2014). La Economía Política de la Desigualdad de Ingreso en Chile, 1850-2009. Tesis de Doctorado. Programa de Historia Económica. FCS-UDELAR.
- SILVA, Patricio (1991). Technocrats and Politics in Chile: From the Chicago Boys to CIEPLAN Monks. En *Journal of Latin American Studies*, vol. 23, N°2, pp. 385-410.
- SILVA, Patricio (2008). *In the name of reason: technocrats and politics in Chile*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- SOLARI, Aldo (1965). Educación y desarrollo de las élites. Sistemas de enseñanza secundaria. En SOLARI, Aldo, *Estudios sobre la sociedad uruguaya*. Montevideo: Arca.
- AMUNÁTEGUI SOLAR, Domingo (1939). *Pipiolos y pelucones*. Santiago de Chile: Universo SA.
- VALENZUELA, Samuel (1995). Orígenes y transformaciones del sistema de partidos en Chile. En *Estudios Públicos*, 58, pp. 5-80.
- WHITEHEAD, Laurence (2000). The Politics of Expertise in Latin America: Antecedents and Actualities. En *Brazilian Journal of Political Economy* 20(2), pp. 23-35.
- ZEA, Leopoldo (1976). *El pensamiento latinoamericano*. Barcelona: Ariel.

Fecha de recepción: 14 de mayo de 2017

Fecha de aceptación: 28 de julio de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



Ana Belén Mercado

mercadoanabelen@gmail.com

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe.

Universidad de Buenos Aires. Argentina

**THINK TANKS, DEMOCRACIA Y PARTIDOS POLÍTICOS.
EL INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA HERNÁN ECHAVARRÍA
OLÓZAGA DURANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
COLOMBIANA (1986-1992)**

Resumen: Este trabajo busca indagar sobre la incidencia de los think tanks en el campo de la política en Colombia desde fines de los años 1980, haciendo foco en el contexto de reforma de la Constitución (1991) y las definiciones sobre democracia, entre otras dimensiones. Si bien se presenta a los think tanks como agentes neutrales, entendemos que su producción de conocimiento promueve una conceptualización deshistorizante y desideologizante sobre la democracia y la participación política. Para dar cuenta de ello, exploraremos la trayectoria del Instituto de Ciencia Política de Colombia, como sujeto político productor de un sentido común neoliberal.

Palabras clave: think tanks, políticas públicas, democracia, neoliberalismo

Think tanks, democracy and political parties. The Institute of Political Science Hernán Echavarría Olózaga during the reform of the Colombian Constitution (1986-2016)

Abstract: This paper seeks to investigate the impact of think tanks in the field of politics in Colombia since the late 1980s, focusing on the context of reform of the Constitution (1991) and definitions on democracy, among other dimensions. While think tanks are presented as neutral agents, we understand that their production of knowledge promotes a dehistoricizing and de-ideological conceptualization of democracy and political participation. To account for this, we will explore the trajectory of the Institute of Political Science of Colombia as a political subject that produces a neoliberal common sense.

Keywords: think tanks, public policies, democracy, neoliberalism



Introducción

Mientras que muchos investigadores hicieron foco en la dimensión sobre las nuevas formas de producción de conocimiento a partir de los *think tanks* (Gibbons y otros, 1997), nuestro interés apunta hacia el estudio de su promoción de ideas sobre la democracia, las decisiones gubernamentales y su postura ante la coyuntura de reforma constitucional previa y posterior a 1991 en Colombia. Así es como los *think tanks* muestran una nueva forma de intervenir en política que, diferenciándose de la tradicional competencia partidaria, incursiona en la organización de redes de experticia tanto a nivel local como internacional. Desde aquel entonces, se desempeñan como verdaderos actores políticos, dado que, asociados a distintos partidos, conectan las ideas y el conocimiento producido con las políticas públicas implementadas y brindan evidencia y asesoramiento técnico a los gobiernos.

Sin bien se los presenta como agentes neutrales y ajenos al campo de la política, partimos del supuesto de que su producción de conocimiento promueve una conceptualización deshistorizante y desideologizante sobre la democracia y la participación política. Para dar cuenta de ello, rastreamos, en principio, el papel que los *think tanks* vienen desempeñando como actores políticos y los sentidos y representaciones que promueven sobre la democracia, el neoliberalismo y otras dimensiones.

Nos interesa el caso colombiano por su particular “continuidad y estabilidad democrática” en un contexto regional en el que primaron las dictaduras de las Fuerzas Armadas. Entendemos que la democracia promovida por las fuerzas de derecha en el gobierno es principalmente de tipo instrumental, aunque en la Constitución de 1991 se plasman algunos elementos de tipo participativo, como veremos. Hasta comienzos de los años 1990, el sistema político colombiano se basó en el bipartidismo y el uso constante del estado de sitio para mantener el orden. En 1986 se abre la participación institucional a nuevos partidos políticos, lo que se plasmará luego en la Constitución de 1991. Aunque esto no evitó la alternancia en el poder entre los partidos Liberal y Conservador, sí permitió la aparición de nuevos actores en la escena política. Por su parte, el período considerado es de sumo interés dado que es en los escenarios históricos de reformas constitucionales donde emergen con mayor nitidez



las disputas por los proyectos de construcción de matrices institucionales contrapuestos.

El relevamiento indagará sobre las producciones del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Haremos una descripción sobre su trayectoria histórica, relevando a sus intelectuales, las publicaciones realizadas, su relación e injerencia con los partidos políticos y sus representaciones sobre la democracia y la participación popular.

Los *think tanks* en América Latina

La propuesta de este trabajo nos exige situar históricamente la expansión de los *think tanks* en América Latina. Mercedes Botto (2011) nos habla de dos etapas diferenciadas por el lugar que ocuparon en la región, siempre contando, en gran medida, con fuentes de financiamiento externo (Lardone, Martín y Roggero, Marcos, 2011). En un primer momento, marcado por un contexto de gobiernos autoritarios, aparecen como espacios de oposición a las dictaduras y de defensa de los derechos humanos. Mientras que una segunda oleada, durante los años 90 y ya en contextos democráticos, los encuentra como agentes impulsores de las reformas estructurales neoliberales.

Desde entonces, los *think tanks* en América Latina mantienen sus funciones como centros de pensamiento que brindan evidencia y asesoramiento técnico a gobiernos o partidos políticos, ya sea que estén asociados a ellos de manera directa, por medio de financiamiento o no. En esta nueva forma de hacer política éstos cumplen un rol fundamental al producir y difundir “datos, ideas y argumentos para legitimar” (Botto, Mercedes, 2011:88) las decisiones en materia de políticas públicas de los gobiernos frente a la opinión pública. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que los *think tanks* se desempeñan en la actualidad como verdaderos actores políticos, dado que conectan las ideas y el conocimiento producido con las políticas públicas implementadas. Sin embargo, Botto matiza la libertad con la que actúan planteando que dependen tanto del financiamiento de actores externos como de los grupos locales que ejercen presión sobre ellos.

Karin Fischer y Dieter Plehwe brindan una definición empírica de los *think tanks* como “unidades que combinan

módulos de conocimiento experto, consulta, *lobby* o apoyo activo” (2013:74) y los ubican como sustitutos de los partidos políticos en una nueva forma de hacer política. En ese sentido, destacan su capacidad para desarrollar guiones argumentativos que esbozan explicaciones claras y fáciles de comunicar. Los *think tanks* muestran una nueva forma de intervenir en política que, diferenciándose de la tradicional competencia partidaria, incursiona en la organización de redes de experticia tanto a nivel local como internacional. Asimismo, hacen las veces de refugios para líderes políticos que ya no ocupan cargos públicos e intelectuales que no están legitimados entre el electorado debido al anonimato que ofrecen estas instituciones.

La legitimidad de los *think tanks* en la región presenta aspectos paradójales. Debido a que se fundan en una supuesta autonomía de pensamiento y son, en principio, apartidarios, sobresalen como instituciones de producción de conocimiento de mayor credibilidad. Sin embargo, esa característica les brinda más oportunidades de influir sobre las decisiones políticas, asociándose a partidos políticos (Garcé, Adolfo, 2009). Esto es lo que, en cierta medida y con matices, observamos en el caso de estudio de este trabajo, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP). Estaremos atentos a lo señalado por Mendizábal, para quien “el desarrollo de las funciones y los roles que desempeñan los *think tanks* está sujeto a los contextos en los que operan y a las necesidades que les exigen los partidos políticos” (2009:17).

La reforma constitucional colombiana de 1991: hacia un Estado neoliberal

A continuación, nos abocaremos a la descripción del proceso de reforma constitucional que tuvo lugar en Colombia en 1991. Tal como lo describen Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, “Colombia es un caso de vigencia del régimen democrático con primacía de la lógica de la guerra” (2012:593). En este país se mantuvo la continuidad jurídico-política desde 1958, al igual que en Venezuela, lo cual no deja de ser un hecho particular desde una mirada en conjunto de los países de la región a partir de la década de 1960. Dicha continuidad fue producto de la instauración de un pacto de cooperación entre civiles y militares en defensa de la democracia representativa, como respuesta a la inestabilidad



política, sumada al entramado de violencias. De esta manera, la democracia colombiana se caracterizó por la exclusión de algunos partidos políticos de la participación electoral y la alternancia en el poder de las principales fuerzas políticas, los partidos Liberal y Conservador. Hasta comienzos de 1990, el sistema político colombiano se basó en el bipartidismo y el uso constante del estado de sitio para mantener el orden. Aquel período estuvo signado, por un lado, por la persistencia de la violencia producto de los enfrentamientos entre los grupos narcotraficantes y paramilitares y la violación sistemática de los derechos humanos, y, por el otro, la injerencia militar de Estados Unidos.

A mediados de los 80 se abre la participación institucional a nuevos partidos políticos, lo que se plasmará luego en la Constitución de 1991. Sin embargo, esto no resultó en una mayor participación política de nuevos partidos. El pacto de alternancia de las clases dominantes, conocido también como Frente Nacional, tuvo su quiebre en 1986, al asumir el liberal Virgilio Barco (1986-1990), quien rompió con la tradición de repartir los cargos de gobierno entre liberales y conservadores, y formó su gabinete exclusivamente con miembros de su espectro político. Barco había impulsado un principio de diálogo con las organizaciones armadas, cuyo objetivo primordial era negociar su incorporación al orden político institucional. En las elecciones generales de 1990, el presidente saliente autorizó contabilizar la “séptima papeleta”¹, la convocatoria a reformar la Carta Magna por la vía plebiscitar. Su sucesor liberal, César Gaviria (1990-1994), fue quien llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, la cual no estuvo exenta de polémicas en torno a su formación y funcionamiento. Habiendo triunfado en 1991 la Constitución promovida por el Partido Liberal, Gaviria llevó a cabo una serie de reformas neoliberales en el Estado. Las mismas se basaron en la apertura económica, la reducción de la injerencia estatal en el mercado, las privatizaciones de empresas fiscales, al tiempo que se suspendieron las negociaciones con las FARC. Estas reformas administrativas fueron conocidas como el “revolcón” institucional.

La Asamblea Constituyente junto con la reforma neoliberal del Estado en Colombia, es el contexto de acción del ICP que analizamos en este trabajo. La pregunta que nos mueve es por los aportes que realiza este *think tank* y su incidencia en el plano político.

¹ La séptima papeleta se originó como una iniciativa de un grupo estudiantil que impulsó su inclusión en las elecciones generales de marzo de 1990. En aquellos comicios se debían votar candidatos para seis categorías: Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales, Concejo Municipal y Alcaldía. La séptima papeleta, entonces, era un reclamo para realizar la Asamblea Constituyente. Si bien la opción por la Constituyente no era oficial, la cantidad de votos emitidos fue tal que la Corte decidió incluir la consulta formal en las siguientes elecciones, las presidenciales de mayo de 1990, en las que una amplia mayoría se pronunció por el “sí” a la reforma constitucional.

Siguiendo lo expuesto por Ansaldi y Giordano, la constitución política, su legislación y la jurisprudencia forman el ordenamiento jurídico-político de cada Estado, lo que los autores definen como la “matriz institucional”. Estos son los fundamentos teóricos que otorgan legitimidad al Estado, y a partir de los cuales se materializan prácticas históricas concretas. Acordamos con esta tesis al señalar que las constituciones son “el diseño de lo que quiere construirse” (Ansaldi y Giordano, 2012:686). Aunque en muchos casos ese diseño se pierde en la práctica y el ejercicio del poder, es un ejemplo insoslayable de las disputas históricas por la construcción del orden.

En esta dirección, el aporte de Giordano resulta esclarecedor, entendiendo que “la promulgación de las leyes no señala solo y simplemente un cambio normativo. Se trata de un fenómeno que se inscribe en el campo jurídico pero que es analizado atendiendo a la doble y recíproca determinación” (Giordano, Verónica, 2012:20) entre los postulados jurídicos y el orden político y social.

En lo que respecta al papel de los *think tanks* como productores del sentido común neoliberal, retomamos lo dicho por Rovira Kaltwasser, quien propone una interesante clasificación de las derechas latinoamericanas. Si bien despliega su tipología para las derechas en el siglo XXI, entendemos que la misma puede adaptarse a las consideraciones en el presente trabajo. El primero de los tres mecanismos de acción de las derechas es el no electoral, a partir del cual las derechas utilizan los recursos a su alcance para evitar que los gobiernos de izquierda efectúen reformas contrarias a sus propios intereses. Más precisamente, nos interesa resaltar aquí lo que entiende como una práctica alternativa sofisticada, el lobby “llevado a cabo por organizaciones empresariales, tecnócratas y comunidades epistémicas sobre distintos organismos del Estado” (Rovira Kaltwasser, Cristóbal, 2014:43). Esta descripción resulta atinada para abarcar el papel que desarrollan los *think tanks* colombianos en el período que mencionamos. En adición, uno de los aspectos característicos de muchos *think tanks*, como el ICP, es su independencia con respecto a cualquier partido político, lo cual contribuye con la idea de neutralidad y racionalidad como valores propios de actores *outsiders* del campo de la política.

Ansaldi plantea que el neoliberalismo nos legó la



licuación de la política, entendiendo por esto el hecho de que los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales, hacia fines de los 80, pierden su relevancia en lo que refiere a la formulación de demandas. Ese lugar vacante lo ocupan, entre otros, los medios masivos de comunicación del *establishment* y nuevos agentes que, como los *think tank*, se presentan ajenos a las ideologías y a los conflictos sociales, es decir, ahistóricos. Coincidimos con el autor, quien nos alarma sobre la preponderancia del mercado y el reemplazo de los lazos sociales de solidaridad por un creciente atomismo individual. Tal es así que

[El] neoliberalismo (...) rechaza la concepción de igualdad entre los hombres. A juicio de sus ideólogos, los hombres son naturalmente desiguales, excepto en el plano de la ley (...) y en el del mercado (los hombres son igualmente libres para la adquisición o disfrute de sus propiedades). (...) En el plano político ello se traduce en una concepción puramente instrumental del Estado: la defensa de la propiedad privada y del mercado (Ansaldi, Waldo, 2014:11).

El pacto del llamado Frente Nacional, según el cual se garantizaba la alternancia de los partidos Liberal y Conservador en el poder, impidiendo la participación electoral de otras fuerzas, se sustentaba en dos principios. Por un lado, la alternancia en la presidencia, y por el otro, la distribución de los cargos de gobierno en partes iguales. Según Juan Fernando Londoño (2009) esto tuvo un fuerte impacto sobre el devenir del sistema político colombiano. No solo por la obviedad de lo excluyente, sino que los propios miembros del pacto se vieron afectados por una creciente desideologización y homogeneización, producto de la ausencia de la competencia electoral. En este contexto, los *think tanks* partidarios perdieron presencia en el espectro de la opinión pública, espacio que fue ocupado por los centros de pensamiento apartidarios.

Para concluir este apartado, cabe mencionar algunas cuestiones sobre la Constitución sancionada en 1991, que reemplazó a la Carta de 1886. Andrés Dávila Ladrón de Guevara (2002) la caracteriza como una ampliación controlada del espacio político. Dado que, por un lado, incluye elementos de la democracia participativa, como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, al tiempo que incorpora a la participación política a las fuerzas no bipartidistas que

habían quedado excluidas durante el período del Frente Nacional, inaugurado en 1958. Sin embargo, por otro lado, aún con algunos recortes a la injerencia del poder central, mantiene un régimen de gobierno fundamentalmente presidencialista. Estas consideraciones son solo una pequeña muestra que, por cuestiones de extensión, no desarrollamos de forma completa en este trabajo, pero dan cuenta de la heterogeneidad de aspectos que contribuyeron a la promulgación de la Constitución de 1991 y que se disputarán en los años siguientes.

El caso del Instituto de Ciencia Política

Los think tanks como actores políticos productores de sentido común neoliberal

Los *think tanks* forman parte de la esfera productora de conocimiento e influencias que afectan la toma de decisiones políticas. Su forma de interceder se plasma en la promoción de ciertas políticas públicas como medidas positivas o la denostación de las mismas por medio de la generación de climas adversos. Los *think tanks* surgen, en América Latina, en el desplazamiento de la producción de conocimiento desde las universidades hacia las entidades técnicas especializadas. Asimismo, los criterios utilizados por estas usinas para encarar sus estudios e investigaciones presentan diferencias con respecto a los seleccionados por las universidades. Como indica Botto, ya no se rigen por la excelencia académica, sino que lo hacen por dimensiones como la “relevancia, innovación y eficiencia práctica” (2011:90).

En su trabajo de investigación, Júlio César Alvear (2007) describe la aparición de redes de *think tanks* a nivel global y, desde allí, enmarca el surgimiento de estas usinas de pensamiento en Colombia como promotoras de políticas públicas que tienden, a su vez, a la formación de un sentido común neoliberal. Una de las fundaciones que analiza es el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, creado en 1986 en Bogotá. Este instituto, como mencionamos anteriormente, tendrá un papel clave en la difusión de documentos analíticos respecto de la Asamblea Constituyente de 1991, tanto en los meses previos como en los posteriores a la sanción de la nueva Constitución. El medio fundamental para la difusión de ideas y formulación



de políticas del Instituto de Ciencia Política (ICP) serán los medios de comunicación como las radios y los diarios, así como también una publicación trimestral, la *Revista Ciencia Política*, algunos de cuyos números serán objeto de análisis en el presente trabajo.

Hemos seleccionado el Instituto de Ciencia Política como *think tank* referente durante el período de análisis que abarcamos en este trabajo. Ello se debe, fundamentalmente, a su activa participación, aunque no directamente asociada a un partido político, durante la Asamblea Constituyente de 1991. Sin embargo, debemos mencionar la existencia de otros *think tanks* colombianos de gran impacto, ya sea por el volumen de sus producciones o las grandes cifras de financiamiento que reciben tanto del sector privado, nacional e internacional, como del sector público.

El ICP enumera como sus principales objetivos “promover los principios de la democracia pluralista y la economía de mercado y, con fundamento en ellos, contribuir al perfeccionamiento de las instituciones y al desarrollo económico y social” (ICP, Quienes somos, 1). A su vez, en el artículo 18° de su estatuto, se define como independiente, en tanto que “no recibirá donaciones, ayudas o auxilios económicos provenientes de gobiernos, excepto en los casos en que tales donaciones, ayudas o auxilios sean incondicionales y no contraríen los fines, principios y normas de la fundación” (ICP, Estatutos).

Este *think tank* se identifica a sí mismo como de origen empresarial. A su vez, pertenece a redes internacionales de pensamiento, entre las que mencionan a la Red Liberal de América Latina, el Center for International Private Enterprise, Atlas Network, la Fundación Internacional para la Libertad y la Network for Democracy Research Institutes.

El contexto de surgimiento de nuestro *think tank* bajo estudio es, a grandes rasgos, el del final de la Guerra Fría, la caída del comunismo y el ascenso del neoliberalismo, cuyos exponentes en los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos, Margaret Thatcher y Ronald Reagan respectivamente, se encontraban en el centro de la opinión pública. En términos regionales, América Latina estaba atravesada por las dictaduras y los gobiernos autoritarios, y, a nivel nacional, hablamos de una Colombia profundamente marcada por la violencia, el conflicto armado y las reformas estructurales de tipo neoliberal que se aplicarán desde fines de la década de

1980, con más énfasis desde comienzos de 1990. Al analizar los artículos publicados por el ICP, veremos que estos datos históricos son sumamente relevantes a la hora de interpretar sus posturas sobre el devenir político, económico y social de Colombia.

El ICP tuvo y aún mantiene una prolífica producción de artículos de opinión, análisis teóricos y documentos relacionados con asuntos que rondan sus objetivos centrales: el interés por la democracia y las libertades en Colombia. Estas publicaciones toman en consideración los contextos políticos a nivel mundial y regional. De hecho, muchas de ellas realizan comparaciones de algunos aspectos de la realidad colombiana con las mismas variables en otros países como Argentina, Chile y Perú.

En este trabajo, por cuestiones de extensión, nos enfocaremos en algunos números de la *Revista Ciencia Política*, precisamente aquellos publicados en los años 1990, 1991 y algunos de 1992. La selección de este período se debe al momento de mayor proliferación de trabajos referidos al proceso de reforma de la Constitución de 1991. De los números relevados, a su vez, hemos filtrado los artículos que mencionan explícitamente dicho proceso. Algunos de estos artículos son producciones de intelectuales relacionados con el *think tank*, por lo general abogados o economistas. Otras publicaciones son declaraciones o comunicados de los miembros del ICP, las cuales focalizan en determinados sucesos de la coyuntura local, como especificaremos más adelante. Para finalizar, uno de los artículos relevados es un discurso pronunciado por el entonces presidente de Colombia, César Gaviria, con motivo del 4° aniversario de la creación del ICP.

Los think tanks como actores políticos productores de sentido común neoliberal

Los intelectuales que participan de la *Revista Ciencia Política* suelen presentar ideas afines a los preceptos básicos del instituto. Muchos de ellos realizan diagnósticos sobre el estado de la democracia en Colombia y América Latina. Este es el caso de Enrique Gherzi, abogado peruano, quien escribe en 1990 sobre el proceso de democratización que atravesó América Latina en los 80. El autor plantea que “[las] libertades políticas fueron recuperadas, pero (...) las libertades económicas no pudieron ser alcanzadas” y, en base



a ello, enuncia

[l]os verdaderos revolucionarios que llevarán a estos países a un futuro mejor son un conjunto anónimo de empresarios que trabajarán sin privilegios y sin concesiones para lograr sus metas. (...) Bajo la bandera de la justicia social y la buena voluntad muchos gobiernos del continente destruyeron sus países. Reforma agraria, colectivización de la propiedad, reformas monetarias, protección industrial y otras similares eran las que, aparentemente conseguirían el desarrollo económico (Ghersí, Enrique, 1990).

Retomando los estudios realizados por Hugues Portelli sobre la teoría de Antonio Gramsci, realizaremos algunas precisiones sobre el rol de los intelectuales en el bloque histórico, es decir, en la relación entre estructura y superestructura. Tal como plantea el autor, en esta última encontramos la vinculación entre la sociedad civil y la sociedad política. En este sentido, “el carácter orgánico del vínculo entre estructura y superestructura se refleja cabalmente en las capas de intelectuales”, cuya función es “elaborar y administrar la superestructura que le dará a esta clase [la clase dominante en lo económico-estructural] homogeneidad y la dirección del bloque histórico” (2011: 95).

Este trabajo nos invita a reflexionar sobre el papel de los *think tanks*, y sus pensadores, como intelectuales que desempeñan una determinada función en la pugna por la imposición de interpretaciones del mundo. Sin embargo, esto no implica asociar sin miramientos el papel de los intelectuales con los designios de las clases dominantes. De hecho, el mismo autor advierte que “el intelectual goza de una relativa autonomía respecto a la estructura socioeconómica, y no es su reflejo pasivo” (2011: 99). Así es como enmarcamos las actividades intelectuales desempeñadas por el *think tank* Instituto de Ciencia Política en los siguientes apartados.

Los vínculos del ICP con los partidos políticos y con la democracia

En lo que respecta a su relación con los partidos políticos colombianos, podemos afirmar que el Instituto de Ciencia Política no se encuentra explícitamente asociado a ninguno de ellos, tal como adelantamos al describir su estatuto. Sin embargo, cabe mencionar que en Colombia hallamos la existencia de algunos centros de pensamiento creados en el



seno de los partidos, principalmente los tradicionales Liberal y Conservador, y de sus facciones internas. Un relevamiento de este tipo de usinas es llevado a cabo por Londoño (2009).

En una declaración publicada en 1991 bajo el título “Modernidad y democracia en Colombia”, en ocasión del cuarto aniversario del ICP, el entonces presidente del centro, Hernán Echavarría Olózaga, declara que el instituto

A pesar de que mira con simpatía a todos los sectores democráticos, no puede involucrarse en el accionar partidista o electoral porque perdería la autonomía de pensamiento y empañaría su tarea esencialmente teórica de estudiar, pensar y comprender la democracia y la de hacer comprender sus principios y la necesidad vital de su vigencia (ICP, N° 24, 1991).

De esta manera, el ICP ratifica su independencia como productor de conocimiento, afianzando la neutralidad como uno de sus valores nodales, aunque muchos de sus miembros, incluido el mismo presidente, estuvieron vinculados a partidos políticos, como bien señala Alvear (2007).

Como indicamos, el ICP se reconoce a sí mismo como un centro de pensamiento cuya razón de ser es velar por la democracia y para ello deberá estudiarla y divulgar su conocimiento. En este sentido, señalaba su presidente en el mismo documento que los “principios filosóficos de la democracia, la historia de su nacimiento y de sus realizaciones, que es, de paso, la historia de la civilización, deben estudiarse y difundirse con dedicación, con seriedad y con rigor científico” (ICP, N° 24, 1991).

La concepción del ICP sobre la democracia es sumamente restrictiva, lo cual queda a la vista en algunas de sus publicaciones. Tito Livio Caldas, uno de los miembros fundadores del instituto, se mostraba preocupado en 1992 por la definición de la democracia como participativa, expresada en la nueva Constitución nacional. El autor asocia este tipo de democracia con el antiliberalismo y los totalitarismos, y propone que

...el único adjetivo que admite la democracia, sin desfigurarla, es *el de representativa*. Todos los demás, los que le fueron dados en diversas épocas, solo sirvieron para encubrir sus desfiguraciones: social o corporativa, que fueron los apelativos fascistas, y popular, el comunista (Caldas, Tito Livio, 1992).



En ese entonces, Hernán Echavarría Olózaga también muestra sus reparos sobre este punto en el discurso por el IV aniversario del instituto. En el mismo, hace un llamado a la reflexión de la clase política, a los fines de que corrijan y reparen los errores en las normas constitucionales y desistan de aplicar una democracia de tipo participativo. Concentra su rechazo en dos de los nuevos artículos constitucionales, el 2º, según reflexiona “tiende a agigantar al Estado descomunadamente porque lo obliga a facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten en su vida económica, política, administrativa y cultural”. Por otro lado, presenta sus reparos contra el artículo 103º, que autoriza al Estado a intervenir en las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común, y según el cual “tenderán a confundirse las esferas de la vida pública y las de la vida privada” (ICP, N°24, 1991), previene.

En su trabajo sobre la relación entre los tanques de pensamiento, los partidos políticos y las reformas políticas en Colombia, Diego Leal y David Roll (2013) argumentan que los *think tanks* han tenido una activa y decisiva participación en las reformas políticas que se produjeron en 2003 y 2009. Los autores caracterizan al sistema político colombiano como uno en el que los partidos políticos se encuentran poco institucionalizados pero mantienen vínculos relevantes con los *think tanks*. Si bien no es posible extender sus conclusiones al contexto de la reforma constitucional de 1991, creemos relevante el estudio de las producciones del ICP durante este período, ya que representan a un sector del heterogéneo campo político colombiano. Por otro lado, relativizamos también la injerencia de este *think tank* en las políticas de gobierno. De hecho, como mencionaremos en el siguiente apartado, en un principio, el ICP se muestra reacio a implementar una reforma de la Constitución. Finalmente, la misma se llevará a cabo y esto generará un cambio en la dirección de las publicaciones del instituto, no obstante lo cual, los principios que expresan en la *Revista de Ciencia Política* se mantienen inmutables.

El papel del Instituto de Ciencia Política durante la Asamblea Nacional Constituyente

Los *think tanks* de *advocacy*, es decir, aquellos que buscan no solo producir conocimiento, sino que también se orientan a influir directamente en políticas públicas, coinciden con



los de tipo empresarial en cuanto a la promoción de ciertos valores e ideales políticos. Sin embargo, su diferencia radica en que los segundos se orientan a “cuestiones económicas y enfoques macro” (Botto, Mercedes, 2011: 93). En este sentido, podemos afirmar que el ICP es un *think tank* híbrido entre los de tipo *advocacy* y los de tipo empresarial, dado que en el contexto de la Asamblea Constituyente, sus publicaciones pugnarán por la legitimación de los valores de la democracia representativa, en detrimento de cualquier atisbo de participación popular; un Estado mínimo, garante de la seguridad y la propiedad y privada; y, fundamentalmente, el ejercicio de la libertad de empresa y de mercado por parte del sector privado, a quienes asocian con la sociedad civil misma.

A continuación analizaremos algunos de los documentos y publicaciones del ICP relevados, con el objetivo de ilustrar lo dicho y determinar el tipo de conceptualizaciones sobre la democracia y el Estado que promueve este *think tank* en el período abarcado.

En un comienzo, el ICP en su conjunto manifestó el rechazo a la propuesta de incorporar la séptima papeleta en las elecciones generales de 1990, así como de la modificación misma de la Constitución y la forma en la que se convocaba. Aduciendo que en Colombia las modificaciones a la Carta Magna se realizaban desde el mismo Congreso, el ICP rechazó el plebiscito que llamaba a formar una Asamblea Constituyente mediante el voto popular. Sobre este punto declaran que el “otro camino, el del plebiscito, constituye un salto al vacío”, entre los motivos que aducen, se encuentra que las constituciones en general “no pueden elaborarse ni reformarse al calor de la temperatura volátil y transitoria de las asambleas populares”. A su vez, estas objeciones muestran un matiz ideológico, “la propuesta de la Asamblea Constituyente fue lanzada de manera audaz por reducidos grupos de extrema izquierda, imitando un conocido antecedente de la Revolución Rusa de 1917” (ICP, N°19, 1990).

Observamos, entonces, que el *think tank* no logró imponer su agenda de rechazo al proceso constituyente, dado que el mismo siguió adelante. Sin embargo, a lo largo de estos tres años, el ICP no mantuvo una postura homogénea.

Hacia mediados de 1990 se llegó a un acuerdo político sobre la Asamblea Constitucional, habiendo triunfado el “sí” en el plebiscito. Uno de los puntos del acuerdo planteaba que los ciudadanos decidirían la composición de los miembros



de la Asamblea, así como sus elementos constitutivos y el temario a tratar en la misma, de cara a las sesiones que se iniciarían en enero de 1991. Algunos de los temas a tratar incluidos en la lista fueron: partidos políticos y oposición, sobre la posibilidad de institucionalizar los partidos políticos; mecanismos de participación, sobre la posibilidad de consagrar y regular el referéndum tanto para asuntos de trascendencia nacional como para reformas constitucionales; sobre el Estado de sitio se propuso trabajar en la precisión de su carácter transitorio. Asimismo, en el mismo se observan lo que podría ser antecedentes de la reforma neoliberal del Estado, teniendo en cuenta que se plantea la “posibilidad de consagrar nuevas modalidades de cooperación entre el capital y el trabajo” (ICP, N° 20, 1990).

Previo a las elecciones, el ICP emitió un comunicado dirigido a todos los colombianos, en el cual postulaba que, en su calidad de “interesados en preservar los principios esenciales de la democracia, consideramos apremiante alertar a la opinión nacional sobre los riesgos que rodean la elección de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente” (ICP, N° 21, 1990). Como se aprecia, el mismo se orientó directamente a la opinión pública. Allí realizan un diagnóstico de los males que aquejaban a la nación. Puntualmente, mostraron su preocupación por el rol del Estado y sus problemas en aquel entonces:

...el Estado no cumple las funciones que le son esenciales –la seguridad y la protección de la sociedad civil– y en cambio usurpa e interfiere, con un exceso de reglamentaciones y controles, aquellas que corresponden o desempeña mejor el sector privado (ICP, N° 21, 1990).

Asimismo, entienden que el Estado debería ser más fuerte ya que “muestra una peligrosa vulnerabilidad frente a graves factores de desestabilización e inseguridad como son la subversión, el narcoterrorismo y la violencia en sus múltiples manifestaciones” (ICP, N° 21, 1990). Por otro lado, sacan provecho del contexto de discusión y debate, recomendando la privatización de los servicios públicos, basándose en que “ha demostrado su ineficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales, erosionados por la burocracia y la corrupción” (ICP, N° 21, 1990).

Concretamente, expresan su deseo de que la propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente tienda a “reforzar (...) la

capacidad defensiva del Estado y (...) aprobar disposiciones que permitan el pleno desarrollo de una economía de mercado sin trabas ni rígidos dirigismos estatales” (ICP, N°21, 1990).

Por todo lo mencionado, los miembros del ICP se ven impelidos a “hacer un llamado a la opinión pública con el fin de que tome conciencia de la gravedad del momento (...) y, por consiguiente, de la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros el 9 de diciembre” (ICP, N°21, 1990), día en el que se votaría a la Asamblea Constituyente. Por último, polarizan esta elección aduciendo que

... hay que optar, en última instancia, entre los espejismos de ideologías sin vigencia y de populismos igualmente engañosos que sobreviven en Colombia, o las propuestas, que por estar basadas en un diagnóstico lúcido y realista de nuestros problemas, nos permitan encontrar el camino hacia una sociedad moderna, justa, libre, eficiente y pacífica (ICP, N°21, 1990).

Los diagnósticos del ICP, como hemos podido evaluar hasta aquí, se basaban, en gran medida, en el fracaso del Estado colombiano para resolver una de las cuestiones más apremiantes de su historia reciente, la violencia entre los grupos armados. Sin embargo, en sus publicaciones, omiten la mención explícita al conflicto con las fuerzas militares y paramilitares. Asimismo, como se esbozó, el sistema político de partidos no satisface plenamente las demandas de representación de amplios sectores de la sociedad. De tal manera, entendemos la caracterización que realiza Botto sobre la incursión de los *think tanks* en el ámbito de las políticas públicas, en un espacio de acción que se encontraba vacante en aquel entonces, atentos a que

... la mayoría de los episodios demuestran que las ventanas de participación de los TT² en las decisiones de políticas se circunscriben a determinadas coyunturas caracterizadas como situaciones de excepción o urgencia. En ellas, sobrevuela en la opinión pública la sensación de fracaso de las soluciones en curso y de la necesidad de un cambio (Botto, Mercedes, 2011: 106).

² La autora citada utiliza la abreviación “TT” al referirse a los *think tanks*.

Retomando el papel del ICP durante el proceso de la Asamblea Constituyente, una vez que comenzaron las sesiones constitucionales, el instituto esbozó argumentos ya no contra la idea misma de modificar la Ley Fundamental, sino que sus comentarios se orientaron particularmente



al contenido de dichas modificaciones. Los aspectos que entraban en su consideración eran, como ya se ha visto, el rol del Estado, los valores de la democracia representativa y de la libertad de mercado. En el transcurso de los debates, calificaron a la Constitución que se estaba gestando como “la Carta Fundamental más extensa y asfixiantemente superreguladora del mundo”, al tiempo que prescribían que “el Estado debe dedicarse a sus funciones específicas –el orden y la seguridad, la justicia y las obras públicas– (...) y dejar que toda la fuerza, los recursos y el desarrollo de la economía corran a cargo de la iniciativa individual y del dinamismo del mercado” (ICP, N°23, 1991).

Si bien las críticas y objeciones del ICP a la nueva Constitución y al papel del gobierno aparentaban mordaces, lo cierto es que su relación con el entonces presidente colombiano César Gaviria, era cuanto menos cordial. De hecho, no presentaban diferencias significativas en muchas de las reformas que unos y otro, desde sus respectivas posiciones políticas, proyectaban para la nación.

Al cumplirse el 4° aniversario de creación del instituto, el presidente pronunció un discurso conmemorativo, como ya hemos indicado. El mismo enriquece la comprensión de la relación entre el *think tank* y la clase política en aquel momento. Dice el presidente sobre las tareas del ICP que “la labor de análisis profundo y de debate intelectual que ha promovido el instituto es un aporte importante al conocimiento de los problemas del país y a la búsqueda de las soluciones” (ICP, N°24, 1991). Asimismo, Gaviria justifica las reformas neoliberales impulsadas por su gobierno, teniendo en cuenta que

... las nuevas ideas de la libertad económica, de la importancia de las fuerzas del mercado, de la iniciativa privada, de la reducción del tamaño del Estado, no solo cambiaron radicalmente el marco conceptual del pensamiento económico, sino que han logrado imponerse en la mayoría de la región (ICP, N°24, 1991).

El presidente enumera los criterios en los que se basa este cambio de rumbo del Estado colombiano. El primero tiende a delegar las decisiones de la distribución de los recursos en las fuerzas de mercado, el segundo gira en torno a la importancia irremplazable que le otorga a la iniciativa privada y al empresariado, y, por último, menciona que al consagrar la nueva Constitución la independencia y autonomía de la

Banca Central.

... el Gobierno ha renunciado así a su antiguo privilegio de manejar directamente las variables críticas de la política económica (...) Estos principios son hoy el marco de referencia para el diseño de la reforma y la política económica que adelanta el Gobierno (ICP, N°24, 1991).

Al hacerse realidad los programas esbozados por el Instituto Ciencia Política sobre la apertura económica, la reducción de la injerencia estatal y las garantías otorgadas a la libertad de mercado, no pueden más que celebrar al presidente Gaviria y su modelo de gobierno. Este pasaje titulado “Modernidad y democracia en Colombia”, de mediados de 1991, es un claro exponente del nuevo humor político del *think tank*:

... los éxitos alcanzados por el gobierno del presidente Gaviria, quien, indudablemente, ha entendido que el renacimiento y la consagración universal del neoliberalismo también toca a Colombia y que bajo esta nueva atmósfera de democracia triunfante pueden manejarse los problemas con mayor audacia. ¿No fue esto lo que hizo el presidente Gaviria cuando se lanzó sin los temores de otras épocas por el peligroso camino de expedir la nueva Carta a través de una constituyente abigarrada, pluralista, imprevisible, y acaso no le salió mejor de lo que pensó tal vez la mayoría de la nación? (ICP, N°24, 1991).

Consideraciones finales

Los objetivos de este trabajo nos han llevado a trazar la trayectoria de uno de los *think tanks* más prolíficos de Colombia, el Instituto de Ciencia Política, en un contexto de profundas reformas estructurales del Estado. Hemos considerado a este *think tank* como un actor político productor de sentido común neoliberal. A su vez, incluimos aspectos como el origen de estas usinas de pensamiento, los tipos de publicaciones que realizan y el rol de intelectuales que desempeñan en la producción del conocimiento.

Nuestra pregunta por la ubicación de estos centros de pensamiento en el campo de la política ha quedado en parte respondida, aunque observamos allí una paradoja o contradicción bastante típica de los actores sociales que se presentan como ajenos al sistema vigente. Es decir que, mientras que los *think tanks* se presentan como agentes



neutrales, racionales, desinteresados y ajenos al espectro político, lo cierto es que su producción de conocimiento tiene un claro sesgo antiestatal y pro mercado y empresa. Es el caso del ICP, cuyas publicaciones asocian directamente la democracia con la representación, basados en una supuesta eficiencia de este tipo de mecanismos; mientras que aquellos que se orientan a una democracia que contemple la participación popular son completamente descartados o descalificados con motes como “totalitarios”, “antidemocráticos”, entre otros.

Si bien no podemos extender los resultados del análisis sobre el Instituto de Ciencia Política a una generalización de todos los *think tanks* en conjunto, este aporte nos sirve para seguir pensando en el papel de los centros de pensamiento, en especial aquellos que se presentan como impulsores de la democracia. En este sentido, consideramos que resulta necesario ahondar en el estudio de las cualidades de la democracia promovida por estos agentes y, posteriormente, buscar otros casos para someterlos a una contrastación, atentos a las especificidades de cada uno.

Para cerrar, entendemos que es fundamental continuar con el estudio de las derechas, ya sea que éstas ocupen el gobierno o se encuentren en la oposición. Así también es necesario considerar sus variadas estrategias de acción, que van desde los golpes de Estado (por la vía armada antaño y mediante instituciones como los Parlamentos en la actualidad) hasta la difusión de su sentido común neoliberal mediante los medios masivos de comunicación y su promoción de políticas públicas como agentes desinteresados y neutrales.

Recuperamos el análisis de Lorena Soler y Waldo Ansaldi, quienes denominan “consenso ideológico” a aquel que postula a “la democracia como fuente de legitimidad del orden político en la región” (2015: 16). Para estos autores, el concepto de pospolítica, que retoman de Slavok Žižek, resulta clave a los fines de abordar las nuevas estrategias de las derechas en América Latina. Afirman que éstas niegan la política, apelando directa o indirectamente al fin de las ideologías y de los conflictos de intereses de clase; de manera que solo quedan algunos “problemas, cuestiones y necesidades puntuales” (2015: 24) a ser resueltos por los expertos y técnicos idóneos; descripción que se adapta con justeza a los desempeños del *think tank* que hemos considerado.

Bibliografía

- ALVEAR, Julio César (2007). *Think tanks* en la producción, promoción e implementación de ideas y políticas públicas neoliberales en Colombia. En MATO, D., y MALDONADO FERMÍN, A. (eds.), *Cultura y Transformaciones sociales en tiempos de globalización. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO. pp. 233-251.
- ANSALDI, Waldo (2014). La política, entre la pena y la canción. O la licuación de la política, un legado del neoliberalismo. Trabajo presentado en XI Congreso Nacional y IV Internacional sobre Democracia: “Entre el malestar y la innovación. Los nuevos retos para la democracia en América Latina”, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina.
- ANSALDI, Waldo, y GIORDANO, Verónica (2012). *América Latina. La construcción del orden*, Tomo II. Buenos Aires: Ariel.
- ANSALDI, Waldo, y SOLER, Lorena (2015). Derechas en América Latina en el siglo XXI. En SOLER, L. y CARBONE, R. (eds.) *Des-cartes: Estampas de las derechas en Paraguay*. Buenos Aires: Punto de Encuentro.
- BOTTO, Mercedes (2011). *Think Tanks* en América Latina: radiografía comparada de un nuevo actor político. En CORREA ASTE, N. y MENDIZÁBAL, E. (eds) *Vínculos entre conocimiento y política: El rol de la investigación en el debate público en América Latina*. Lima: CIES y Universidad del Pacífico, pp. 83-112.
- DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, Andrés (2002). *Democracia pactada: El Frente Nacional y el proceso constituyente de 1991 en Colombia* [en línea]. Lima: Institut français d'études andines. Recuperado el 20 septiembre de 2017, de <http://books.openedition.org/ifea/3964>
- FISCHER, Karin, y PLEHWE, Dieter (2013). Redes de think tanks e intelectuales de derecha en América Latina. En *Nueva Sociedad*, 245, mayo-junio, pp. 71-86.
- GARCÉ, Adolfo (2009). Estudio Marco. En MENDIZÁBAL, E. y SAMPLE, K. (eds.). *Dime a quién escuchas... Think Tanks y partidos políticos en América Latina*. Lima: IDEA Internacional – ODI, pp. 23-58.
- GIBBONS, Michael; LIMOGES, Camille; NOWOTNY, Helga; SCHWARTZMAN, Simon; SCOTT, Peter, y TROW, Martin (1997). *La nueva producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas*. Barcelona: Ediciones Pomares.



- GIORDANO, Verónica (2012). *Ciudadanas incapaces: la construcción de los derechos civiles de las mujeres en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en el siglo XX*. Buenos Aires: Teseo.
- LARDONE, Martín, y ROGGERO, Marcos (2011). El rol del Estado en el financiamiento de la investigación sobre políticas públicas en América Latina. En CORREA ASTE, N. y MENDIZÁBAL, E. (eds) *Vínculos entre conocimiento y política: El rol de la investigación en el debate público en América Latina*. Lima: CIES y Universidad del Pacífico. pp. 113-166.
- LEAL, Diego, y ROLL, David (2013). Tanques de pensamiento y partidos políticos en Colombia. El caso de las reformas políticas de 2003 y 2009. En *Ciencia Política*, 16, julio-diciembre.
- LONDOÑO, Juan Fernando (2009). Partidos políticos y *think tanks* en Colombia. En MENDIZÁBAL, Enrique, y SAMPLE, Kristen. *Dime a quién escuchas... Think Tanks y partidos políticos en América Latina*, Lima: IDEA Internacional- ODI, pp. 127-156.
- PORTELLI, Hugues (2011). *Gramsci y el bloque histórico*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- ROVIRA KALTWASSER, Cristóbal (2014). *La derecha en América Latina y su lucha contra la adversidad*. Nueva Sociedad 254, (noviembre-diciembre).

Documentos relevados

- CALDAS, Tito Livio (1992). ¿Concepción antiliberal? La democracia participativa. En *Revista Ciencia Política*, N°26, I trimestre.
- GHERSI, Enrique (1990). El sueño latinoamericano. En *Revista Ciencia Política*, N° 20, III trimestre.
- INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA. Estatutos. En <http://www.icpcolombia.org/dev/wp-content/uploads/2015/12/Estatutos-Actuales-ICP-2015.pdf> (consultado el 21 de mayo de 2017).
- INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA. Quiénes somos. En <http://www.icpcolombia.org/que-es-icp/quienes-somos/> (consultado el 21 de mayo de 2017).
- INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA (1990). Acuerdo político sobre la Asamblea Constitucional, *Revista Ciencia Política* 20, III trimestre.
- INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA (1990). Declaración del Instituto de Ciencia Política ante la reforma constitucional. En

Revista Ciencia Política, N° 19, II trimestre.

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA (1990). Mensaje a los colombianos sobre la Asamblea Constituyente. En *Revista Ciencia Política*, N°21, IV trimestre.

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA (1991). Comunicación del Instituto de Ciencia Política a los miembros de la Asamblea Constituyente. En *Revista Ciencia Política*, N°23, II trimestre.

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA (1991). La revolución pacífica en Colombia. Discurso del Presidente de la República en ocasión del IV aniversario del Instituto de Ciencia Política. En *Revista Ciencia Política*, N°24, III trimestre.

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA (1991). Modernidad y democracia en Colombia. Documento elaborado por el ICP con motivo de la celebración de sus cuatro años de actividades. En *Revista Ciencia Política*, N°24, III trimestre.

Fecha de recepción: 1 de junio de 2017

Fecha de aceptación: 4 de septiembre de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



Juan Jesús Morales Martín

jmoralesma@ucsh.cl

Universidad Católica Silva Henríquez. Chile

Camilo Garber Fuentes

camilo.garber@mail.udp.cl

Universidad Diego Portales. Chile

**EL CONSENSO ECONÓMICO-SOCIAL
DEMOCRÁTICO FUE POSIBLE.
EL PAPEL DE LOS ECONOMISTAS DE CIEPLAN EN
EL CHILE DE LA TRANSICIÓN (1988-1991)**

Resumen: *Este trabajo investiga el cambio intelectual en el grupo de “tecnopolíticos” que diseñó y ejecutó el programa económico del gobierno de Patricio Aylwin. En concreto, se examinará el papel que jugaron los expertos de CIEPLAN en el Chile de la transición (1988-1991). Ellos, a la postre, sentaron las bases para mantener en democracia el modelo económico neoliberal impuesto en el autoritarismo precedente. Su estrategia intelectual y política consistió en generar consensos económicos, en favor de la gobernabilidad política. El actual malestar social chileno con la “política de los consensos” y sus corolarios históricos, hace necesario repensar este proceso histórico.*

Palabras clave: *transición chilena, consenso político, neoliberalismo, tecnopolíticos, CIEPLAN*

The democratic socio-economic consensus was possible. The role of CIEPLAN economists in the Chilean transition (1988-1991)

Abstract: *This work investigates the intellectual change in the group of “techno-politicians” that designed and executed the economic program of the government of Patricio Aylwin. The role played by CIEPLAN experts in the Chilean transition (1988-1991) will be examined specifically. They, in the end, established the bases for maintaining in democracy the neoliberal economic model imposed in the previous authoritarianism. Their intellectual and political strategy consisted of generating economic consensus, in favour of political governance. The current Chilean social malaise with the “policy of consensus” and its historical corollaries makes it necessary to rethink this historical process.*

Keywords: *chilean transition, political consensus, neoliberalism, technopols, CIEPLAN*



Introducción¹

Hasta la fecha, y poco a poco, va aumentando la bibliografía especializada sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas de la transición chilena a la democracia. De hecho, hoy se cuestionan y discuten vivamente los *logros* y los *éxitos* que ha tenido ese proceso en la vida social de Chile. También empieza a examinarse, desde distintas disciplinas y miradas, el papel de los académicos, intelectuales y expertos como actores clave que dirigieron ese proceso y sentaron la base del Chile actual. Podemos decir, en apretada síntesis, que han existido diversas aproximaciones a ese período histórico y a la ponderación en él de la participación de estos profesionales del saber especializado. Desde una perspectiva muy crítica, Carlos Ruiz (2015:16-17) señala que el período “sembró las condiciones para un nuevo autoritarismo, ahora inspirado en la verdad indiscutible del saber tecnocrático”. Por su parte, trabajos como los de Patricio Silva (2010) señalan la aportación decisiva de los saberes técnicos y tecnocráticos durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), instaurando una forma de hacer política que ha sido continuada por los posteriores gobiernos democráticos. Y esta forma de neutralización tecnocrática de la política ha hecho crisis en la actualidad, en tanto corresponde, según palabras de Daniel Mansuy (2016:19), “a una transición que no supo consolidarse políticamente”. Mientras que autores como Gonzalo Delamaza (2016) distinguen esas prácticas ya institucionalizadas como “tecnocratización de la democracia”. Otra voz tan autorizada como la de Carlos Huneeus apunta a que ese primer gobierno democrático instaló, realmente, una “hechura” o hacer fundamental de la política chilena: el crecimiento y desempeño económico por encima de los alcances y resultados políticos. Este autor, de hecho, apunta a que el Ministerio de Hacienda de entonces, encabezado por Alejandro Foxley, siguió políticas económicas no muy diferentes a las implementadas por los *Chicago boys* durante la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet². Precisamente, y siguiendo este punto de vista, el objetivo principal de este trabajo es examinar el cambio de ideas en el grupo de economistas que diseñó el programa económico de la Concertación de Partidos por la Democracia para así, dentro de lo posible, encontrar algunas razones explicativas que llevaron a mantener en democracia el modelo económico neoliberal impuesto en el anterior período autoritario.

¹ Este texto se enmarca en el proyecto FONDECYT de Iniciación a la Investigación 2015 N°11150026: “Una alianza para la democracia: la Fundación Ford y el circuito latinoamericano de centros académicos independientes en tiempos de autoritarismo (1969-1990). Un análisis de los casos de CEDES, CEBRAP y CIEPLAN”. Además, para esta investigación Juan Jesús Morales Martín fue galardonado con una beca del Archivo de la Fundación Rockefeller (RAC Grants Awards 2015) para realizar una estancia en Nueva York y consultar así archivos, documentos y fondos de la Fundación Ford.

² Entrevista de los autores con Carlos Huneeus. 13 de mayo de 2016, Santiago de Chile.



De forma específica, nos referimos como razones explicativas a aquellas relacionadas con las siguientes hipótesis o supuestos de investigación: el grupo de economistas del Ministerio de Hacienda del gobierno de Patricio Aylwin, encabezado por Alejandro Foxley, provenía, principalmente, del centro académico independiente CIEPLAN, ayudado en su creación y en su subsistencia durante los años de la dictadura por la Fundación Ford; este centro de estudios y la institución filantrópica estadounidense forjaron una alianza académica, pero también política que permitió, con la recuperación democrática, la inserción plena y legítima de Chile en el sistema económico mundial y en sus redes internacionales (FMI, BM, BID); la confianza hacia estos economistas y expertos, forjada durante los años de oposición democrática al régimen de Pinochet, significó preparar el terreno hacia las posteriores reformas estructurales de los años 90, que, en América Latina en general y en Chile en particular, significaron asumir sin crítica ni resistencia por parte de la dirigencia política los fundamentos y las recomendaciones del llamado Consenso de Washington; y, por último, la recobrada legitimidad internacional de Chile, en un contexto histórico en el que acababa de caer el Muro de Berlín y con ello el sueño de los socialismos reales, repercutió en dotar a la democracia de estabilidad por vía del crecimiento económico y de las políticas de desarrollo.

Estas razones explicativas nos ayudan, por supuesto, a situar nuestro objeto de estudio en relación con el objetivo principal de comprender la evolución del pensamiento del grupo de economistas de CIEPLAN en el Chile de la transición (1988-1991). Para conseguir tal objetivo nos basaremos en una perspectiva que combina la historia intelectual, la sociología política y la sociología de las élites. Algunas de nuestras referencias teóricas ya han sido señaladas anteriormente. Otras, como los trabajos de Pedro Güell y Alfredo Joignant (2011) nos sirven para discutir críticamente el papel de los llamados *tecnopolíticos*, mientras que el libro de Manuel Gárate (2012a) nos facilita la comprensión del modelo neoliberal chileno como un proceso de largo aliento histórico. El catálogo de referencias podría ser más extenso, pero consideramos que la singularidad de nuestro trabajo se basa en analizar documentos y trabajos de esa época para así dotar de argumentos y contenido a la reconversión ideológica de este grupo de economistas.

Mientras que el recorte analítico y temporal se justifica en que en esos años, como cambio de un régimen político a otro, se definieron las estructuras políticas actuales y, sobre todo, el modelo de desarrollo imperante en este país. Además, la selección de ese grupo de intelectuales y expertos se debe, como ya anunciábamos, a que cruzaron el puente de la academia hacia la política, valiéndose, entre otras variables, de sus credenciales académicas, sus saberes especializados y de sus redes internacionales³. De hecho, la selección de este grupo no es azarosa, pues desde que en 1990 se recobra la democracia en Chile, cinco ministros de Hacienda y varios presidentes del Banco Central han formado parte de CIEPLAN. Pensemos incluso que Rodrigo Valdés, actual ministro de Hacienda, y Mario Marcel, actual presidente del Banco Central, fueron investigadores y miembros de este centro de estudios. El tema planteado –la relación entre saber y política– puede ser muy viejo, como los más de cuarenta años que lleva de vida este centro académico independiente pensando y dibujando la realidad social y política chilena, pero la relevancia precisamente está en ofrecer nuevas miradas e interpretaciones al debate actual que se da en Chile alrededor de la construcción histórica y política del país durante los años de la transición y la determinación economicista resultante de ese proceso.

Historia de CIEPLAN

Antes de entrar a fondo con el objeto de nuestra investigación es necesario repasar brevemente en este apartado la historia y el significado que ha tenido CIEPLAN en Chile a la hora de combinar la reflexión académica sobre el desarrollo económico y social con la función de generar opinión política, ofrecer cuadros dirigentes e influir en el diseño y la puesta en práctica de políticas públicas⁴. Su gran característica, sin duda, ha sido la capacidad de adaptación a los contextos históricos y a los laboratorios sociopolíticos que ha vivido la sociedad chilena en los últimos 40 años. Este centro académico independiente nació en 1976 como Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN). Sin embargo, su antecesor surgió en 1969 cuando Alejandro Foxley y un grupo de jóvenes economistas organizaron un taller sobre planificación económica en la Universidad Católica, del cual nació la inspiración de crear al año siguiente el Centro de

³ Debemos señalar aquí que en este trabajo no nos detendremos en la militancia política ni en la socialización universitaria de esta élite intelectual, pues nos conduciría a encarar el problema planteado del cambio de ideas de este grupo desde una perspectiva sociológica más centrada en los asuntos de política local y nacional. Eso no quita, sin duda, que seamos conscientes de la importancia que tuvo para este grupo intelectual su filiación a la Democracia Cristiana o la formación de varios de ellos en la Universidad Católica, como también provenir de clases sociales de estrato medio y alto. Nuestro interés, sin embargo, está puesto en dar más peso a los factores inter y transnacionales que, obviamente, luego tienen repercusión nacional que a su vez generan una dependencia asociada a los centros y a sus instituciones, organismos e intereses. De ahí, como decíamos, la importancia que concedemos a la relación entre CIEPLAN y la Fundación Ford.

⁴ Un reciente trabajo de Maillet, Toro, Olivares y Rodríguez (2016: 198-199) define precisamente cuatro períodos de la trayectoria académica y política de CIEPLAN: en una primera etapa (1976-1981), funciona como un “monasterio”; en una segunda (1983-1989) se convierte en una alternativa política a la dictadura (1983-1989); luego una tercera etapa (1990-2010) marcada por el acceso de varios de sus miembros a cargos de gobierno, pasando el centro de estudio a un segundo plano, y una cuarta y última etapa (2011-actualidad), en la que CIEPLAN oscila entre ser un espacio de reflexión y una plataforma de “operación para sus miembros históricos”. La metáfora de los miembros de CIEPLAN como “monjes



en un monasterio” nace de Fernando H. Cardoso (1990:4), probablemente por la afiliación de este grupo intelectual a la Universidad Católica, su cercanía a la Democracia Cristiana y su estilo austero.

⁵ Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 71-369. Grantee name “Corporation for Latin American Economic Research”. “Informe a la Fundación Ford de las actividades desarrolladas por CEPLAN en el período 1971-1973”, p. 23.

⁶ Ford Foundation, 1971 Annual Report, Nueva York, Ford Foundation, 1971, p. 75.

⁷ Pensemos, por ejemplo, en el libro de CEPLAN *Chile: búsqueda de un nuevo socialismo*, de 1971, fruto de un seminario en la Universidad Católica en diciembre del año anterior, y que sintetizó las preocupaciones de esa época.

⁸ Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 71-369. Grantee name “Corporation

Estudios de Planificación Nacional (CEPLAN) como “un centro interdisciplinario de investigación del Área de Ciencias Sociales”⁵. En ese momento, estos jóvenes intelectuales se aprovecharon del proceso de reforma universitaria que vivía esa casa de estudios bajo el rectorado de Fernando Castillo Velasco, quien apoyó la creación de centros de investigación (Brunner y Flisfisch, 2014). Con la creación de CEPLAN al alero de la Universidad Católica se pretendió, principalmente, discutir, monitorear y supervisar la “transición pacífica al socialismo” propuesta por el gobierno de Salvador Allende. De hecho, la planificación para el desarrollo económico y social era una idea económica dominante, siendo visto el Estado entonces como el principal actor y promotor del tan deseado crecimiento económico y la integración de las mayorías.

Téngase en cuenta también que la experiencia chilena había despertado un inaudito interés en los ámbitos latinoamericano y mundial en cuanto a la alternativa de organizar un sistema socialista nuevo, posible en democracia. De hecho, la Fundación Ford, como un actor transnacional y como un importante representante diplomático de la política cultural de Estados Unidos en América Latina durante los años de la Guerra Fría, compartió esa especial atención y decidió consolidar a CEPLAN con becas y donaciones desde 1971. Para esta institución filantrópica estadounidense el objetivo de apoyar a este centro de estudios pasaba por “aumentar el diálogo profesional con el nuevo gobierno socialista de Chile a través de talleres y estudios de la estructura de planificación y toma de decisiones bajo gobiernos socialistas”⁶. Por supuesto, a la Fundación Ford le resultaba muy útil tener conocimiento, información e insumos empíricos sobre aquel experimento económico, social y político.

La labor de CEPLAN durante los años del gobierno de la Unidad Popular se centró en estudiar, principalmente, el modelo de desarrollo socialista, la función que le cabía a la planificación y a la organización de la acción estatal, y a comprender la relación entre socialismo y democracia y sus repercusiones en la eficiencia del sistema económico⁷. Aunque no llegó a ofrecer un modelo de desarrollo económico alternativo, este grupo de investigadores y su presidente Foxely sí que dejó, en varias investigaciones, publicaciones y documentos, una idea general de la estrategia que debía seguir Chile con “esfuerzos conducentes hacia una sociedad de mayor igualdad y desarrollo”. Objetivos que “no se



pueden alcanzar sin un máximo de eficiencia y crecimiento económico”⁸. Son ideas-fuerza de una élite que estaba expectante por tener una oportunidad de acceder a cargos del poder político y “asumir las labores más altas en la gestión del Estado, especialmente en el campo económico y de las políticas sociales” (Gárate, 2012b: 117). Sin embargo, el golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973 trastocó estos planes. Al poco tiempo otro equipo de expertos de la Universidad Católica, los *Chicago boys*, encabezaría la revolución macroeconómica de la dictadura civil-militar⁹.

Aunque el contexto de producción de investigación y conocimiento de las ciencias económicas y sociales había cambiado drásticamente, la Fundación Ford decidió seguir apoyando institucional y financieramente a CEPLAN. Se trató de una medida destinada a mantener unido a aquel equipo de trabajo ante las asfixias y los apretones económicos de una Universidad Católica menos abierta y pluralista¹⁰. De hecho, la posición dominante que iban adquiriendo los *Chicago boys* en el gobierno militar y la lenta expansión del movimiento gremialista en los niveles administrativos superiores de esa universidad, hicieron que al final estos economistas e intelectuales creasen CIEPLAN en noviembre de 1976 como “una institución privada sin fines de lucro” (Lladser, 1986: 31)¹¹. Las donaciones y el sostén económico ofrecido por la Fundación Ford permitió que Foxley y sus colegas continuasen con su programa de investigación sobre Chile, aunque, por supuesto, ello también significó una redefinición de sus temas y prioridades: ahora se trataba de analizar, estudiar y monitorear el *laboratorio* neoliberal chileno. Efectivamente, la “revolución capitalista” chilena inauguró en América Latina un *nuevo* modelo de desarrollo: el capitalismo y su racionalidad tecnocrática y neoliberal se instalaron en la región a partir de la violencia y opresión (Urquidí, 2005). De hecho, la experiencia chilena representó la aplicación más extrema de la ortodoxia monetarista y librecambista de la Escuela de Chicago y de las ideas de Milton Friedman.

CIEPLAN se concentró, en consecuencia, en analizar y estudiar la implementación de aquellas ideas y del llamado “modelo económico neoliberal”. Un modelo distinguido, en apretada síntesis, por las siguientes características: apertura al comercio exterior, debilitamiento y privatización del Estado y de las empresas públicas e instauración de medidas de austeridad en lo que se refiere a los gastos

for Latin American Economic Research”. “Informe a la Fundación Ford de las actividades desarrolladas por CEPLAN en el período 1971-1973”, p. 23.

⁹ Los *Chicago boys* hicieron toda la revolución macroeconómica de la dictadura militar chilena. Algunos nombres de esos economistas formados en la Universidad de Chicago y que con posterioridad al golpe participaron en el equipo económico del régimen, ocupando diversos puestos en los ministerios de Economía, Trabajo y en el de Hacienda, son Pablo Baraona, Álvaro Bardón, Jorge Cauas, Sergio de Castro, Fernando Lens, Sergio Undurraga, Juan Villarzá o José Luis Zavala. Posteriormente colaboraron Julio Dittborn, Joaquín Lavín o José Piñera, encargado de la reforma completa de los planes de jubilación y del sistema de pensiones (Vergara, 1985; Gárate, 2012b).

¹⁰ Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 71-369. Grantee name “Corporation for Latin American Economic Research”. “Final evaluation of CEPLAN”. Carta de Peter D. Bell, a William D. Carmichael (Jefe del Programa de América Latina), 29 de mayo de 1974, Santiago de Chile.

¹¹ El grupo original estuvo compuesto por José Pablo Arellano, René Cortázar Sanz, Ricardo Ffrench Davis, Patricio Meller y Alejandro Foxley fungiendo como su presidente.



¹² Consideremos el importante texto escrito por Alejandro Foxley en 1982 *Experimentos neoliberales en América Latina*. Entre otros documentos de trabajo y textos preparados por CIEPLAN con relación al laboratorio neoliberal chileno destacan: *Políticas de estabilización y comportamientos sociales. La experiencia chilena 1973-1978*, elaborado por Tomás Moulian y Pilar Vergara, agosto de 1979; *Las transformaciones del Estado chileno bajo el régimen militar*, de Pilar Vergara, marzo de 1980; *Inflación con recesión. Las experiencias de Brasil y Chile y Políticas de estabilización y sus efectos sobre el empleo y la distribución del ingreso. Una perspectiva latinoamericana*, ambos de Alejandro Foxley y de 1979.

¹³ Ford Foundation, 1981 Annual Report, Nueva York, Ford Foundation, 1981, p. 34.

¹⁴ Por ejemplo, en 1975 Alejandro Foxley fue invitado por el Banco Mundial a una reunión de estudio sobre las líneas futuras de investigación a realizar por el banco en asuntos de desarrollo. Asistieron a la reunión, en Washington, expertos del International Development Research Center (IDRC), la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller. En esa oportunidad Foxley estuvo a cargo del tema “Políticas de empleo en América Latina”. También en ese año, José Pablo Arellano presentó un trabajo sobre “Los gastos sociales como instrumento redistributivo en Chile”, en el seminario sobre Distribución del Ingreso realizado en Bogotá por el Banco Mundial, el Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Los Andes (CEDE) y el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford

públicos y sociales en áreas como la salud, las pensiones laborales o la educación¹². Podemos decir, sin equivocarnos, que la función de este centro académico estuvo dominada entre finales de los 70 y principios de los 80 por rastrear las claves, lineamientos y repercusiones sociales de la política económica de la dictadura civil-militar, asumiendo incluso una postura crítica. De hecho, CIEPLAN representó la primera oposición tolerada al régimen militar y a la tecnocracia neoliberal. Dentro de las limitaciones propias de un contexto autoritario, estos economistas desarrollaron investigaciones económicas y sociales críticas a las políticas de desarrollo que se experimentaban en el país, pudiendo difundirlas en el medio nacional e internacional gracias a sus propias publicaciones, como *Colección de Estudios CIEPLAN*, iniciada en 1979, las *Series Notas Técnicas* y los *Apuntes CIEPLAN*. Pero además muchos de los resultados de sus estudios, principalmente estudios macroeconómicos, serían publicados en la prensa escrita chilena en revistas como *Análisis*, *Hoy*, *Mensaje* o *Qué Pasa*.

Sin embargo, la reflexión académica e intelectual de CIEPLAN fue acompañada también de praxis política a partir, fundamentalmente, de comienzos de los años 80, momento en el que el giro político de este centro es evidente. Es pertinente llamar la atención aquí, sin duda, del papel tutorial de la Fundación Ford sobre este cambio. Para empezar, debemos contextualizar que parte de las actividades de CEPLAN primero y de CIEPLAN después estuvieron insertas en un programa de Investigación Económica Internacional que inauguró la Fundación Ford en 1974 para comprender “la naturaleza cambiante de la economía mundial”, apoyando el “trabajo de economistas y otros académicos en el mundo desarrollado y en desarrollo. Su investigación se ha ocupado de la inflación mundial, las cuestiones financieras y monetarias internacionales, la creciente mal distribución de la riqueza y los recursos entre las naciones y el aumento de la competencia en el comercio internacional”¹³. Este programa se prolongaría hasta bien entrada la década del 80.

Además, gracias a las redes profesionales de la Fundación Ford, los miembros de CIEPLAN pudieron insertarse en otras redes económicas internacionales que repercutirían, sin duda, en sus trayectorias profesionales e intelectuales y, por supuesto, en la posterior inserción del Chile democrático en el sistema económico y financiero mundial¹⁴. Por supuesto,

estimamos que esta variable internacional a partir de la “dominación filantrópica”, junto con el contexto político nacional que veremos a continuación, es clave para explicar la construcción de puentes de comunicación y diálogo entre los economistas de CIEPLAN y la sociedad civil a la hora de difundir y promover el trabajo programático para el consenso democrático como, por decirlo de manera llana y simple, las bondades de la apertura económica exterior. Nuestra hipótesis es que la Fundación Ford entendió que con ese centro podía contar con un grupo académico de investigación que, con el tiempo y el retorno de la democracia, sería competente a la hora de influir en las tomas de decisión y encabezar el diseño de las políticas económicas y públicas en Chile. También, por supuesto, fortaleciendo el proyecto político de CIEPLAN allanaba el terreno para recuperar la credibilidad internacional de Chile ante el nuevo sistema económico mundial.

Foundation records. Grant number 71-369. Grantee name “Corporation for Latin American Economic Research”. “Informe de actividades 1975-1976”, pp. 17 y 18.

El giro político: el programa Diálogos ciudadanos

La labor académica e intelectual de CIEPLAN, a pesar de gozar de cierta libertad por parte de la dictadura civil-militar, siempre se realizó en un clima de temor y autocensura. Como consecuencia de esto, pensar en horizontes temporales amplios y cambios sociopolíticos drásticos era extremadamente difícil. Este ambiente hostil hacia el ejercicio académico, junto con la inestabilidad y excesiva dependencia de las donaciones económicas extranjeras, sobre todo las provenientes de la Fundación Ford, llevaron a CIEPLAN a conformar una serie de ideas muy generales respecto del futuro panorama democrático (Huneus, Cuevas, Hernández, 2014:10). Si bien ellas funcionarían como directrices, no conformaban por sí solas un programa económico capaz de reemplazar al neoliberalismo avanzado impuesto por el autoritarismo. Esta carestía programática es importante entenderla como un factor coadyuvante en la generación de consensos amplios entre el equipo económico de la Concertación y los postulados rectores definidos, implementados y defendidos por su paralelo autoritario, los *Chicago boys*.

A pesar de las restricciones señaladas, la oposición democrática chilena siempre estuvo alerta respecto de los posibles intersticios coyunturales que pudieran presentarse. De esta forma, las grandes dificultades que enfrentó el régimen



autoritario en la conducción del país a partir de la fuerte crisis económica de 1982 pusieron alerta sobre eventuales moderaciones en el gobierno. Así, la primera protesta masiva del 11 de mayo de 1983, organizada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, junto a la simbólica concentración de masas en el Parque O'Higgins de Santiago el 18 de noviembre, en la cual participaron más de 300.000 personas, comenzaron a abrir la senda en cuyo final se vislumbraba la democracia. Se trataba del esperado despertar social frente al autoritarismo. Atentos a estos acontecimientos, los políticos se reúnen en el célebre Seminario del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, donde Patricio Aylwin opta por prescindir de tratar el tema de la legitimidad de la Constitución autoritaria de 1980 (Huneus, 2016: 40). Además, desde 1983 hasta 1986 se produce en el campo intelectual de la oposición moderada una larga actividad de discusión y diálogo que articulará la Alianza Democrática. Habrá una tendencia hacia la convergencia, el encuentro entre partidos, el gradualismo y la moderación, inexorable hasta la creación de la Concertación de Partidos por la Democracia en 1990 (Mella, 2008).

Justamente Foxley y CIEPLAN participarán de todo ese proceso. Precisamente la puerta a discutir y reflexionar la dimensión política del modelo neoliberal la abrió el libro colectivo *Reconstrucción económica para la democracia*, de 1984¹⁵. Esa obra significó una clara evolución de las ideas de ese grupo, poniendo en tela de juicio la legitimidad de la dictadura al vincularla con los exiguos resultados económicos conseguidos y apuntando, en consecuencia, a la necesidad de “una nueva forma de pensar la política económica, en la que la reconstrucción de un consenso democrático no es un objetivo ajeno a la política económica escogida” (Foxley, 1984: 76). La idea fundamental que subyace en ese trabajo, como vemos, es la valoración de la concertación social y económica amplia en aras de la estabilidad democrática. Además, a Foxley le va a interesar, en concreto, la recuperación de la ciudadanía durante ese proceso de construcción de la democracia, dada la despolitización del individuo y la importancia concedida al crecimiento económico por parte de la dictadura civil-militar como mecanismo de legitimación social. Este escenario político, establecido formalmente con la Constitución de 1980, representó, a ojos de este autor, la confirmación hegemónica del mercado sobre la vida social (Foxley, 1986). Es clara, a partir de esta constatación, la evolución de Foxley desde académico

¹⁵ Los autores de ese trabajo, además de Foxley, fueron José Pablo Arellano, René Cortázar, Ricardo French-Davis, Patricio Meller, Óscar Muñoz y Andrés Solimano.

a *technopol*¹⁶: es decir, su conversión de economista recluido en un centro de estudio y el tránsito a ser un estratega político de peso en la oposición, capaz de encargarse de incluir en el programa de la futura Concertación alguna de sus ideas-fuerza como “democratización estable” o “modelo de desarrollo concertado”. Pues, efectivamente, fueron lecturas fundamentadas en el pasado y la experiencia histórica chilena, caracterizada por la polarización e inestabilidad social frente a los últimos proyectos políticos. Así decía este autor:

En el breve interludio de este cuarto de siglo el país ha vivido las experiencias contrapuestas de la “revolución en libertad”, “la vía chilena al socialismo” y la “revolución neoliberal”. Esta especie de tironeo del sistema social en una u otra dirección terminó generando, a fin de cuentas, una enorme inseguridad. En la historia de los últimos 25 años la inseguridad ha llegado a ser un elemento fundamental, subyacente al funcionamiento global de la economía y de la política chilenas (Foxley, 1989: 175).

Junto a esa lectura crítica del pasado, también se unía, claro está, una toma de conciencia frente a los riesgos de enfrentarse abiertamente a la derecha política y económica chilena. Adicionalmente, las experiencias acumuladas en el exilio europeo respecto de las democracias regidas por el modelo de consenso y el derrumbe de los socialismos reales, llevaron a las principales figuras políticas de oposición a desconfiar de los cambios fundacionales y a confiar excesivamente en sus habilidades de negociación. (Garretón 2012: 11). En todo caso, lo importante es señalar el salto que Foxley y su equipo de CIEPLAN dieron desde el escenario académico a la arena política. Según avanzaban los acontecimientos históricos y políticos, creció el interés de este grupo en descender su conocimiento experto a la *calle* y, por tanto, comprender, examinar y dar forma *in situ* a ese proceso de reconstrucción democrática.

Para esas tareas de vincular la reflexión académica con la política, los miembros de CIEPLAN contaron, una vez más, con el apoyo y la financiación de la Fundación Ford. De esta forma, varios diplomáticos académicos de esta institución filantrópica estadounidense esbozaron en 1984 una especie de programa de extensión para CIEPLAN titulado Economistas y actores sociales¹⁷. Este programa fue diseñado para poner en contacto directo a los investigadores de este centro académico con la realidad económica nacional; para ganar notoriedad

¹⁶ Para una revisión de este concepto, véase Jorge I. Domínguez, *Technopols*. (Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1997) y Alfredo Joignant y Pedro Güell (editores), *Notables, tecnócratas y mandarines*, (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2011).

¹⁷ Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 850-04188. Grantee name “Corporation for Latin American Economic Research”. Inter-Office Memorandum de William Carmichael a Jeffrey M. Puryear, 25 de octubre de 1984, Nueva York.



social y establecer relaciones y confianza de cara al futuro; y, por último, con el objetivo de dar a conocer su trabajo y allanar a los actores sociales a la acogida de las principales ideas políticas y económicas preparadas para cuando esta minoría selecta encabezara el gobierno democrático. Por supuesto, para la Fundación Ford era muy importante aprovechar la oportunidad de acompañar y seguir de cerca el proyecto que iba a llevar a cabo CIEPLAN de intervenir sociológicamente y trabajar desde dentro de la sociedad civil. Esa tarea le iba a permitir a esta institución filantrópica estadounidense contar con conocimiento e información de cómo se iba procesar la transición chilena, además de examinar el rol en ella de estos expertos elegidos para encabezarla. Finalmente, apoyó estas acciones con una serie de donaciones aprobadas sucesivamente en 1985, 1987, 1989 y 1991¹⁸. Estas subvenciones se enmarcaron dentro de los programas de Gobierno y Políticas Públicas y Asuntos Internacionales de la Fundación Ford. Más específicamente se describieron como “apoyo para la investigación y superación en asuntos de economía internacional de la economía política chilena” y “apoyo para la investigación, formación y diálogos públicos sobre economía internacional y asuntos de política económica chilena”¹⁹.

¹⁸ Las donaciones de la Fundación Ford para este programa de Diálogos con la comunidad supusieron un aporte total de 1.442.000 dólares: 342.000 en 1985, 400.000 en 1987, 250.000 en 1989, y 450.000 en 1991. Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 850-04188. Grantee name “Corporation for Latin American Economic Research”. Diversos documentos consultados.

¹⁹ Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 850-04188. Grantee name “Corporation for Latin American Economic Research”.

Precisamente estos datos nos ayudan a responder algunas hipótesis planteadas en este trabajo: el gran apoyo financiero que brindó esa institución filantrópica estadounidense, junto a las constantes gestiones y retroalimentaciones intelectuales que recibió CIEPLAN, le permitieron a este centro académico encabezar, en primera instancia, la red de defensa frente al autoritarismo, para luego evolucionar e influir en la política y en la conducción económica de la transición a la democracia. Este paso desde la intelectualidad hacia la acción política fue posible en atención a la anuencia autoritaria respecto de la crítica especializada. Al respecto, la tesis sobre la poliarquía de Dahl (2001) se confirma, toda vez que resultaba más costoso clausurar todo espacio de disidencia que permitirle, aunque sea de forma restringida y sujeta al control gubernamental. Pues, sin embargo, y a pesar del contexto autoritario, CIEPLAN pudo acometer esa movilidad académica hacia el espacio político a partir del programa Diálogos ciudadanos, como así finalmente se llamó ese programa de extensión y de diálogo social. El proceso y trabajo de participación se organizó a partir de conferencias, charlas y reuniones mantenidas por esta élite representante de la oposición democrática con líderes

empresariales y sindicales, profesionales y funcionarios municipales, estudiantes y profesores universitarios a lo largo de todo el territorio chileno.

El desarrollo del programa Diálogos ciudadanos contempló tres etapas. La primera, entre 1985 y 1987, se centró en levantar un diagnóstico que diera cuenta de los drásticos cambios socioeconómicos acaecidos en Chile. “Su objetivo era enfocar la labor de CIEPLAN a partir de la realidad concreta del país; se trataba, en definitiva, de conocer a fondo el ‘país real’²⁰. Bien vale recordar nuevamente la fuerte crisis económica de 1982, la cual marcó el giro pragmático en la dirección económica de la dictadura civil-militar y que más tarde definiría el cariz del neoliberalismo avanzado. La segunda fase, comprendida entre 1987 y 1989, tuvo un sesgo propositivo y contenía, a su vez, las ideas matrices del modelo. Durante esta etapa los miembros de CIEPLAN hicieron un llamado a reflexionar como sociedad con el objeto de generar un proceso democrático y generar de forma colaborativa una “reconstrucción económica del país”²¹. La tercera etapa fue atravesada por la democratización. Es así como entre 1989 y 1991, el programa incrementó su matiz político y programático, buscando la consolidación de la democracia en un esquema de desarrollo concertado:

En esta tercera fase, el objetivo es contribuir, en forma acumulativa y a partir de la experiencia anterior, al éxito del proceso de transición, con miras, principalmente, a la consolidación democrática. Se trata, decíamos en el proyecto correspondiente de avanzar hacia una “democracia estable”, en un esquema de “desarrollo concertado”, contribuyendo a crear las condiciones de gobernabilidad que nos acerquen a dicho objetivo.

Se observa, por tanto, el aura de la gobernabilidad, la cual desde ya se erigía como la principal preocupación de la avanzada política de la Concertación. Por supuesto, aquí fue muy importante, como ya vimos, el aprendizaje del pasado político contemporáneo de Chile como una cuidadosa lectura de las experiencias de otras transiciones en América Latina, sobre todo en lo referente a la estabilidad económica. El temor estaba en caer en la tentación populista y ceder “ante las demandas populares de mayor gasto público y grandes aumentos salariales” (Foxley, 2016: 10). En ese contexto, y según nuestro punto de vista, esta práctica de los Diálogos ciudadanos ayudó a configurar una particular relación entre

²⁰ Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 850-04188. Grantee name “Corporation for Latin American Economic Research”. “Programa de diálogos con la comunidad”, Documento de CIEPLAN, 1991, p. 1.

²¹ Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 850-04188. Grantee name “Corporation for Latin American Economic Research”. “Programa de diálogos con la comunidad”, Documento de CIEPLAN, 1991, p. 1.

²² Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 850-04188. Grantee name “Corporation for Latin American Economic Research”. Programa de diálogos con la comunidad, Documento de CIEPLAN, 1991, p. 1.



saberes y política, sobre todo, con relación a la hora de difundir y transferir a la sociedad chilena la necesidad de asumir como beneficiosa la apertura exterior y comercial del país al sistema económico mundial. Pues para los miembros de CIEPLAN esta actividad les permitió trabajar en la dimensión política de la transición, pero también en la económica, en la cual radicaba su conocimiento y principal potencial fundante.

Además, este programa permitió, insistimos, el descenso a la realidad social de esta élite intelectual para así generar una doble identificación, necesaria en las transiciones desde una dictadura civil-militar a una democracia, como es, por un lado, el conocimiento de las demandas sociales de la comunidad por parte de las futuras élites dirigentes y, por otro lado, la afinidad y confianza por parte de las bases sociales en sus próximos gobernantes. Gracias a esas prácticas de intervención como, por supuesto, a toda la maquinaria mediática –participación en programas televisivos y radiales, más prensa escrita y revistas– permitió que estos economistas de CIEPLAN fueran capaces de influir en la agenda pública del país a la hora de impulsar y preparar el terreno de las reformas estructurales de la década del 90, las cuales no hicieron otra cosa que corregir o profundizar el modelo neoliberal impuesto en la dictadura civil-militar (De Armas, 2000: 97). Sin embargo, más allá de evaluar ahora ese hecho consumado, es pertinente examinar a continuación las ideas que prepararon los economistas de CIEPLAN en el crepúsculo del régimen de Augusto Pinochet.

Economía política de la transición: el carácter del consenso

El triunfo logrado por el No en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 cambió la fisionomía política de Chile. La Concertación de Partidos por el No, sucesora de la Alianza Democrática y fundada en febrero de ese año, se sintió comprometida para garantizar la gobernabilidad democrática una vez que encabezarán el gobierno. El candidato natural era Patricio Aylwin, quien ya se imaginaba en el Ejecutivo. Era cosa de tiempo refrendar la victoria en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de diciembre de 1989. La dictadura civil-militar, en cambio, se apuraba en asegurar la continuidad de su proyecto más allá de su gobierno. Es bajo esta dinámica que el consenso comienza a expandirse, pues ya no solo abarca



a la Concertación, sino que asimismo tendió puentes hacia el oficialismo autoritario. Un importante documento escrito por CIEPLAN, “El consenso económico-social democrático es posible”²³, es publicado el 29 de noviembre de 1988 en el diario *El Mercurio*. Este texto, aparte de ser legitimado por el oficialismo, da cuenta exactamente de este proceso de acercamiento al destacar los rasgos *positivos* de la herencia autoritaria:

... durante el período autoritario se ha producido una importante modernización empresarial y productiva. Este proceso que recoge cambios tecnológicos a nivel mundial, y también la herencia del período anterior, se vio facilitado en Chile por la mayor integración internacional del país, el uso más amplio de mecanismos de mercado y el estímulo directo e indirecto del Estado a las actividades de exportación. En base a estos elementos se ha ido creando un clima favorable a la empresa privada que es necesario mantener. La modernización empresarial y productiva constituye un patrimonio que, junto al que se heredó de las décadas anteriores, abre buenas oportunidades para el país en el futuro (CIEPLAN, 1988: 3).

Efectivamente, esta mirada *positiva* respecto de la modernización y racionalización capitalista en Chile estaba muy relacionada con la recuperación económica de la dictadura civil-militar bajo la administración del Ministro de Hacienda, Hernán Büchi. Aquellos incipientes logros y resultados económicos generaron en la Concertación y en este grupo de CIEPLAN el no rechazar de pleno al modelo neoliberal. Además, y muy al contrario, se comenzó a ver con buenos ojos una estrategia de cambio político, aunque constreñido, y, sobre todo, caracterizado por el continuismo económico. Representaba también lo diferente y complejo que es el transitar desde la crítica a la acción y elaboración de un proyecto alternativo. En consecuencia, para Foxley y sus colegas de este centro académico la herencia de la dictadura tendría elementos, sobre todo económicos, que facilitarían la transición democrática:

... en estos años se ha reducido fuertemente la inflación, se ha eliminado, finalmente, el déficit fiscal y se han incrementado significativamente las exportaciones. Estos tres factores, de suyo positivos, le permitirían al gobierno democrático iniciar una nueva etapa sin los agudos desequilibrios macroeconómicos

²³ El documento fue firmado por Alejandro Foxley, Ricardo Ffrench-Davis, José Pablo Arellano, Patricio Arrau, René Cortázar, José de Gregorio, Mario Marcel, Manuel Marfán, Patricio Meller, Óscar Muñoz, Andrés Velasco y Joaquín Vial.



heredados por otros países que han transitado recientemente a la democracia (CIEPLAN, 1988: 4).

El corolario de ese análisis apuntaba a la necesidad de generar consensos amplios, no solo de cara a la superación del autoritarismo, sino que también, ya bajo el horizonte democrático, se requerían de estos acuerdos económicos y sociales para asumir con generosidad los avances y las contribuciones de los distintos actores sociales que habían construido y participado del modelo de desarrollo imperante en el país. En otras palabras, no podía iniciarse la nueva etapa democrática sin una voluntad de aprendizajes y lecciones respecto del pasado. No nos resistimos a incluir el siguiente testimonio de Foxley como evocación de ese diagnóstico:

Primero, Chile tiene que partir desde donde está: desde una economía abierta con un proceso de modernización interesante e importante, con un éxito significativo en el plano exportador, con un rol principal para el mercado como mecanismo asignador de los recursos, con un régimen que es básicamente de libertad de precios y con un sector privado que puede desarrollar su labor sin temor a expropiaciones o a medidas arbitrarias equivalentes a expropiaciones. Todos estos elementos son parte del consenso que permea prácticamente a todas las fuerzas de la concertación (Foxley, 1989: 178-179).

De esta forma, Foxley y quienes encabezaban el equipo económico una vez restaurada la democracia y ejercerían una fuerte influencia política en la naciente Concertación, hicieron una evaluación de la dictadura civil-militar nada ácida ni crítica respecto de los asuntos económicos, pero sí verdaderamente pragmática. Como insinuamos en estas líneas, adoptaron una opinión favorable al valorar parte de los fundamentos del modelo neoliberal, proponiéndose proyectarlos durante su gobierno. Podemos decir, incluso, que la idea misma de consenso es una suerte de compromiso intelectual y político a la hora de respetar los éxitos y logros de ese modelo. Por supuesto, esa idea de consenso encerró también una visión que privilegió la gobernabilidad por encima del juego democrático. Y la gobernabilidad, como sabemos, no siempre es democrática. Nuevamente aparecía una mirada redentora sobre el pasado y constructiva en cambio sobre el futuro:

La alternativa al régimen actual, lejos de ser el caos o la ingobernabilidad, consiste en una oportunidad

privilegiada para que el país recoja constructivamente y proyecte hacia adelante en una nueva síntesis, las valiosas lecciones y herencias que ha ido acumulando –a veces a un alto costo– por ya más de medio siglo. (CIEPLAN, 1988: 12).

Esa ponderación demuestra dos elementos claves: en primer término, la mutación intelectual e ideológica que estos intelectuales, economistas y dirigentes de la Concertación vivieron. Pues, en consecuencia, pasaron desde una fase de oposición crítica a la dictadura, durante la década de 1970 y 1980, hacia la adopción de una estrategia de continuismo en la esfera económica, de “cambio en continuidad” en palabras de Ricardo Ffrench-Davis (2003). En segundo término, la necesidad identificada de ampliar el consenso hacia la derecha económica, social y política, para que no se sintiera plenamente derrotada. En esta dinámica de debate y entendimiento con la oposición, en la fase de preparación democrática, CIEPLAN y su equipo, desempeñaron, como vemos, un rol fundamental. Su incuestionable capacidad técnica fue la credencial que les permitió la negociación política con la derecha, pues poseían, sobre todo con los *Chicago boys*, trayectorias intelectuales bastante similares y compartían tanto un argot técnico como un respeto por la disciplina económica. Esto los validó frente a los cuadros *tecnopolíticos* de la derecha y allanó la construcción de acuerdos programáticos. Además, y en un plano más general, Foxley y sus compañeros de CIEPLAN fueron portadores de una legitimidad internacional, obtenida a partir de las redes de la Fundación Ford, que sería después fundamental para legitimar al Chile democrático en el escenario internacional y ante organismos tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

La economía política de la transición, en consecuencia, es una que, si bien da el salto democrático, no tensiona significativamente el modelo socioeconómico neoliberal del autoritarismo. Este continuismo histórico es rastreado toda vez uno de los pilares de la economía abierta es abrazado por la Concertación, en tanto se estima que el proceso de apertura e integración de la economía chilena al sistema mundial debe continuarse y profundizarse (CIEPLAN, 1988: 8). Y respecto del rol del Estado, la clásica matriz desarrollista propia de la centroizquierda es reemplazada por los principios subsidiarios pregonados por la dictadura civil-militar:

... existe consenso en que la empresa privada y el



Estado deben colaborar entre sí. Los países que han tenido éxito exportador así lo han entendido. Hay acuerdo en que el Estado no debe desarrollar políticas amenazantes para el sector privado. También se acepta que el Estado tiene que asumir mejor su responsabilidad en un reparto más equitativo de los beneficios del crecimiento y la modernización (CIEPLAN, 1988: 6- 7).

Al optar por el continuismo y el consabido consenso, la Concertación vació de contenido a la actividad política. Y aquí fue muy importante, como decíamos anteriormente, la idea de gobernabilidad democrática; pues la gobernabilidad ganó a la democracia. Bajo esta batería de propuestas, además de la impronta de Foxley, encontramos el ascendente de Edgardo Boeninger, importante intelectual y político ligado también en algún momento a CIEPLAN. Su influencia política es difícil de cuantificar, pues suyas fueron las principales tesis respecto de la gobernabilidad democrática, y como ministro secretario general de la Presidencia y asesor primordial de Patricio Aylwin, estuvo presente en la mayoría de las estrategias y decisiones políticas de la Concertación. Para él, la transición debía edificarse, evidentemente, desde el consenso y la llamada “política de los acuerdos”. Lo primordial pasaba por construir confianzas y borrar la distinción entre ganadores y perdedores del proceso (Boeninger, 2007: 34). Pues bien, al ampliar el consenso integrando a la oposición, la política quedaba clausurada. Tiene lugar, entonces, una nueva matriz política, como bien evocaban los miembros de CIEPLAN:

Estamos convencidos que el ciclo confrontacional de las revoluciones con cambios estructurales, que ha caracterizado nuestra convivencia de los últimos veinticinco años se encuentra agotado; que el país ha madurado de su traumática experiencia de un cuarto de siglo; que es posible iniciar una nueva fase, marcada por el sello de la cooperación en tareas no antagónicas (en vez del permanente conflicto), así como por la paz o la tolerancia (en lugar del odio y el dogmatismo). Estamos persuadidos que Chile tiene una nueva oportunidad (CIEPLAN, 1988: 5).

Efectivamente, esa matriz, identificada después en el eslogan concertacionista como “Crecimiento con equidad”, queda mucho mejor signada bajo la fórmula “Crecimiento, luego equidad”. De forma importante, la sinergia entre las ideas económicas de CIEPLAN y la estrategia política de Boeninger, marcaron el devenir de la transición y rubricarían,

siguiendo la idea del *path dependence*²⁴, a todos los gobiernos de la Concertación. Pues los esfuerzos políticos y económicos gubernamentales posteriores estuvieron centrados en promover el crecimiento económico, cuidar los indicadores macro y favorecer al sector privado. La equidad, en tanto, fue condicionada irremediabilmente al crecimiento (Camargo, 2011: 233). Por supuesto, la convergencia entre la herencia positiva de la dictadura civil-militar y la economía política de la transición facilitaron un clima favorable a estos y otros postulados que nos ayudan a comprender, en resumen, algunos de los rasgos fundamentales de la actual sociedad chilena y de su modelo de desarrollo económico y social imperante: dependencia e integración internacional del país, rol protagónico del mercado y carácter indirecto o subsidiario del Estado (CIEPLAN, 1988: 3 y 4).

Conclusiones

La situación actual de cuestionamiento de la transición política chilena y de sus repercusiones económicas, las cuales se prolongan hasta hoy, ha sido el marco histórico en el que se escribieron las anteriores páginas. De esta forma, pudimos comprobar cómo se configuró y resolvió el camino del modelo de desarrollo económico y social a partir de varios de sus responsables máximos: CIEPLAN y el grupo de intelectuales y economistas encabezado por Alejandro Foxley. En ese sentido, se destacó la capacidad que tuvo la Fundación Ford de identificar tempranamente a este centro académico independiente como un actor relevante en la vida política chilena. Se estableció, de hecho, una suerte de “alianza para la democracia” entre la institución filantrópica estadounidense y el centro académico chileno. Esta asociación, que inicialmente respondió a motivos académicos para resguardar la actividad de estos intelectuales y científicos sociales en el contexto de la dictadura civil-militar, se fue reformulando hacia el ámbito político según avanzó el proceso de democratización.

A la par que CIEPLAN pudo llevar adelante un programa de investigación crítico al modelo neoliberal impuesto por los *Chicago boys*, creció el interés por parte de la Fundación Ford de supervisar en terreno la comprensión y la transformación de la participación social a partir del programa de los Diálogos ciudadanos. Ese trabajo permitió detectar el malestar social con la dictadura y cómo posibilitó socializar, a la vez, los

²⁴ Para el desarrollo del concepto, véase: Paul Pierson y Theda Skocpol, *Historical Institutionalism in Contemporary Political Science*. En *Political Science: State of the Discipline*. Katznelson I., Milner HV (New York: W.W. Norton; 2002. pp. 693-721).



ideales democráticos. Pero, sobre todo, y según nuestro punto de vista, ese programa sirvió como plataforma para divulgar y difundir una visión económica hegemónica después en la democracia chilena contemporánea como el nuevo proyecto desarrollista neoliberal, reformado o concertado. Como ejemplo, descuellan las siguientes palabras pronunciadas por Foxley en un Diálogo ciudadano organizado junto con la Fundación Eduardo Frei, en Viña del Mar en agosto de 1985:

El país debe descubrir un nuevo modo de convivencia económica, ni antagónico ni dogmático, para elaborar una política de desarrollo a futuro (...) Desde hace mucho tiempo el país vive sumido en una constante inestabilidad que afecta a todos los chilenos. Esa tendencia no va a variar en la siguiente década. Para enfrentar esta inestabilidad, que se traduce en cesantía, quiebras y baja de los niveles de vida, creo indispensable redescubrir un nuevo modo de convivencia entre los chilenos²⁵.

²⁵ Alejandro Foxley: “El país debe encontrar un nuevo modo de convivencia”, *El Mercurio*, domingo 4 de agosto de 1985.

El anterior testimonio de Foxley es una perfecta síntesis de la matriz política, económica, social e incluso cultural de la transición, la cual, reiteramos, se prolonga y pervive hasta hoy. Pues, efectivamente, el punto de mayor acuerdo “respecto de la necesidad de reestablecer un equilibrio social básico”, como modo de convivencia, pasó, como vemos, por la reconstrucción o construcción, mejor dicho, de la democracia venidera desde la estabilidad económica (CIEPLAN, 1988: 10). La base más firme para generar el tan deseado consenso social y político estuvo definida, por tanto, por los instrumentos, los mecanismos, las características y las manifestaciones propias de la economía y del modelo neoliberal dominante y de sus grupos sociales. Esta lectura pragmática de Foxley concordó, de hecho, con su progresiva conversión a tecnopolítico. En ese sentido, según iba ganando poder destacó su visión crítica respecto de aquellos intelectuales que se apoyaban “excesivamente en teorías abstractas globalizantes” que dificultaban el “esfuerzo por construir un país posible” (Foxley, 1987: 13). La estrategia académica, intelectual y política de este autor y de CIEPLAN, como vimos en páginas anteriores, consistió entonces en presentar una alternativa política-democrática atractiva para la población, convencer a la oposición de centro-izquierda del significado positivo que sería abrir a Chile al comercio exterior y no dejar fuera a la derecha política y económica en cuanto al compromiso de respetar la arquitectura del modelo.



Por supuesto, la necesidad de mantener al modelo neoliberal y de continuar en democracia con “una administración macroeconómica disciplinada” (CIEPLAN, 1988: 8), se debió, entre otras razones explicativas, a las cambiantes condiciones históricas regionales e internacionales. Las transiciones democráticas en el Cono Sur, la caída del Muro de Berlín y la crisis de los socialismos reales, principalmente, jugaron a favor de un marco de aceptación del neoliberalismo. Además, Chile y América Latina estaban ya enmarcadas en un nuevo orden económico internacional en el que la Fundación Ford fue un actor clave para su estudio, para su gestación y también para promocionar políticamente a este grupo intelectual. De hecho, y como otra poderosa hipótesis para explicar el mantenimiento en democracia del modelo neoliberal impuesto en la anterior dictadura, es que Foxley y los economistas de CIEPLAN fueron portadores en Chile, gracias a las redes de contactos e instituciones abiertas por esa institución filantrópica estadounidense, de la confianza concedida por las agencias internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Sería una forma también de certificar internacionalmente a esta democracia periférica y reestructurar, de paso, la deuda externa de este país en lo que se llamó el Plan Brady. Por ejemplo, y como síntesis de ese período, rescatamos la siguiente noticia publicada el 17 de agosto de 1989 por el *Diario*:

El presidente de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica y economista de la Concertación, Alejandro Foxley, afirmó que para mantener la economía creciendo y satisfacer las aspiraciones de mejoramiento de la situación social, debe lograrse al comienzo del próximo gobierno un acuerdo satisfactorio dentro del marco del Plan Brady, para disminuir la transferencia de recursos al exterior y contar con financiamiento para el desarrollo del proceso en democracia. La afirmación la formuló luego de reunirse ayer con el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, David Mulford, en la residencia del embajador de ese país (...) Foxley precisó que en la oportunidad se analizaron las diversas opciones para Chile y la necesidad de aprovechar al máximo los distintos caminos. Añadió que según dijo Mulford, su país está muy interesado que la transición política no signifique discontinuidades en el funcionamiento de la economía y que tampoco se “produzca una parálisis en las decisiones en materia económica, para lo cual



²⁶ Alejandro Foxley: “El Plan Brady es una perspectiva abierta a Chile”. *Diario*, jueves 17 de agosto de 1989.

es necesario que se adopten los caminos posibles de solución”. Asimismo, indicó que en los próximos meses viajará a Washington para entrevistarse con representantes de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, BID, FMI, de modo de preparar la transición económica asegurando el mejor arreglo para el país²⁶.

Visto lo anterior, y para ir concluyendo, podemos afirmar que una parte fundamental de la lógica consensual que inspiró a la Concertación y, que devino “transar sin parar” (Jocelyn-Holt, 2014: 270) fue esta aceptación básica de que el proceso de integración de la economía chilena a la economía mundial debía cuidarse, continuarse y profundizarse. En ese proceso de producción de ideas durante la transición y de generación de un discurso hegemónico después en democracia, fue clave el rol de CIEPLAN como un *think tank* que produjo, por un lado, el fundamento de la gobernabilidad democrática y, por otro, los mandatos neoliberales del Consenso de Washington. Pero este grupo de intelectuales, economistas y tecnopolíticos, estuvo investido, a diferencia de los *Chicago boys*, de legitimidad por su oposición y lucha democrática. En base a estos elementos, vimos cómo se generó un clima favorable respecto del papel protagónico del mercado, de los empresarios, de la modernización capitalista y empresarial, como “un patrimonio que, junto al que se heredó de las décadas anteriores, abre buenas oportunidades para el país en el futuro” (CIEPLAN, 1988: 3 y 4). Al otorgar preeminencia a la obsesión por el crecimiento económico, se descuidó la esfera política, y no se tensó la transición. Y, claro está, el consenso económico y *social* de entonces fue posible y caracterizó, precisamente, sus décadas venideras.

Bibliografía

- BOENINGER, Edgardo (2007). *Políticas públicas en democracia*. Santiago: Uqbar.
- BRUNNER, José Joaquín; FLISFISCH, Ángel (2014). *Los intelectuales y las instituciones de la cultura*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.
- CAMARGO, Ricardo (2011). *El sublime retorno de la ideología*. Santiago: Metales pesados.
- CARDOSO, Fernando H. (1990). CIEPLAN monks take command in Chile. *Southern Cone Report*. 19 de abril de 1990, p. 4.
- CIEPLAN (1988). El consenso económico-social democrático es



- posible. Documento de trabajo contenido en el Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 850-04188. Grantee name "Corporation for Latin American Economic Research".
- DAHL, Robert (2001). La Poliarquía. En BATLLE, A. (ed.) *Diez textos básicos de ciencia política*. Barcelona: Ariel, pp. 77- 92.
- DE ARMAS, Gustavo (2000). Expertos y política en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En DE ARMAS, Gustavo y GARCÉ, Adolfo (comps) *Técnicos y política*. Montevideo: Ediciones Trilce, pp. 85-110.
- DELAMAZA, Gonzalo (2016). Sociedad civil, ciudadanía, movimiento social en el Chile de hoy. En GARRETÓN, M. A., (coord) *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. Santiago: LOM, pp. 109-131.
- FOXLEY, Alejandro (1982). Algunas condiciones para una democratización estable: el caso de Chile. En *Estudios CIEPLAN* N° 9. Santiago, pp.139-169.
- FOXLEY, Alejandro (1984). Después del monetarismo. En FOXLEY, Alejandro (coord), *Reconstrucción económica para la democracia*. Santiago: CIEPLAN, pp. 15-94.
- FOXLEY, Alejandro (1987). *Chile y su futuro: Un país posible*. Santiago: CIEPLAN.
- FOXLEY, Alejandro (1989). Bases para el desarrollo de la economía chilena: una visión alternativa. En *Estudios CIEPLAN*, N°26. Santiago, pp.175-185.
- FOXLEY, Alejandro (2016). *Lecciones del desarrollo en democracia*. Santiago: CIEPLAN.
- FRENCH-DAVIS, Ricardo (2003). *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile*. Santiago: JC Sáez Editor.
- GÁRATE, Manuel (2012a). El nuevo estatus del economista y el papel de los *Think Tanks* en Chile: el caso de CIEPLAN. En ARIZTÍA, Tomás (ed.) *Produciendo lo social. Usos de las ciencias sociales en el Chile reciente*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 101-129.
- GÁRATE, Manuel (2012b). *La revolución capitalista (1973-2003)*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- HUNEEUS, Carlos (2014). *La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet*. Santiago: Taurus.
- HUNEEUS, Carlos (2016). *El régimen de Pinochet*. Santiago: Taurus.
- HUNEEUS, Carlos; CUEVAS, Rodrigo; HERNÁNDEZ, Francisco (2014). Los centros de investigación privados (*Think*



- Tank*) y la oposición en el régimen autoritario chileno. En *Revista Uruguaya de Ciencia Política*. Montevideo. Vol. I, N°23, pp. 73-99.
- JOCELYN-HOLT, Alfredo (2014). *El Chile perplejo*. Santiago: Debolsillo.
- JOIGNANT, Alfredo; GÜELL, Pedro (eds.) (2011). *Notables, tecnócratas y mandarines*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.
- LLADSER, María Teresa (1986). *Centros Privados de Investigación en Ciencias Sociales en Chile 1984-1985*. Santiago: CESOC.
- MAILLET, Antoine; TORO, Sergio; OLIVARES, Alejandro; RODRÍGUEZ, María Ignacia (2016). Los monjes fuera del monasterio: CIEPLAN y su producción intelectual durante cuatro décadas de política chilena. En *Política. Revista de Ciencia Política*. Vol. 54, N°1. Santiago, pp. 189-218.
- MANSUY, Daniel (2016). *Nos fuimos quedando en silencio*. Santiago: Instituto de Estudios de la sociedad.
- MELLA, Marcelo (2008). Los intelectuales de los centros académicos independientes y el surgimiento del concertacionismo. En *Revista Historia Social y de las Mentalidades*, Año XII, Vol. 1, 2008, pp. 83-121.
- PURYEAR, Jeffrey (2016). *Pensando la política*. Santiago: Uqbar.
- RUIZ, Carlos (2015). *De nuevo la sociedad*. Santiago: LOM.
- SILVA, Patricio (2010). *En el nombre de la razón*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.
- SKOCPOL, Theda; PIERSON, Paul (2002). Historical Institutionalism in Contemporary Political Science. En KATZNELSON, Ira, y MILNER, Helen (eds) *Political Science: State of the Discipline*. New York: W.W. Norton, pp. 693-721.
- URQUIDI, Víctor (2005). *Otro siglo perdido. Las políticas de desarrollo en América Latina (1930-2005)*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- VERGARA, Pilar (1985). *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*. Santiago: FLACSO.

Fecha de recepción: 15 de junio de 2017
Fecha de aceptación: 21 de agosto de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional





Camila Rocha

Universidade de São Paulo. Brasil

camilarocha44@gmail.com

O PAPEL DOS THINK TANKS PRÓ-MERCADO NA DIFUSÃO DO NEOLIBERALISMO NO BRASIL

Resumo: A década de 1990 no Brasil foi marcada pela adoção de medidas econômicas neoliberais, contudo, poucos anos antes o ideário neoliberal possuía pouco destaque nos meios políticos e na sociedade. A mudança do cenário político em favor do neoliberalismo foi ocasionada por diversos fatores, sendo que um destes foi a atuação de empresários e intelectuais reunidos nos primeiros think tanks pró-mercado fundados no Brasil na década de 1980. Assim, o objetivo deste artigo é abordar a atuação política destes atores em prol da difusão do ideário neoliberal desde a transição democrática até a ascensão de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República.

Palavras-chave: think tanks, neoliberalismo, Brasil

The role of pro-market think tanks in the diffusion of neoliberalism in Brazil

Abstract: During the 90s, under the administrations of Collor de Melo and Cardoso, Brazil adopted a series of neoliberal economic policies; however, a few years before, the neoliberal ideology had little prominence in the country's political landscape and in society. The change in favour of neoliberalism was caused by several factors, one of which was the neoliberal propaganda made by entrepreneurs and intellectuals gathered in pro-market think tanks founded in Brazil in the 1980s. Thus, the purpose of this article is to show how these organizations and its leading figures had a significant role in the diffusion of the neoliberal ideology from the beginning of the 80s until the rise of Fernando Henrique Cardoso to the presidency of the Republic

Keywords: think tanks, neoliberalism, Brazil



Introdução

A década de 1990 no Brasil foi marcada pela adoção de medidas econômicas neoliberais como a abertura dos mercados, privatização de empresas estatais e criação de agências reguladoras, contudo, poucos anos antes o ideário pró-mercado possuía pouco destaque entre as elites políticas e na sociedade civil em geral. A mudança do cenário político em favor do neoliberalismo¹ foi ocasionada por diversos motivos, entre os mais conhecidos figuram a influência de entidades internacionais (Cruz, Sebastião, 2007) e a atuação de grupos de economistas de orientação monetarista junto aos governos de Fernando Henrique Cardoso, muitos dos quais se formaram em universidades norte-americanas (Loureiro, Maria Rita, 1997).

No entanto, um fator importante que contribuiu nesse sentido foi a propagação de valores neoliberais realizada por empresários, tecnocratas e intelectuais por meio da atuação de *think tanks* pró-mercado. A literatura sobre estes *think tanks* se debruçou exclusivamente sobre as atividades promovidas pelo Instituto Liberal (Gross, Denise, 2006; Casimiro, Flávio Henrique, 2011), no entanto, existiram outros dois importantes *think tanks* o Instituto de Estudos Empresariais e o Instituto Atlântico que também tiveram um papel importante na divulgação de ideias pró-mercado, de modo que, uma análise conjunta que leve em consideração o histórico da institucionalização do movimento neoliberal no Brasil por meio deste *think tanks* e dos laços que existiam entre suas lideranças e militantes é importante para compreender a evolução das articulações políticas que foram sendo feitas ao longo do tempo.

Assim, o objetivo deste artigo é justamente o de compreender como se deu a atuação política dos *think tanks* pró-mercado brasileiros em prol da difusão do ideário neoliberal desde a transição democrática até a ascensão de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República, procurando ressaltar os vínculos existentes entre militantes e lideranças ligados a estas organizações e suas mudanças ao longo do tempo. Para tanto, serão utilizadas entrevistas com lideranças e militantes neoliberais e documentos históricos internos coletados junto aos três *think tanks* pró-mercado já citados que atuaram nas décadas de 1980 e 1990, o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, fundado em 1983, e suas filiais, criadas a partir de 1986, o Instituto de Estudos Empresariais,

¹ Neoliberalismo é compreendido aqui como um conjunto de ideias e práticas sociais, políticas e econômicas, inspiradas nas obras dos mais destacados membros da Sociedade de Mont Pelerin (ver nota 5), que promovem a defesa do direito de propriedade, da livre atuação do mercado e do Estado mínimo. Os defensores do neoliberalismo, os neoliberais ou liberais, a despeito de suas possíveis diferenças, unificam-se em torno de uma ideologia que compreende que a liberdade humana está intimamente relacionada às ações racionais e auto-interessadas dos indivíduos em um mercado competitivo, e procuram combater de forma sistemática ideologias e práticas consideradas como “coletivistas”, o que inclui praticamente toda e qualquer forma de socialismo, para tanto articulam-se em um “movimento político transatlântico” que compreende uma vasta rede de intelectuais, ativistas e *think tanks* (Daniel, Stedman Jones, 2014).



fundado em 1984, e o Instituto Atlântico, fundado em 1992, Tendo em vista que o surgimento desse tipo de organização no Brasil possui conexões importantes com *think tanks* pró-mercado anglo-saxões, realizarei uma breve revisão da literatura sobre estes últimos antes de iniciar a análise sobre a atuação dos *think tanks* brasileiros propriamente dita.

Think tanks anglo-saxões: do cientificismo ao ativismo

A expressão *think tank* passou a ser mais utilizada por volta da década de 1960 nos Estados Unidos, país que abriga boa parte dos *thinks tanks* considerados como arquetípicos pela literatura especializada (Donald, Abelson; Lindquist, Evert, 2000). Os primeiros *think tanks* que foram criados pelos norte-americanos durante a primeira metade do século XX eram organizações civis privadas, mantidas com doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, que reuniam especialistas e técnicos, normalmente recrutados junto à academia. Seus membros procuravam dedicar-se à pesquisa científica e à divulgação de ideias no campo das políticas públicas da forma mais autônoma e independente possível em relação a grupos de interesse específicos. Este tipo de atuação, consoante com o espírito progressista e “científico” que passou a predominar no início do século XX nos Estados Unidos, seria possível na medida em que estas organizações não sofreriam interferência ou pressão de grupos de interesse específicos, como ocorreria em agências estatais, governos, universidades ou partidos, o que lhes facultaria a possibilidade de conduzir suas atividades-fim de forma mais “neutra”, “científica” e “desinteressada”, e por isso mais “confiável” em comparação a outros loci de pesquisa e produção de ideias e políticas públicas, características que constituiriam os principais atrativos do *think tanks* junto aos implementadores de políticas públicas (Rich, Andrew, 2004; Stone, Diane 2005).

Esta caracterização inicial, que ainda é veiculada por certos *think tanks* dentro e fora da América do Norte como parte de sua estratégia de *marketing*, vem sendo discutida e questionada pela literatura especializada em função do crescimento do número de *think tanks* que passaram a atuar nos anos 1970 com base em visões de mundo e ideologias particulares (Thunert, Martin, 2003). Até então o número total de *think tanks* ativos na política americana permaneceu

relativamente pequeno e não chegava a totalizar 70 organizações, sendo que estas devotavam seus esforços para a produção de pesquisas na área de políticas públicas de forma invariavelmente discreta e direcionada diretamente para o consumo de implementadores de políticas públicas sem se preocuparem em possuir maior apelo junto à esfera pública, cenário que se modificou radicalmente com a fundação da Heritage Foundation em 1973 (Smith, James, Simon, 1993).

A Heritage Foundation é tida como um dos *think tank* de direita² mais influentes dentro e fora dos Estados Unidos³. Sua missão é formular e promover políticas públicas conservadoras baseadas na defesa da livre-empresa, do Estado mínimo, da liberdade individual, dos valores tradicionais americanos e da importância de uma forte defesa nacional. Para conseguir influenciar o máximo possível o processo político nesta direção e obter o maior número de vitórias possível na chamada “batalha das ideias”, suas estratégias de *marketing* são direcionadas para um público alvo composto por membros do Congresso, membros de equipes parlamentares, formuladores de políticas públicas no poder executivo, mídia nacional, e comunidades acadêmicas⁴.

O formato de atuação inaugurado pela Heritage Foundation marcou o nascimento de um outro tipo de organização nos Estados Unidos: os *think tanks* “ativistas”, também chamados de *advocacy think tanks* (Weaver, Kent, 1989). Seguindo o modelo fornecido pela Heritage, novos *think tanks* que utilizam estratégias agressivas de *marketing* na defesa de seus interesses proliferaram naquele país, sendo que entre 1970 e 2000 o número de *think tanks* mais do que quadruplicou, crescendo de menos de 70 para mais de 300 organizações atuantes. Mais da metade dos novos *think tanks* que se formaram neste período possuíam uma orientação ideológica facilmente identificável e, dentre estes, dois terços são de direita.

Até o final da década de 1960 fundações e demais organizações civis de direita existentes nos Estados Unidos se recusavam deliberadamente a apoiar esforços relacionados ao que o que ocorria em Washington. Porém, logo mudaram de opinião em vista do aumento do que consideraram ser um inoportuno “ativismo estatal” promovido pelo governo na época, o qual passaram a combater por meio do financiamento de *think tanks* “ativistas” (Idem, *ibidem*). Diferentemente dos *think tanks* de orientação mais “científica”, a maior

² Aqui compreende-se que, assim como apontam Alain Noel e Jean-Phillipe Thérien (2008), a distinção principal entre esquerda e direita se dá em relação à igualdade, como entende Norberto Bobbio, porém isso não significa que a direita seria contrária a qualquer forma de igualdade, uma vez que, com base em uma longa tradição liberal em favor de direitos e liberdades individuais, a direita seria favorável a igualdade de oportunidades mas se oporia a mudanças sociais que tivessem como efeito uma ordem social-econômica mais igualitária, como defende a esquerda.

³ *Global To Go Think Tanks Index Report* (2014). University of Pennsylvania

⁴ Cf. <http://www.heritage.org/about>



parte dos recursos materiais e humanos recebidos dos *think tanks* “ativistas” não são empregados em pesquisas. Para maximizar as possibilidades de influenciar o processo político na formulação de resumidas análises de conjuntura, suas atividades principais são direcionadas para a produção de materiais de marketing e demais estratégias de comunicação voltadas para grupos políticos específicos, grandes veículos de mídia e à opinião pública com o intuito explícito de favorecer políticas públicas que sejam condizentes a priori uma orientação ideológica particular (Rich, Andrew, 2004).

Alguns anos após a fundação dos primeiros *think tanks* de direita com perfil ativista, certas políticas econômicas ortodoxas de inspiração neoliberal começaram a ser aplicadas em maior ou menor grau como forma de combater o aumento da inflação nos Estados Unidos durante o governo democrata de Jimmy Carter (1977-1981), fenômeno que também ocorreu de forma similar na Inglaterra durante o mandato do primeiro-ministro trabalhista James Callaghan na Inglaterra (1976-1979) (Stedman Jones, 2014). Porém, foi apenas no início da década de 1980, em meio às transformações ideológicas e econômicas promovidas pelos governos do republicano Ronald Reagan nos Estados Unidos e da conservadora Margareth Thatcher na Inglaterra que tais políticas passaram a ser difundidas e adotadas ao redor do globo de modo mais contundente (Desai, Radhika, 1994; Cockett, Richard, 1995) e que as ideias neoliberais começaram a se tornar hegemônicas, ultrapassando a esfera estritamente econômica e se enraizando no tecido social de vários países (Anderson, Perry, 1995).

A coincidência temporal no que tange à aplicação de políticas de inspiração neoliberal nos Estados Unidos e na Inglaterra nos anos 1980 não foi fortuita mas sim fruto de intercâmbios entre intelectuais e ativistas dos dois países que ocorreram principalmente ao longo da década de 1970 e que foram desencadeados com a publicação da obra seminal de Friedrich August Von Hayek, em 1944, *O caminho da servidão*. Nesta obra, Hayek, fundador da Sociedade de Mont Pelerin⁵, amigo de longa data de John Mayard Keynes, e ex-aluno de Ludwig von Mises, o mais importante nome da escola austríaca de economia, argumenta que o aprofundamento da lógica “coletivista” e “estatista” que ampararia o Estado de Bem Estar Social conduziria ao totalitarismo e, portanto, ao fim das liberdades individuais. Tais teses provocaram um

⁵ A sociedade de Mont Pelerin foi fundada em 1947 após um primeiro encontro promovido por Hayek em uma localidade de mesmo nome na Suíça com o objetivo de estimular o intercâmbio de ideias com intelectuais afinados com as teses defendidas em *O caminho da servidão* e que provinham de diferentes países e contextos acadêmicos. Para mais detalhes sobre a Sociedade de Mont Pelerin, Anderson, Perry, 1995; Cockett, Richard, 1995; Harvey, David, 2008; Mirowski; Philip, Plehwe, Dieter, 2009; Stedman Jones, Daniel, 2014.

verdadeiro frisson na época, uma vez que as políticas que sustentavam o Estado de Bem Estar Social estavam em seu auge e eram um consenso tanto à direita quanto à esquerda do espectro político britânico, de modo que Hayek angariou rapidamente muitos inimigos. Porém, ao mesmo tempo, houve também quem se extasiasse com suas ideias, este foi o caso de Antony Fisher, ex-piloto da Força Aérea Real.

Após ler *O caminho da servidão*, Fisher entrou em contato com Hayek para pedir conselhos sobre como seria possível fazer com que as ideias pró-mercado defendidas no livro pudessem ter maior alcance. Seguindo a sugestão dada pelo economista austríaco de que seria melhor fazê-lo por meio da fundação de uma organização que fosse independente do sistema político, o qual estava na época alinhado com a defesa do Estado de Bem Estar Sociais, Fisher angariou recursos para fundar, dez anos depois, um dos primeiros *think tanks* pró-mercado do mundo, o Institute of Economic Affairs (IEA) (Cockett, Richard, 1995). Vinte anos após sua fundação, o IEA acabou por desempenhar um papel fundamental na política britânica não apenas no plano das ideias mas também no da política profissional propriamente dita quando, em anos posteriores, forneceu quadros e assessores técnicos para o governo de Margareth Thatcher (1979-1990), influenciando, de forma importante, a adoção de reformas de cunho liberalizante colocadas em prática pela política conservadora (James, Simon, 1993; Desai, Radhika, 1994).

Porém, antes mesmo de Thatcher se tornar primeira-ministra, ainda na metade da década de 1970, em meio à onda de fundação de *think tanks* “ativistas” de direita na América do Norte, Antony Fisher foi convidado em 1975 para ser codiretor de um *think tank* de direita no Canadá, o Fraser Institute, por conta de sua reputação angariada junto ao IEA. O think tank canadense, que foi fundado em Vancouver por um empresário daquele país em 1974, logo passou a se destacar no cenário político norte-americano, o que fez com que Fisher fosse chamado em 1977 para erguer uma organização similar em Nova Iorque originalmente chamada de Center for Economic Policy Studies e posteriormente rebatizada como Manhattan Institute for Policy Research. Ainda no mesmo ano, Fisher mudou-se para São Francisco, mais especificamente para a vizinhança de Milton Friedman, liderança intelectual do movimento neoliberal nos Estados Unidos, e lá fundou outra organização em 1979, o Pacific Institute for Public Policy,



sendo que ainda ao final da mesma década envolveu-se com a formação de outro *think tank* na Austrália, o Center for Independent Studies.

⁶Cf. <https://www.atlasnetwork.org/about/our-story>

Em 1981, encorajado por Hayek e Friedman⁶, Fisher decidiu criar em Washington uma espécie de “organização-mãe” que pudesse coordenar os think tanks que foram criados anos antes e que, ao mesmo tempo, articulasse a fundação de novas “filiais” do IEA em outros países, e assim surgiu a Atlas Economic Research Foundation, que mudou o nome posteriormente para Atlas Network (Thunert, Martin, 2003). Em 1987 a Atlas associou-se ao Institute of Humane Studies (IHS), fundado em 1961 por um acadêmico norte-americano e membro da Sociedade de Mont Pelerin chamado F.A. Harper, o qual também esteve envolvido com a atuação da primeira organização civil pró-mercado que foi fundada nos Estados Unidos ainda na década de 1940, a Foundation for Economic Education (FEE). A fusão tinha a finalidade de fortalecer a estrutura institucional da Atlas e assim poder tornar mais factível sua principal missão, que era, segundo formulara de forma bastante direta John Blundell, presidente da Atlas e do IHS de 1987 a 1990, “abarrotar o mundo com *think tanks* que defendam o livre-mercado” (Cockett, Richard, 1995:307).

Estes *think tanks* integravam uma rede complexa de atores e entidades diversos unidos em prol da diminuição da intervenção estatal na economia, entre os quais figuravam inclusive instituições universitárias e um partido político, o Libertarian Party, fundado em 1971 (Doherty, Bryan, 2007). Da década de 1970 em diante tais organizações passaram a contar com orçamentos milionários oriundos de doações realizadas por empresários mediadas por fundos “filantrópicos”. Um dos casos mais emblemáticos neste sentido é o dos bilionários do ramo de petróleo, David e Charles G. Koch, conhecidos como irmãos Koch, cuja atuação junto às principais organizações pró-mercado de seu país e na política do Partido Republicano é pública e notória. (Doherty, Bryan, 2007; Moraes, Reginaldo, 2015)

Nesse sentido, o vínculo da Atlas com a Sociedade de Mont Pelerin provou-se fundamental. Afinal, não só os diretores da Atlas participavam dos encontros promovidos periodicamente pela Sociedade e aproveitavam o ensejo para trocar ideias e experiências, mas também porque estes encontros eram ocasiões em que Fisher conseguia angariar fundos e entrar em contato com possíveis doadores e



apoiadores para a articuladora norte-americana (Cockett, Richard, 1995). Foi assim que, passados menos de dez anos desde sua fundação, a Atlas já conseguia desfrutar de um grau de sucesso considerável em relação aos objetivos propostos por seu fundador, o qual poderia ser comprovada numericamente, pois ainda em 1990 a Atlas já era responsável por uma vasta rede que compreendia mais de 60 *think tanks*, e em 1991 teria sido responsável por criar, apoiar financeiramente ou auxiliar de alguma forma na criação e/ou desenvolvimento de 78 “filiais” do IEA nos mais diversos países, sendo que 31 destas localizavam-se na América Latina.

A atuação dos *think tanks* pró-mercado no Brasil

As sementes do que viriam a ser os primeiros *think tanks* pró-mercado brasileiros, cuja forma de atuação é similar àquela dos *think tanks* ativistas anglo-saxões, foram plantadas entre o fim dos anos 1970 e início da década de 1980. Em março de 1980, o principal tradutor brasileiro das obras de Hayek, José Stelle, retornou dos Estados Unidos, onde havia participado de um seminário de verão da FEE em 1978 e ingressado no Libertarian Party em 1979, com a ideia de fundar um *think tank* pró-mercado no Brasil:

Na convenção do Libertarian Party da Califórnia de 1979, (José Stelle) ouviu um discurso de Roy Childs conclamando os libertários americanos a levarem a mensagem liberal-libertária para outros países. Foi esse discurso de Childs que estimulou Stelle a fazer finalmente algo em que já pensara no final do seminário de verão de 1978, quando conheceu Leonard Read, presidente da FEE (Foundation For Economic Education), e um dos grandes estrategistas do movimento desde 1946 e ex-amigo de Ayn Rand. Que coisa interessante seria seguir a mesma profissão: fundar um instituto de estudos políticos e econômicos no Brasil, traduzindo livros, oferecendo seminários e construindo um cadre liberal. (...) Stelle então apresentou a ideia a Read, que mencionara ter alguns amigos no Brasil. Em março de 1980, Read deu-lhe uma carta de recomendação para ser entregue a seu amigo Paulo Ayres, em São Paulo, um dos organizadores da Revolução de 1964. Read conhecera Ayres numa de suas viagens pela América Latina quando era presidente da Câmara de Comércio de Los Angeles, antes de fundar sua FEE em 1946. Nos anos seguintes, sempre enviava mensalmente a revista *The Freeman*, da fundação, para Ayres. Logo após a eleição



do Jânio Quadros em 1960, os artigos sobre economia livre e princípios liberais publicados nessa revista ajudaram (juntamente com as obras de Ayn Rand) a definir alguns aspectos da Revolução de 1964. Stelle voltou ao Brasil e encontrou-se com Ayres no início de junho. Mas este, arbitrageur envolvido no processo de compra e venda de firmas, estava muito ocupado e desligado da política. Não apoiou a ideia de fundação de um instituto liberal no Brasil. Os acadêmicos eram na sua grande maioria socialistas de um tipo ou de outro, e a maioria dos empresários se beneficiavam tanto do intervencionismo e do mercantilismo brasileiro, que ninguém iria apoiar tal projeto. Em suma, não havia massa crítica da qual obter verbas e recrutar o pessoal necessário⁷.

⁷ Trecho extraído de uma carta escrita por José Stelle intitulada *Origem do Movimento Liberal no Brasil (1974-1985)*, disponível nos Arquivos do Instituto Liberal do Rio de Janeiro.

O empresário Paulo Ayres Filho foi fundador do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), um dos principais núcleos de articulação de uma intrincada rede de alcance internacional que envolvia importantes políticos, militares e empresários nacionais e norte-americanos que protagonizaram a derrubada do então presidente João Goulart em 1964 (Dreifuss, Rene, 1987) e que foi extinto pouco tempo após o início do regime militar. Ainda que não costume aparecer com destaque entre as figuras mais importantes do neoliberalismo brasileiro, Ayres Filho era um neoliberal convicto e membro da Sociedade de Mont Pelerin, porém, nos anos 1980, desiludido com os horizontes para a implementação de políticas neoliberais no país, o empresário se recusou a auxiliar no que foi provavelmente a primeira tentativa de fundação de um *think tank* liberal no Brasil ensaiada por José Stelle. Contudo, Ayres Filho recomendou ao tradutor que entrasse em contato com outro empresário alinhado com a defesa de políticas neoliberais, Henry Maksoud, o qual talvez poderia ajuda-lo a concretizar seu intuito:

...Ayres convidou Stelle a participar do grupo de estudos de que era membro e recomendou então que Stelle falasse com Henry Maksoud, única pessoa que talvez se interessasse pelo assunto. Com um telefonema, marcou a entrevista para as duas da tarde e teve a bondade de apresentar Stelle a Maksoud no Maksoud Plaza, recentemente construído e um dos melhores hotéis do país. Maksoud avaliou o visitante, mas ofereceu-lhe apenas uma posição como tradutor e redator da revista *Visão*, que, a seu ver, poderia exercer mais influência no Brasil do que o pretendido instituto. Desapontado, Stelle aceitou a oferta, e logo iniciou seus trabalhos como redator de *Visão*⁸.

⁸ Idem nota 5.



A tentativa de Stelle em fundar um *think tank* no início dos anos 1980 não prosperou pois nem mesmo Henry Maksoud, empresário de sucesso e um dos precursores na divulgação do ideário liberal no Brasil, aceitou a proposta de fundar um instituto. Proprietário de empresas de ramos diversos, como a empreiteira Hidroservice e o hotel de luxo Maksoud Plaza, Maksoud foi um ativo divulgador das ideias neoliberais no Brasil. Por meio da Revista *Visão*, adquirida pelo empresário entre os anos de 1974 e 1975, e da qual Stelle se tornou redator, foram publicados entrevistas e ensaios inéditos de intelectuais como Hayek, Milton Friedman e Murray Rothbard, algo inédito no que tange à divulgação de tais ideias na imprensa, a qual, segundo Stelle, ainda era dominada por um consenso socialdemocrata, tanto que ele seria o único funcionário da revista que de fato acreditava nas ideias promovidas pela publicação.

Para além da divulgação do neoliberalismo realizada por meio da revista, Maksoud também publicou diversos livros de autoria própria sobre neoliberalismo publicados pela Editora Visão e financiou a primeira tradução para o português, realizada por Stelle, de *Fundamentos da Liberdade* de Hayek. Inclusive, o economista austríaco veio para o Brasil em 1976 a convite do empresário e retornou outras tantas vezes, em uma das quais, no ano de 1981, realizou uma palestra na Universidade de Brasília para um público que contava com intelectuais pró-mercado ilustres que atuaram na política brasileira em décadas passadas como Eugênio Gudín, Roberto Campos, Octávio Gouveia de Bulhões e Alfredo Marcolin Peringer.

No final da década de 1980, em meio à agitação política encetada pela Assembleia Nacional Constituinte, Maksoud fez uma detalhada proposta de Constituição para o Brasil. O texto fora baseado no conceito de demarquia, desenvolvido por Hayek, porém, não apenas não foi acolhido por nenhum constituinte como pode ser tido, em grande medida, como a antítese da redação final que fora aprovada pela Assembleia. O empresário, contudo, não se fez de rogado e em 1988 comprou um horário na Rede Bandeirantes de televisão e passou a apresentar o programa *Henry Maksoud e você* para divulgar o ideário pró-mercado. No programa, que contou com mais de 170 edições, o apresentador não apenas divulgava as ideias falando diretamente para os telespectadores mas também entrevistava personalidades se valendo de um



⁹Informações obtidas por meio de entrevistas realizadas com José Stelle e Winston Ling, ver mais informações em Anexo 1.

“corpo-a-corpo” por trás das câmeras procurando influenciar as pessoas de modo mais direto a aderirem ao ideário pró-mercado⁹.

Stelle não se deu por vencido e após a negativa de Maksoud e ainda procurou muitos outros empresários que pudessem ajuda-lo a fundar um *think tank* pró-mercado, porém, foi apenas em dezembro de 1982 que sua ideia começou a ganhar concretude, quando Stelle recebeu um telefonema de um empresário de origem canadense que gostaria que ele traduzisse uma trilogia escrita por Hayek intitulada *Direito, legislação e liberdade*. O empresário em questão era Donald Stewart Jr., um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro na época e dono da ECISA, uma empresa do ramo da construção civil que construía obras na África financiadas pelo Banco Mundial e projetadas pela Hidroservice de Henry Maksoud. Stewart, que havia participado de um das palestras com Hayek promovidas por Maksoud, havia acabado de chegar de Londres, onde havia, com muito custo, conseguido adquirir um volume da trilogia de Hayek, *Direito, legislação e liberdade* em uma livraria especializada.

¹⁰ De acordo com entrevista realizada com Arthur Chagas Diniz, ver mais informações em Anexo 1.

De posse do livro, e tendo conhecido Antony Fisher e o IEA¹⁰, o empresário, que depois se tornou membro da Sociedade de Mont Pelerin, passou a cogitar fortemente em usar a tradução da obra para lançar um centro estudos políticos e econômicos no Rio de Janeiro. Stelle, animado com a possibilidade de finalmente conseguir fundar um *think tank* sugeriu o nome de Instituto Liberais e apresentou a Stewart um dos primeiros Chicago Boys brasileiros, o professor Og Leme, o qual havia sido aluno de Hayek e Friedman e trabalhado ao lado de Roberto Campos no governo Castelo Branco (1964-1967). Porém, inconformado por ter que atuar de modo subordinado aos empresários que fariam parte do Conselho Mantenedor do IL, Stelle acabou rompendo com Donald Stewart, abandonando o Instituto apenas um ano após sua fundação e se mudando em definitivo para os Estados Unidos anos depois onde se tornou professor universitário.

Stewart fazia parte de um seleto grupo de empresários que possuía então algum interesse no ideário neoliberal. De acordo com o cientista político Álvaro Bianchi (2007), a preocupação de alguns empresários com a limitação das atividades estatais teve início no final da ditadura militar, durante a década de 1970, em virtude de uma crise política e econômica. Naquele momento passou a existir um movimento



de unificação de interesses que se iniciou na campanha contra a estatização e continuou na esteira das greves do ABC, quando oito líderes empresariais se reuniram para divulgar um documento político. Tal movimento procurou alargar os limites de uma representação puramente corporativa de seus próprios interesses, e foi justamente nesta época que o Instituto Liberal foi fundado por Donald Stewart Jr.. Entre os oito empresários que participaram da campanha estavam Jorge Gerdau Johanpeter, Antonio Ermírio de Moraes e Paulo Villares. Jorge Gerdau foi um dos entusiastas de primeira hora do Instituto Liberal e logo passou a participar da organização como membro da diretoria do Instituto Liberal do Rio de Janeiro e Presidente de seu Conselho Mantenedor em seu primeiro ano de existência, além de ter recebido ainda em 1983 o prêmio “Homem de Visão”, concedido pela Revista *Visão* de Henry Maksoud.

Alguns anos depois, os membros do Conselho Mantenedor do Instituto decidiram fundar outras organizações similares Brasil a fora, assim, Antonio Ermírio e Paulo Villares, que estavam no grupo dos oito na década de 1970, passaram então a constar como mantenedores do Instituto Liberal de São Paulo em 1989 (Gros, Denise 2006). Porém, de todas as filiais do Instituto Liberal que foram fundadas nessa época, apenas uma sobreviveu, o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que depois passou a se chamar Instituto Liberdade, fundada pelos empresários e irmãos William e Winston Ling¹¹, os quais também foram responsáveis por criar, em 1984, o segundo *think tank* pró-mercado do Brasil, o Instituto de Estudos Empresariais (IEE).

A razão que levou Winston Ling, mestre em economia pela Universidade de Chicago, a fundar um *think tank* no Brasil foi sua preocupação em criar uma organização específica que promovesse uma educação liberal para uma nova geração de empresários, uma vez que as antigas já seriam refratárias a tais ideias. Na época o liberalismo econômico era pouco divulgado na imprensa e nas universidades, de modo que Ling recorreu à contratação de um jornalista que percorria o “mundo jornalístico distribuindo matérias” pró-mercado e procurou promover palestras em universidades com nomes de peso, porém não costumava obter muito sucesso junto ao público presente:

Eu consegui fazer vários eventos em Porto Alegre levando esses palestrantes para a universidade, para

¹¹ O pai dos irmãos Ling, Sheun Ming Ling, foi pioneiro no desenvolvimento da soja no Brasil, tendo iniciado suas atividades nos primeiros anos da década de 1950.



a URGs, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e levando pau. Porque naquela época não existia tal coisa. E eu me lembro que teve uma vez que nós fizemos uma palestra de noite no auditório da Faculdade de Direito da URGs, e quando nós chegamos lá estava lotado. Naquela época normalmente tinham 10, 15, 20 pessoas no máximo, mas naquele dia estava lotado. Quando o palestrante começou a falar, um a um o pessoal começou a levantar e ir embora. Ou seja, o pessoal da esquerda convocou os amigos, coisa e tal, e eles lotaram tudo. E aí eles combinaram: “olha, vamos começar a sair devagarinho e deixar o negócio vazio”. Aí ficou vazio mesmo, ficaram lá umas 10 pessoas só¹².

¹² Entrevista realizada com Winston Ling, ver mais informações em Anexo 1.

Para além de palestras específicas voltadas para o público universitário, o IEE passou a organizar anualmente a partir de 1987 o Fórum da Liberdade em Porto Alegre, um evento fechado do qual participavam como palestrantes elites políticas, empresariais e intelectuais, promovido para um público de empresários. No entanto, Ling também se valia de meios menos ortodoxos para convencer os empresários brasileiros, em sua maioria pouco afeitos às vantagens do livre-mercado, como a estratégia do “corpo-a-corpo”, a qual era indispensável para que eles lessem obras de autores pró-mercado:

Esse tipo de corpo a corpo na nossa época no IEE eu fazia muito isso, por exemplo, cada pessoa tinha que ler um livro por mês e a gente ligava pra cada um deles semanalmente: “vem cá fulano, que página tu tá do livro?”. A gente fazia esse corpo a corpo, porque é difícil, tem uma turma que não gosta de ler...ele mandava vários livros com um bilhete em que ele dizia assim: “olha, eu sei que é muito livro, muitas páginas, mas você não precisa ler todos os livros, tá aqui ó, o livro A você lê da página tal a tal, o livro B da página tal até a página tal, porque nós vamos discutir esses livros no programa¹³”.

¹³ Podcast de Winston Ling disponível em <http://www.mises.org.br/>

Além de fazer o “corpo-a-corpo” com os empresários que já eram membros do IEE para que lessem as obras, Ling também o fazia com outros empresários que não tinham relação com o Instituto, como, por exemplo, quando praticamente obrigou vários empresários que viajavam para Taiwan a trabalho a aproveitar as longas horas do voo para ler livros pró-mercado. A insistência de Winston Ling em procurar influenciar os empresários brasileiros a todo o custo se justificava tendo em vista que a adoção convicta dos princípios neoliberais era tão difícil para a maior parte



dos empresários brasileiros que até mesmo o próprio Henry Maksoud teve dificuldade de colocá-los em prática quando se viu confrontado com suas possíveis consequências para o seu próprio ramo de atividade, como atesta Arthur Chagas Diniz, presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro por mais de vinte anos:

Eu conheci muito bem o Henry Maksoud quando eu trabalhava no Ministério do Planejamento. Ele foi pra lá e tinha uma empresa chamada Hidroservice. (...). Ele era, digamos assim, monopolista de um certo tipo conhecimento no Brasil com a Hidroservice, mas quando você botava em concorrência aqui dentro ele não tinha esse desejo de concorrência tão acentuado não, na prática a teoria era outra¹⁴.

¹⁴ Idem nota 8.

Boa parte dos livros que Ling circulava entre os empresários eram versões traduzidas para o português pelo Instituto Liberal do Rio de Janeiro. A tradução e publicação de livros foi justamente o que motivou a fundação do Instituto Liberal por Donald Stewart Jr.. Para tanto Donald além de atrair outros empresários que pudessem segui-lo em sua empreitada, como Ayres Filho, que acabou se tornando conselheiro do Instituto Liberal de São Paulo em 1992 e doou seu acervo privado à biblioteca do instituto¹⁵, também aproximou os poucos quadros pró-mercado que existiam no país, como o professor Og Leme, apresentado a Stewart por José Stelle.

¹⁵ Informação contida no informativo comemorativo dos dez primeiros anos do Instituto Liberal.

Nos primeiros dez anos de atuação, o IL do Rio de Janeiro conseguiu expandir seu alcance por meio da fundação de oito Institutos Liberais em alguns dos principais estados brasileiros, como relata Winston Ling, que dois anos após fundar o IEE em 1984 passou a presidir a seção do IL no Rio Grande do Sul:

Nós lá no Sul, em 1983, resolvemos nos tornar membros do Instituto Liberal no Rio de Janeiro. Lá no Rio Grande do Sul éramos o Grupo Gerdau, nosso grupo e o Grupo Ioshpe, três empresas somente. Aí, lá por 1986, o Donald fez uma reunião no Rio de Janeiro, pediu pra que todos fossem e nessa reunião ele disse, “olha nós já temos uma massa crítica de livros publicados agora tá na hora de fazer o pessoal ler, então pra isso vamos procurar voluntários entre vocês aí pra que se formem Institutos Liberais nos diversos estados do Brasil com o objetivo de promover a divulgação e a leitura desses livros. O Instituto Liberal do Rio continuaria traduzindo e produzindo os livros



¹⁶ Para informações detalhadas sobre os quadros administrativos de cada Instituto Liberal e seus respectivos mantenedores cf. (Gross, Denise 2002).

¹⁷ Roberto Demeterco, dono de uma das maiores redes de supermercado da época e dirigente do IL-PR realizou uma campanha publicitária na qual divulgou várias frases e slogans liberais em outdoors de Curitiba (Informações contidas no informe comemorativo de dez anos do IL).

¹⁸ Idem nota 11.

¹⁹ *Policy Papers* eram artigos de cerca de vinte páginas que discorriam sobre as vantagens, ou desvantagens, da adoção de certas políticas públicas e que eram elaborados por especialistas liberais no tema. *Position Papers* eram comunicações opináticas curtas que procuravam influenciar o leitor a respeito de algum tema específico e que podiam ser formulados por qualquer membro do instituto.

²⁰ As tabelas com os nomes dos palestrantes e doadores do Instituto Liberal entre 1983 e 1993 podem ser consultadas em (Casimiro, Flávio Henrique, 2011).

e os institutos liberais estaduais fariam a divulgação”. Então na hora eu imediatamente me voluntariei pra fazer o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul. (...) Os institutos surgiram com o chamado do Donald pra que se começasse a divulgação das ideias nos anos vivos do Instituto do Rio de Janeiro, aí surgiram os institutos de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, Minas Gerais com Salim Matar, Brasília, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, junto com o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, eram oito mais o Rio¹⁶. Cada Instituto Liberal no seu Estado fazia arrecadação de doações pra fazer cada um dos seus projetos, (com exceção do Paraná¹⁷)¹⁸.

Porém, com exceção do Instituto de São Paulo, que conseguiu financiadores de peso, a maior parte dos institutos contava com recursos escassos, de modo que suas atividades eram bastante restritas em comparação com as do IL-RJ, e consistiam, basicamente, na replicação do material produzido pelo IL original, o qual traduzia e publicava livros, editava uma revista chamada *Think Tank* e posteriormente rebatizada como *Banco de Ideias*, promovia palestras, além de produzir *policy e position papers*¹⁹ sobre temas diversos como educação, previdência social, energia, entre outros. Desde sua fundação até 1993, o IL-RJ foi extremamente ativo e foi capaz de atrair 200 mantenedores do meio empresarial e promover mais de 500 eventos no país com 169 palestrantes ligados ao Instituto²⁰. Os institutos estaduais atuavam de modo centralizado, baseados nas decisões do Conselho Nacional dos Institutos Liberais. Em uma destas reuniões, em 1993, coube ao presidente do Conselho a coordenação do levantamento de uma listagem de três mil pessoas que comporiam o público-alvo dos institutos, as quais deveriam se dividir em duas categorias de formadores de opinião, “liberais” e “prospects”:

Liberais: público-alvo cuja definição ideológica seja reconhecidamente consistente com nosso ideário (...). *Prospects*: pessoas em que se identifica possibilidades de conversão ao liberalismo. O grupo *prospects* deve ser integrado por pessoas não infensas a ideia liberal ou que estão no muro. Um bom exemplo desse tipo de pessoa são os políticos do PSDB. (...) Levando-se em conta que o público-alvo é integrado por formadores de opinião, cada Instituto deverá procurar listar os liberais e os *prospects* em seu estado dentro das seguintes categorias: deputados federais e senadores; governadores de Estado e Secretários;

Prefeitos influentes de grandes municípios;
Deputados Estaduais mais representativos;
Professores Universitários; Jornalistas; Dirigente de
Entidades Empresariais; Empresários militantes;
Líderes sindicais; Líderes estudantis; Líderes de
entidades civis²¹.

O foco em cada uma destas categorias, contudo, era desigual pois mais de um terço dos indivíduos-alvo eram políticos. De acordo com um planejamento inicial feito pelo IL, dos três mil formadores de opinião a serem influenciados 1200 eram políticos, entre os quais eram destacados os senadores e deputados federais (300) e os prefeitos (200), 400 eram empresários e 400 eram professores universitários. Uma das únicas pesquisas encomendadas pelo IL, no ano de 1991, com propósito de saber mais a respeito do impacto de suas atividades, foi justamente para aferir a influência de uma de suas publicações junto a legisladores, a Revista Notas, publicação mensal que era realizada com o apoio da organização norte-americana CIPE (Center for International Private Enterprise)²² e redigida pelos membros do instituto. A Notas possuía uma tiragem de cinco mil cópias e versava sobre análise de leis e procedimentos constitucionais e era distribuída para tomadores de decisão. De acordo com a pesquisa, cerca de 57 deputados federais afirmaram ler a revista assiduamente, 75% destes afirmaram que mudaram seus votos após lerem a publicação, e mesmo legisladores que não eram liberais afirmaram que suas ideias foram afetadas pela leitura de Notas²³.

Os professores e estudantes universitários eram beneficiados pela disponibilização de livros liberais para venda ou consulta na sede do Instituto, seminários, bolsas e programas de intercâmbio financiados por organizações e universidades estrangeiras mediados principalmente pelo professor Og Leme, e concursos de monografias. E, finalmente, os empresários, eram beneficiados pela participação em uma rede de contatos com empresários importantes do país fomentadas não apenas pelos Institutos Liberais mas também pelo IEE, cujo foco era justamente a formação de jovens empresários na doutrina liberal.

De fato eram raras as iniciativas dos *think tanks* liberais que existiam até o início da década de 1990 que não focavam nestas categorias, as exceções neste sentido foram a publicação de um gibi da Turma da Mônica sobre cidadania, realizada pelo IL-SP e as campanhas publicitárias de frases

²¹ Excerto extraído de carta escrita por Donald Stewart Jr. no dia primeiro de setembro de 1993 e endereçada aos presidentes dos ILs, Jorge Gerdau Johannpeter, Jorge Simeira Jacob e Roberto Bornhausen que está arquivada no Instituto Liberal do Rio de Janeiro.

²² A CIPE é uma das quatro instituições vinculadas ao National Endowment for Democracy (NED), fundação privada pró-mercado criada por Ronald Reagan em 1983.

²³ Informações contidas no informe comemorativo de dez anos do IL.



liberais estampadas em outdoors levada a cabo pelo IL-PR, ambas destinadas ao público-geral. Contudo, as atividades de alcance mais elitista dos ILs e do IEE foram contrabalançadas posteriormente pela atuação de um novo *think tank* liberal no Rio de Janeiro, o Instituto Atlântico (IA) fundado em 1992 por antigos membros da Câmara de Estudos e Debates Econômicos e Sociais (CEDES).

A CEDES foi criada em 1980 por Paulo Rabello de Castro, economista que concluiu seu doutorado na Universidade de Chicago na mesma época em que lá estudava Paulo Leme, filho de Og Leme. Empenhado em fazer com que a elite política e empresarial brasileira trilhasse o caminho das reformas liberalizantes o economista tirou férias em 1979 para escrever o que viria a ser o Estatuto da nova organização. De acordo com Castro a Câmara de Estudos procurava dar uma resposta diferente para sanar a crise inflacionária em comparação com o que era oferecido pelo modelo desenvolvimentista autoritário promovido pelos militares e pelo social-desenvolvimentismo defendido por grupos de esquerda.

A CEDES era composta por um grupo de intelectuais, boa parte dos quais eram egressos da Universidade de São Paulo, especialmente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIEPE). O grupo possuía uma grande liberdade para elaborar suas propostas de políticas públicas a despeito da Câmara estar assentada no que o próprio Rabello de Castro se refere como “o templo do conservadorismo nacional”, a Sociedade Rural Brasileira, entidade que seria, teoricamente, uma dos mais refratárias à defesa do liberalismo econômico. Na época, no entanto, a Sociedade Rural era presidida por Renato Ticoulat Filho e por outros dirigentes rurais que eram mais intelectualizados e mais abertos a inovações, além disso, o grupo também contava com banqueiros, como por exemplo o então presidente do Unibanco, Roberto Bornhausen, e a família Andrade Vieira, então proprietária de um banco fortemente vinculado ao meio rural paranaense, o Banco Bamerindus. De acordo com o historiador René Armand Dreifuss (1989) a CEDES era mantida por cinquenta empresas e associações, nacionais e internacionais, o que possibilitou, três anos depois, que seus membros conseguissem apresentar suas ideias para políticos de diferentes matizes ideológicos, como Paulo Maluf, Tancredo Neves e membros do Partido dos Trabalhadores.

Após ter se afastado do grupo em 1984, Rabelo de Castro

volta à CEDES em 1986 e neste mesmo ano é escalado para apresentar as ideias da organização para um grupo de 140 empresários que se reuniram a portas fechadas nos dias 4 e 5 de outubro em um hotel no Guarujá, litoral do Estado de São Paulo. De acordo com o economista, a reunião visava apresentar para os presentes as possibilidades de inserção de ideias de cunho liberalizante na futura Assembleia Nacional Constituinte que iria iniciar seus trabalhos no ano seguinte:

Eu organizei o debate econômico a pedido da CEDES e lá compareceu um deputado que foi bem votado, que era o Guilherme Afif Domingos. Quem falou no jantar solene foi o (ministro-chefe do gabinete civil) Marco Maciel, que constituiu a coluna vertebral do então Partido da Frente Liberal, levando para o partido algum tipo de liberalismo. Esse grupo é que formará a base do chamado Centrão a partir de 1987, dando um pouco de orientação racionalizante para uma “viagem na maionese” que o pessoal de esquerda queria fazer com a Constituinte. (...) O Secretário executivo desse Centrão vem a ser um jovem doutor em direito que foi resgatado pela CEDES (...) e se chamava Gastão Toledo²⁴.

Durante a Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988) a maior parte dos parlamentares passaram a se alinhar ao redor de dois polos ideológicos principais, um polo de direita, “neoliberal”, e outro de esquerda, de viés “socialdemocrata”. É possível dizer, a partir do que relata o sociólogo Brasília Sallum Jr. (1996), que, a maior parte daqueles que se alinhava ao polo “neoliberal” formou um bloco suprapartidário conhecido como “Centrão”, e aqueles que se identificavam mais com o polo “socializante”, com raras exceções, formaram o Movimento de Unidade Progressista (MUP). Ainda que os políticos reunidos no Centrão tenham obtido sucesso em barrar os projetos de lei mais polêmicos que foram apresentados pelos constituintes de esquerda (Dreifuss, Rene, 1989), Rabelo de Castro avalia que foi voto vencido na reunião junto aos empresários no Guarujá, afinal, a maior parte dos empresários não saiu da reunião convencida do discurso pró-mercado. Winston Ling, fundador do IEE, que esteve presente na reunião, aponta que a mesma foi palco de disputas ásperas entre os empresários presentes:

Estavam presentes todos os empresários de peso do Brasil. (...) O objetivo da reunião era discutir os rumos do Brasil, e o Donald Stewart, como

²⁴ Entrevista realizada com Paulo Rabelo de Castro, ver mais informações em Anexo 1



presidente do Instituto Liberal, estava puxando para o liberalismo, estava lá muita gente ligada aos institutos liberais também, e aí o Emílio Odebrecht se levantou e disse assim: “vocês são uns sonhadores, o mundo real não é assim como vocês estão sonhando e tal”. Naquela época eu visitava muitos empresários tentando vender os livros, pedindo doação, mas ninguém nunca falou assim tão agressivamente contra o liberalismo como o Odebrecht falou²⁵.

²⁵ Idem nota 8.

Nos anos seguintes, após a promulgação da Constituição no ano de 1988, a CEDES passou por um período de refluxo e foi perdendo a força do seu discurso à medida que a crise econômica se estendeu no tempo. Em agosto de 1989, em meio ao auge da crise inflacionária, Rabello de Castro foi convidado para assumir o Ministério da Fazenda nos últimos três meses do governo de José Sarney, porém respondeu negativamente. Com o passar do tempo Castro foi perdendo contato com o grupo de economistas paulistas ligados à CEDES, porém, passados dois anos da derrota no encontro do Guarujá, decidiu apresentar um plano econômico de sua autoria, que ficou conhecido como “Plano K”, ao então presidente Fernando Collor de Melo. No entanto, apesar de ter recebido o economista e esboçado algum entusiasmo, Collor de Melo acabou não acatando sua orientação. Depois da negativa, Castro teve então a ideia de criar um *think tank* pró-mercado, e após a publicação do “Plano K” em formato de livro, *Brasil: esse país tem jeito?*, o economista se uniu ao empresário carioca Thomaz Magalhães e fundou, no ano de 1992 no Rio de Janeiro, o Instituto Atlântico (IA).

Um dos principais focos do IA era atingir as classes populares. Para tanto, passaram a ser divulgadas pela organização as ideias de capitalismo popular e privatização popular, ou seja, como os trabalhadores comuns poderiam se beneficiar materialmente do estabelecimento de uma ordem política e econômica orientada para o desenvolvimento do livre-mercado. Para tanto, poucos anos após a fundação do instituto, foi estabelecido um convênio estável com a Força Sindical, uma das maiores centrais sindicais do país, por meio do qual foram distribuídas aos trabalhadores, ao longo da década de 1990, mais de um milhão de cartilhas ilustradas pelo cartunista Ziraldo, versando temas diversos dentro do enfoque do capitalismo popular. Um dos temas principais veiculados pelas cartilhas era a privatização da previdência, e em 1997 o IA contratou o Ibope para realizar uma pesquisa junto aos trabalhadores com carteira assinada na Região

Metropolitana de São Paulo justamente sobre este tema. Para a surpresa positiva do próprio Instituto, 73% dos trabalhadores entrevistados era a favor da quebra de monopólio da Caixa Econômica Federal (CEF) como gestora dos recursos do FGTS, e 71% afirmaram que transfeririam seus fundos para uma instituição financeira privada alternativa à CEF²⁶.

No que tange à classe política, apenas no ano de 1993 o IA apresentou mais de 400 emendas à Constituição por meio do então deputado federal Eduardo Mascarenhas do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), participou da criação de um comitê de acompanhamento de política monetária e fiscal presidido pelo ex-ministro Ernani Galvêas, realizou um *workshop* sobre privatização no Hotel Transamérica no qual estiveram presentes empresários, economistas de destaque e políticos, como o presidente do Partido da Frente Liberal (PFL), Jorge Bornhausen, e publicou cinco cadernos contendo detalhadas propostas de políticas públicas. No ano seguinte, em 1994, Paulo Rabello de Castro se tornou consultor do programa de governo do PFL e pode então reapresentar seu “Plano K”, no entanto, assim que foi confirmada a aliança da agremiação com o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) o economista renunciou ao cargo afirmando que seriam insuperáveis as diferenças entre o programa a ser defendido pelo PFL e a socialdemocracia defendida pelo PSDB.

Na mesma época, os membros do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, por conta de um vínculo com Jorge Bornhausen, presidente do PFL, conseguiram se reunir com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, que apareceu na capa de uma das publicações do IL, a revista *Think Tank*, porém, assim como Rabello de Castro, Chagas Diniz, então presidente do IL-RJ, deixa claro que, em sua visão, Cardoso não era um liberal²⁷.

O enfraquecimento do movimento pró-mercado e seus legados

No ano de 1994 Fernando Henrique Cardoso passou a governar o país em aliança com o PFL, cujas principais lideranças eram Marco Maciel, intelectual do partido alinhado ao ideário pró-mercado²⁸ e que se tornou vice-presidente de FHC, e Jorge Bornhausen, figura sempre presente nos eventos dos *think tanks* liberais. Tanto Maciel

²⁶ Informação contida em informe do IA de 1997.

²⁷ Idem nota 8.

²⁸ As ideias de Marco Maciel para o PFL podem ser encontradas em uma brochura de sua autoria, “Frente Liberal, Proposta e Partido”, publicada em 1985, um ano antes do partido ser oficialmente fundado.



como Bornhausen, assim como outras lideranças pefelistas, foram capazes de imprimir na maior parte do tempo uma orientação razoavelmente coerente em prol do livre-mercado a despeito do fisiologismo presente na agremiação (Ribeiro, Ricardo, 2013). Contudo, curiosamente, ao mesmo tempo em que a metade dos anos 1990 foi um marco importante no que tange à ocupação do governo com políticos e tecnocratas de orientação pró-mercado e à implementação de políticas neoliberais, também foi o momento que deu início ao declínio das atividades dos *think tanks* liberais.

Durante este período, os institutos liberais estaduais foram sendo fechados um após o outro e o IL-RJ perdeu boa parte de seus financiadores. Para Winston Ling, a falta de comunicação, a centralização dos institutos, a falta de profissionalização e de massa crítica foram os principais motivos para a crise do IL, sendo que o único destes que não fechou foi justamente o do Rio Grande do Sul, que mudou seu nome para Instituto Liberdade pois, segundo Ling: “naquela época o IL-RJ andou por uma baixa muito ruim e juntamente com as coisas ruins que aconteceram com os outros ILS, (...) o nome estava muito estragado e a gente achou que era mais tranquilo mudar o nome do que fazer todo o trabalho contra a corrente pra limpar o nome, e eu apoiei a mudança pra Instituto Liberdade”.

Além dos motivos alegados pelo empresário, outro fator que desencadeou o desânimo generalizado das lideranças e militantes pró-mercado foi o falecimento de Donald Stewart Jr. em 1998, como atesta Chagas Diniz:

O Donald era corpo e alma do IL. Corpo por que? Porque ele bancava, ele foi o alavancador. O Donald montou isso, me chamou pra trabalhar e pediu que eu fosse presidente porque ele tinha contatos com político e ele não queria misturar as duas atividades. Uma boa parte das pessoas que participava era porque tinham interesse em se relacionar com o Donald, não era exatamente porque tinham interesse em suportar o liberalismo. Então quando o Donald morreu nós perdemos muita coisa, o primo dele, que ficou controlando a organização, cortou os pagamentos que dava mensalmente e o IL não tinha (mais) receita. Enfim, o ápice do IL foi com o Donald, o Donald dava uma força extraordinária²⁹.

²⁹ Idem nota 8.

Por fim, também contribuiu para que o movimento neoliberal brasileiro perdesse impulso a própria

implementação de algumas de suas principais pautas, como a abertura de mercados e a privatização de empresas estatais pelos governos de Fernando Henrique Cardoso ao longo da década de 1990³⁰. Com a maior penetração do ideário neoliberal nas hostes governamentais, vários financiadores do movimento acreditaram que este já haviam logrado êxito e que portanto não necessitavam mais de um aporte contínuo de recursos. A perda progressiva de recursos e quadros fez com a atuação dos *think tanks* se enfraquecesse, se tornando praticamente residual nos anos 2000. Mesmo o Instituto Atlântico, que sofreu menos com a perda de mantenedores também diminuiu suas atividades em comparação com os primeiros anos após sua fundação³¹. Winston Ling, inclusive, alega que o descontentamento com a atuação dos empresários e líderes ligados aos institutos brasileiros foi um dos motivos que o levaram a ir embora do país na época.

Contudo, a despeito deste período de baixa das atividades, e das dificuldades existentes para avaliar a real influência de *think tanks* nas políticas públicas que são adotadas pelos governos (Abelson, Donald, 2007), é possível afirmar que estas organizações conseguiram atuar como verdadeiros aparatos privados de hegemonia na medida em que procuraram influenciar ativamente diferentes setores da sociedade civil³² (Moraes, Dênis, 2010) e deixaram legados importantes que perduram até hoje.

Um dos principais legados deixado pela atuação dos *think tanks* entre as décadas de 1980 e 1990 é a própria institucionalização do movimento como tal. Ao longo do tempo foi sendo estabelecida uma rede estável e formalizada constituída por indivíduos, organizações e fóruns brasileiros e estrangeiros, na qual trafegam apoio material e organizacional para as atividades pró-mercado. Assim, se por um lado muitos dos financiadores do movimento se afastaram com o falecimento de Donald Stewart, por outro lado o IL e o IEE já haviam se tornado referências permanentes e incontornáveis para os liberais dentro e fora do país com financiadores cativos como Gerdau, Sallim Matar e Ling, além disso, ao desenvolver projetos junto a outras entidades para além das empresariais, como a Força Sindical, o Instituto Atlântico acabou por imprimir um tipo de atuação mais pragmático e sustentável ao movimento neoliberal.

Desse modo, foi possível dar continuidade de modo razoavelmente estável a atividades como a publicação de

³⁰ Como apontaram em entrevista Bernardo Santoro, ex-diretor do Instituto Liberal e Alex Catharino, aluno particular do professor Og Leme, ver mais informações em Anexo 1.

³¹ As atividades desenvolvidas pelo IA desde sua fundação podem ser consultadas em <http://www.atlantico.org.br/pt/linha-do-tempo>.

³² De acordo com o enfoque gramsciano, “enquanto a sociedade política tem seus portadores materiais nas instâncias coercitivas do Estado, na sociedade civil operam os aparelhos privados de hegemonia, isto é, organismos relativamente autônomos em face do Estado em sentido estrito, que desejam somar consensos e consentimentos em torno de suas proposições. (...) São os agentes da hegemonia, os portadores materiais das ideologias que buscam consolidar apoios na sociedade civil, seja para manter a dominação, seja para contrariar seus pressupostos. Funcionam como caixas de ressonância de posições presentes nas pelejas ideológico-culturais” (Moraes, 2010:59).



livros e brochuras, concursos acadêmicos e a realização de reuniões e fóruns com o apoio de empresários nacionais e *think tanks* e organizações estrangeiras, principalmente norte-americanas. Entre estas atividades merece destaque o Fórum da Liberdade, evento organizado anualmente pelo IEE em Porto Alegre, e que se tornou o grande ponto de encontro dos liberais brasileiros que lá se reúnem para assistir debates realizados com lideranças nos campos empresarial, político e intelectual, sendo que das primeiras edições participaram inclusive políticos de esquerda e centro-esquerda brasileiros.

Outros legados importantes da atuação dos *think tanks*, especialmente do Instituto Liberal, se referem à educação. Nesse sentido foram importantes as traduções de livros de autores pró-mercado para o português e sua divulgação e disponibilização para venda ou consulta gratuita nos Institutos Liberais, os quais poderiam ser acessados pelo público em geral. Além disso, o Instituto Liberal foi responsável pela formação de quadros de elite acadêmica, professores e pesquisadores principalmente na área de economia, e nesse sentido a atuação de Og Leme foi essencial, pois foi através de Leme que vários estudantes brasileiros conseguiram bolsas de estudo e/ou acesso a estudos de pós-graduação na Universidade de Chicago e outras instituições americanas, impactando uma geração, ou mais, da inteligência brasileira, como afirma um de seus discípulos:

Uma parte influente da geração de economistas, engenheiro e cientistas políticos formados nas décadas de 1960 e 1970 tem uma dose de gratidão ao Prof. Og Leme. Foi um incansável mestre que estimulou e abriu caminho para que muitos jovens ampliassem sua formação acadêmica nos Estados Unidos. Muitos cursos de economia no Brasil alcançaram padrão internacional graças aos mestres e doutores criados por Og Leme, que implantaram os atuais programas de pós-graduação (...). Como todo o visionário, Og deixou sementes que um dia germinarão no Brasil³³.

³³ Depoimento de Claudio R. Contador, Doutor em economia pela Universidade de Chicago para o livro *Og Leme, um liberal. Crônicas* publicado em 2011 pelo Instituto Liberal.

Bibliografia

- ABELSON, Donald E; LINDQUIST, Evert. (2000) Think Tanks Across North America, In WEAVER, R. Kent and MCGANN, James G. (eds), *Think Tanks And Civil Societies: Catalyst For Ideas And Action*. New Jersey: Transaction Publishers.
- ABELSON, Donald E. (2007). ¿Alguien está escuchando?



- Evaluando la influencia de los think tanks en las políticas. In GARCÉ, Adolfo et al. *Think tanks y políticas públicas en Latinoamérica: dinámicas globales y realidades regionales*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- ANDERSON, Perry Et al. (1995). *Balanço Do Neoliberalismo. Pós-Neoliberalismo: As Políticas Sociais E O Estado Democrático*. Rio De Janeiro: Paz eTerra
- CASIMIRO, Flávio Henrique (2011). A Dimensão Simbólica do Neoliberalismo no Brasil: O Instituto Liberal e a Cidadania como Liberdade de Consumo. In *Cadernos de Pesquisa do CDHIS*, 23(1).
- COCKETT, Richard (1995). *Thinking The Unthinkable: Think-Tanks And The Economic Counter-Revolution 1931-1983*. Londres: Harpercollins Publishers.
- CRUZ, Sebastião Carlos Velasco (2007). *Trajetórias: Capitalismo Neoliberal E Reformas Econômicas Nos Países Da Periferia*. Marília: UNESP.
- DESAI, Radhika (1994). Second-Hand Dealers In Ideas: Think-Tanks And Thatcherite Hegemony. In *New Left Review*, pp. 27-27.
- DOHERTY, Bryan (2009). *Radicals for capitalism: A freewheeling history of the modern American libertarian movement*. PublicAffairs.
- DREIFUSS, Rene Armand (1987/1964). *A Conquista Do Estado: Ação Política, Poder E Golpe De Classe*. Rio de Janeiro: Vozes.
- DREIFUSS, René Armand (1989). *O jogo da direita na Nova República*. Rio de Janeiro: Vozes.
- GROS, Denise (2006). Institutos Liberais, Neoliberalismo E Políticas Públicas Na Nova República. *Associação Nacional De Pós-Graduação E Pesquisa Em Ciências Sociais*, 2006.
- HARVEY, David (2008). *O neoliberalismo: história e implicações*. Rio de Janeiro: Loyola.
- JAMES, Simon (1993). The Idea Brokers: The Impact Of Think Tanks On British Government. *Public Administration*, V. 71, N. 4, pp. 491-506.
- LOUREIRO, Maria Rita (1997). *Os economistas no governo: gestão econômica e democracia*. Rio de Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio Vargas.
- MIROWSKI, Philip; PLEHWE, Dieter (2009). *The Road From Mont Pelerin*. Harvard University Press.
- MORAES, Dênis (2010). Comunicação, hegemonia e contra-hegemonia: a contribuição teórica de Gramsci. *Revista Debates*, 4(1), p. 54.



- MORAES, Reginaldo (2015). A organização das células neoconservadoras de agitprop: o fator subjetivo da contrarrevolução. In VELASCO E CRUZ, Sebastião et al. (orgs.) *Direita Volver! O retorno da direita e o ciclo político brasileiro*. São Paulo:Perseu Abramo.
- RIBEIRO, Ricardo (2014). Decadência longe do poder: refundação e crise do PFL. *Revista de Sociologia e Política*, 22(49), pp. 5-37.
- RICH, Andrew (2005) *Think Tanks, Public Policy, And The Politics Of Expertise*. Cambridge University Press
- SALLUM JR., Brasília (1996). *Labirintos. Dos generais à Nova República*. São Paulo:Hucitec.
- STEDMAN JONES, Daniel (2014) *Masters Of The Universe: Hayek, Friedman, And The Birth Of Neoliberal Politics*. Princeton University Press.
- SMITH, James A. (1993). *Idea Brokers: Think Tanks And The Rise Of The New Policy Elite*. Simon And Schuster.
- STONE, Diane L. (2005). *Think Tanks And Policy Advice In Countries In Transition. Public Policy Research And Training In Vietnam*.
- THUNERT, Martin (2003). Conservative *Think Tanks* in the United States And Canada. In *Conservative Parties And Right-Wing Politics In North America*. VS Verlag Für Sozialwissenschaften, pp. 229-252.
- WEAVER, R. Kent (1989). The Changing World Of Think Tanks. *PS: Political Science & Politics*, V. 22, N. 03, pp. 563-578.

Anexo 1- Entrevistas

Alex Catharino frequentou o Instituto Liberal do Rio de Janeiro por mais de dez anos onde foi aluno particular do professor Og Leme. É historiador, vice-presidente do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista (CIEEP), editor-assistente da *COMMUNIO*, revista internacional de teologia e cultura, e pesquisador do Russel Kirk Center e no ano de 2017 passou a ocupar o cargo de editor-chefe da LVM Editora, ligada ao Instituto Mises Brasil (IMB). Entrevista realizada via Skype no dia 26 de julho de 2016.

Arthur Chagas Diniz foi vice-presidente do Instituto Liberal por mais de vinte anos. É formado em Engenharia Civil e Eletrônica pela Escola Nacional de Engenharia, tendo trabalhado na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) entre 1960 e 1964, no Ministério do Planejamento (1965-1967) e no *Jornal do Brasil* (1987-1988). Entrevista realizada no dia 11

de dezembro de 2015 no Rio de Janeiro em conjunto com o jornalista Lucas Berlanza.

Bernardo Santoro é mestre em Teoria e Filosofia do Direito (UERJ), foi diretor executivo e presidente do Instituto Liberal (2012-2016), coordenador do Centro Mackenzie para Liberdade Econômica (2016-2017) e assumiu no mês de setembro de 2017 o cargo de Secretário Geral do Partido Patriota. Entrevista realizada no Rio de Janeiro no dia 6 de outubro de 2015.

José Stelle é radicado e mora nos Estados Unidos desde 1985, foi tradutor e editor de opinião da revista Visão, de Henry Maksoud, cofundador do Instituto Liberal do Rio de Janeiro e coordenador da publicação de algumas das principais obras de F. Hayek no Brasil. Entrevista realizada via Skype no dia 23 de fevereiro de 2017.

Paulo Rabello de Castro é doutor em Economia pela Universidade de Chicago, diretor-Presidente da SR Rating, presidente do Instituto Atlântico e fundador da OSCIP Instituto Maria Stell. Integra o Comitê de Gestão do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), é um dos coordenadores do Movimento Brasil Eficiente (MBE), foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2016-2017) e no segundo semestre de 2017 assumiu a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Entrevista realizada em São Paulo no dia 26 de maio de 2017.

Winston Ling mora em Xangai há 13 anos, é empresário e mestre em economia pela Universidade de Chicago, tendo colaborado ativamente para a criação do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul (que depois se tornou o atual Instituto Liberdade) e do Instituto de Estudos Empresariais. Entrevista realizada pelo Skype no dia 18 de abril de 2017.

Fecha de recepción: 31 de mayo de 2017
Fecha de aceptación: 11 de septiembre de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



Julieta Grassetti

julietagrassetti@hotmail.com

Florencia Prego

prego.florencia@gmail.com

CONICET. Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Universidad de Buenos Aires

THINK TANKS, INTELLECTUALES Y DERECHAS. EL ROL DE LA FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES (FAES) EN VENEZUELA Y ARGENTINA (2015-2017)

Resumen: *El siguiente trabajo se propone analizar, desde la perspectiva de la sociología histórica, el papel que desempeña la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en América Latina. Particularmente, se analizan los casos nacionales de Argentina y Venezuela durante el período 2015-2017. Se examina la emergencia de los think tanks en ambos países y su vinculación con la fundación española, a los efectos de indagar acerca de las redes transnacionales que vinculan a las derechas a escala global a partir de nuevos formatos. Se parte del presupuesto que tanto el campo del conocimiento como el campo de la política funcionan como espacios específicos de poder. En ese sentido, se aborda la creciente incidencia de expertos/as y profesionales en los asuntos políticos a través de los think tanks, lo que conlleva a replantear el rol de los y las intelectuales y la función social que desempeñan en la reconfiguración de las estrategias políticas.*

Palabras clave: think tanks, FAES, intelectuales, Argentina, Venezuela

Think tanks, intellectuals and rights. The role of the Foundation for Analysis and Social Studies (FAES) in Venezuela and Argentina (2015-2017)

Abstract: *This paper aims to analyze, from a historical sociology perspective, the role played by the Foundation for Analysis and Social Studies in Latin America. In particular, are analyzed the national cases of Argentina and Venezuela during the period 2015-2017. It is examined the emergence of think tanks in both countries and its link with the Spanish foundation, in order to inquire into transnational networks that link rights on a global scale from new formats. The presupposition is that the field of knowledge as well as the field of politics work as specific spaces of power. In this respect, the increasing incidence of experts and professionals in political issues through think tanks will be addressed, which will lead to a reconsider the role of intellectuals and the social function they play in the reconfiguration of political strategies.*

Keywords: think tanks, FAES, intellectuals, Argentina, Venezuela



Introducción al problema

La discusión sobre los *think tanks*, su composición social y las funciones que desempeñan, se encuentra abierta en el campo de las ciencias sociales. Más allá de la formulación de ciertos consensos, siguen primando discusiones que imposibilitan una formulación teórica acabada sobre los mismos. Por lo tanto, no solo se debate la definición de los mismos, sino también el rol social que éstos desempeñan y en particular, su vinculación con la política. Esto conlleva a reavivar viejos, pero siempre vigentes debates, acerca de la relación de los/as intelectuales y los/as expertos con el campo político, en situaciones históricas determinadas.

Este trabajo consiste en una primera aproximación a las relaciones y vinculaciones que se construyen entre los *think tanks* de América Latina –tomando en particular los casos de Argentina y Venezuela– y un *think tank* de origen europeo, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Se propone aportar una mirada que permita considerar la relación entre intelectuales y política problematizando el papel desempeñado por estos tanques de pensamiento de forma centrada en particular en la incidencia de los *think tanks* en las estrategias políticas de la derecha regional.

A través de estos, la derecha latinoamericana expande sus discursos, los resultados de sus investigaciones, como verdades científicas, instala un nuevo lenguaje y una nueva forma de comunicación. Las redes sociales asumen el relevante papel de auspiciar como medio para comunicar y masificar sus ideas, propuestas y acciones. Por lo tanto, este trabajo contiene principalmente un relevamiento de las redes sociales oficiales, tanto de FAES como aquellos que se toman para el caso de Argentina y Venezuela.

En primer lugar, es menester señalar que el campo del conocimiento y el campo de la política no pueden abordarse de manera disociada, sino que existen múltiples vinculaciones que obligan a comprenderlos y abordarlos desde un pensamiento relacional. De esta manera, es preciso focalizar en las rupturas y continuidades, como también en las condiciones sociohistóricas en las cuales se produce esta relación. A su vez, se requiere observar las variaciones históricas de los actores involucrados: la emergencia de “nuevos” y la reconfiguración de “viejos” actores, y las disputas por las funciones sociales que desempeñan. Un caso concreto es el desafío de pensar a los/as profesionales y los/as



expertos y los/as intelectuales. ¿Son lo mismo? ¿Desempeñan las mismas funciones?

En segundo lugar, interesa analizar el rol de los *think tanks* en Argentina y Venezuela y a partir de los vínculos que desarrollan con FAES, para introducir una segunda dimensión de nuestro análisis: la vinculación de las derechas desde una dimensión transnacional. Es decir, comprendiendo que las estrategias y objetivos que persiguen superan las fronteras nacionales y regionales, y se enmarcan en una escala mayor.

La emergencia de gobiernos posneoliberales en América Latina en los albores del siglo XXI y la disputa hegemónica que se inaugura generan nuevas condiciones objetivas y subjetivas, que impactan tanto en los grupos de derecha que se encuentran en la oposición como aquellos que se mantienen en la dirección de los gobiernos. El posneoliberalismo produce una agudización del conflicto político (inter-intra naciones e inter-intra clases) siendo un parteaguas en la historia de nuestra región. En este contexto político y social se genera una nueva expansión de los *think tanks* en América Latina, y en particular, en los países abordados en este artículo, que desempeñan un rol central en la coyuntura estudiada y además representan intereses (políticos y económicos) concretos.

¿Qué rol desempeñan estos tanques de pensamiento en este contexto político? En primer lugar, adquirieron una relevancia central en la construcción de campañas políticas como también de candidatos; en la elaboración de discursos políticos y consignas, y en la reconfiguración del lenguaje. Es decir, los *think tanks* han tenido un rol activo en la elaboración de estrategias de acción e intervención política en el marco de la disputa hegemónica referida. Otro elemento a destacar, es que funcionaron (y funcionan) como medios y fuentes de financiamiento a través de políticas institucionales.

Los *think tanks* no pueden presentarse como un todo homogéneo, ya que se advierten múltiples heterogeneidades que los atraviesan tanto vertical como horizontalmente. Sin embargo, no debe eludirse una mirada integral: abordarlos en el marco de estrategias que superan las fronteras nacionales y hasta regionales. Los vínculos que tienen, las relaciones y los acuerdos que construyen dan cuenta de eso. Por esa razón, se opta por analizar a FAES dado que se trata de una fundación de origen español que ha desplegado redes y vínculos en toda América Latina y en particular Argentina y Venezuela,

incluyendo una multiplicidad de actores que implican intercambios y vínculos más amplios.

Para llevar adelante este análisis se toman los casos de Fundación Pensar y Fundación Libertad en Argentina y Fundación Idea, Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela y Primero Justicia en Venezuela, atendiendo a sus vínculos con FAES.

La reconfiguración del rol de los intelectuales en América Latina

La relación entre el campo del conocimiento y el campo de la política supone múltiples cambios y condicionamientos, como puede observarse a lo largo de la historia de América Latina. En este sentido, es preciso historizar el rol que han desempeñado los/as intelectuales en los procesos políticos de la región, para problematizar las funciones y los usos sociales del conocimiento en perspectiva histórica.

Desde una mirada de mediana duración, se parte de la década del 60 y 70, momento en el cual el campo intelectual y el campo de la política están estrechamente vinculados: la producción del conocimiento, la política y la ideología en este período se conciben de forma conjunta, y los/as intelectuales no se piensan despojados/as de la dimensión política.

Sin embargo, este proceso se interrumpe por las dictaduras instauradas en América Latina. Entre otras consecuencias sociales, los regímenes autoritarios provocan un distanciamiento entre el campo del saber y el de la política, brecha que se acrecienta aún más con la consagración del neoliberalismo en la década de los 90. La reconfiguración del lenguaje y el discurso de los/as intelectuales sintetizan el cambio político e ideológico que se abre con las transiciones a la democracia.

A fines de la década del 70 y mediados de los años 80, la relación entre los/as especialistas y la política comienza a operar con mayor preponderancia al interior de las “redes de asuntos” (*issue networks*), conectando agencias de gobierno, *think tanks*, centros de investigación, fundaciones privadas, universidades, empresas y organismos multilaterales (Camou, 2015). Emergen nuevos actores –desplazando a los existentes– bajo nuevos formatos y nuevas lógicas. Esto sucede en el marco de una crisis de representación política (o crisis de los partidos tradicionales) que se irá intensificando



a lo largo de la transición democrática.

A su vez, mientras que en los años 80 la producción de conocimiento queda vinculada al campo intelectual, como un espacio que se constituye entre el/la intelectual con la universidad y no por fuera del ámbito académico, desde los 90 cambia este paradigma y la forma en que se enlaza el conocimiento científico con la sociedad. Así, la investigación se aleja del ámbito universitario y es evaluada en torno a su eficiencia práctica.

Con las reformas neoliberales se inicia un proceso de privatización de la investigación que cambia la manera de producir conocimiento. Se caracteriza por vaciar la investigación de sus contenidos sustantivos y por un aumento de la preocupación por el formato y la forma de procesar la información. La discusión teórica y crítica pierde relevancia en favor de la producción de conocimiento práctico tendiente a resolver problemas e influir en las decisiones (Botto, 2011). En este contexto, el conocimiento deja de ser exclusivo de los/as intelectuales.

De esta manera, se advierte una doble crisis que se gesta desde fines de la década del 80, de carácter cultural y política, donde tanto los/as intelectuales como partidos políticos son desplazados abriendo paso a nuevos actores que disputan sus funciones y cánones de legitimidad: profesionales, expertos/as, técnicos/as, medios de comunicación. En el marco de la hegemonía neoliberal, que se distingue por la crisis de las ideologías y la consagración de paradigmas que buscan postular el fin de la historia, la política como herramienta de transformación queda relativizada cuando no neutralizada. Nuevas lógicas pretenden instaurarse anulando a los sujetos políticos y sus identidades como agentes de acción social.

Surgimiento y expansión de los *think tanks*

En primer lugar, es necesario señalar que no existe un tipo ideal de *think tanks* que comprenda la integralidad y logre sistematizar los elementos que los componen en función de un determinado corpus de ideas. Diversos/as autores/as que buscan aproximarse a una definición coinciden en caracterizarlos como institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas, todas ellas sin fines de lucro, orientados a la investigación en temas públicos y/o la promoción de políticas

públicas con el fin de influir sobre el proceso de formulación de las mismas (Garcé, 2009; Uña, Lupica y Strazza, 2010; Thompson, 1994). Estos mismos/as autores/as coinciden en que su surgimiento tiene lugar en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa y Estados Unidos ante la demanda de asesoramiento de los gobiernos en política exterior en el marco del nuevo escenario que plantea la Guerra Fría.

El surgimiento y la expansión de los *think tanks*, en el mundo en general y en América Latina en particular, se vincula en forma directa con momentos de inflexión histórica. En nuestra región, este proceso se da en pleno contexto de inestabilidad política y de consagración de las dictaduras militares.

Tras la crisis neoliberal y la emergencia de gobiernos posneoliberales que se produce en el siglo XXI, se profundiza en la región una disputa hegemónica combinada con una ofensiva por parte de los sectores opositores que apelan a recuperar el poder político y la dirección de los gobiernos. En este momento de agudización de los conflictos políticos se produce una nueva expansión de los *think tanks*.

La configuración de una red transnacional que vincula *think tanks* supone objetivos políticos y económicos comunes, y a su vez, una articulación de lenguajes y discursos con cierta pretensión de homogeneidad. Su rol se ha orientado a brindar elementos para la configuración de estrategias políticas y comunicacionales, como también a operar como fuente de financiamiento y de recursos humanos. Las organizaciones transnacionales privadas ligadas a los *think tanks* y a los partidos de derecha neoliberal llevan a cabo una contraofensiva ideológica en América Latina (Fischer y Plehwe, 2013). De esta manera, se puede afirmar que son actores políticos (Mendizábal y Sample, 2009) y, por lo tanto, no pueden pensarse escindidos de este campo.

Los *think tanks* funcionan como un refugio de intelectuales y actores políticos de derecha durante los gobiernos posneoliberales donde reclutar y capacitar nuevo personal con miras al futuro. Muchas son las organizaciones privadas que operan en América Latina como fruto del trabajo coordinado que llevan adelante las derechas. Debido a que cada una de estas organizaciones se inserta en una extensa red, el resultado total es mayor que la suma de sus partes individuales. Tomando algunos datos de la investigación de



Chafuen (citado en Fischer y Plehwe, 2013:76), si para 1975 había apenas siete *think tanks* neoliberales, para 2005 esta cifra ya rondaba los 35. De las cinco revistas y otras publicaciones periódicas del «libre mercado» que se editaban en esos años, para 2005 sumaban doce, agregando siete canales de TV y estaciones de radio impulsoras de la causa neoliberal que en 1975 eran inexistentes.

Según Garcé (2009), entre las funciones de los *think tanks* se encuentran la generación y difusión de información, el análisis sobre los problemas de gobierno y políticas públicas, y el uso de la evidencia obtenida en las investigaciones para incidir en forma directa o indirecta en las políticas públicas y privadas. Desde el marco teórico que propone el autor, los mismos pueden concebirse como legitimadores de las propuestas y demandas que promueven los partidos políticos, además de proveer cuadros para éstos, para los gobiernos y para el sector privado.

Por lo tanto, se parte del presupuesto de la dificultad para construir un tipo ideal de *think tanks* dado que se constituyen por organizaciones de disímiles características (ONG, empresariales, académicas, por mencionar algunas) y con diversas funciones (formulación de propuestas, legitimación de políticas, espacios de debate, provisión de cuadros y *protección* de intelectuales e ideas). Sin embargo, es incuestionable su consolidación como actores políticos.

Según Thompson, se observan cuatro grandes categorías que sirven para la clasificación:

Centros de Investigación Privados: instituciones de investigación fundados con capital privado dedicadas a la realización de estudios principalmente de carácter académico.

Centros Universitarios: instituciones de educación superior que sirven a la vez de espacio para el debate de ideas y la formación de dirigentes políticos y económicos, en ciertas ocasiones mediante la creación de centros y/o grupos de estudios específicos.

Centros de Estudio y Gestión: fundaciones que intervienen activamente en el proceso de las políticas públicas y responden o están relacionadas con un líder o partido político.

Advocacy Groups: organizaciones que centran sus actividades en la promoción de derechos específicos, el control de las acciones del Estado y en la canalización de la

demanda cívica (1994: 13-14).

Otro factor de clasificación es el vínculo con los partidos políticos, donde se distinguen dos tipos: los *think tanks* externos como los institutos universitarios, centros privados, ONG, entre otros, y los *think tanks* internos, aquellos creados por líderes, fracciones o partidos políticos, y que se encuentran directa o indirectamente vinculados con estructuras partidarias.

A su vez, se clasifican teniendo en consideración la función que cumplen, se retoma la distinción que hace Mercedes Botto (2011) de las fundaciones partidarias, donde distingue aquellas (i) orientadas a la generación de insumos para las políticas públicas; las (ii) orientadas a la promoción del debate político y la reflexión teórica, y las (iii) orientadas a la formación de cuadros

El conocimiento y la información que producen los *think tanks* se convierten en una fuente de poder, permitiendo modificar el comportamiento político y ejerciendo influencia en las políticas públicas. Siguiendo esta corriente, los/as intelectuales conforman una red de expertos/as con una visión común sobre las ideas a través de las cuales se intenta influir en la política. Por eso es útil analizar la relación de los *think tanks* con la política, dado que éstos asumen un rol en el desarrollo y difusión de conocimientos para influenciar en las agendas de gobierno.

FAES y las redes de *think tanks*

FAES es una fundación española presidida por José María Aznar, de carácter privado y sin “ánimo de fines de lucro” que trabaja en el “ámbito de las ideas”. Tal como sostiene el sitio oficial, su objetivo es “nutrir el pensamiento del centro liberal reformista con propuestas políticas que influyen en la toma de decisiones y repercuten en la opinión pública” (FAES, sitio web). Sus principales valores consisten en la defensa de la libertad, la democracia, el Estado de derecho, el libre mercado y el humanismo occidental, que promueven a través de seminarios, conferencias, escuelas de verano y programas de formación de líderes.

Partiendo del planteo de Botto (2011), los *think tanks* en Europa surgen por iniciativa y demanda de las administraciones públicas o vinculadas a los partidos políticos; funcionan como grupos de asesoramiento político,



de evaluación de políticas y planificación que buscan mejorar la agenda pública. Entre los objetivos de FAES se encuentran los de generar ideas (a través de seminarios, centros de investigación, observatorio económico, centro de estudios); difundir ideas (conferencias, libros, informes estratégicos, editorial, publicaciones centros de documentación); formación (cursos de formación, campus, becas) y creación de redes (relaciones internacionales y programa de visitantes iberoamericanos).

Se retoma el enfoque de las *epistemic communities* y las *policynetwork* de Haas que presentan Uñay Labaqui (2004) para pensar los *think tanks* internos como una red transnacional que se expande en América Latina vinculada al pensamiento neoliberal. Según este enfoque, son considerados como grupos de intelectuales motivados/as políticamente que influyen sobre las burocracias y los/as tomadores/as de decisiones en base a su experiencia. Su estudio no se centra en la organización individual sino en las vinculaciones entre intereses económicos, académicos, culturales y políticos.

FAES es una fundación privada ligada al Partido Popular (PP) y cuenta con un presupuesto anual de cinco millones de euros que recibe de subvenciones públicas, donativos y aportes privados. Es un *think tank* creado el 11 de noviembre del 2002 como confluencia de cinco fundaciones: Fundación Casanovas del Castillo, Popular Iberoamericana, Popular Iberoamericana de Análisis y Estudios Sociales, Popular Iberoamericana de Estudios Europeos, Instituto de Formación Política.

La fundación creó una extensa red de relaciones internacionales a través de fundaciones y *think tanks* en Europa, África, Estados Unidos y América Latina con quienes coordinan actividades para difundir las ideas y proyectos del pensamiento liberal. Uno de los principales objetivos de esta vinculación inter-*think tanks* es “promover los valores de la democracia liberal en Iberoamérica” (FAES, sitio web)

La vinculación de FAES con los think tanks de Venezuela

En Venezuela, FAES tiene relación con Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela y Primero Justicia.

De acuerdo a su sitio oficial, IDEA es un foro internacional no gubernamental integrado por 37 ex jefas/es Estado y

de Gobierno, “demócratas respetuosos del principio de la alternabilidad durante sus desempeños” (IDEA, sitio web), entre ellos se encuentra José María Aznar. Es patrocinada por la Fundación IDEA-Democrática. Este foro surge en abril de 2015 de modo *ad hoc* ante la situación política suscitada en Venezuela, en lo que ellos consideran “la ruptura del orden constitucional y democrático”. Su nacimiento se sella con la Declaración de Panamá el 9 de abril de 2015 en el marco de la VII Cumbre de las Américas.

Al igual que FAES, postula los siguientes valores: la democracia, el Estado de Derecho, y la garantía y tutela efectiva y universal de los derechos humanos. De esta manera

... realiza programas y actividades para orientar a las sociedades civiles y políticas de las Américas y España, recomendándoles medidas y soluciones que permitan la modificación de las tendencias que incidan negativamente sobre la citada tríada de la libertad o que sean sus desviaciones. Cooperera, en fin, con el fortalecimiento de los elementos esenciales de la misma democracia y los componentes fundamentales (IDEA, sitio web).

Dos elementos son de por sí llamativos. Por un lado, la sede que publican en su sitio oficial que data en Miami, Florida (Estados Unidos). Por otro lado, la composición de ex mandatarios que la integran que, por el rol que han desempeñado en los procesos de América Latina, es necesario destacar: Oscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Belisario Betancur (Colombia), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Felipe Calderón (México), Armando Calderón Sol (El Salvador), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Jean Chrétien (Canadá), Laura Chinchilla (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina), Eduardo Duhalde (Argentina), Sixto Durán Ballen (Ecuador), Vicente Fox (México), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile), Felipe González (España), Lucio Gutiérrez (Ecuador), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Ricardo Lagos (Chile), Ricardo Martinelli (Panamá), Hipólito Mejía (República Dominicana), Lui Alberto Monge (Costa Rica), Mireyra Moscoso (Panamá), Gustavo Noboa (Ecuador), Alberto Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Jorge Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Julio Sanguinetti (Uruguay), Alejandro Toledo (Perú), Álvaro Uribe (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).



Tal como lo explicita en su presentación, IDEA opera como una fundación o *think tank* cuyo principal eje de articulación radica en la denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro, desde una dimensión internacional. Materializan una convocatoria a los organismos internacionales para que intervengan so pretexto de la ruptura del orden institucional, la vulneración del Estado de derecho y la violación a los derechos humanos. Los análisis de los archivos de prensa de IDEA constan principalmente de documentos y denuncias contra Venezuela.

Por otro lado, FAES se vincula con el Partido Primero Justicia, liderado por Henrique Capriles, uno de los principales opositores al gobierno, y que a su vez integra la Mesa de la Unidad Democrática. El partido nace en el 2000 y postula los valores de “la libertad, el progreso, la igualdad, la solidaridad, la justicia y la participación”. De acuerdo a su sitio oficial, “Primero Justicia significa que, para construir una sociedad donde haya justicia para todos, es indispensable crear las condiciones materiales, espirituales e institucionales para que todos tengan oportunidades y nadie tenga privilegios” (Primero Justicia disponible en <http://www.primerojusticia.org.ve/cms/>. Última consulta el 25/05/2017). Capriles es uno de los dirigentes políticos que construyó la oposición para enfrentarse tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, y cuenta con una importante referencia a nivel mediático e internacional.

Por último, entre sus redes se encuentra la Mesa de la Unidad Democrática (2008), que es el espacio de articulación de los partidos de derecha opositores: Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, COPEI, La Causa Radical, Alianza Bravo Pueblo, Movimiento al Socialismo y Vanguardia Popular. Un mes después, se sumaron Movimiento Republicano, Solidaridad Independiente, Unión Republicana Democrática, Movimiento Laborista, Democracia Renovadora, Fuerza Liberal y Visión Emergente.

Los principios de la Mesa de la Unidad Democrática son: el fortalecimiento del sistema democrático, la garantía de los derechos humanos, la consolidación de la soberanía nacional y la promoción de una sociedad productiva, justa, libre y el mayor bienestar para sus ciudadanos. Se postula como la alternativa democrática, donde la condición de posibilidad radica en la unidad de los “venezolanos militantes o no de partidos políticos, relacionados o no con organizaciones

sociales, opositores, disidentes o descontentos con la situación el país, de cualquier región o condición social, de cualquier edad o género” (Mesa de Unidad Democrática. Disponible en <http://www.unidadvenezuela.org/sobre-la-mud/>. Última consulta el 25/05/2017). En las elecciones de diciembre de 2015, la MUD obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional.

Desde la plataforma internacional se ha promovido una campaña para denunciar la violación a los derechos humanos y la existencia de presos políticos. Es menester destacar que han legitimado la violencia paraestatal como también alentado acciones que, lejos de promover la paz social, profundizan la crisis política e institucional.

La vinculación de FAES con los think tanks de Argentina

Entre los *think tank* de Argentina pertenecientes a esta red se hayan la Fundación Pensar y la Fundación Libertad.

La primera fue fundada en 2005 y se relanza en 2010 como centro de políticas públicas. La particularidad es que esta vez lo hace como “usina de ideas” del partido Propuesta Republicana (PRO). Se trata entonces, de un *think tank* partidario. Su objetivo fue el armado de planes de gobierno y el apoyo a la candidatura de Mauricio Macri en las elecciones de 2011. Este objetivo se proyectó con miras a las elecciones presidenciales de 2015 instalando referentes del seno del PRO y logrando permear con un discurso pospolítico que logró construir consenso electoral. Además, contribuyeron en la construcción de redes de conocimiento que ampliaron sus vínculos político-institucionales. Entre estas redes se encuentra FAES.

A su vez, la fundación permitió la recepción de aportes financieros evitando que se hicieran directamente al PRO. Durante toda la campaña electoral de 2015, acompaña desde sus redes sociales la candidatura de Macri publicando las actividades realizadas, videos e imágenes de las mismas. Al mismo tiempo, desde su página oficial de Facebook, se presentan inscripciones a cursos dictados tales como “Construcción ciudadana” y “Formación de líderes locales” donde se alienta la participación para desarrollar un “laboratorio de ideas sobre los gobiernos locales y políticas públicas locales” (Fundación Pensar Facebook. Disponible en <https://www.facebook.com/fundacionpensar.org/>. Última consulta 25/05/2017).



De cara al balotaje del 2015, donde se enfrentaban Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, y Mauricio Macri, por la Alianza Cambiemos, la fundación lanza una campaña denominada “Multiplica nuestros mensajes” que apelaba a “donar tu estado de Facebook o Twitter para seguir sumando gente a esta ola de cambio” (Ídem). Otro elemento interesante de este sitio es que además de las actividades realizadas por Mauricio Macri, promocionan aquellas que la fundación llevaba adelante junto con Jorge Triaca y su presidente Francisco Cabrera. No es casual que, una vez que triunfa Cambiemos (en diciembre del 2015), estos dos integrantes pasen a formar parte de su gabinete. El primero como ministro de Trabajo y el segundo como ministro de Desarrollo Productivo.

Luego del triunfo electoral, se publican cuestiones referentes a las primeras medidas del gobierno y a fines de diciembre de 2015 cesa la actividad de Fundación Pensar en Facebook. Si bien dicha red social sigue abierta, se encuentra inactiva desde esa fecha hasta la actualidad. El Twitter oficial funcionó hasta pocos días después del triunfo en el balotaje del 22 de noviembre de 2015. Lo mismo sucede en el caso de la página web dado que actualmente el servidor está caído, por lo que no existe (Fundación Pensar. Disponible en <http://www.fundacionpensar.org/>. Última consulta 27/05/2017). Por último, en la oficina donde radica la Fundación Pensar (Balcarce 412, CABA), que es a su vez sede nacional del PRO, nadie atiende el teléfono ni existe la opción de recepción de mensajes.

Al parecer, esta fundación, que recibe fondos directamente del PRO para el diseño de planes de gobierno, entre otras funciones, se habría quedado sin gente y se encontraría cerrada. Como se indicó anteriormente tanto su presidente como algunos de sus integrantes, Federico Sturzenegger, Iván Petrella, Juan José Aranguren y Nicolás Dujovne, hoy en día ocupan funciones ejecutivas en el gobierno (“La Fundación Pensar se quedó sin gente y está cerrada”. Disponible en <http://www.lapoliticaonline.com/nota/95600/>. Última consulta 25/05/2017). Las últimas noticias indican que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quiere disolver el *think tank* que integraron gran parte de los actuales funcionarios del macrismo (Marcos Peña quiere disolver la Fundación Pensar y el G25 para afiliar dirigentes al PRO. Disponible en <http://www.lapoliticaonline.com/nota/100365/>. Última consulta 25/05/2017).

Sin embargo, se observa un incremento en la actividad de las sedes de Fundación Pensar a nivel nacional. La apertura de éstas se da en distintos momentos Mendoza (2012), Córdoba (2013), Corrientes (2014) y se extiende a lo largo y ancho del país. En 2017 aumenta la difusión de actividades de Junín, en Santa Fe, Ushuaia y Río Negro. El 30 de abril del mismo año se inaugura una sede en Formosa.

El PRO en las últimas elecciones obtiene la victoria no solamente del Ejecutivo sino también de la provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires. La intención de expandir esta “usina de ideas” en el resto de las provincias, puede obedecer en parte, a la valoración positiva respecto de los resultados obtenidos en Buenos Aires. Por lo tanto, se implementan con el objetivo de “diseñar los planes de gobierno y preparar a los equipos técnicos para la gestión pública (nacional, provincial, municipal)” buscando “generar consensos de política pública entre académicos, trabajadores, empresarios, políticos y equipos de gobierno para crear nuevas oportunidades para los argentinos” (Fundación Pensar Santa Fe. Disponible en http://www.facebook.com/pg/fundacionpensarsantafe/about/?ref=page_internal. Última consulta 25/05/2017).

El 22 de octubre de 2017 tendrán lugar las elecciones legislativas en Argentina donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del total de la Cámara de senadores y cargos provinciales y municipales. La importancia que adquiere Fundación Pensar en las provincias no escapa a la nueva coyuntura electoral. Por lo que, esta fundación se vuelve una pieza clave en la estructura partidaria del PRO.

La segunda fundación argentina que figura en las redes de FAES es Fundación Libertad. Esta organización fue creada en 1988 y se encuentra situada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Se autodefine como una “entidad privada sin fines de lucro, que desde hace 29 años trabaja en la investigación y difusión de temas de políticas públicas, dirigidas en particular a lo socioeconómico y empresarial, promoviendo las ideas de la libertad, el republicanismo, la democracia y el Estado de Derecho” (Fundación Libertad. Disponible en <http://libertad.org.ar/web/>. Última consulta 25/05/2017).

La institución coordina la Red de Fundaciones Argentinas (Refundar) que agrupa cerca de una decena de instituciones afines a Red Libertad en distintos puntos de



Argentina: Mar del Plata, Tucumán, Salta, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Ushuaia, Buenos Aires, Bahía Blanca y Mendoza. A su vez integra la Red Federal de Políticas Públicas que está compuesta por más “de 70 referentes empresariales y profesionales a nivel nacional y *think tanks* del interior del país” (Fundación libertad. Disponible en <http://libertad.org.ar/web/nuestras-redes.php>. Última consulta 25/05/2017). Al mismo tiempo, es miembro de Red Liberal de América Latina y de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), esta última presidida por Mario Vargas Llosa. Este dato no es menor ya que su presidente, Gerardo Bongiovanni, integra el directorio de la fundación junto con Vargas Llosa. En el trabajo de Daniel Mato *Think tanks, fundaciones y profesionales en la promoción de ideas (neo) liberales en América Latina* se afirma que la FIL es constituida en un momento que sus impulsores caracterizan como “de grave incertidumbre sobre la evolución política, social y económica del continente iberoamericano” y “tiene como principal objetivo la defensa y promoción de los principios de la Libertad, la Democracia y el Estado de Derecho”. El propósito de esta fundación es influir en la agenda internacional y apoyar a sus institutos y fundaciones. Para lo que difunde ideas y suministra información acerca de la realidad iberoamericana y sus relaciones con Estados Unidos, España y Europa en general (2007: 31).

En una declaración respecto de la realidad política mundial la Fundación Internacional para la Libertad afirma que “FIL constituye una respuesta a la ola neopopulista cuyo triunfo constituiría un grave retroceso en el proceso de modernización de Iberoamérica y cuya propagación es el resultado de la falta de implantación de los ideales de la democracia liberal en esa región” (32).

Fundación Libertad desde 2007 entrega un reconocimiento anual llamado Premios Libertad. Cabe indicar que este año lo obtuvieron el periodista Carlos Pagni, el expresidente de Chile Sebastián Piñera y la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de su presidente, Alberto Padoán. En ocasiones anteriores, esta distinción fue para el diario *La Nación*, José Aranguren, ex presidente de la petrolera Shell y actual ministro de Energía y Minería de la Nación, Marcelo Longobardi, Jorge Lanata y Mario Vargas Llosa. Es interesante que entre aquellos que obtuvieron este reconocimiento se encuentra, además de los listados anteriormente, el presidente de FAES, José María Aznar.

Reflexiones preliminares

Los resultados que aporta el análisis de los casos de Venezuela y Argentina permiten corroborar el presupuesto de que los *think tanks* crecen y se expanden en momentos de agudización del conflicto político. Pese a que la situación política de los casos estudiados se posiciona en las antípodas, se advierten acciones y esquemas de pensamiento comunes, con estrategias distintas en función de objetivos políticos diferentes.

Los vínculos de FAES tanto en Venezuela como en Argentina en 2015 y en la actualidad permiten contrastar algunos elementos presentes en este artículo. Durante 2015, primaba la preocupación por el desenlace de las elecciones presidenciales en Argentina (noviembre de 2015) y Venezuela se encontraba en las vísperas de las elecciones legislativas (diciembre de 2015).

En el caso de Argentina, los *think tanks* que tenían vinculación con FAES en 2015 eran Pensar Argentina, Red Libertad, Atlas 1853 y Asociación Civil de Estudios Populares por Argentina. Sin embargo hoy, se encuentra que oficialmente tiene vínculos con la Fundación Pensar y Fundación Libertad. En el caso de Venezuela, se observa algo similar. Mientras que anteriormente se destacaban la Fundación Justicia y Democracia, SUMATE, IFEDEC, CEDICE; en la actualidad figuran Iniciativa Democrática de España y las Américas, el partido Primero Justicia y la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de partidos de derecha de la oposición.

En 2017 el caso venezolano se caracteriza por un contexto de agudización del conflicto político y social en el marco de una profunda crisis económica, donde los *think tanks* operan como una plataforma nacional e internacional a la que apela la derecha para construir y vehiculizar sus reclamos y denuncias, para financiar sus campañas y, sobre todo, para poner en el centro de la escena internacional el conflicto.

Mientras que en el caso de Argentina, se puede advertir el proceso inverso, no por el rol que asuman sino por el viraje político que transita el país. De esta manera, una de las principales usinas que auspició y motorizó al Partido Propuesta Republicana (PRO), hoy está prácticamente desarticulada en Buenos Aires. Se había mencionado que los *think tanks*, entre otras características, operaban como fuente de recursos humanos, cuestión que se corrobora con la experiencia de este caso nacional.



A su vez, se reafirma el rol de los *think tanks* como actores políticos. En el caso de Venezuela, a través de la incidencia que tienen en la construcción de una campaña mediática nacional e internacional que construye sentido y realidad social. Esto queda expresado, por ejemplo, en la composición de la fundación IDEA integrada por los/as jefes/as de Estado provenientes de partidos y/o grupos de la derecha conservadora; como también en el hecho de que se haya conformado *ad hoc* por la agudización del conflicto político. En cuanto a Argentina, lo mismo sucede con los *think tanks* relevados, sobre todo si se tiene en cuenta que los miembros que las integran son actualmente funcionarios de gobierno a nivel nacional.

La coordinación internacional de los *think tanks* como exponentes de estos sectores y grupos políticos da cuenta de que la configuración de las estrategias de las derechas en América Latina supera las fronteras nacionales y hasta regionales. Atender a los vínculos desde una dimensión transnacional permite comprender la inflexión histórica que implicaron los procesos posneoliberales en los países de la región.

Por lo tanto, se entiende que los *think tanks* operan como instrumentos para vehicular las estrategias políticas de las derechas desde una dimensión global, asumiendo un rol cada vez más protagónico en la esfera social. La imposibilidad de las derechas de reconfigurarse bajo otras lógicas y procedimientos en función de construir legitimidad social, denota el cambio político inaugurado con la emergencia de los gobiernos posneoliberales en América Latina. Ya sea en aquellos casos donde hay una continuidad en los gobiernos como en aquellos donde se produce una ruptura, la correlación de fuerzas condiciona la totalidad del mapa. La emergencia de nuevos actores como también de nuevas estrategias tanto en el plano político como en el plano del conocimiento expresa la capacidad de adaptación que han esgrimido en función de un cambio de época.

El análisis de los vínculos de FAES con *think tanks* de Argentina y Venezuela se ve afectado por el nuevo mapa regional. El rol que éstos tuvieron en Argentina durante la campaña de Macri dista bastante del que tienen con el PRO en el poder. Lo mismo para el caso venezolano, donde el apoyo a partidos opositores por parte de FAES comienza a darse sin la necesidad de mediar a través de estas usinas de pensamiento, como lo hacían anteriormente.

Bibliografía

- BOTTO, Mercedes (2011). "Think tanks" en América Latina: radiografía comparada de un nuevo actor político. En MENDIZÁBAL, E. y CORREA ASTE, N. (eds.). *Vínculos entre conocimiento y política: el rol de la investigación en el debate público en América Latina*. Lima, Perú: CIES y Universidad del Pacífico, pp. 83-112.
- CAMPIONE, Daniel (2004). *Intelectuales y política. Una relación en tiempos difíciles*. Disponible en: <http://www.rebelion.org/docs/5948.pdf>
- CAMOU, Antonio (2015). Intelectuales, expertos y políticas públicas en la Argentina democrática. Una mirada desde el espejo latinoamericano. En Dossier Intelectuales, expertos y políticas públicas en la Argentina democrática. Una mirada desde el espejo latinoamericano. En *historiapolitica.com*, N° 59.
- DÍAZ-TENDERO, Eolo (2009). Nuevas formas de representación y proyecto político. En *Nueva Sociedad*, N°220, Caracas, marzo-abril 2009, pp. 29-40.
- FISCHER, Karin y PLEHWE, Dieter (2013). Redes de think tanks e intelectuales de derecha en América Latina. En *Nueva Sociedad*, N° 245, mayo-junio de 2013 (pp. 71-86). Disponible en http://www.nuso.org/upload/articulos/3941_1.pdf
- GARCÉ, Adolfo (2009). Panorama de la relación entre think tanks y partidos políticos en América Latina. Estudio marco. En Mendizábal, E. y Sample, K. (comps.) *Dime a quién escuchas... Think Tanks y partidos políticos en América Latina*. IDEA Internacional - ODI.
- GARCÉ, Adolfo (2014). Regímenes Políticos de Conocimiento: Construyendo un nuevo concepto a partir de eventos de cambio seleccionados en políticas públicas del gobierno de Tabaré Vázquez (Uruguay, 2005-2009). En *Revista de Ciencia Política*, 34, 2. Disponible en: <http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v34n2/art05.pdf4>, pp.39-458.
- GONZALES ALVARADO, Osmar (2013). El intelectual latinoamericano: ¿continentalismo con sociedades fragmentadas? En *Nueva Sociedad*, N° 245, mayo-junio de 2013, Caracas, pp.87-98.
- MALDONADO FERMÍN, Alejandro (2007). Instituciones clave, producción y circulación de ideas (neo) liberales y programas de ajuste estructural en Venezuela, 1989-1998. En GRIMSON, Alejandro. *Cultura y neoliberalismo*.



- Buenos Aires:CLACSO, pp. 43-60. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/grim_cult/Maldonado.pdf
- MATO, Daniel (2007). Think tanks, fundaciones y profesionales en la promoción de ideas (neo) liberales en América Latina. En GRIMSON, Alejandro. *Cultura y Neoliberalismo*. Buenos Aires:CLACSO. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/grim_cult/Mato.pdf
- MENDIZÁBAL, Enrique, y SAMPLE, Kristen (comps.) (2009). *Dime a quién escuchas... Think Tanks y partidos políticos en América Latina*. IDEA Internacional – ODI. Disponible en: http://www.idea.int/publications/thinking_politics/upload/IDEA-think-tanks-y-partidos-politicos-en-america-latina.pdf
- MENDIZÁBAL, Enrique, y CORREA ASTE, Norma (eds.) (2011). *Vínculos entre conocimiento y política: el rol de la investigación en el debate público en América Latina*. Lima, Perú: CIES y Universidad del Pacífico. Disponible en: http://www.redunitas.org/Think_tanks_en_Bolivia.pdf
- QUIROGA, Hugo (2003). Intellectuales y política en Argentina. En HOFMEISTER, Wilhelm, y MANSILLA, Hugo (eds.) *Intellectuales y política en América Latina. El desencantamiento del espíritu crítico*. Rosario: Homo Sapiens, pp. 199-228.
- THOMPSON, Andrés (1994). *Think tanks en la Argentina. Conocimiento, instituciones y política*. Buenos Aires: CEDES.
- UÑA, Gerardo, COGLIANDRO, Giselly LABAQUI, Juan (2004). *Políticas Públicas y toma de decisiones: los think tanks en Argentina*. Fundación Konrad Adenauer. Disponible en: <http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/23353.pdf>
- UÑA, Gerardo, LUPICA, Carina, y STRAZZA, Luciano (2009). Think tanks y pobreza en América Latina: el rol de los pensadores en el Mercado de las políticas sociales en Argentina, Chile y México. En *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, N° 44, Junio, Caracas. Disponible en https://mpr.a.ub.uni-muenchen.de/21273/1/MPRA_paper_21273.pdf
- UÑA, Gerardo, Lupica, Carina, y STRAZZA, Luciano (2010). *Think tanks, decisores gubernamentales y actores políticos: factores críticos para fortalecer el vínculo entre el conocimiento y las políticas públicas en Argentina*. Buenos Aires: Fundación Konrad Adenauer-Fundación Siena. Disponible en: http://www.kas.de/wf/doc/kas_21991-1522-1-30.pdf?110223155100

Fecha de recepción: 5 de junio de 2017
Fecha de aceptación: 28 de agosto de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



Ezequiel Saferstein

CONICET. Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Argentina

esferstein@sociales.uba.ar

LA EDICIÓN COMO INTERVENCIÓN CULTURAL, COMERCIAL Y POLÍTICA: BEST-SELLERS POLÍTICOS DEL DIRECTOR DE RANDOM HOUSE-SUDAMERICANA EN EL KIRCHNERISMO

Resumen: El ciclo político conducido por los gobiernos kirchneristas se caracterizó por la emergencia de un clima cultural que involucró sectores políticos, culturales e intelectuales. Con respecto al mercado editorial, las grandes editoriales hegemonizaron la producción y difusión sobre coyuntura política. El éxito de estos libros permite la pregunta sobre el papel de los actores encargados de seleccionar escritores y temáticas. Sus prácticas revelan relaciones entre espacios de producción, circulación de ideas y su recepción atravesada por el mercado. En este trabajo se analizan las condiciones en las que los agentes editoriales intervienen en la producción privilegiada de visiones del mundo, mediante la construcción de autores y un plan editorial donde estos géneros cobran importancia. Nos enfocaremos en la trayectoria del director editorial de Random House entre 2005-12, su posición en la empresa, su catálogo y el capital social que acumuló. A partir de entrevistas, explora los modos de intervención intelectual y política que este mercado desarrolla en la actualidad.

Palabras clave: libros políticos, campo editorial, editores, intervención política, mercado de libros

Publishing as a cultural, commercial and political intervention: political best sellers published by the managing editor of Random House-Sudamericana during the Kirchner and Fernandez administrations

Abstract: The Kirchner and Fernández de Kirchner's governments were developed in a cultural climate in which political, cultural and intellectual sectors were involved. In this period, the biggest publishers led the production and distribution of books about political conjuncture. The success of these books allows us to pose a question about the role of the agents in charge of the selection of writers and topics to be published. Their practices reveal relationships between the spaces of production and circulation of ideas and their reception crossed by the market. In this paper we analyse the conditions in which the editors take part in the production of visions of the world, through the construction of authors and an editorial plan where these genres gain importance. We will focus on the career of the managing editor of Random House between 2005 and 2012, taking into account his position in the company, his catalogue and the social capital he accumulated during his career. Based on a series of interviews, this exemplary case allows us to explore how intellectual and political intervention develops today.

Keywords: political books, publishing field, editors, political intervention, book market



Introducción¹

Durante las últimas décadas los grandes grupos editoriales de capital transnacional consolidaron su posición en el mercado editorial global. Esto se vio reflejado en su peso mayoritario en la producción, circulación y venta de libros. La exigencia de rentabilidad que la lógica financiera propia de estas empresas impuso a los actores del campo editorial convirtió la producción de *best sellers* en un imperativo (Dujovne, 2016; Thompson, 2012). En este marco, en la Argentina de los últimos años se registró un aumento en la producción, circulación y consumo de libros publicados principalmente por los grandes grupos editoriales, como Random House, Planeta y Ediciones B².

Entre los libros publicados, resultan particularmente relevantes –en términos de éxito editorial, impacto mediático y resonancia pública– aquellos que abordaron temas vinculados a la coyuntura sociopolítica atravesada por los gobiernos kirchneristas (2003-2015)³. En este segmento aparecen, por un lado, libros referidos a sucesos puntuales atados a la coyuntura. Como ejemplo de este tipo de *instant book* se puede mencionar *Los secretos de la valija*, de Hugo Alconada Mon, y *El Rekaudador*, de Omar Lavieri, dedicados a abordar periódicamente distintos casos de corrupción política. Por otro lado, se incluyen otros libros que, con una preparación mayor, apuntan a discutir ciertas problemáticas que promovieron debates públicos más amplios. Así, fueron muy exitosos los libros que revisaron el accionar militar durante la última dictadura militar y, a su vez, criticaron las políticas de Derechos Humanos del kirchnerismo⁴, como *Nadie fue*, de Juan Bautista Yofre, y *Operación Traviata*, de Ceferino Reato (Blanc, 2013; Campos, 2009; *La Nación*, 2011; Ortale, 2016).

Caracterizados como un *boom* editorial por parte de la prensa, numerosos títulos considerados *best sellers* políticos fueron publicados y difundidos por las grandes editoriales y consumidos por amplios sectores de la población. El fenómeno de los libros masivos puede ser estudiado, por un lado, desde una mirada que dé cuenta de los procesos de reconfiguración del espacio editorial, en tanto sus modos de producción reflejan dinámicas de la producción cultural contemporánea, cada vez más atravesada por una lógica financiera. Por otro lado, la mirada puede contemplar procesos de producción y circulación de las ideas, considerándolos

¹ Este trabajo forma parte de la investigación doctoral (2016) titulada “La década publicada. Los best sellers políticos y sus editores. Producción de libros, difusión de temas e intervención pública en el mercado editorial argentino (2003-2015)”. Agradezco los comentarios de Paula Miguel, de Horacio Tarcus, del grupo de investigación coordinado por Lorena Soler y Verónica Giordano, así como de los evaluadores de la revista.

² En el mercado editorial local, el 90% de las editoriales activas son medianas y pequeñas, y publican el 32% y el 10% de los títulos en el mercado, respectivamente; mientras que los grandes grupos representan el 10% de las empresas y el 58% de la producción (CAP, 2016). Hasta 2017, esos tres grupos lideraban el mercado. En abril, Ediciones B fue adquirida por Random House, lo que consolidó su posición dominante y ubicó a Planeta como único competidor de peso.

³ Entre 2003 y 2015 los grandes grupos editoriales publicaron 1.173 títulos de coyuntura política, es decir, un promedio de 90 títulos por año, número significativo teniendo en cuenta la dispersión de segmentos, novedades y reimpressiones de cada editorial (Saferstein, 2016).

⁴ Con kirchnerismo nos referimos al proceso político que comprendió los tres mandatos presidenciales sucesivos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015).



como intervenciones culturales y políticas supeditadas a un fenómeno de consumo masivo. Estos libros son leídos por amplios públicos que asisten a las presentaciones y se vinculan con sus autores (Semán, 2006). Asimismo, estos escritores se constituyeron como referentes de opinión mediante una postura plasmada en bienes simbólicos que operan como pruebas de argumentaciones en discusiones con llegada a los medios masivos y a la política.

Mediante una mirada que articula estas dos dimensiones, el fenómeno de los libros políticos refleja un espacio de circulación de ideas y de productos materiales y simbólicos en el cual se cruzan lógicas mercantiles y culturales propias del sector editorial, con la producción de identidades políticas de amplios sectores en un clima cultural particular (Pulleiro, 2015; Rubinich, 2012). Los cruces entre un tipo específico de producción cultural y simbólica y los imaginarios políticos de una sociedad ubican a la usina editorial en un espacio dinamizador de las disputas en el campo de poder (Grimson, 2007).

Teniendo en cuenta la relevancia comercial, cultural y política de estos libros de consumo masivo, en estas páginas nos enfocaremos en el rol de los editores, actores encargados de seleccionar a los escritores y a las temáticas publicables. Históricos difusores y propiciadores culturales (Tarcus, 2009), especialistas en establecer relaciones con espacios culturales, intelectuales y políticos mediante la materialización de las ideas en libros, quienes encarnan el rol editorial tienen un papel decisivo en todas las etapas de un tipo de producción que se ha mercantilizado fuertemente durante las últimas décadas⁵.

Este trabajo explora los fundamentos sociales y materiales en la circulación de la palabra impresa y los mediadores que permiten esa intervención. Se propone analizar cómo se desarrollan los vínculos entre edición, intervención intelectual y política en la actualidad, mediante un análisis del rol de la dirección editorial en la instalación de temas, debates y opiniones en la esfera pública. El corpus empírico consiste en una serie de 40 entrevistas en profundidad⁶ realizadas a editores, agentes de marketing, autores y directores comerciales de las principales empresas editoriales de la Argentina, así como sus catálogos y una base de datos de libros políticos construida a partir del registro nacional de ISBN⁷.

⁵ Desde mediados de los 90 los grandes grupos editoriales comenzaron a adquirir las editoriales locales mediante un proceso de concentración y transnacionalización. Sobre estos procesos véase Botto (2006) y Becerra, Hernández y Postolski (2003).

⁶ Los extractos de entrevista utilizados en el texto se exponen de manera anónima para garantizar la confidencialidad de las fuentes. Se pretende reconstruir un espacio de relaciones y prácticas sociales que no se restringe a una editorial o editor específico, sino a un espacio analítico compuesto por actores que comparten ciertas características y también heterogeneidades que hacen al sector editorial comercial de la actualidad.

⁷ Los libros relevados fueron clasificados con su ISBN e inscriptos según los siguientes géneros editoriales: Ensayo argentino, Ensayo político argentino, Ensayo político e Investigación periodística.

En primer lugar se abordará brevemente la relación entre producción editorial y campo intelectual y político. En segundo lugar, se circunscribirá este problema de investigación en la etapa actual, protagonizada por los grandes grupos editoriales. En tercer lugar, se desarrollará cómo las posiciones ocupadas dentro del espacio editorial y los vínculos entre los actores que allí participan habilitan tomas de posición, prácticas y representaciones que tienen potencial para el desarrollo de una intervención pública y política. Para ilustrar este potencial, se realizará un seguimiento de la trayectoria del director editorial del grupo Random House entre 2005 y 2012, actor reconocido por su incidencia en las transformaciones en los modos de editar y de contratar libros políticos exitosos. El análisis de un caso ejemplar pretende contribuir a la comprensión de los modos de intervención intelectual y política que el mercado editorial actual permite desarrollar, los cuales se encuentran necesariamente condicionados por una lógica comercial del “negocio cultural” y situados en un campo de poder en el cual se disputan posicionamientos.

Editores, intelectuales y política

Los editores y editoras son especialistas en relaciones que ocupan un lugar central en la dinámica de producción por medio de la cual se dirimen formas de autoridad y de poder. Históricamente estos agentes operaron por medio de la selección, jerarquización y publicación de textos, insertándose en los espacios de sociabilidad de los autores. Activos mediadores entre la posición autoral y sus públicos, los agentes editoriales han tenido un rol clave en los modos de intervención intelectual y política, mediante la producción y puesta en circulación de autores y discursos que disputan posiciones en el campo de poder. Sus prácticas, redes y vínculos, así como los bienes simbólicos que contribuyen a producir, tienen un papel significativo en la producción de visiones legítimas sobre el mundo social. Al mismo tiempo, su actividad presenta un componente comercial insoslayable, al ser una de las industrias culturales de mayor relevancia a nivel económico. Es por ello que es considerado como un agente doble: debe saber “leer” y “contar” (Bourdieu, 2009).

Investigaciones realizadas desde la historia intelectual, la sociología y los estudios sobre el libro y la edición se han



focalizado sobre las trayectorias de intelectuales, escritores y editores (Blanco, 2003; Sorá, 2008). La figura del editor “tradicional” o “intelectual”, con mucha fuerza en los 60, reúne sus facetas cultural y comercial, con una primacía del primer factor. Sin embargo, para muchos editores reconocidos por su contribución al campo intelectual, el “éxito editorial” no ha sido esquivo sino un impulso para lograr proyectos culturales en un mercado amplio. Las apuestas de Arnaldo Orfila Reynal, Boris Spivacow y Arturo Peña Lillo, entre otros, permiten entender a la edición como una empresa comercial, cultural, intelectual y política.

Los grandes grupos y la pregunta por el rol editorial en los debates políticos

La dirección editorial se constituye como un lugar estratégico para intervenir sobre la esfera pública y la política, mediante la selección y publicación de materiales que se insertan en el espacio de circulación de las ideas. En la actualidad, la mayoría de las editoriales argentinas de renombre fueron convertidas en sellos de grandes corporaciones transnacionales con múltiples directivos y agentes comerciales, cuestión que delinea un sector atravesado por la lógica del capital financiero. Ante esta situación, surge el interrogante acerca de la posibilidad de llevar adelante una intervención cultural y política desde una empresa que exige, ante todo, rentabilidad.

Quienes ocupan la dirección son los vectores principales del proceso de publicación de un libro, desde su proyección y contratación hasta su resultado final. Deciden lo que se publica y, en consecuencia, influyen en la orientación del sentido del catálogo (Saferstein, 2014, 2016). Sin embargo, su rol no es siempre visible; suelen aparecer como mediadores y gestores del negocio de los accionistas ya que su rol requiere escindirse de los intereses propios de intervenir sobre el campo cultural o político: como el fin principal de una multinacional es el de vender libros, la concepción del negocio de la dirección editorial obtura una posición que trascienda lo comercial (Schiffrin, 2001).

El fenómeno de los libros políticos publicados entre 2003 y 2015 por las grandes editoriales permite complejizar la idea economicista acerca del rol del editor como mero gestor y plantear el interrogante acerca de la posición de estos agentes,

sin soslayar su condicionamiento comercial. Las opiniones políticas o intereses intelectuales de los agentes pueden contradecir las exigencias que las empresas imponen. Así como en editoriales definidas políticamente se dan tomas de posición que se encuentran explicitadas en los catálogos, en una editorial multinacional, que publica una amplia variedad de géneros y autores, esos posicionamientos están *a priori* velados por una idea de pluralidad.

Vos podés publicar a Forster y a Verbistky y al Tata Yofre y a Reato, y llevarte bien con los cuatro. Las editoriales fueron uno de los pocos lugares donde autores K y no K han coexistido (Director editorial, Editorial A, 2011).

La “libertad” y diversidad que enuncia el entrevistado refiere a una amplitud de catálogo, el cual puede ser interpretado como contradictorio respecto de las corrientes políticas e intelectuales a las que pertenecen sus autores. Tal amplitud alude a la búsqueda por vender la mayor cantidad de ejemplares y títulos orientados hacia distintos segmentos del mercado, lo que justifica la convivencia de posicionamientos que tuvieron lugar durante el proceso político kirchnerista⁸.

Este discurso, políticamente aséptico y aparentemente plural, sugiere que los sellos solo reflejarían intenciones comerciales. En primer lugar, esta interpretación anula la especificidad cultural del sector editorial en su conjunto, aun cuando este espacio esté fuertemente marcado por una dinámica financiera. En segundo lugar, quita relevancia a publicaciones consumidas de manera masiva, lo que subestima la incidencia de la industria cultural sobre la conformación de una cultura política (Semán, 2017). Por último, oculta la capacidad de agencia de los editores y los reduce a un mero engranaje, soslayando las potencialidades históricas de este oficio.

En este sentido, se hace necesario trabajar desde una perspectiva que rescate la dimensión productiva de las prácticas, ya que el rol de los agentes en la ubicación de ciertos temas en la agenda es fundamental para entender la dinámica que vincula la cultura con la política. Al indagar bajo qué condiciones los editores de los grandes grupos se posicionan en un plano que puede evidenciar una negociación con esta lógica comercial, se entiende cómo la actividad editorial opera como teatro de acciones políticas y culturales (Sorá, 2008).

⁸ Efectivamente en el catálogo de libros políticos de Random House aparecen Juan B. Yofre, Ceferino Reato, Marcos Aguinis y Beatriz Sarlo, autores con una postura crítica respecto del kirchnerismo; junto a Jorge Coscia, Horacio Verbitsky y Sandra Russo, quienes tuvieron posicionamientos más afines a ese modelo. Por su parte, en el catálogo de Planeta se encuentran Pablo Sirvén, Luis Majul, Jorge Lanata y Jorge Asís, quienes conviven con Alfredo Zaiat, Daniel Míguez y José Pablo Feinmann. Por último, en el de Ediciones B hay periodistas críticos del kirchnerismo como Nelson Castro, Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro, así como otros más afines, como Eduardo Blaustein y el escritor Mempo Giardinelli.



Los editores de los grupos y las condiciones para su intervención. El caso del director editorial de Random House (2005-2012)

Los directores editoriales de los grandes grupos transnacionales construyeron una visión comercial del negocio que apunta a la búsqueda de “vender libros” como propósito principal (Miguel y Saferstein, 2016). En las entrevistas realizadas, un director editorial afirmaba: “Este negocio es un negocio comercial como cualquier otro, como el señor que fabrica ravioles y quiere vender sus ravioles” (2014). Una visión similar sostiene el director de su principal competencia: “Acá hay un criterio que a mí no me avergüenza en lo más mínimo y es que los libros tienen que ser comerciales” (2016). Sin embargo, a pesar de las coincidencias, la producción de libros políticos de una editorial lleva marcas de quienes están al frente del catálogo. Mientras que algunos consideran a estos libros como parte de un segmento exitoso homologable a cualquier género que funcione en el mercado, otros le asignan un papel preferencial, operando sobre su trascendencia en otras esferas.

Las huellas de los directores editoriales en los catálogos comerciales de los grandes grupos pueden rastrearse a partir de sus prácticas y representaciones en torno a la producción de libros políticos, sus trayectorias laborales y académicas y la posición que ocupan entre sus pares, de acuerdo a su reconocimiento como editores exitosos, poseedores de un “olfato editorial”. Teniendo en cuenta que estos agentes actúan condicionados por una estructura que los excede, el análisis de sus prácticas debe prestar atención también a dimensiones tales como la posición de sus editoriales dentro del campo editorial y el contexto sociopolítico en el que desarrollan su labor.

Como se afirmó en la introducción, teniendo en cuenta las dimensiones mencionadas, se abordará el caso de la editorial Random House-Sudamericana (RH) y su director editorial entre 2005 y 2012, Pablo Avelluto. RH es la principal corporación transnacional de libros generalistas (no técnicos) a nivel mundial en términos de producción y circulación (Wischenbart, 2015), con presencia en muchos países de América Latina como Chile, Uruguay, Brasil y México. La filial que funciona en la Argentina lidera la producción y venta de libros, amparada por una estructura compuesta por múltiples

sellos. Esta cartera de firmas editoriales le permiten ocupar no solo una posición dominante en términos materiales, sino también en términos simbólicos, ya que es propietaria del histórico y prestigioso sello Sudamericana, adquirido en 1998 (De Diego, 2015), como también ostenta los derechos de edición de las principales firmas del canon nacional, como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. RH lidera la producción en general y los títulos sobre coyuntura política en particular (con 625 títulos en el período 2003-2015) y tiene una política eficaz de publicación de autores masivos. En el espacio de relaciones que constituye al campo editorial argentino, la filial local del grupo Random House se posiciona de manera dominante en el polo de la gran producción.

Su director editorial entre 2005 y 2012 tuvo un papel fundamental en el impulso a la publicación de libros políticos vinculados a la coyuntura actual y también del segmento de libros que *revisó* la década del 70 desde un prisma que denota una discusión con la línea histórica de los organismos de Derechos Humanos en la Argentina y con la política de Estado llevada adelante por los gobiernos kirchneristas en esa materia (Campos, 2009). Teniendo en cuenta que un caso singular se sitúa en un marco de procesos colectivos complejos, su derrotero ilustra algunos aspectos acerca de la dinámica en la que los editores de los grupos construyen su visión comercial e intervienen al mismo tiempo en política. Desde su trayectoria vital y formación universitaria hasta las prácticas vinculadas a un *know how* específico que representa a los editores, este personaje se constituyó como un caso exitoso por ocupar la dirección del principal grupo editorial de la Argentina y por ser considerado una referencia entre los mismos pares que conforman el campo editorial (Saferstein, 2016).

Trayectoria profesional, académica y editorial: la conformación de una visión del negocio

Avelluto fue agente de prensa y marketing de Planeta entre 1993 y 1995, gerente editorial entre ese año y 1999, responsable de la unidad de negocios de publicaciones periódicas de Torneos y Competencias entre el 2000 y 2002; gerente editorial de Estrada entre 2002 y 2005 y director editorial de la región Sur de Random House Mondadori entre 2005 y noviembre de 2012. También ostentó el cargo de



vicepresidente de la Cámara Argentina de Publicaciones, que nuclea a los grandes grupos. En veinte años de carrera, ocupó distintos puestos en grandes empresas transnacionales, en un recorrido que presenta rasgos que se repiten entre los editores de los grupos en general.

Se graduó en la primera camada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Después de una experiencia como periodista *free lance* y como colaborador en la revista *Babel*, la primera empresa editorial en la que trabajó fue Espasa Calpe, editorial literaria española que había sido adquirida por Planeta en 1991. En general, los editores son profesionales universitarios identificados con los sectores medios, entre los que abunda una mayoría de agentes provenientes del periodismo y la comunicación. La edición se constituye como una actividad a la cual los agentes acceden desde distintas instancias, pero no necesariamente a partir de una profesionalización y formación específica en edición.

Pablo Avelluto ingresó al mercado en el momento crucial de la transición: cuando comenzaba la ola de adquisiciones de editoriales familiares por parte de grupos transnacionales. El aceleramiento de los tiempos de producción y la estandarización de etapas requirió la inserción de nuevos agentes, formados para contratar libros coyunturales. La reorientación de los catálogos hacia una lógica comercial menos subsumida a la valoración simbólica según las instancias tradicionales de legitimación produjo profundos movimientos⁹. Las editoriales aplicaron formas de producción y circulación de libros mediante un proceso que recorre todas las etapas de construcción y apunta a clarificar la maximización de ganancias, desde la reproducción del libro, la contratación del autor, hasta la campaña de prensa y de *marketing*. Así, la rentabilidad pasó a subordinar otras motivaciones y los discursos de los editores pasaron a explicitar lógicas económicas sin denegarlas. A nuevas condiciones de producción, nuevos perfiles de editores y nuevas visiones acerca del negocio editorial.

El ingreso de este agente al campo en el área de Prensa y Comunicación y su trayectoria posterior ilustra cómo estos departamentos adquirieron un peso estratégico inédito en el proceso productivo. Al mismo tiempo, se crearon departamentos de *marketing* editorial, con el explícito objetivo de satisfacer las “necesidades” de los consumidores (lectores)

⁹ “Los editores que venían de la carrera de Letras tenían probablemente mejores calificaciones en términos del manejo de la lengua, del idioma, pero todavía están más atravesados por las cuestiones relacionadas con el prestigio” (Director editorial, Editorial A, 2015).

mediante el cumplimiento de los objetivos generales de la empresa. Nuestro caso ejemplar fue uno de los primeros gerentes de *marketing* en la Argentina, al asumir dicha tarea en Planeta. Esto trajo consecuencias sobre sus modos de editar y pensar la edición. La imagen que éste y los demás editores pasaron a construir acerca del lector quedó por momentos disociada de aquella carga simbólica que tenía históricamente, al ser en parte despojada de su valor cultural legítimo asociado a la práctica de la lectura. Los lectores pasaron a ser concebidos como consumidores de productos (Saferstein, 2014).

Pocos años más tarde, su paso desde el área de *marketing* hacia el departamento editorial se explica como el paso que refleja la confluencia de tareas del nuevo rol del editor. La misma persona que está en contacto con la prensa y el *marketing* pasa a seleccionar los libros a publicar, lo que se expresa en la idea del editor como “productor” (Editora 1, Editorial A, 2013). No se esperan las propuestas de los autores que buscan ser publicados sino que “inventan” temas y autores. Analizan la actualidad, captan tendencias, detectan temáticas y luego buscan al autor. Los editores ya no esperan propuestas, salen “a buscarlas”.

En este sentido, el sector editorial no opera solo como un complejo de mediación, sino como una usina de producción activa basada en las propuestas y temáticas que definen los editores. Este rol activo que requiere de una visión que incorpora elementos de *marketing* editorial y del periodismo y las redes sociales es fundamental para entender el involucramiento de estos agentes en distintas esferas de la cultura y la política en la actualidad. En el caso puntual que se está analizando, su éxito en ese nuevo rol lo llevaría, años más tarde, a ser contratado para ocupar la dirección editorial de la principal competencia del grupo, Random House-Sudamericana. Dicho cargo lo ocupó por siete años, momento en que el grupo se mantuvo en la cima de la producción y venta de libros.

El trabajo editorial: la cuestión del “olfato”

Los agentes editoriales se desenvuelven en un espacio de producción cultural específico, con niveles de autonomía que lo separan de un campo regido por una dinámica puramente mercantil (Bourdieu, 2009). Entre los editores existen



prácticas en torno a la selección de temas y autores que son desvalorizadas por los pares, al ser consideradas estrategias “puramente” comerciales. En oposición, los editores y editoras son valorados en tanto posean lo que llaman un “olfato” para identificar los gustos del público lector. Este “olfato”, categoría nativa, remite a una capacidad personal, propia del *habitus* editorial, que valora simbólicamente al producto, capitalizado por el agente editorial.

No hay ventas seguras en el mundo editorial porque todo es olfato. Podemos llegar a olfatear o a conocer tendencias por experiencia. Saber que las mujeres compran más libros que los hombres, que la investigación periodística funciona bien (...). Todo es olfato y experiencia (Editora 1, Editorial A, 2013).

Entre los libros políticos de los últimos años, los editores y editoras que publicaron *instant-books*, libros realizados en un ciclo muy corto de producción y que aluden a la cobertura de acontecimientos puntuales ya tratados mediáticamente, son menos valorados que quienes lograron capturar una temática más amplia, que anticipe una tendencia.

Mis cosas más piratonas son menos. Me impresiona mucho ver esto de los libros rápidos de políticos, por ejemplo. No tengo nada contra nuestra competencia, pero me parece que se rifan, son Dunken (Editor 2, Editorial A, 2015).

En el proceso editorial, los agentes ponen en juego su capacidad de identificar temas para construir productos con impacto, ya que la posibilidad de constituirse como un “descubridor” tiene efectos positivos sobre la reputación de los editores. La capacidad de interpretar la novedad mediante una intuición es un factor que construye legitimidad, no solo en el mercado, sino entre los pares. En un espacio de producción en el que la lógica de mercado opera de manera dominante, el trabajo del editor reconocido apela a fenómenos opacos y sintetiza la convivencia de la lógica económica y cultural. Los editores más reconocidos en el polo de la gran producción son quienes “captan” temas que pueden operar públicamente de manera comercialmente exitosa.

Estos elementos y una capacidad de reflexión sobre el propio oficio, le permitieron al director de RH posicionarse como referente entre los agentes del campo editorial argentino. El “olfato” se hizo visible con títulos cuyas temáticas revisitaron los acontecimientos sucedidos durante

los años 70. Desde una óptica particular, contraria a la visión extendida por parte de los organismos de Derechos Humanos y a la política en esa materia por parte del Estado durante los gobiernos kirchneristas, los libros sobre los años 70 se convirtieron en un éxito editorial, sus autores (como Ceferino Reato y Juan Bautista Yofre) en referentes de opinión y Avelluto en el editor reconocido como el identificador de ese nicho.

Su gestión está marcada por los libros antikirchneristas y los libros sobre los 70, que es un tema que a él le interesa personalmente. Contratamos millones de libros sobre los 70, con los cuales la editorial ganó un montón de plata, porque no solo le interesan a él; al público también (Editora 2, Editorial A, 2013).

El que le da la impronta sobre la violencia en esos años es Avelluto. Los libros sobre los 70 era un nicho que a él le interesó mucho. Cree que es un género literario en sí mismo y le fue muy bien (Editora 1, Editorial A, 2014).

Este reconocimiento lo ubica como referente editorial, ya que sus aptitudes de editor fueron validadas por sus pares. Los editores observan en Avelluto un agente con la capacidad editorial para construir libros exitosos en el mercado. Consultado acerca del fenómeno editorial de los libros revisionistas sobre los años 70, Avelluto afirma que su éxito se debe a una identificación del público masivo con discursos de autores que tienen una visión crítica con respecto al gobierno de turno, cuestión que trasciende al momento político kirchnerista. Así como durante los años 90 *Robo para la corona* –libro de Horacio Verbitsky que reveló la trama de corrupción del gobierno menemista– fue un éxito editorial masivo, durante los gobiernos kirchneristas tuvieron éxito los libros de Juan Bautista Yofre y Ceferino Reato. Haber identificado el comportamiento del público lector de libros políticos opositores convirtió a Avelluto en un editor de referencia.

El olfato puede pensarse en este caso en términos de tendencias emergentes con potencial para volverse dominantes, *mainstream*. Los libros de Reato y Yofre presentaron una visión y un conjunto de discursos que hasta ese momento eran marginales. Sin embargo, su revalorización, resignificación y reutilización de manera novedosa por la industria editorial lograron fortalecerla. En



tal sentido, la oferta de estos libros puede ser considerada en clave de producto cultural que brindó alguna respuesta contraria frente a discursos que no terminaron de consolidarse como hegemónicos, cuestión que este editor identificó previamente. La construcción de un sentido común histórico reparador, manifestado en la política de Derechos Humanos llevada adelante por el kirchnerismo no impidió que estos libros cosecharan un gran éxito, mediante intervenciones que proclaman un discurso contrario y hasta reaccionario. Antes de que este “espíritu del momento” se asentara, Avelluto contrató un proyecto de J. B. Yofre (que ya había sido publicado en Edivern, una editorial de derechas marginal en una edición financiada por el autor) y, con su efectivo éxito editorial que se mantuvo durante varios años, se le sumaron otros libros similares que replicaron la tendencia¹⁰.

¹⁰ Una editora de RH da cuenta de este caso: “Yofre empezó autoeditándose porque no conseguía editorial y se convirtió en *best seller* solo. Luego, Pablo Avelluto, ex director editorial, lo trajo al grupo” (Blanc, 2013).

De esta manera, una demanda residual de “memoria completa” (Campos, 2009) propuesta por agrupaciones que apoyaban el accionar militar pasó a conformarse como una tendencia resignificada con algunos aspectos distintivos: a) su discurso, que varía entre el apoyo o la justificación a la represión militar y la reformulación de la “teoría de los dos demonios” apoyada en datos supuestamente objetivos; b) su modo de producción por parte de los grandes grupos editoriales, con campañas de *marketing* y de construcción de autores; c) su difusión a partir de una circulación mediática potenciada en las redes, y d) su recepción y consumo por amplios sectores de la población. Tales factores ubicaron a las temáticas revisionistas sobre los años 70 en una posición *mainstream* y, así, dominante en el mercado de libros.

La fórmula cuyo éxito fue iniciada, potenciada y probada, según sus pares, por el director de RH, fue continuada por los demás editores de ésta y otras editoriales, quienes se valieron de la tendencia para construir libros de similares características. Así, la contratación y potencia que este director editorial le dio a ciertos autores y libros intervino para la conformación de un segmento exitoso. En principio, esto demuestra que los editores, obligados a generar éxitos de venta, no operan como simples gestores y mediadores de los agentes de *marketing*, sino que su labor creativa promueve la instalación de temáticas y de autores en la agenda mediática y pública. Eso constituye, por un lado, a este agente como un productor privilegiado de visiones del mundo, con injerencia en la disputa de ideas que circulan dentro del campo de poder.

Por otro lado, esto da cuenta de la relevancia de atender los efectos que la industria cultural pueda tener sobre la cultura política de una sociedad, al dinamizar, reforzar y resignificar discursos políticos que se creían debilitados.

La “vocación” de intervención y los posicionamientos políticos

Hasta aquí, a partir de un caso ejemplar, se han explorado algunas dimensiones del rol editorial. El espacio en el que participa sufrió transformaciones que le otorgaron ciertas dinámicas homologables a las de otros campos de producción, como el campo de los medios de comunicación y el de industrias culturales que adoptaron lógicas financieras atadas a procesos globales y locales. Esto permitió observar una complejidad en el oficio, propia de un espacio cultural tensionado por lo comercial y caracterizado por una autonomía relativa. Tal autonomía da cuenta de ciertos límites que revelan que, dentro de este espacio, hay valores simbólicos en disputa por parte de los agentes que participan. Ahora bien, además del “olfato” para identificar temáticas y autores exitosos, ¿qué otros elementos son valorados en el espacio editorial actual?, ¿cómo intervienen los posicionamientos de los editores en el marco de la empresa que exige resultados económicos?, ¿de qué manera se combinan, en una gran editorial, el olfato comercial del editor con su intervención político-cultural?

Teniendo en cuenta la trayectoria y la posición de referencia de Avelluto, vinculada a un modo de hacer exitoso para el campo, podemos explorar cómo la dirección editorial de una filial de una corporación transnacional que busca rentabilidad afronta las posibilidades de intervención cultural y política. Mientras que en algunos directores aparece la idea de imposibilidad de traspasar la determinación económica, otros directores se posicionan de una manera más explícita.

Antes el editor editaba un libro y la verdad es que no le importaba mucho si se vendía o no se vendía, sino si era bueno. Hoy el editor tiene la obligación fundamental de editar libros que se vendan (Director general, Editorial B, 2014).

Yo creo que esto le pasa a todos los editores: hay una intención de que aquello que a uno le interesa también le interese a las masas, a la gente, lo cual a veces es una tentación por el error (Director editorial, Editorial A, 2015).



El rol del editor, cuando quiere ser independiente,
es salir a buscar lo feo. Como hace el buen periodismo.
Plantarte en el lugar de marcar lo que está mal.
(Director editorial, Editorial C, 2016).

¹¹ Como señala Gisèle Sapiro (2012) para el análisis del trabajo artístico y las trayectorias que emergen en ese orden, la vocación por la intervención pública, política, intelectual o artística, se encuentra socialmente considerada tanto en el terreno de lo individual y lo subjetivo, así como en plano de lo ascético, lo antieconómico y lo cultural-simbólico. La vocación por el trabajo artístico le confiere al artista un carácter de “creador” que no se subsume a la lógica burocrática de la rutinización. Ese poder se encuentra condicionado socialmente por una *illusio* que le confiere al artista un reconocimiento simbólico a costa de su desinterés económico. Este “interés en el desinterés” (Bourdieu, 2011) no se funda en un cálculo racional sino que está expresado en prácticas materiales y simbólicas que caracterizan a los individuos artistas y que son socialmente esperables en el espacio de relaciones e instituciones que los incluye. Las transformaciones en la producción cultural, que habilitan modos de intervención intelectual atravesados por la lógica de mercado, muestran una vigencia de lógicas de orden simbólico y cultural que aún operan en la legitimación de agentes con capacidad de producción de visiones del mundo (Sapiro, 2012; Rubinich 2011). El caso analizado permite dar cuenta de esta articulación vigente y productiva entre lógicas económicas y simbólicas para el desarrollo exitoso de una vocación de intervención en trayectorias de productores culturales incluso en el polo de la gran producción.

Los editores de los grandes grupos priorizan la idea respecto de que deben ocuparse más del conocimiento de la demanda que de la prescripción de un público, desde un discurso que apela a la “libertad de elección”. Sin embargo, en algunos discursos emerge una vocación de intervención que excede la dimensión estrictamente económica (Sapiro, 2012)¹¹. Esta vocación se observa en prácticas concretas: mediante la publicación de libros que pueden haber sido tomados en cuenta como fuentes para causas judiciales de interés público, libros ponderados por su valor documental o libros que permiten presentar social y públicamente una temática para que sea debatida y amplificadas, generando rédito simbólico a sus referentes. Si bien no se reducen a ella, estos modos de intervención están condicionados por la lógica de la rentabilidad económica de las empresas que, a través del trabajo activo de los editores y la “ingeniería editorial”, les brinda a los autores y a sus libros una mayor posibilidad de difusión pública, potenciada por su circulación a través de distintas plataformas mediáticas.

La actividad de Pablo Avelluto presenta características que reflejan un pragmatismo comercial exitoso y un olfato que le posicionó como referente de este espacio. Esto le permitió desarrollar una autonomía respecto de la tradición del catálogo de Sudamericana e intervenir políticamente de manera definida. Esto se evidencia en el desarrollo del segmento de libros políticos producidos durante los últimos 15 años, los cuales tuvieron fuertes efectos sobre la esfera pública y mediática, al mismo tiempo que su preparación se rigió por parámetros comerciales. Estos libros influyeron sobre la agenda, ya que sus contenidos se instalaron como temas de discusión y sus autores se posicionaron como referentes en esa temática. En este sentido, este tipo de producción se enmarca en nuevos modos de intervención pública atravesados por la lógica de mercado, sin por ello ser menos activos en la esfera cultural. Esto permite caracterizar a Avelluto como un editor integral, en una doble acepción: comprende la dinámica comercial actual de su disciplina y, a la vez, encarna en su persona el máximo grado de la función editorial, según la visión de los agentes del campo.

Los editores y editoras entrevistados concuerdan con que



la línea editorial de RH entre 2005 y 2012 estuvo influenciada por los posicionamientos político-ideológicos de su director: con su oposición al kirchnerismo y con su visión respecto de los acontecimientos vinculados a la violencia política y al terrorismo de Estado durante los años 70.

Yo siempre creí que cada editorial durante mucho tiempo reflejaba el carácter de su director. Por ejemplo, cuando estaba Avelluto era muy clara la línea editorial que Sudamericana fue tomando (Editora 3, Editorial A, 2015).

Los libros políticos de RH durante su gestión mantuvieron una centralidad que se destaca respecto de otros géneros. Además de la visión sobre el éxito editorial que este editor ensayaba acerca de los lectores opositores, hay elementos que muestran una articulación entre el catálogo que construye para vender con sus propios posicionamientos.

El impulso a los libros sobre los años setenta que transmiten una postura revisionista conforman a este editor como un difusor y armador de una demanda marginal: casi sin registros de este tipo de libros desde inicios de la década, entre 2005 y 2012 RH publicó 22 títulos en esa línea, frente a los 10 que se registran en posiciones más cercanas a las de los organismos de derechos humanos¹². Cuando refiere a estos libros se aleja de la posición neutral y comercial que expresaba respecto al catálogo. En su explicación identifica, por un lado, cierta vacancia de una visión sobre los años setenta, que no habría estado representada por el gobierno y que pasó a hacerse visible a partir de la publicación de libros que marcaron agenda. Por otro lado, en su discurso aparece una motivación personal en la temática, explicitada a partir de un interés “generacional” de discutir ciertos aspectos relacionados con las memorias acerca de la dictadura militar y la década del 70, no representados en el “discurso oficial” del gobierno kirchnerista.

Los posicionamientos de este editor se pueden visibilizar no solo en la preferencia por ciertas temáticas y discursos sino también en sus vínculos con los autores que publicó, que expresan afinidades, amistades y participación en algunos espacios de discusión. En su catálogo se observa que algunos de los autores editados se insertan en un espacio que dialoga con instancias político-culturales desde una multiplicidad de discursos con cierta cohesión.

En 2007 publicó *Sal en las heridas. Las Malvinas en la cultura*

¹² Según la base de datos de producción, entre los autores aparecen Reato, Graciela Fernández Meijide, Franco Lindner, Yofre, Carlos Manfroni, Vicente Massot, Norma Morandini y Vicente Palermo, entre otros. Hacia el lado más cercano a la posición de los organismos de Derechos Humanos se registran libros de Horacio Verbitsky, María Seoane, Daniel Gutman, Gabriela Saidón y Mariano Rodríguez Herrera, entre otros. Estos dos grupos se diferencian en líneas generales en torno a su visión sobre las políticas de Derechos Humanos del kirchnerismo y a la línea histórica de la mayoría de los organismos. Sin embargo, es importante aclarar que dentro de cada grupo de autores mencionado conviven discursos y visiones contrapuestas en relación con otras dimensiones. Por ejemplo, los discursos de “memoria completa” que presentan los libros de Yofre y Reato se contraponen a la visión de Fernández Meijide, quien formó parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a partir de 1983.



argentina contemporánea, de Vicente Palermo, intelectual que en 2008 impulsó el colectivo intelectual Club Político Argentino (CPA). El CPA se posicionó críticamente frente al gobierno, interviniendo a través de sucesivas cartas públicas. Las intervenciones de este grupo tuvieron un tono crítico frente a las medidas que llevaba adelante el gobierno nacional de ese momento. El CPA es un grupo heterogéneo compuesto por intelectuales, académicos, periodistas y políticos con trayectorias disímiles: entre sus integrantes se encuentran miembros que habían pertenecido al Club de Cultura Socialista, periodistas de medios masivos de comunicación, militantes con pasado en la izquierda, políticos radicales y del partido PRO, liderado por Mauricio Macri.

Palermo no fue el único miembro publicado por Avelluto. Según nuestro registro de datos, se publicaron a otros 14 escritores, periodistas e intelectuales asociados al CPA, contratados en su mayoría durante el período 2005 y 2012. Entre ellos se destacan Graciela Fernández Meijide, Magdalena Ruiz Guiñazú, Eduardo Amadeo, Jaime Durán Barba, Manuel Mora y Araujo, Jorge Sigal, Gonzalo Garcés y Marcos Novaro.

La trama de publicaciones de miembros de un grupo intelectual revela relaciones de afinidad entre este editor y un espacio de intervención concreto. Los vínculos editoriales que Avelluto construyó y que se expresaron en la publicación de libros de un espacio institucionalizado muestran un rol activo del editor y la editorial en la producción de visiones del mundo que disputan posiciones en el campo de poder. Si bien este actor, al cual la empresa le exige amplitud y rentabilidad, no podría explicitar sus posturas, la trama de publicaciones y vínculos reflejan un alineamiento que se plasma en un catálogo rentable. La tendencia que muestra la publicación de estos libros refleja puntos de vista compartidos que en su registro discursivo se explicitan con mayor fuerza hacia el final de su experiencia en la editorial. De hecho, luego de varios libros publicados, la relación entre Avelluto y el Club Político Argentino se formalizó: en 2012 –ocho meses antes de su salida de RH– su firma comenzó a aparecer registrada en cada intervención pública del CPA, lo que lo posicionó como editor de diversos autores que participan del debate público y a la vez como un productor cercano a un grupo intelectual concreto.

Aunque la materialización de la relación se fortaleció en el espacio editorial mediante la publicación de los libros

de estos autores, esta trascendió el plano editorial, tomando un carácter más visible que el de mediador y publicador. En este marco, el editor tuvo un rol activo de productor que se visibilizó hacia afuera del campo. Así, la trama de relaciones que el editor construyó con los autores que publicó no se expresó solo con los libros con los que este agente se encontraba cercano políticamente. También se expresó en su actividad efectiva de intelectual reconocido como tal por sus interlocutores, mientras aún mantenía una posición directiva en una editorial que debe cumplir requisitos comerciales y construir un catálogo amplio.

Esta posición ambigua, de productor de visiones del mundo definidas y, a la vez, constructor de un catálogo heterogéneo y comercial, revela un perfil en el que confluyen roles en tensión que se complementan. Así, no operó solo como un seleccionador interesado de contenidos e ideas de acuerdo a la dimensión editorial. Su trayectoria derivó en el desarrollo de una vocación de intervención intelectual, mediante un catálogo exitoso en el mercado, como también mediante un posicionamiento que se hizo explícito. Su propia producción intelectual y su visión política adquirieron un carácter distintivo en una actividad muchas veces considerada como “puramente” comercial (Schiffrin, 2001). Este caso ejemplar, no por ello excepcional, muestra un editor que se conforma como articulador de un espacio intelectual que opera en el plano editorial, gracias a la relevancia del cargo de director, y lo trasciende.

Consideraciones finales

Los editores y editoras son agentes fundamentales en la producción simbólica que disputa sentidos en el campo de poder, en tanto participan de manera decisiva entre las instancias de producción de visiones del mundo, en su circulación y en su difusión. Estos agentes seleccionan, jerarquizan y difunden libros que se constituyen como bienes culturales, desde los cuales brotan ideas, sentidos y significaciones que serán apropiadas, reconfiguradas y valorizadas por lectores. En estas páginas se analizaron las condiciones en las cuales la labor desarrollada por los agentes de una empresa transnacional se constituye como una posición estratégica para el desarrollo de una intervención en los debates políticos que circulan por el canal mediático, a



través del armado de un catálogo. Se exploró que la producción y difusión de libros se encuentra atravesada por una lógica económica que, a pesar de su peso en las condiciones actuales del mercado editorial, no prescinde de elementos históricos del quehacer editorial local. Esta cuestión complejiza y valoriza el estudio de los espacios de la producción editorial masiva, en tanto modo de acercarse a las dinámicas de la intervención cultural contemporánea.

A partir de la elección de un caso singular que expresa regularidades dentro del universo del que forma parte, se identificó la relevancia del rol editorial en la instalación de temas y autores en la agenda pública y mediática. En primer lugar, este actor dirigió un grupo editorial que tiene como sello insignia a Sudamericana, el cual se mantiene como el más relevante de la empresa y cuenta con una historia ligada al desarrollo del campo editorial, literario e intelectual en la Argentina. En segundo lugar, su visión comercial del negocio y su “olfato” le permitieron erigirse como referente del espacio de los grupos. Sus logros editoriales y su capacidad de instalar temáticas y autores en agenda lo posicionaron como “descubridor”. En tercer lugar, dicha posición de referencia le concedió cierta autonomía para el armado de su catálogo. Si bien sus modos de acción tienen continuidades y rupturas con respecto a tradiciones editoriales anteriores, el editor pudo desarrollar una impronta relacionada con sus propios posicionamientos expresados en libros políticos, los cuales tuvieron preeminencia por sobre los títulos literarios (que delegó en otros editores). En cuarto lugar, si bien mantuvo una concepción del catálogo considerado en términos comerciales, desarrolló su vocación de intervención, cuestión que se aleja de la concepción del editor comercial como mero gestor. De este modo, intervino en la conformación de un negocio editorial rentable y potenció ciertos debates y posicionamientos puntuales mediante títulos que ocuparon un lugar central en su catálogo, en los medios masivos y en las redes sociales, principalmente referidos al kirchnerismo y a los años 70.

Los libros de coyuntura del período operaron significativamente en la movilización de sentimientos políticos y nacionales de amplios sectores de la población (Semán, 2006). Esto pondera el rol del editor y de la mediación editorial respectivamente, como un actor y un dispositivo poderoso de producción y difusión de las ideas (Sorá, 2008).

En esta línea, las grandes editoriales en las que participan estos actores ocupan una centralidad insoslayable. Cuentan con la mayor cantidad de lectores y sus autores se encuentran en condiciones favorables para lograr repercusión. Si bien, por su lógica financiera atada al capital transnacional, un grupo editorial no puede ser una “editorial de facción”, su estructura y dinámica propicia las condiciones para la intervención política atravesada por el mercado. La voluntad de intervenir sobre la esfera pública que explicita el perfil de editor analizado depende y requiere de su éxito comercial. Así, las prácticas y representaciones analizadas muestran al rol editorial como detentor de una potencia para impulsar debates de una época, motorizados por las condiciones expansivas del mercado, los medios masivos y las industrias culturales.

En contraposición a lecturas que no consideran al espacio de la gran producción como un lugar donde se disputa capital simbólico, reconocimiento por los pares y visibilidad, el caso tratado refleja un universo que presenta ciertas continuidades con los modos en que generaciones anteriores de editores construían sus catálogos según los círculos intelectuales o espacios políticos donde se insertaban (de Sagastizábal y Giuliani, 2014; Sorá, 2008).

Este trabajo se centró sobre el rol editorial y los alcances que ciertas trayectorias pueden tener dentro del campo. La edición es una práctica social que refleja cómo ciertos grupos históricamente intervinieron sobre la esfera pública a través de representaciones sobre el público lector, la nación, la cultura y la política (Sorá, 2008). Por otra parte, los alcances del caso explorado pueden ser estudiados más allá de su injerencia estricta dentro del campo editorial y en relación con los intereses específicos que allí se disputan, para explorar su trascendencia hacia otros campos.

En 2012 Avelluto culminó su etapa dentro de Random House, lo que significó un cambio de rumbo en su trayectoria. En primer lugar, su conformación como referente de la disciplina le permitió dictar cursos de formación para editores¹³. En segundo lugar, mantuvo su lugar en el CPA y editó y coescribió *El diálogo: El encuentro que cambió nuestra visión sobre la década del 70* (Sudamericana, 2015), firmado por Graciela Fernández Meijide y Héctor Leis, también miembros del club. Esta publicación en la que se incluye como autor se enmarca en el revisionismo del que fue impulsor.

¹³ Dictó dos seminarios de extensión en la institución privada Universidad Torcuato Di Tella.



Por último, se lanzó a la política partidaria en el partido PRO. Su paso a la militancia coincidió con una primera gestión como coordinador del Sistema de Medios Públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2014. En las elecciones de 2015 fue candidato a parlamentario del Mercosur en la boleta de Cambiemos, la coalición que ganó las elecciones presidenciales. Dicho cargo no fue asumido, ya que fue consagrado como ministro de Cultura, puesto que ostenta hasta la actualidad.

Su llegada a la política y a la gestión pública luego de una extensa trayectoria como editor y una activa participación en un espacio definido del campo intelectual permite pensarlo como un agente clave en el armado de un espacio de ideas que podría ubicarse en la llamada “nueva derecha” (Soler y Giordano, 2016). Mediante el catálogo que construyó, las relaciones que mantuvo con sus pares y con los autores, mediante sus intervenciones públicas y su rol político, su postura intelectual apuntó principalmente a la producción, difusión y legitimación de libros orientados al gran mercado de manera exitosa, pero también de productos que contienen una visión particular acerca de un proceso político del pasado reciente.

Las visiones del mundo que este actor impulsó y potenció a través de sus intervenciones y sus autores tuvieron eco sobre el medio editorial que lo posicionó, se instalaron en la agenda mediática, obtuvieron una amplia recepción y apropiación por parte del gran público y del mercado. Esto capitalizó su posición en el campo cultural, desde el cual pudo dar el salto hacia una participación política activa que derivó en un cargo de gestión ministerial, desde el cual se definen las políticas culturales de la nación.

Este caso ejemplar revela una potencia de análisis acerca de los alcances y la capacidad de trascendencia del rol editorial que será preciso profundizar. A partir de un caso que toma derivas atípicas para el común de los editores de los grupos, se evidencia cómo en el espacio de relaciones que conforma al campo editorial se generan las condiciones necesarias para cierto despliegue del rol editorial sobre la política. Este rol, en algunos actores y mediante distintas trayectorias, puede potenciar la intervención sobre la esfera pública, promoviendo la instalación de debates y discusiones que operan en el campo de poder a un nivel más amplio. En este sentido, el análisis de las prácticas y representaciones de

los agentes que participan en el espacio editorial permiten ubicar a la edición como una intervención cultural estratégica en la construcción de sentidos del campo político.

Bibliografía

- BECERRA, Martín; HERNÁNDEZ, Pablo, y POSTOLSKY, Glenn (2003). La concentración de las industrias culturales. En *Industrias culturales: mercado y políticas públicas en Argentina* Buenos Aires: Secretaría de Cultura de la Nación - Ciccus, pp. 133-146.
- BLANCO, Alejandro (2003). Los proyectos editoriales de Gino Germani y los orígenes intelectuales de la sociología. En *Desarrollo Económico*, 43(169), pp. 45-74.
- BOTTO, Mercedes (2006). La concentración y la polarización de la industria editorial. En *Editores y políticas editoriales en Argentina, 1880-2000*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, pp. 209-249.
- BOURDIEU, Pierre (2009). Una revolución conservadora en la edición. En *Intelectuales, política y poder*. Buenos Aires: EUDEBA, pp. 223-270.
- BOURDIEU, Pierre (2011). *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario* (5ta ed.). Barcelona: Anagrama.
- CAMPOS, Esteban (2009). ¿Es posible una “memoria completa”? Acerca de olvidos y reacciones conservadoras en la narrativa histórica de los 60-70 (2006-2009). En *Afuera*. Estudios de crítica cultural, 7.
- CAP (2016). *Libro blanco de la edición*. Buenos Aires: Cámara Argentina de Publicaciones.
- DE DIEGO, José Luis (2015). *La otra cara de Jano. Una mirada crítica sobre el libro y la edición*. Buenos Aires: Ampersand.
- DE SAGASTIZÁBAL, Leandro, y GIULIANI, Alejandra (2014). *Un editor argentino - Arturo Peña Lillo*. Buenos Aires: EUDEBA.
- DUJOVNE, Alejandro (2016, mayo). Frankfurt, hablame de mí. En *Revista Anfibia*. Recuperado 17 de mayo de 2016, a partir de <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/frankfurt-hablame-de-mi/>
- GRIMSON, Alejandro (ed.). (2007). *Cultura y neoliberalismo*. Buenos Aires: CLACSO.
- MIGUEL, Paula y SAFERSTEIN, Ezequiel (2016). Ser una esponja de tendencias: los editores y la «intuición de la demanda» en las grandes editoriales. En *Astrolabio*, 0(16), pp. 61-92.
- PULLEIRO, Adrián (2015). Peronismo, populismo y años 70.



- Debates intelectuales en la emergencia del kirchnerismo (2003-2007). En *Conflicto Social*, 8(14), pp. 93-117.
- RUBINICH, Lucas (2012). Las voces de los intelectuales. Hay molinos y hay gigantes. En *Revista Todavía*, (27).
- SAFERSTEIN, Ezequiel (2014). El “sentido práctico del editor”: transformaciones y tensiones en el rol del director editorial de las grandes empresas en Argentina. En *Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales*, 14, pp. 1-16.
- SAFERSTEIN, Ezequiel (2016). La década publicada. Los best-sellers políticos y sus editores: producción de libros, difusión de temas e intervención pública en el mercado editorial argentino (2003-2015) (Tesis de Doctorado). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- SAPIRO, Gisèle (2012). La vocación artística entre don y don de sí. En *Trabajo y sociedad*, 19, pp. 503-508.
- SCHIFFRIN, André (2001). *La edición sin editores. Las grandes corporaciones y la cultura*. Santiago de Chile: Trilce.
- SEMÁN, Pablo (2006). Historia, best-sellers y política. En *Bajo continuo. Exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva*. Buenos Aires: Gorla, pp. 77-110.
- SEMÁN, Pablo (2017, abril 3). El sueño de la plaza propia. En *Revista Anfibia*. Recuperado a partir de <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/el-sueno-de-la-plaza-propia/>
- SOLER, Lorena, y GIORDANO, Verónica (2016). Editoriales, ideas y nuevas derechas en América Latina. En *XIII Seminario Argentino Chileno; VI Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales. Independencias y Dictaduras en el Cono Sur*. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo.
- SORÁ, Gustavo (2008). Edición y política. Guerra fría en la cultura latinoamericana de los años 60. En *Revista del Museo de Antropología*, 1(1), pp. 97-114.
- TARCUS, Horacio (ed.). (2009). *Cartas de una hermandad: Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Ezequiel Martínez Estrada, Luis Franco, Samuel Glusberg* (1ª ed). Buenos Aires: Emecé.
- THOMPSON, John B. (2012). *Merchants of culture. The publishing business in the twenty first century*. New York: Plume.

Notas periodísticas

- BLANC, N. (2013). Los libros de un país dividido. ADN. Recuperado a partir de <http://www.lanacion.com>.



ar/1625613-los-libros-de-un-pais-dividido

CLUB POLÍTICO ARGENTINO (2008). Documento inicial. Recuperado 12 de mayo de 2016, a partir de <http://www.clubpoliticoargentino.org/documento-inicial/>

LA NACIÓN (2011, abril 27). “Los libros políticos y sus autores, estrellas en la gran fiesta editorial”. *La Nación*. Buenos Aires. Recuperado a partir de <http://www.lanacion.com.ar/1368616-los-libros-politicos-y-sus-autores-estrellas-en-la-gran-fiesta-editorial>

ORTALE, Marcelo (2016, enero 3). El boom de los libros políticos en la Argentina. Diario *El Día*. www.eldia.com La Plata. Recuperado de <http://www.eldia.com/septimo-dia/el-boom-de-los-libros-politicos-en-la-argentina-107004>

Fecha de recepción: 23 de mayo de 2017

Fecha de aceptación: 4 de septiembre de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



Verónica Giordano

CONICET. Universidad de Buenos Aires. Argentina

veronicaxgiordano@gmail.com

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LOS INTELECTUALES EN LA PERSPECTIVA DE LAS DERECHAS LATINOAMERICANAS HOY

Resumen: *Abordamos el tema de la construcción de una comunidad de ideas de derecha en América Latina en las últimas décadas a través del libro de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto Mujer, sexualidad, Internet y política. Los nuevos electores latinoamericanos, editado en 2006. Las ideas vertidas en este libro han sido un pilar para la construcción del relato fundante del “mundo PRO” en Argentina y para su arribo al gobierno nacional. A través de las figuras que se construyen de las ciencias sociales y de los intelectuales estos operadores culturales de las nuevas derechas proyectan un cambio en la sensibilidad política que afecta los escenarios electorales actuales.*

Palabras clave: *nuevas derechas, América Latina, ideas, política, elecciones*

Social sciences and intellectual figures in the view of the Latin American right-wing politics today

We discuss the construction of a community of right-wing ideas in Latin America in the past few decades through the book “Women, sexuality, Internet and politics. The new Latin American voters” by Jaime Durán Barba and Santiago Nieto edited in 2006. The ideas expressed in this book have been a pillar for the construction of the foundational myth of the “PRO world” in Argentina and for its arrival in the national government. Through the figures constructed based in social sciences and in the intellectuals, these cultural operators of the “new” right-wing forces have projected a change in the political sensitivity that affects the current electoral scenarios.

Keywords: *new right-wing politics, Latin America, ideas, politics, elections*



Introducción

En este artículo, abordamos el tema de la construcción de una comunidad de ideas de derecha en América Latina en las últimas décadas. En particular, analizamos el libro de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto *Mujer, sexualidad, internet y política. Los nuevos electores latinoamericanos*, editado por Fondo de Cultura Económica en México, en 2006. Analizamos su significación a la luz de la experiencia argentina con la reciente llegada a la presidencia de Mauricio Macri a la cabeza del PRO en la Alianza Cambiemos¹. Entendemos que las ideas vertidas en este libro han sido un pilar para la construcción del relato fundante del “mundo PRO” (Bellotti, Alejandro; Vommaro, Gabriel y Morresi, Sergio, 2015) para su arribo al gobierno nacional en Argentina.

No podemos ocuparnos de este punto en extenso aquí, pues desborda los límites de este artículo, pero como hipótesis afirmamos que los contenidos de los libros que acompañaron el ascenso del PRO al gobierno nacional y los lineamientos de las políticas adoptadas hasta aquí por la gestión de Cambiemos en el Estado se condicen con las ideas que Durán Barba y Nieto articulan en su libro².

En este texto nos concentramos en dos figuras a través de las cuales se ha operado esa reposición de los valores de la derecha liberal/conservadora: la de las ciencias sociales y la del intelectual. Se trata de un trabajo de investigación que se enmarca en un proyecto de más largo aliento: *Nuevas derechas y democracia en América Latina*, c. 1980-2010, que dirijo junto a Lorena Soler y que cuenta con un subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA para el período 2014-2017.

Breve reseña del libro

Mujer, sexualidad, internet y política. Los nuevos electores latinoamericanos, de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, es un libro que se inscribe en la categoría de ensayo político. En tanto best-seller, la edición se agotó rápidamente³. Fue publicado en 2006 por Fondo de Cultura Económica de México con un prólogo del argentino Alejandro Rozitchner. Durán Barba es consultor de imagen y asesor político. Santiago Nieto también es consultor y es socio de Durán Barba. Desde 1995, juntos han colaborado con la *Graduate School of Political Management (GSPM)* fundada ese año por Christopher

¹ Cambiemos es la coalición política creada por Elisa Carrió y la Coalición Cívica-ARI, Ernesto Sanz y la Unión Cívica Radical, y Mauricio Macri y PRO para las elecciones presidenciales de 2015.

² Véase GIORDANO, Verónica, y SOLER, Lorena (2016). *Editoriales, ideas y nuevas derechas en América Latina*. Disponible en: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/8342/giordano-soler.pdf; y GIORDANO, Verónica y SOLER, Lorena (2016). “Editoriales, think-tanks y política. La producción y circulación de las ideas de las nuevas derechas en Argentina”. En *Revista Paraguaya de Sociología*, Asunción.

³ Ver “Un experto en comicios en todo el continente” (2007, febrero 25), en *La Nación*. Disponible en: <http://www.lanacion.com.ar/login/886607> Recuperado el 6 de septiembre de 2017.



⁴ En http://www.gspminternational.org/evento.php?pub_id=114. Recuperado el 6 de septiembre de 2017.

Arterton en la George Washington University⁴. Por su parte, Rozitchner es licenciado en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela. Es hombre de confianza de Mauricio Macri, tiene un despacho en la Casa de Gobierno y participa activamente de las reuniones del Gabinete de Ministros, aunque no se conoce con precisión si oficialmente detenta un cargo o si cobra un sueldo del Estado. Los vínculos entre Jaime Durán Barba, Santiago Nieto y Mauricio Macri datan de los primeros años del siglo XXI, cuando Macri comenzó a pergeñar su candidatura para la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2003. Se sabe que desde 2005 Durán Barba asesora a Macri y su máquina política, el PRO.

Mujer, sexualidad, internet y política es resultado de la experiencia recogida por los autores durante los veinte años previos de trabajo conjunto en Informe Confidencial Ecuador, una empresa de investigación de opinión pública creada en los años 80 por el propio Durán Barba y en la cual se destacó el desempeño de Gandhi Espinosa, hoy radicado en Argentina, asesor de Macri, y al cual Durán Barba y Nieto le expresan su agradecimiento en el libro. Se sabe que Durán Barba conoció a Enrique Dussell y Arturo Roig cuando estudiada Filosofía en Ecuador. Por su admiración hacia estos profesores decidió hacer una estancia en Argentina, en la Universidad de Cuyo, donde estos intelectuales enseñaban. Con la escalada de violencia de la Triple A luego el golpe de Estado de 1976, Durán Barba se trasladó a la Patagonia, a la Fundación Bariloche que fue refugio de varios exiliados internos. Allí se formó en las técnicas y metodología de la Sociología clásica. En los años 80, de regreso en su país y con ese bagaje, se dedicó a los estudios de opinión que lo convirtieron en quien es hoy: el *gurú* del marketing político. En 2008, Informe Confidencial se unió a *Call y Contact Center*, empresa líder en comunicaciones de alta tecnología “con un centro de operaciones IP con más de 150 posiciones propias en Argentina”⁵. Así se creó Informe Confidencial Argentina.

Mujer, sexualidad, internet y política consta de un prefacio, una introducción, tres partes y un *post scriptum*. La primera parte lleva por título “El nuevo elector latinoamericano”. La segunda, “La agonía de las grandes utopías: el mundo en el que nace el nuevo elector”. Y la tercera, “Por qué votan los electores”. En este artículo, hacemos referencias a todo el libro pero nos concentramos especialmente en el prefacio,

⁵En <http://informeconfidencial.com/quienessomos.php> Recuperado el 6 de septiembre de 2017.



la introducción y el *post scriptum*, que precisamente lleva por título “Las consultorías políticas y las ciencias sociales”.

El prólogo está escrito en un formato que sus mentores consideran *novedoso*, de preguntas y respuestas. Tan *novedoso*, y muy probablemente considerado efectivo desde el punto de vista del *marketing*, que el artilugio fue reutilizado en el libro *Estamos: una invitación abierta* (Buenos Aires: Planeta, 2013), compilado por el actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, y el ya mencionado asesor presidencial Rozitchner, en el cual el prólogo con formato de diálogo lleva la firma de Mauricio Macri⁶. A lo largo del prólogo, Rozitchner presenta a Durán Barba y Nieto como “facilitadores del diálogo” y rechaza expresamente el mote de “manipuladores de masas”. Otros apelativos que utiliza para presentarlos son “terapeutas sociales”, “operadores del encuentro y la comprensión” (en referencia al encuentro “entre los políticos y las necesidades reales de las poblaciones que deben elegirlos y ponerlos a su servicio”) (Durán Barba y Nieto, 2006: 15-16).

En la introducción a *Mujer, sexualidad, internet y política*, Durán Barba y Nieto afirman estar recuperando una experiencia de dos décadas, tanto del ámbito académico como del político. En ese trayecto, dicen, comprendieron “la importancia de lo cotidiano y la trascendencia de lo efímero” (Durán Barba y Nieto, 2006: 34). Es que otra característica propia de este tipo de libros (como de los que abordamos en Giordano y Soler, 2016 a y b) es que son ensayos políticos que se ocupan del presente siempre a partir del testimonio biográfico. El sociólogo francés Pierre Bourdieu sostiene que la historia de vida (en nuestro caso, el relato testimonial) parte de un supuesto:

El hecho de que “la vida” constituye un todo, un conjunto coherente y orientado, que puede y debe ser aprehendido como expresión unitaria de una “intención” subjetiva y objetiva, de un proyecto (Bourdieu, 2011: 121-122).

En *Mujer, sexualidad, internet y política* el testimonio de los autores (su intención subjetiva y pretendidamente objetiva) es un proyecto de masificación de ciertos valores y significados, que se asocian a la cultura neoliberal. Más aún, Bourdieu también sostiene que “la historia de vida es una de las nociones de sentido común que han entrado de contrabando en el discurso académico” (Bourdieu, 2011: 122). Precisamente, la difusión de este “sentido común” anclado en

⁶ El libro reúne una serie de testimonios de personas actualmente vinculadas al gobierno en el rol de ministros, legisladores, entre otros, que dan cuenta de su aporte específico para producir un “cambio”. Desde el punto de vista de los autores, estos testimonios operan como una “invitación” a involucrarse en la vida política y eventualmente en la vida político-partidaria en las filas del PRO.



la “historia de vida” de Durán Barba y Nieto es a lo que apelan estos operadores político culturales para dotar de legitimidad a sus prácticas discursivas y profesionales.

En el sitio de internet de Fondo de Cultura Económica se pueden apreciar algunos de los rasgos que definen al tipo *best seller* (además del ya señalado *record* de ventas, por el cual el libro deja de conseguirse en librerías rápidamente, independientemente de la cantidad de ejemplares impresos) y que son utilizados para presentar *Mujer, sexualidad, Internet y política*. Por ejemplo, la construcción de los autores como referentes en la materia: “Los autores de este libro han participado como consultores en decenas de campañas electorales en varios países de América Latina”; el abordaje de temas coyunturales: “Hace décadas muchos jóvenes militaban en la izquierda o en la derecha; la discusión sobre el poder era algo fundamental en su vida. Hoy la gran mayoría de los jóvenes odia la política”; escrito en lenguaje sencillo: “Éste es un texto provocador, que cuestiona los paradigmas, con un estilo ameno, pleno de humor y sólido respaldo académico”; dirigido al gran público: “Es una lectura obligada para quien quiera comprender de una manera distinta los procesos electorales contemporáneos y los juegos de poder que se dan desde el nivel familiar hasta el político”, así, el libro apunta a un gran arco de público que va desde el individuo politizado hasta aquel que solo manifiesta interés en lo que atañe al “nivel familiar”⁷.

⁷ Tomado del sitio de internet de la Editorial Fondo de Cultura Económica, disponible en <https://www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=6036#> Recuperado el 6 de septiembre de 2017.

⁸ Los libros posteriores de los mismos autores edifican sus argumentos sobre el mismo eje: *El arte de ganar: cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas* (2011), Buenos Aires: Sudamericana, y *La política del siglo XXI Arte, mito o ciencia* (2017), Buenos Aires: Debate.

Los autores de *Mujer, sexualidad, internet y política* tienen una idea rectora: las elecciones se ganan con el voto de las mayorías⁸. Y, siguiendo el hilo conductor de este argumento, puesto que según los autores en América Latina las mayorías están integradas por indígenas, trabajadores informales y jóvenes desempleados, es necesario ocuparse de ese “nuevo electorado”. Este es el mensaje que, en resumidas cuentas, el libro nos trae. Sin embargo, dicho mensaje no está dirigido a los académicos estudiosos del marketing político, ni a los profesionales de las encuestas, antes bien es un libro de divulgación que apunta a establecer ciertos significados, valores, sentidos comunes que deben acompañar y que son necesarios para cumplir con el objetivo comercial y político de la empresa Durán Barba: ganar elecciones.

En las tres partes que componen el texto, los autores despliegan un abanico de temas que a través del argumento principal (afirmar que existe un “nuevo elector

latinoamericano”) contribuyen a crear una cierta sensibilidad política a favor de las fuerzas políticas que Durán Barba y Nieto más abiertamente asesoran: las “nuevas” derechas latinoamericanas. Es por esto que *Mujer, sexualidad, internet y política* y otros libros del mismo tipo ocupan un lugar primordial para conocer las claves de la construcción del imaginario social y político contemporáneo.

El texto en su contexto

Este tipo de literatura es criticada y despreciada por el mundo académico y letrado por considerarla reaccionaria. Pero es eficaz en la imposición de ciertos contenidos para la cultura de masas. Algo similar ya ha sido agudamente señalado por Pablo Semán en referencia a los textos de historia del tipo best-sellers: operan cambios en la sensibilidad política y social. El ejercicio de investigación que aquí presentamos parte de una pregunta formulada por Semán: “¿Cuál es el valor político de la aparición y circulación de los libros [del tipo best-sellers]?” (2006:77).

El best-seller irrumpe en la escena editorial como un éxito coyuntural de ventas, durante un período generalmente breve en el que el libro se mantiene en los primeros puestos de las grandes librerías para luego pasar a segundo plano y casi dejar de circular. No mantiene una vigencia más allá de un momento histórico social determinado. El ensayo político es un tipo de best-seller que se define por su foco en una coyuntura política particular local, lo cual permite cautivar al público masivo bajo formas globales de producción. Los procesos de concentración y transnacionalización de la industria cultural han creado una “ingeniería editorial” específica para la producción de best-sellers políticos. El éxito de este tipo de libros conlleva una planificación en la que participan editores y demás trabajadores de la industria editorial guiados por las reglas del mercado (oferta y demanda) (Saferstein, Ezequiel, 2012).

Para responder a la pregunta formulada por Semán, tomamos prestado en parte su argumento y lo adaptamos a nuestro objeto de estudio: afirmamos que estos libros han mediado entre la desafiliación político-partidaria de comienzos de siglo XXI y la reconstitución de cierto compromiso político por parte de las clases medias que se identifican con los valores de la derecha liberal/conservadora.



Se trata de una reconstitución del compromiso político basada en los valores propios del (neo)liberalismo: individualismo, exitismo personal, pragmatismo, apoliticismo (falta de utopías), mentalidad mercantil, consignas aspiracionales. En Argentina, estos textos permiten entender la llegada de Mauricio Macri y el PRO a la Presidencia. En efecto, el libro de Durán Barba y Nieto muestran las líneas rectoras de un marketing comunicacional que son practicadas casi al pie de la letra por los funcionarios del PRO en sus libros: *Ganas de vivir. Filosofía del entusiasmo*, de Alejandro Rozitchner (Sudamericana, 2010); *Estamos: una invitación abierta*, de Marcos Peña y Alejandro Rozitchner (Planeta, 2013); *El Diálogo, el encuentro que cambió nuestra visión sobre la década del 70*, de Pablo Avelluto (Sudamericana, 2015); *Que se metan todos. El desafío de cambiar la política argentina*, de Iván Petrella (Sudamericana, 2015); y *Cambiamos. Mauricio Macri presidente. Día a día, la campaña por dentro*, de Hernán Iglesias Illa (Sudamericana, 2015).

La afinidad entre estos libros debe ser leída en una afinidad de contextos. Tal como sostiene Semán (2006: 85) para el caso de los libros de historia del tipo best-sellers (por ejemplo, los de Felipe Pigna), los textos que estamos revisando en este artículo tienen como telón de fondo un dato clave: la “insatisfacción” como sentimiento generalizado a partir de una situación de crisis profunda. En el caso de Argentina, la crisis de 2001 y el “que se vayan todos” (y no es casual que uno de los libros aludidos arriba lleve por título su contrapartida: “Que se metan todos”). En el caso de Ecuador, la crisis de 1999 que derivó en la dolarización de la economía y en el derrocamiento del presidente derechista Jamil Mahuad al año siguiente. Para Semán, la crisis (en referencia a Argentina pero extensible a Ecuador) “es un dato central del contexto en que estos libros ascendieron a un primer puesto en las ventas masivas” (Semán, 2006: 85).

Cabe decir, además, que Jaime Durán Barba se desempeñó como ministro del Gobierno de Mahuad, en la Secretaría de la Administración Pública durante los dos años que duró su mandato, entre 1998 y 2000. Mahuad, por su parte, está acusado de presunto peculado y está prófugo de la Justicia, con residencia en Estados Unidos y abogado al dictado de cursos de posgrado en la Kennedy School de la Universidad de Harvard. Es decir que Durán Barba no es un *outsider* de la política, como tampoco lo son Marcos Peña, Iván

Petrella o el propio Mauricio Macri.

Durán Barba ha capitalizado el trayecto desde su militancia universitaria en el campo de la izquierda hasta su cargo de secretario en el gobierno de Mahuad, desde su formación en Filosofía hasta su desempeño profesional en el marketing político, para afirmar un producto que encuentra fuerte demanda en un mercado cultural signado por la insatisfacción: el discurso del cambio y la novedad. Este es el producto que vende Informe Confidencial: “Una nueva empresa, con la sabiduría que trae la experiencia, pero con pasión por lo Nuevo, preparada para ofrecer al sector público y privado *hispanoparlante* un mejor entendimiento de cómo sienten, piensan y deciden nuestros pueblos”⁹. Este es también el producto que vende *Mujer, sexualidad, internet y política*: “el nuevo elector latinoamericano”. Y éste es asimismo el producto que ha comprado el PRO. En palabras de uno de sus intelectuales predilectos, Alejandro Rozitchner, en el prefacio al libro de los ecuatorianos:

La crisis de la política suele interpretarse como un proceso negativo de disolución, sin saber ver en él la insurgencia del *nuevo mundo* que Durán Barba y Nieto describen con minuciosidad (el subrayado es nuestro, pág. 18).

⁹ Tomado del sitio de internet de la empresa Informe Confidencial. Disponible en <http://informeconfidencial.com/quienessomos.php> Recuperado el 6 de septiembre de 2017.

La figura de las ciencias sociales

Como ya se ha dicho, *Mujer, sexualidad, internet y política* lleva un prólogo del argentino Rozitchner. En este prólogo se brinda una visión de las ciencias sociales que hoy es la que se vislumbra detrás del ataque selectivo a las mismas por parte del gobierno de Cambiemos a través de su política de Ciencia y Técnica.

En efecto, Rozitchner afirma:

...el pensamiento social explícito y consciente (opinión pública y ciencias sociales) es un *pensamiento atrasado*, plagado de ideas y palabras más deseosas de respetar el compromiso con una realidad que ya no es, que de avanzar hacia el entendimiento del mundo que hoy está ante nuestros ojos (Durán Barba y Nieto, 2006: 15; la cursiva es nuestra).

En este diagnóstico se contraponen el atraso con el progreso (“avanzar”). Las ciencias sociales se ocupan de “ideales” (pensamiento plagado de “ideas”) y no de la realidad



“concreta” (el “mundo” perceptible a través de los sentidos). Las ciencias sociales se ocupan del pasado (una “realidad que ya no es”) y no del presente (“hoy”).

El propio ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno de Macri, Lino Barañao, en medio del conflicto por el recorte de ingresos y becas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), abona esta visión del rol pragmático que tienen las ciencias en las sociedades modernas. Para defender el recorte, afirmó: “No hay ningún país que, con 30 por ciento de pobres, esté aumentando el número de investigadores”. Y sostuvo que el objetivo (de su gestión bajo el gobierno de Macri) es “tener más investigadores, pero con un perfil diferente, más insertos en las necesidades del país”.

Podemos asumir sin arriesgar demasiado que las “necesidades” a las que refiere el ministro es aquello mismo que Rozitchner, Durán Barba y Nieto señalan como cuestiones “concretas”, del “hoy”, como la pobreza (que por otra parte son significados universales expresados en un estilo nominal, y así ¡quién podría oponerse a que la ciencia se ocupe de combatir la pobreza!)¹⁰.

La posición que fija Rozitchner en el prefacio a *Mujer, sexualidad, internet y política* sostiene algo así como que la ciencia está muerta. Y en su lugar promueve un conocimiento que se identifica con la “vida”, el “crecimiento”, la “expresión”.

...cuando oímos la palabra ciencia tendemos a representarnos imágenes de pureza y abstinencia, pero lo que surge de la realidad minuciosamente investigada no es un conocimiento aséptico sino un mundo exuberante y vitalísimo, una realidad humana y natural que se comporta como una mirada más atenta podría observar que siempre se ha comportado: trasmutando en formas imprevistas, haciendo pasar enormes cantidades de vida por los lugares por donde ésta encuentra mayores posibilidades de crecimiento y expresión (Durán Barba y Nieto, 2006: 19).

Este diagnóstico que se anuncia en el prólogo del libro es el mismo que enuncian los autores en el *post scriptum*. Durán Barba y Nieto establecen una dicotomía entre las ciencias sociales y el trabajo de consultorías políticas y reproducen el mismo argumento de ciencia/ideal versus conocimiento pragmático/realidad. Así, afirman expresiones tales como: “[El consultor] se mueve en un mundo tal como es y no hace campañas para un mundo como ‘debería ser’”. O más directamente: “[La investigación tiene] un sesgo pragmático”.

¹⁰ “No hay país que con 30% de pobres aumente el número de investigadores” (2016, diciembre 6, en *El Cronista*. Disponible en <https://www.cronista.com/economia/politica/Baranao-No-hay-pais-que-con-30-de-pobres-aumente-el-numero-de-investigadores-20161206-0083.html> Recuperado el 6 de septiembre de 2016.

De un lado, los autores sostienen: “Los consultores políticos no podemos usar categorías que nos alejen de la realidad”, el trabajo del consultor consiste en obtener “resultados concretos en el corto plazo” (pues de lo que se trata es de “ganar una elección”). Del otro lado, afirman: las ciencias sociales se encargan de “diseñar mundos ideales en el campo de la teoría”, las ciencias sociales “estudian el pasado” y “un universo atemporal” (Durán Barba y Nieto, 2006: 365-377).

Es más, en la exposición de esta visión dicotómica, la verdad científica es desplazada por la verdad de la encuesta. La ciencia es reemplazada por el instrumento de medición. La complejidad del pensamiento por una app. Según su visión, los textos académicos “suelen ser largos, difíciles de entender (...) Aunque en muchos casos sean vacíos deben respetar el ceremonial del texto solemne”. En cambio, los consultores escriben “en un lenguaje sencillo”, usando “permanentemente el *Power Point*” (Durán Barba y Nieto, 2006: 368).

La pretendida controversia que los autores establecen está fundada en hechos: los de la década del 60. “La tradición de las ciencias sociales en América Latina ha puesto énfasis en el desarrollo de la teoría y ha despreciado el valor de la investigación empírica”, afirman Durán Barba y Nieto en la sección final de su libro. Y prosiguen:

Cuando en la década de 1960 se consolidaron en la región las Ciencias Sociales, la influencia de Louis Althusser y otros intelectuales franceses como Poulantzas fetichizó a la teoría, restó importancia al dato empírico y al estudio de la realidad concreta (Durán Barba y Nieto, 2006: 370).

Esto nos recuerda que precisamente en esa época (puntualmente en 1959) el sociólogo estadounidense Charles Wright Mills publicó *La imaginación sociológica*, un libro que sondeaba las implicaciones de las ciencias sociales para el desarrollo de las tareas políticas de su tiempo. Wright Mills también tenía una postura crítica de la “gran teoría”. Pero al mismo tiempo desestimaba el “empirismo abstracto”. La crítica de este sociólogo se basaba en que, lejos de tener un carácter emancipatorio, la sociología profesional practicada en cualquiera de estas dos versiones operaba a favor del interés de las “élites de poder”. Parece, entonces, que el rescate que Durán Barba y Nieto hacen de la sociología empírica (volviendo una y otra vez sobre la legitimación de su discurso a partir de “miles” de encuestas e investigaciones



“minuciosas”) es el rescate de un tipo de conocimiento (y de ciencia) recortada en el molde de los intereses de las clases dominantes.

La figura de los intelectuales

En la visión de Durán Barba y Nieto, los intelectuales son la figura contradictora de los “ciudadanos comunes”, a quienes los autores encumbran en su libro con el concepto “nuevo elector latinoamericano” (ratificando el sustrato liberal de su visión, en la cual ciudadano es igual a elector según la ecuación un individuo = un voto. Así, por ejemplo, sostienen:

Muchos intelectuales hemos perdido la capacidad de asombrarnos con lo cotidiano. Difícilmente nos hacemos las preguntas elementales que se hacen los ciudadanos comunes. Somos demasiado formados como para entenderlas. Somos demasiado serios. Demasiado solemnes (Durán Barba y Nieto, 2006: 67).

La genealogía arranca en el mismo punto de partida en el que los autores sitúan su crítica a las ciencias sociales: los años 60. A partir de esos años, sostienen, “la izquierda se fortaleció y se convirtió en la ideología de quienes fuimos los jóvenes en ese entonces” (recordemos que Durán Barba nació en 1947), y “se estableció que los intelectuales debíamos ser críticos” (Durán Barba y Nieto, 2006: 68). Los autores proponen una secuencia simplificada: intelectuales-crítica-izquierda. Y llevan tal simplificación a niveles de cinismo descarado, argumentando que el fenómeno que explica esa secuencia considerada negativa es el acceso irrestricto de las clases medias a la universidad:

No hay duda que existe una conexión entre [la] masificación de la educación superior y la aparición de Sendero Luminoso en Perú, los Tupamaros en Uruguay y otras manifestaciones de rebeldía en el continente (Durán Barba y Nieto, 2006: 56).

La explicación que brindan tiene fundamentos empíricos:

En la historia de muchos grupos “subversivos” latinoamericanos encontramos profesionales universitarios frustrados por su falta de inserción en el mercado laboral que ante la imposibilidad de mejorar su mundo individual fantasearon con cambiar de raíz la sociedad en la que vivían (Durán Barba y Nieto, 2006: 56).

En la actualidad, desde la perspectiva de Durán Barba y Nieto, existe una “crisis” de los intelectuales. La gente “común” ya no los reconoce como seres “superiores” y por lo tanto perdieron “poder”:

Es poco probable que los jóvenes electores creen que los doctores son demasiado exitosos o que tienen algo importante que decirles al momento de tomar una decisión electoral, cuando su tío vende helados por la calle con un título de doctor en Biología bajo el brazo, sobre todo en una sociedad en la que la prosperidad económica es la medida del éxito en la vida (Durán Barba y Nieto, 2006: 57).

Los autores también afirman que existe una crisis de las ideologías, que

...se produce porque la mayoría de los electores contemporáneos se interesan poco en sus discusiones y se mueven en el escenario electoral tratando de satisfacer necesidades concretas, o satisfaciendo sentimientos de envidia, solidaridad, confianza, respondiendo a identidades grupales regionales o étnicas o simplemente porque les gusta un espectáculo. Cualquier cosa menos las propuestas sesudas de nuestros intelectuales (Durán Barba y Nieto, 2006: 46).

En este diagnóstico de crisis, el desprecio y la minusvaloración que se hace de los intelectuales opera en el sentido de fortalecer el rol de la figura contradictoria: “las gentes comunes”. Y aparece, claramente en este fragmento, que el discurso político de Barba y Nieto se edifica sobre la idea de “insatisfacción” que es el correlato de la “crisis” fundante (de 1999 y de 2001 en Ecuador y Argentina respectivamente), una gran interpretación sociológica, aunque los propios autores nieguen la sociología como disciplina válida para interpretar la realidad. Tirar la piedra y esconder la mano.

No tenemos poblaciones que se comportan como sociólogos, sino que los intelectuales nos hemos convertido en una minoría menos importante, en el seno de una población que maneja sus destinos a su manera (Durán Barba y Nieto, 2006: 71).

En la interpretación de Barba y Nieto se refuerza la idea de que “la población, las gentes comunes”, son los que “imponen su agenda”. En el dilema filosófico entre razón y pasión, estos dos expertos del *marketing* político destierran a los intelectuales por ser portadores de un valor perimido: la razón. En su lugar, erigen la pasión como el valor rector del



“nuevo elector latinoamericano”. Así, sostienen:

La idea de que los intelectuales ‘tenemos la razón’ y de que el problema se superará cuando la masa estudie sociología, aprenda a discutir ideologías y programas de Gobierno y hable nuestro lenguaje está equivocada (Durán Barba y Nieto, 2006: 58).

El trabajo del intelectual es pensar críticamente, algo que desde luego se relaciona ampliamente con lo discutido en la sección anterior, pues sin pensamiento crítico es impensable la ciencia social (y también la mal llamada ciencia “dura”). Ya hemos visto como en su libro Durán Barba y Nieto descalifican esa creencia que sostiene que el intelectual debe ser crítico y que ellos endilgan despectivamente al clima revolucionario de los años 60.

Digamos también respecto de este asunto que su prologuista Alejandro Rozitchner publicó cuatro años después su libro *Ganas de vivir*, en el cual esbozó los primeros trazos de su cruzada contra el pensamiento crítico que hoy ha tomado cuerpo en los talleres de Entusiasmo que ha impartido para los “voluntarios” del PRO y otros curiosos alegres. Desde su punto de vista, la crítica avala una “actitud esterilizante”, son “paparruchadas pseudolúcidas”, es una “falsa inteligencia”, es un “estadio adolescente y reactivo”, es “absurdo”. En su interpretación, la “apatía” (o la “insatisfacción” a la que referimos antes) es hija de la crítica y por ende insistir en ella “agrava el problema”.

Se trata de un proyecto cultural y político que tiene incluso una propuesta pedagógica:

...no hay que enseñar por ejemplo a criticar los libros, hay que enseñar a quererlos. La lectura no avanza a través de la experiencia de evaluar un texto con sobriedad y objetividad (¿alguien cree que existe ese Dios, además?). Enseñar a leer es enseñar a encontrar en los libros palabras que ayuden a vivir, que orienten, que permitan que uno sostenga sus emociones y las haga crecer (Rozitchner, 2012: 82).

Se trata pues de un “ataque” contra las ciencias sociales, los intelectuales y el pensamiento crítico que es parte de la estrategia del “arte de ganar” elecciones. En el posterior libro, que lleva ese título, Durán Barba y Nieto dedican varios capítulos a las lecciones sobre “cómo usar el ataque en las campañas políticas” para “ganar”.

Algo no muy distinto ya se afirma en la sinopsis del libro

Mujer, sexualidad, internet y política publicada en el sitio de Fondo de Cultura Económica:

Las imágenes han aniquilado a las palabras y el espectáculo ha remplazado a los antiguos discursos y programas. Muchas elecciones se ganan o se pierden en el continente a causa de estos elementos, que son extraños a la comprensión tradicional de la política¹¹.

Las palabras, los discursos, los programas son cosas del pensamiento atrasado y de la vieja política. En su lugar es preciso colocar imágenes, espectáculo, emociones. Estos son los valores de la política y la cultura neoliberal: el individualismo y el apoliticismo (que implica que la política ya no se orienta por utopías (que supone el largo plazo), sino que simplemente es un “juego” (que es contingente). Así lo entiende también su discípulo Rozitchner, cuando afirma que hay que deponer el pensamiento crítico: “Esto lo necesita tanto nuestro juego político como nuestro juego individual” (Rozitchner, 2012: 82).

Conclusiones

Quizás sea impropio terminar este artículo con un apartado de conclusiones en el cual no se presentan ideas concluyentes sino más bien interrogantes que surgen a partir del recorrido trazado. Pero no tenemos por el momento más que esto.

¿Cuál es el vínculo entre Durán Barba, Rozitchner y Macri? ¿Quiénes han sido los receptores de estos textos? ¿Cómo se están traduciendo estas ideas y valores en las políticas implementadas desde el Estado argentino en sus diferentes esferas de acción? ¿Es posible encontrar similitudes en las experiencias de campaña y de gobierno de otros países latinoamericanos en los cuales la derecha se ha constituido como fuerza política en competencia electoral? ¿Qué otras figuras, además de las ciencias sociales y de los intelectuales, es posible identificar? Pienso en algunas: la figura de la ideología (y el par derecha/izquierda), la figura de la mujer, la figura de la tecnología, la figura de la cultura popular...

En fin, todavía queda mucho por indagar, esperamos haber encontrado en el recorrido de este texto una matriz para pensar críticamente el presente latinoamericano y el embate cultural de las derechas neoliberales.

¹¹ Tomado del sitio de internet de la Editorial Fondo de Cultura Económica, disponible en <https://www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=6036#> Recuperado el 6 de septiembre de 2017.



Bibliografía

- BELLOTTI, Alejandro; VOMMARO, Gabriel, y MORRESI, Sergio (2015). *Mundo PRO Anatomía de un partido fabricado para ganar*. Buenos Aires: Editorial Planeta.
- GIORDANO, Verónica, y SOLER, Lorena (2016a) *Editoriales, ideas y nuevas derechas en América Latina*. Disponible en: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/8342/giordano-soler.pdf Recuperado el 16 de septiembre de 2017.
- GIORDANO, Verónica, y SOLER, Lorena (2016b). Editoriales, *think-tanks* y política. La producción y circulación de las ideas de las nuevas derechas en Argentina. En *Revista Paraguaya de Sociología*, Asunción, 147, octubre-diciembre, pp. 35-51.
- BOURDIEU, Pierre (2011). La ilusión biográfica. En *Acta sociológica*, N°56, setiembre-diciembre, pp. 121-128.
- SEMÁN, Pablo (2006). Historia, best-sellers y política. En SEMÁN, Pablo. *Bajo Continuo. Exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva*. Buenos Aires: Editorial Gorla. 77-110.
- SAFERSTEIN, Ezequiel A. (2012). Los editores de best-sellers: Producción y circulación de géneros editoriales sobre la coyuntura política argentina (2001-2010). En *VII Jornadas de Sociología de la UNLP*, 5 al 7 de diciembre de 2012, disponible en: <http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/actas/Saferstein.pdf/view>
- ROZITCHNER, Alejandro (2012). *Ganas de vivir. La filosofía del entusiasmo*. Buenos Aires: Sudamericana.

Fecha de recepción: 1 de junio de 2017

Fecha de aceptación: 15 de septiembre de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional





Carlos María Ciappina

Universidad Nacional de La Plata. Universidad de Moreno. Argentina

ciappinac@gmail.com

Paula Meschini

Universidad Nacional de Mar del Plata. Universidad Nacional de Rosario. Argentina

paulameschini@gmail.com

EL TRABAJO EN ARGENTINA COMO CENTRO DE LA CUESTIÓN SOCIAL Y CONSTRUCTOR DE RELACIONES SOCIALES

Resumen: *En esta economía global financiarizada, cabe interrogarnos si podemos seguir sosteniendo que trabajo es únicamente el trabajo registrado, el trabajo asalariado. El neoliberalismo inhabilita al Estado como regulador de la relación entre mercado y sociedad, fragmenta la sociedad instrumentando lógicas focalizadas y segmentadas. El objeto fundamental de esta presentación es realizar una reflexión crítica y comprensiva en torno al valor del trabajo en sociedades salariales que aún persisten pese al embate neoliberal. Este texto invita a repensar “viejos problemas” desde diferentes matrices conceptuales, recuperando la diversidad, el enfoque de derechos, así como la dialéctica entre lo micro y macro social.*

Palabras clave: *trabajo, neoliberalismo, América Latina, cuestión social*

Work in Argentina as the centre of the social question and as the builder of social relationships

Abstract: *Considering our globalized financial economy, can we continue to accept that work only refers to registered work and waged labour? Neoliberalism disables the State as regulator of the relationship between market and society, and fragments society by implementing segmented and focused logics. The purpose of this presentation is to make a critical and comprehensive reflection on the value of work in wage salaried societies that still persist despite the neo liberal clash. This text invites to rethink “old problems” from different conceptual matrixes, recovering diversity and a rights approach, as well as the dialectic between the micro and the macro social.*

Keywords: *work, neoliberalism, Latin America, social question*



Ahora, este proceso que le toca afrontar a la actual presidenta es un proceso por demás difícil y distinto. Porque a mí me tocó salir del infierno. Ella ahora tiene que cualificar el trabajo, tiene que profundizar la distribución del ingreso...

(Entrevista a Néstor Kirchner realizada por Oliver Stone para su documental *South of the border*, 14 de enero de 2010).

El trabajo asalariado en la Argentina como problema

Frente a los procesos de desindustrialización operados a partir de la década de 1970, al paulatino proceso de independización del sistema especulativo financiero del sistema productivo, sumado a la crisis salarial y del estado de bienestar, la liberalización y transnacionalización del capital financiero, en algunos de los países denominados como centrales se inició una serie de discusiones en torno al lugar que ocupa el trabajo en las sociedades contemporáneas.

El decálogo neoliberal identificó ese agotamiento con los altos costos laborales y el peso sobre el Estado de un conjunto de prestaciones básicas universales (en especial, salud, educación y seguridad social). Este diagnóstico habilitó, primero en países como Estados Unidos y Gran Bretaña y luego en los países en procesos de desarrollo, el despliegue de las reformas neoliberales que atacaron fuertemente la institucionalidad generada en el marco del estado de bienestar alrededor del salario. Durante el ciclo neoliberal, que se inaugura con el post-Estado de providencia o bienestar, el trabajo asalariado no solo se constituyó en un bien escaso sino que, además, el Estado se corrió de la función de otorgar condiciones para generar empleo, dejando librado el problema del trabajo, su creación, acceso y permanencia, al mercado, al juego de la oferta y la demanda. En este duro proceso de transfiguración de las formas sociales y su interacción, se incorporaron nuevos esquemas de percepción, clasificación y valoración que afectaron a los procesos de filiación tanto social como del trabajo.

En este marco, se destacan algunos estudios propios de la sociología del trabajo que sostienen la crisis de las denominadas “sociedades salariales”, mientras que otros abonan a la idea del “fin del trabajo”. Si bien los planteos que realizan diferentes autores en esta línea son abundantes y diversos, y aunque no constituyen el objeto de debate de esta presentación, no se puede dejar de mencionar algunos autores cuyos textos abonaron a esta presentación como son Rifkin, Jeremy, Andre Gorsz, Meda Dominique, entre otros.

En líneas generales, en esta presentación se acuerda con



lo sostenido por Leticia Muñiz Terra (2009), quien sostiene que el mundo del trabajo latinoamericano ha sufrido grandes transformaciones, donde el problema de la informalidad en el trabajo no constituiría una novedad en la región ya que como sostiene la autora

En las últimas tres décadas del siglo XX, se produjo, en síntesis un deterioro generalizado de la situación laboral de los trabajadores latinoamericanos. Los indicadores más claros de esta realidad han sido el aumento sostenido de la desocupación, la subocupación, la informalidad y el advenimiento de la precarización laboral. Aunque en algunos países estos indicadores no eran nuevos, a lo largo de este período tendieron a profundizarse las críticas situaciones laborales preexistentes. El trabajo se *diluyó* en formas más precarias, más inseguras, más invisibles, más dispersas. Los trabajadores continuaron de una u otra manera desempeñando diversas actividades en busca de su sustento material. Así, lo realmente original de la situación no fue, como sostuvieron algunos autores europeos¹, la desaparición del trabajo sino el surgimiento de *nuevos trabajos* caracterizados por su precariedad, temporalidad e inseguridad. Estos trabajos aparecieron como vías alternativas de inserción laboral cuando las vías tradicionales (trabajo estable, regulado, formal) se vieron deterioradas (Muñiz Terra, Leticia: 2009: 17-18).

¹ Entre los que podemos destacar a Rifkin, Gorz y Offe.

Sin embargo, en sociedades como las nuestras, no se puede dejar de mencionar la fuerte significación y las múltiples implicancias subjetivas y colectivas que posee el trabajo asalariado en la vida cotidiana y en especial en los sectores populares. En el caso específico de la Argentina, esta relevancia histórico-cultural del trabajo asalariado reposa en la matriz societal alcanzada durante el primer peronismo (1946-1955)². En un proceso económico-social de excepción en relación con los desarrollos industrializadores occidentales, el primer peronismo llevó a cabo a la vez un proceso acelerado de industrialización y la construcción del estado de bienestar, evitando los traumas sociales típicos de las industrializaciones capitalistas clásicas. Esta particular forma de industrialización de trabajo asalariado y ampliación de derechos hay que incorporarle la decisión político-económica de sostener el pleno empleo. La tasa de desempleo en la Argentina osciló entre el 2,5 y el 3% entre 1950 y mediados de la década de 1970. Esta conformación de una clase trabajadora asalariada de carácter masivo fue excepcional para el caso

² Torrado, Susana (1994) *Estructura social de la Argentina*; Andrenacci, Luciano et. al (2001). *Acerca del Estado de bienestar en el peronismo clásico*.

latinoamericano y se constituyó en la perdurable adscripción de la mayoría trabajadora al peronismo.

Esta importancia está dada en diferentes planos como el económico, ya que lo constituye en una actividad para la generación de ingresos para el trabajador/a y su grupo familiar, posibilitando el acceso a bienes y servicios y por ende, garantizando su reproducción material; el plano personal, dado que opera como organizador de lo cotidiano de los individuos y sus familias así como en el de las relaciones interpersonales favoreciendo la estructuración y fortalecimiento de las identidades personales y colectivas. El trabajo constituye, desde esta posición, un factor de socialización, que provee de un mundo de relaciones y valoraciones, que en lo simbólico opera como factor de integración social y pertenecía a la comunidad. En esta línea no se puede dejar de mencionar las reflexiones realizadas por Julio de Neffa (2003) en otro de sus textos, titulado *El trabajo humano. Contribuciones al estudio de un valor que permanece*, en torno a las distintas significaciones del trabajo desde una perspectiva histórica se estructuran fundamentalmente en tres dimensiones: una objetiva, otra dimensión propia del sujeto y una más que considera el trabajo como fin en sí mismo o como medio. A continuación, se presenta brevemente el enfoque de tres dimensiones propuesto por el autor:

1) Dimensiones objetivas: como una acción orientada hacia la producción material que implica un gasto de energía humana con la participación de sus facultades físicas, psíquicas y mentales. Además como una actividad socialmente necesaria (en tanto la transformación de la naturaleza para la necesaria reproducción de la especie humana) y trascendente (en cuanto a que lo producido tiene existencia objetiva propia y separada de su productor pudiendo extenderse su vida útil más allá del sujeto creador); 2) dimensiones propias del sujeto: el trabajo es siempre la actividad de un ser humano, siempre va acompañado de sufrimiento y/o placer a la vez que proyecta diversas emociones del individuo (alegría, fastidio, entusiasmo, etc.). Se establecen relaciones directas con la vida y la salud del trabajador. Contribuye (o no) a su realización personal, le otorga un sentido de pertenencia e identidad, se instaura y se da involucramiento con la empresa y/o el colectivo de trabajo; 3) el trabajo como fin en sí mismo o como medio: el trabajo no constituye un fin absoluto y duradero, sino un fin intermedio que se orienta hacia algo exterior al ser



humano, concluye afirmando que “la vida no es para el trabajo, no existimos para trabajar, el trabajo es para hacer posible la vida, se trabaja para vivir” (Neffa, Julio, 2003: 247-252).

Es así que a partir de reconocer el valor y la importancia que posee el trabajo en las tres dimensiones que sostiene Neffa, es que sostenemos que el trabajo en sus diversas formas ocupa el centro mismo de la cuestión social convirtiéndose, por ende, en una de las principales claves para pensar e intervenir en sociedades fragmentadas por el impacto y la persistencia del ciclo neoliberal. La categoría de *trabajo asalariado* –posee en sí un déficit– propio del actual contexto histórico social en el cual se inscribe, donde la situación laboral es endeble, y por lo tanto la representación que se tiene del trabajo asalariado se modificó, se flexibilizó, perdiendo la significación social que históricamente se le atribuyó, particularmente en aquellos países que, como el nuestro, tuvieron una fuerte presencia del estado de bienestar. La categoría trabajo ha perdido su significación histórica, constituyéndose en un término altamente valorativo y explicativo a la vez, de las transformaciones de la realidad social en general y de la vida cotidiana de los sectores populares, en particular.

El principal enemigo del neoliberalismo: el Trabajo asalariado

El modelo neoliberal se constituye como un modelo civilizatorio (Lander, Edgardo, 2011) que se despliega a partir de la convicción de la necesidad de profundizar la reproducción del capital en un nuevo formato societal (económico, social y cultural). Ese nuevo formato societal se constituye a partir de una reconversión económico-tecnológica que propone dos caminos que se retroalimentan: una sociedad del hiperconsumo suntuario, donde la perspectiva tradicional del trabajador-consumidor da paso a un consumidor de objetos de lujo con alta inversión en tecnología, y una sociedad donde el número de trabajadores “en blanco”, con sistemas de protección laboral y sindicalizados, son una minoría y/o el peso de la fuerza laboral de las grandes compañías lo constituyen trabajadores/as (niños/ñas con bajísimos salarios y condiciones laborales de extrema sobreexplotación).

Todo el proceso va acompañado de una retirada profunda del Estado y sus políticas en torno a la constitución de sistemas institucionales que promuevan y garanticen

el pleno empleo o niveles mínimos de trabajo asalariado en condiciones de bienestar.

Esta situación instala un escenario de sospecha, competencia y rivalidad, donde los lazos societarios se hacen cada vez más débiles, casi inexistentes. La sociedad se reconfigura y con ello cambiaron las expectativas alrededor del futuro, las identidades colectivas e individuales, que antiguamente se hallaban ligadas al trabajo, las formas de relacionarse con los otros, la dinámica familiar, las formas de pertenencia y los espacios dadores de sentido.

Como es bien sabido, la consecuencia de este proceso de transformación social fue la exclusión de amplios sectores de la población, la fragmentación del tejido social, el deterioro de las identidades colectivas, el incremento de la violencia material y simbólica que genera una sociedad de consumo basada en la generación de necesidades imposibles de ser satisfechas a través del salario. La herencia social fue el aumento de la desigualdad en términos de ingreso, la profundización de la pobreza e indigencia, el crecimiento de los niveles de desocupación.

Tanto la desocupación real como la amenaza a quedar desocupado, lejos de constituirse en una situación fantasmagórica, constituyen una realidad presente que impacta y atraviesa fuertemente la subjetividad de los trabajadores, aun dentro del sistema laboral registrado y con protección social. Por otra parte, los y las que “están afuera” trabajan, viven, pero no poseen un trabajo registrado, no poseen “patrón”³, por lo tanto nadie reclama la plusvalía de lo que producen así como tampoco se “benefician” con el sistema de protección, en término de reciprocidades y favores, que genera el patrón con sus trabajadores, por fuera de la relación laboral. En la vida cotidiana, no acceder a la protección y seguridad social que conlleva el trabajo asalariado registrado implica que ese trabajador y su familia diariamente deben ver cómo enfrentar las contingencias de la vida. No solo no cuentan con un salario sino que además no tienen derecho a enfermarse, a descansar y a poder estar cubierto, protegido frente a los infortunios de la vida. Implica quedar por fuera:

...del régimen jubilatorio, asignaciones familiares, cobertura médica, seguro contra accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que disminuyan la capacidad laboral en forma temporal o definitiva, planes de vivienda al alcance de los trabajadores,

³ Se define “patrón” desde una lectura marxista al capitalista que posee los medios de producción y compra la mercancía-fuerza de trabajo a los trabajadores que se quedan con una determinada suma de dinero en concepto de retribución, mientras que el patrón se queda con la plusvalía de los trabajadores que tiene a su cargo. Sin embargo resulta de interés a los fines de esta presentación, que este concepto de “patrón” posee otras significaciones en especial en los sectores populares ya que deriva del vocablo latino *patronus* que significa tutor o guardián, la persona que defiende a otra. Dentro de la tradición católica, en nuestro pueblo, cada capilla tiene su patrón o su protector, al cual se lo venera y se le pide favores a cambio de sacrificios o promesas. Esta tradición permea las relaciones sociales en Nuestra América, donde hay una fuerte presencia de otras figuras protectoras como fueron los caudillos durante el proceso de conformación del Estado-nación argentino. Éstas y otras significaciones en torno a esta categoría hace de la misma, y de las relaciones que se establecen entre el patrón y los trabajadores, una categoría compleja.



turismo social, seguro de vida, seguro de sepelio, y muchos otros institutos que hicieron posible la definición originada en Suecia –país estandarte del estado benefactor– según la cual “todo ciudadano sueco está protegido desde la cuna a la tumba” (Valdovinos, Oscar, 2015: 18).

El trabajo asalariado registrado, de esta manera, resulta de vital importancia para los trabajadores y sus familias. En primera instancia se puede afirmar que su importancia está unida a la necesidad subjetiva de obtener los bienes necesarios para la subsistencia, apareciendo entonces, como explica Vasilachis:

... no el trabajo en sí mismo, sino la acción de trabajar, como asociada a la dignidad de la persona, en el sentido de satisfacción autónoma de necesidades, precedida de la libre elección acerca de la definición y el carácter de éstas (Vasilachis, Irene, 2003: 65).

Ahora, para que este trabajo esté registrado debe estar institucionalizado. En el caso argentino, debe formar parte de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), de las discusiones paritarias, debe estar sindicalizado o tener alguna forma de agremiación. En general estas conformaciones se originaron tiempo atrás, en algunas actividades su origen puede remontarse a la Edad Media donde se conformaron los primeros talleres de artesanos vinculados a la actividad textil, a la construcción, al comercio en ferias, otros surgen posteriormente vinculados a la modernidad. Otras actividades, ya sean productivas o de servicio, se configuran en el marco de esta sociedad global financiarizada (Valdovinos, 2015), por fuera de la institución y la institucionalidad que se genera en torno al trabajo asalariado. Aparecen, entonces, diferentes adjetivos que cualifican la categoría trabajo: informal, precario, en negro, temporario, entre otros que dan cuenta de las transformaciones que ha sufrido el mismo, evidenciando que estas diferencias semánticas poseen también consecuencias concretas que impactan diferencialmente en la vida diaria ya que alguno de estos adjetivos amplían y garantizan derechos mientras que otros los restringen o eliminan según el caso.

Más allá de las mejoras materiales que otorga el acceso al trabajo asalariado registrado que implica seguridad social, también se accede a un plus invisible que es el de la dotación de dignidad, seguridad, posibilidad de futuro, para el trabajador

y su familia, la construcción de redes sociales, la posibilidad de socializar, de ser más humanos. Ésta es la cuestión, no hay ninguna posibilidad de justificar moralmente, al menos desde la ética que emana de la lógica democrática de los derechos humanos, que la única puerta de acceso a la seguridad, la estima y el bienestar, para las grandes mayorías, sea el trabajo asalariado registrado, tal como lo conocemos.

La flexibilización se constituyó en la principal estrategia del neoliberalismo para obturar los procesos de organización social, colocándonos en una situación por lo menos paradójica a aquellos que defendemos el trabajo juntamente con el acceso a la educación como principales organizadores sociales para las mayorías.

El neoliberalismo profirió un conjuro sobre nuestras sociedades llamado flexibilización, por el cual a pesar de todos los esfuerzos realizados en Argentina dentro del denominado ciclo nacional, popular y democrático (Madoery, Oscar), tanto por reforzar la institucionalidad del trabajo asalariado como por incorporar al mismo a las mayorías de nuestro pueblo, no se pudo sostener los indicadores de ocupación ni eliminar el trabajo no registrado.

La flexibilización entendida a partir de los aportes efectuados por Zygmunt Bauman da cuenta de los cambios en las sociedades contemporáneas. A partir de la metáfora que implica lo líquido frente a lo sólido, en su texto *La modernidad líquida*, el autor da cuenta de cómo se modificó no solo las categorías cartesianas de tiempo y espacio sino también las formas de organización social, política y del ejercicio del poder. Esta idea de fluidez sirve al autor para caracterizar la sociedad actual, ya que los líquidos “no se fijan en el espacio ni se atan al tiempo” (Bauman, 2004: 8) sino que se desparraman, se filtran entre las grietas, ablandan lo que parece inmodificable, corroen los fundamentos de la solidez, que son la previsibilidad y el control. Esta idea de flexibilidad, que se generaliza y expande a través del neoliberalismo, oculta, en tanto relación social, “... la intención de despojar de la capacidad de resistencia a aquellos cuya ‘rigidez’ está a punto de doblegar” (Bauman, 2004: 137). Se presenta como un principio universal de la racionalidad económica, que se aplica en la misma medida a la demanda y la oferta en el mercado laboral. La similitud del término oculta que su contenido es drásticamente distinto conforme uno se encuentre de un lado u otro de la línea divisoria. Por eso resulta muy interesante



lo expuesto por Bauman en relación con la flexibilización en general y en particular a la flexibilización laboral:

... deshacer los hábitos del trabajo permanente, cotidiano, constante y regular; ¿qué es, si no, “el trabajo flexibilizado”? La estrategia preferida es que los trabajadores olviden, no aprendan, todo aquello que debía enseñarles la ética del trabajo en la edad de oro de la industria moderna. El trabajo verdaderamente “flexible” solo se concibe si los empleados actuales y del futuro próximo pierden sus arraigados hábitos de trabajar todos los días, por turnos, en un lugar y con los mismos compañeros de labor; si no se habitúan a trabajo alguno y, sobre todo, si se abstienen (o si se ven impedidos) de desarrollar actitudes vocacionales hacia el trabajo actual y abandonan esa tendencia enfermiza de hacerse fantasías acerca de los derechos y las responsabilidades de la patronal (Bauman, Zygmunt, 2004: 145).

A esto debemos sumarle la advertencia, que realizara María de los Ángeles Yannuzzi (2007) en su texto *Estado y sociedad en la era global* frente a los peligros que concierne las formas que va adquiriendo el capital financiero transnacional especulativo para nuestras sociedades dado que

...con un capital que se ha liberado de todo control estatal, un capital que además se estaciona en aquellos espacios territoriales que le ofrecen un abaratamiento significativo de los costos de producción, esta nueva forma que adquiere el capitalismo busca optimizar, incluso de un modo salvaje, sus propios beneficios situación que muchas veces se ve favorecida por las mismas élites locales, partícipes por igual de ese circuito financiero (Yannuzzi, María de los Ángeles, 2007: 10).

La economía globalizada, que propone el neoliberalismo, requiere de la flexibilización laboral y de la competitividad productiva. La flexibilización forma parte, entonces, de una estrategia general que, pensada globalmente, penetra y ejerce presión local para modificar nuestra cultura, nuestras formas de relación entre nosotros y la naturaleza. Posee como estrategia la disolución de los lazos sociales, de las relaciones que se construyen cotidianamente en la rutina organizadora del tiempo de vida en el trabajo y con la educación, requiere de una sociedad fragmentada, de un trabajo heterogéneo, desconectado, con escasa identidad colectiva, así como del debilitamiento de las relaciones sociales. Complementariamente, se plantea, en esta línea una crítica a la aldea global (McLuhan, 1996),

comprendida como una nueva forma de simplificar la desigualdad. Esta idea de aldea global se basa en la conformación de una supuesta comunidad internacional que accede a una red comunicacional mundial de acceso libre (cadenas televisivas, internet, otras). Este acceso libre construye la ilusión de sociedades homogéneas e igualitarias, en condiciones de practicar el libre comercio:

En esta perspectiva, ha quedado absolutamente escondida la realidad que muestra claramente a través de indicadores económicos, sociales y culturales que esta supuesta aldea global tiene su Salón Comedor pulcro y abundante y sus áreas de servicio pobres y excluidas (Yannuzzi, María de los Ángeles, 2007: 4).

El ciclo neoliberal se inició en Argentina durante la última dictadura cívico-militar y se profundizó en democracia durante los diferentes gobiernos de la década del 80 y del 90, que dejaron la pesada herencia de una sociedad fragmentada, desintegrada, donde a pesar de todos los esfuerzos que se realizaron, en términos de políticas sociales y económicas, durante el ciclo nacional popular y democrático no se alcanzó a reconstruir el tejido social. Se instaló así una sociedad dual entre los que poseen trabajo registrado, seguridad y protección social y por otra parte, los que “están afuera” trabajan, viven, pero no poseen un salario, un trabajo con protección social.

El Estado en la reconfiguración del trabajo con protección social

La constitución de esta “sociedad dual”, donde una minoría de los trabajadores/as tiene un trabajo registrado, relativamente estable y cubierto por ciertas garantías mínimas y una mayoría vive con trabajos en situación de precariedad permanente, en trabajos de bajísimos requerimientos de capacitación y bajísimo salario, sin protección legal y sin ninguna inserción en el sistema de políticas públicas sociales. Por fuera de este sector, porcentajes importantes de la población se hallan en situación de desempleo liso y llano.

Esta sociedad neoliberal ha reducido “al mínimo la molestia” que el trabajo asalariado registrado le ocasionaba al capital y ha logrado despegar el consumo y la reproducción del capital de la necesidad de constituir un mercado interno masivo.

Es en América Latina donde esta nueva situación



vinculada a la cuestión del trabajo y el neoliberalismo ha encontrado respuestas de muy distinto tipo: a las tradicionales (y minoritarias hoy) formas del trabajo asalariado formal, los colectivos sociales y aun las estrategias individuales de sobrevivencia le han agregado las formas que adquiere la economía social y popular, los modos del cuentapropismo urbano, las formas comunitarias de trabajo de raíz originaria, las fábricas recuperadas por los trabajadores, las formas cooperativas, las tareas de acompañamiento y apoyo comunitarios en barrios y villas; un universo múltiple de trabajo (con todas las letras) que escapa (por obligación o por tradición ancestral) a las formas típicas del trabajo asalariado registrado.

Esas nuevas/antiguas formas y modos del trabajo demandan y exigen del Estado el desarrollo de políticas sociales que garanticen derechos básicos equivalentes a los de los trabajadores asalariados tradicionales y el reconocimiento de estas actividades como trabajo genuino y socialmente valioso.

Ahí es donde interviene el Estado nuevamente, ya no en la mediación de los intereses del mercado para ampliar y profundizar su lógica de lucro, sino a favor de los que se quedaron afuera de esa disputa, a favor de los que no se pueden sentar a la mesa de negociación; es ahí donde el Estado implementa las políticas sociales para garantizar el derecho a la asistencia, para equiparar la desigualdad creada por el mercado. Se entiende, en este sentido, que la mejor política social para articular el tejido social, para construir sociedad, es el trabajo que, sumado a la educación, la salud, al desarrollo de infraestructura, servicios básicos y viviendas, permite mejorar las condiciones de vida y avanzar sobre el núcleo más duro de la pobreza. Aceptar que uno de los objetivos prioritarios de las políticas sociales es reducir las desigualdades e iniquidades generadas por el mercado en la sociedad requiere producir un cambio cultural en nuestras democracias representativas que históricamente se han estructurado desde una perspectiva patriarcal del ejercicio del poder.

Estos tiempos de avance del neoliberalismo y neoconservadurismo reclaman la implementación de políticas sociales que propongan alternativas desde los ámbitos locales, que fomenten y abran espacios de ciudadanía plena, es decir, el desarrollo de la capacidad de autodeterminación,

de expresión, de representación de intereses, demandas y de pleno ejercicio de los derechos políticos e individuales, en los niveles decisionales así como en las estructuras político-administrativas estatales, constituyendo aún una asignatura pendiente en Argentina. Hoy, después de las consecuencias empíricas de la implementación de las políticas neoliberales, no podemos aceptar la “inclusión social” a cualquier precio. El trabajo debe ser trabajo decente, con seguridad social. El desafío de la nueva cuestión social es, justamente, institucionalizar nuevas formas de trabajo protegido.

El trabajo como centro de la cuestión social: la disputa por el orden social

Resulta de interés para abordar el debate acerca de la globalización y neoliberalismo en América Latina en torno a la emergencia de la cuestión social reconocer el carácter sincrónico que van adquiriendo los avances y retrocesos de las luchas populares; de las vertientes que buscan construir un continente autónomo y justo, de amplia integración y participación social, frente a los intentos de consolidación de los dominios neocoloniales

Una sincronía histórica, que con mayor o menor énfasis en las distintas áreas, se reproduce desde la consolidación de los imperios coloniales hispanos y portugués; las luchas por la independencia; los conflictos entre “unitarios” y “federales” con sus denominaciones propias en cada país; la consolidación de los gobiernos oligárquicos, contemporáneos con el Brasil republicano a fines del siglo XIX, los movimientos de oposición a esos dominios entre finales de siglo y la Primera Guerra mundial; las dictaduras militares de la década del 30; los nacionalismos populares de los 40 y 50; las dictaduras y los gobiernos desarrollistas de comienzo de los 60; el resurgimiento de los movimientos de masas al finalizar el decenio; las dictaduras monetaristas al promediar los 70; la reimplantación de las democracias y de los modelos de ajuste neoliberal en los 80 y los interrogantes que plantean los años 90 (Argumedo, Alcira, 1993: 159).

Reconocer esta sincronía no implica necesariamente caer en enfoques recurrentes de la historia, que encuentra en la década de los 90 la reedición de los planteos liberales del siglo XIX o que interpreta en un enfoque simplificador las revoluciones ocurridas en democracia⁴ en la última década en

⁴ Se entiende por revoluciones en democracia a los procesos de transformación social que han ocurrido en la última década y media y que permitieron la emergencia de gobiernos democráticos y populares que están construyendo un proyecto nacional, popular y latinoamericano, aun en el capitalismo.



⁵ Se entiende por gobiernos populistas a los gobiernos democráticos que “con el surgimiento y los reclamos de la clase proletaria, los años 1940 y 1950 vieron nacer, en América Latina, un nuevo régimen político: el populismo. Basado en alianzas multclasistas, especialmente de los sectores progresistas de la burguesía, de la clase media y del proletariado, el populismo era una forma real, pero sobre la base de un rápido crecimiento general de la economía, permitiendo una redistribución parcial a las masas del excedente así producido y, sobre todo, aumentando esperanzas de una mayor redistribución (Jaguaribe, Helio, 2011: 113).

América Latina y, en especial, en Argentina como una forma de reeditar gobiernos populistas⁵.

Carlos Vilas, en su texto *Después del Neoliberalismo: Estado y procesos políticos en América Latina*, considera la novedad que implica la presencia de diferentes formas de entender y ejercer la democracia republicana liberal europea, donde entran en juego otras formas institucionales de democracia representativa más vinculadas a la necesidad de dar contenido desde procesos participativos, que implican de alguna manera revivir desde prácticas de democracia directa las formas de ejercicio democrático ateniense. Sin embargo, la emergencia de gobiernos en América Latina que conjugan mecanismos institucionales de la democracia representativa con variadas modalidades de participación y democracia directa, con intensa y persistente presencia de movimientos sociales que se vinculan fuertemente a proyectos de transformación social que implican afectación de intereses y actores generalmente excluidos, abonan a la explicitación de la conflictividad inherente a estos procesos y a la descalificación de los mismos. El autor sostiene que es necesario reconocer y respetar la voluntad popular ya que los gobiernos actuales de diferentes signos político-ideológicos responden a la voluntad y al voto popular y a los procesos histórico-políticos de nuestros pueblos

Por su parte, Carlos Ciappina, en su texto titulado *Las tres banderas del peronismo: ¿una agenda para el siglo XXI?* (2007), sostiene que en estos tiempos de la globalización reaparece reactualizada la dicotomía progreso/civilización o barbarie. En el caso argentino, esta dicotomía se puede referenciar en tres momentos históricos.

El de la conquista y colonización (siglo XVI), en el cual Europa encarnaba la “civilización” e imponía desde esta visión eurocéntrica un único modo de ser civilizado que implicaba negar, abandonar o perseguir a las sociedades originarias, sus formas de organizar la vida cotidiana y sus cosmovisiones.

El de la independencia (siglos XVIII y XIX), a partir de la fuerte influencia del ideario de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, sobre la base de los principios universales que Europa sostenía como superiores, las élites dirigentes vernáculas se lanzaron a la reconversión forzada de nuestras sociedades, despreciando la tradición hispánica, instalando como civilizado al laicismo como principio

educativo y de la vida civil, junto a la persecución y exterminio de los pueblos originarios que permitiera extender la frontera agrícola-ganadera y desarrollar la propiedad privada, base del incipiente capitalismo mercantilista.

El socialismo del siglo XX, que es presentado como nueva cosmovisión universal, enunciada como absoluta y, curiosamente, al igual que la liberal-iluminista, como inevitable: las distintas versiones del marxismo diferían en relación con tiempos, rol de las distintas clases sociales, el papel de la economía, la cultura o la política. Pero todas coincidían en una cosa: el socialismo era inevitable porque así lo establecían las leyes de la historia.

Esa forma estereotipada de comprender la realidad de las sociedades latinoamericanas a partir de intentar encajar a las sociedades tercermundistas en los esquemas preconcebidos por los intelectuales del mundo central, aun desde el campo socialista (Hobsbawm, Eric, 2006), dificultando la posibilidad de realizar una lectura marxista en una versión menos esquemática de los movimientos populares en América Latina⁶.

Más adelante sostiene que, en el siglo XXI, esta vieja dicotomía entre civilización y barbarie adquiere una nueva forma:

La globalización sostenida en la revolución tecnológica y comunicacional vuelve a ser mostrada como “lo deseable” y las pautas, modelos societales y económicos que proponen las sociedades centrales, como la panacea que las sociedades “atrasadas” (aquí se engloba a los países africanos, las naciones árabes, los gobiernos nacional-populares en América Latina) deben abrazar para gozar de los beneficios de la civilización (Ciappina, Carlos, 2007: 3).

Por su parte, Edgardo Lander (2011), en su texto *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, compila una serie de artículos que incluye una notable lista de filósofos y científicos sociales preocupados por aportar desde los diferentes artículos a sortear la dificultad que existe para formular alternativas teóricas y políticas a la primacía total del mercado, cuya defensa más coherente ha sido formulada por el neoliberalismo, como Enrique Dussel, Walter D. Mignolo, Arturo Escobar, entre otros. En general sostienen que estas dificultades se deben al hecho de que el neoliberalismo es debatido y confrontado como una teoría económica cuando en realidad debe ser

⁶ En esta línea cabe mencionar las experiencias cubana y chilena con la rigidez de la perspectiva soviética que consideraba “desviaciones” a la intención de construir un modelo socialista que respetara la idiosincrasia y realidad de su propio pueblo: no es casual que estas experiencias más “nacionales” que socialistas hayan seguido caminos diferentes a los soviéticos: una revolución (la cubana) sigue su curso aún hoy pese a la agresividad imperial y la otra (la chilena) haya sido abortada no por la movilización popular sino por una de las dictaduras más feroces del siglo XX, en contra, precisamente de la movilización popular.



comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio, esto es, como una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno al ser humano, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida. A la vez, reconocen la limitación que representa, para el campo académico, pretender abordar la consideración y construcción de alternativas a las propuestas neoliberales y al modelo de vida que éstas representan si la búsqueda reflexiva de las mismas solo se circunscribe a la cosmovisión liberal de la economía ortodoxa. La expresión más potente de la eficacia del pensamiento científico moderno –especialmente en sus expresiones tecnocráticas y neoliberales hoy hegemónicas– es lo que puede ser descripto literalmente como la naturalización de las relaciones sociales, la noción según la cual las características de la sociedad llamada moderna son la expresión de las tendencias espontáneas, naturales del desarrollo histórico de la sociedad (Lander, 2011).

A esta altura de lo expuesto, resulta pertinente hacer propios los interrogantes que realizan Juan Agüero y Silvana Martínez en su texto *Trabajo social emancipador. De la disciplina a la indisciplina*. En el capítulo titulado “De la cuestión social al orden social. La construcción del orden sociopolítico actual” se preguntan si es oportuno y pertinente en los tiempos que corren, de “gran efervescencia política en nuestros países latinoamericanos, de reconstrucción de lo público y de recuperación y de ampliación de derechos” (2014: 85), seguir hablando de la cuestión social de manera cosificada, ausente de conflicto, de carnadura histórica.

Desde esta vertiente interpretativa que pone el acento en los procesos históricos, políticos y económicos, que hace foco en las luchas y conquistas populares, en el caso argentino la cuestión social puede centrarse en el conflicto entre los representantes del capital y los representantes de los trabajadores organizados, donde el Estado se encuentra mediando en la lucha de intereses y en la puja distributiva. Sin embargo, esta mirada no alcanza. Hay trabajadores que no están orgánicamente representados, que no se encuentran dentro de los Convenios Colectivos de Trabajo, pero que trabajan y no tienen cobertura y protección para ellos y sus familias. Hay trabajadoras que son mujeres y están invisibilizadas; hay diferentes grupos étnicos, pueblos originarios, pueblos trasplantados, como el caso de los

pueblos que fueron incorporados violentamente a nuestros territorios a partir del negocio espurio de la esclavitud.

Es necesario referirnos a la cuestión social pero esto no alcanza si no pensamos también en hacer referencia a la cuestión del orden social instituido que

...implica también abordar la mutua imbricación entre la política, la economía y la cultura. Esto lo podemos ver muy claramente, a modo de ejemplo histórico, en la construcción del orden en América Latina. El punto de partida es la política: la invasión de América por los colonizadores europeos fue y sigue siendo un hecho político fundacional del orden social. La dimensión que acompaña a la política es la economía: la invasión de América fue un acto de despojo y apropiación económica. Finalmente, la otra dimensión que acompaña a la política y la economía es la cultura: la invasión de América implicó un proceso de construcción de ideología, institucionalización y hegemonía (Agüero, Juan, y Martínez, Silvana, 2014: 88).

La cuestión del orden social, tal como lo plantean Agüero y Martínez, amplía la mirada acerca de lo instituido, de lo naturalizado, al proponer no solo desarrollar una mirada crítica hermenéutica que habilite la comprensión de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales desde donde se construye el orden vigente sino también desde una mirada crítica transformadora que posibilite y convoque a interpelar, a dudar de lo establecido, con el fin de transformarlo:

Es una dimensión performativa. La interpelación es la pregunta por el sentido, el porqué y el para qué de un orden, la razón que lo justifica, la finalidad que tiene, el preguntarse por qué las cosas son de una determinada manera y no de otra (Agüero, Juan y Martínez, Silvana, 2014: 87)

Es así que esta posición resulta muy interesante para avanzar en la comprensión de la cuestión social en América Latina, por fuera de la que realiza el materialismo histórico acerca del Estado⁷. El Estado, como se plantea más adelante, no sólo será comprendido desde su faz represiva, disciplinadora sino también desde su posibilidad de ser garante y promotor de derechos (Carballeda, Juan Manuel, 2008: 15).

Siguiendo a Rosanvallon y a Castels, la novedad de la cuestión social radica en entender que los nuevos conflictos que estructuran a la sociedad contemporánea ya no son

⁷ Se entiende al Estado desde el materialismo histórico “como una institución superior a las demás, cuya función es la de constituirse en un instrumento de la clases dominantes a fin de mantener su dominio y sujeción de las clases oprimidas...” (Di Tella, Torcuato (coord.), 2008: 440).



únicamente de reparto de la riqueza desde la lucha de clases expresados en la confrontación de capital y trabajo sino que ahora están centrados en la noción de justicia distributiva. En este sentido, Pierre Rosanvallon asevera:

Entramos en una nueva era de lo social. Pero al mismo tiempo entramos en una nueva era de lo político. La refundación de la solidaridad y la redefinición de los derechos implican en efecto una mejor articulación entre la práctica de la democracia, es decir la invención de las reglas de vivir juntos y la deliberación sobre la justicia, y la gestión de lo social; invitan también a pensar de otra manera la idea misma de reforma. En lo sucesivo, profundización de la democracia y progreso social deberán ir necesariamente a la par (Rosanvallon, Pierre, 1995: 11-12).

La novedad de la cuestión social está dada, entonces, por la necesidad de instaurar un nuevo orden que posibilite rescatar y repensar al Estado como garante principal del pacto social, proponiendo nuevas formas de regulación social entre el mercado y la sociedad organizada, para que el trabajo con protección social sea el eje articulador y generador de relaciones sociales reparadoras de la fragmentación social existente.

Conclusiones

La reducción del neoliberalismo a una simple visión acerca de las relaciones macroeconómicas impide percibir las implicancias y consecuencias concretas en la vida cotidiana. Si tuviéramos que dar cuenta de la causa de los problemas sociales de las sociedades contemporáneas en América Latina –desempleo, precarización laboral, violencia, entre otras manifestaciones– sin lugar a duda señalaríamos al neoliberalismo como el mayor responsable de la implementación de un ideario individualista, depredador de la naturaleza, no solidario, jerárquico, patriarcal y profundamente desigual. La construcción de un orden social que se presenta como único y “natural” constituye una de las principales dificultades con las que se encuentran los gobiernos nacionales en América Latina, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales a la hora de interpelar la única lógica que rige este pensamiento: la propiedad privada, el lucro, la sociedad liberal industrial y la libertad individual. Como sostiene Lander:

La sociedad liberal industrial se constituye –desde esta perspectiva– no solo en el orden social deseable, sino en el único posible. Ésta es la concepción según la cual nos encontramos hoy en un punto de llegada, sociedad sin ideologías, modelo civilizatorio único, globalizado, universal, que hace innecesaria la política, en la medida en que ya no hay alternativas posibles a ese modo de vida (Lander, Edgardo, 2011: 3).

Pensar que el capitalismo únicamente refiere a problemas vinculados a los mercados constituye una visión reducida y sesgada. Sabemos que el capitalismo no se circunscribe a un sistema económico financiero sino que constituye una práctica que posee una dimensión ideológica, ambiental, social y política que generalmente se ve eclipsada por la materialidad de este sistema económico que genera consecuencias concretas para las millones de personas que han quedado relegadas, sumidas en situaciones de pobreza y exclusión de ese patrón de producción y consumo.

Interpelar el orden social existente, pensar el trabajo de manera apropiada con nuestras sociedades, crear o recrear diferentes instituciones de protección y seguridad social permitiría distanciarnos del espejismo que implica la globalización para nuestros países, dado que el orden económico mundial globalizó todo “menos los beneficios de la revolución científico-tecnológica-empresarial ampliando así no solo entre los países del Norte y los del Sur del planeta, sino entre los propios países centrales” (Ciappina, Carlos, 2007: 4).

Parecería, así, que frente a cada una de las denominadas crisis del capital financiero e internacional nos estaríamos encontrando nuevamente frente a las formas renovadas de reproducción del capital, reduciendo así las predicciones de su finalización como sistema. Frente a este proceso de reconversión del capitalismo, la búsqueda de conceptualización de los problemas sociales, en especial el problema del trabajo asalariado en nuestras sociedades, no debe solo circunscribirse a una cuestión semántica o de giros interpretativos. Bien cabe preguntarse, entonces, si dentro de este neodeterminismo tecnológico-económico es posible plantearse las posibilidades de desarrollar las capacidades científicas, tecnológicas y productivas propias de los países semiindustrializados. Por esto, en el marco de la tercera revolución industrial, la deuda externa latinoamericana adquiere una dimensión de gran importancia y trascendencia. Excede el carácter estrictamente financiero para convertirse



en un factor de limitación de la capacidad autonomía, ante las exigencias de inversiones que implicaría la reconversión del aparato productivo existente en América Latina y que le permitirían continuar o al menos intentar competir con el resto del mundo, ampliando sustancialmente la masa de trabajadores asalariados.

Quedan planteados, ahora, los términos de una ecuación sin precedentes para nuestros países. Las respuestas entrañan desafíos de tal envergadura que solo pueden entreverse como signadores de nuestro futuro. ¿Cómo cruzar estas llanuras abismales que nos separan de los monopolios tecnológicos? Parece que no hubiera otra salida que la pasividad, la aceptación de un cambio que se presenta como imposible de asimilar, de integrar a las estructuras y coyunturas locales. Sin embargo, frente al neoliberalismo que intenta erigirse como un tótem unificador, emergen, a modo de resistencia, como parte del ejercicio del poder por parte de organizaciones sindicales y movimientos populares, reclamos locales y nacionales por la defensa de los puestos de trabajo asalariado, mientras se construye y reclama, en la calle, al Estado el salario social complementario⁸.

⁸ El salario social complementario se crea en el marco del Programa de Transición al salario social complementario el cual tiene por objeto implementar medidas de apoyo orientadas a trabajadoras y trabajadores incluidos en acciones o programas nacionales de empleo vinculados a la economía popular.

Solo a través de estas fracturas, estas discontinuidades, vislumbramos la posibilidad de diseñar una estrategia de incorporación mucho más creativa, basada en las potencialidades sociales y económicas autónomas. Es justamente aquí donde viene a ubicarse nuestra propuesta. Frente a este universo compacto y abigarrado y su infame maquinaria de exclusión, puede tejerse zonas de refugio. Zonas que presenten alternativas para hacer frente a los nuevos procesos, respuestas imaginativas: las microempresas, la cogestión, las formas de autogestión.

Todo cambió, nada es lo mismo. Cabe recordar a Rossanvallon en su texto *El Capitalismo Utópico*, cuando retoma a Marx en su formulación respecto del planteo de las formas de superación del capitalismo, recordando que solo puede darse a partir de la superación del producto de la evolución de sus contradicciones internas. Pero, como bien advierte,

...después de casi dos siglos de capitalismo con diferentes denominaciones en función del sistema de acumulación del capital (comercial o mercantilista, industrial, financiero, tecnológico) (...) estas contradicciones son el mismo medio de su desarrollo (Rosanvallon, Pierre, 2006: 218).

El capitalismo permanece inamovible, aparentemente inmutable, inventándose permanentemente por fuera de los sistemas de regulaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Hacer referencia, entonces, a la impronta neoliberal es tratar de dar cuenta de las marcas que aun en forma de presencia larvada continúan en nuestra sociedad y habilitan prácticas sociales inscriptas en proyectos neoconservadores y neoliberales. El neoliberalismo inauguró un ciclo de desigualdad que recorre todas las clases sociales, sin distinguir entre sujetos que pertenecen al mismo nivel de educación, edad o calificación laboral, generando una sensación de precariedad que se acentúa por el debilitamiento creciente de las personas que, despojadas de sus pertenencias, de las instituciones que en base a los principios de reciprocidad y solidaridad, iban tejiendo el entramado social. Un ciclo que dio lugar a nuevas reconfiguraciones e identidades sociales.

El trabajo no asalariado, no registrado, se desarrolla desde abajo, creciendo desde el borde, invisiblemente, forma parte del mundo del trabajo. Es una realidad que vino para quedarse y que no afecta solo a los más humildes sino que atraviesa de diferentes formas las distintas clases sociales. Este trabajo que se desarrolla en la economía popular no está aislado sino que posee múltiples puntos de conexión a nivel de la producción, del consumo y del crédito con la economía global de mercado. Las actividades productivas y reproductivas realizadas por microemprendedores, artesanos, feriantes, cooperativas de diversa índole, campesinos, costureras, cuidadoras, manteros, cartoneros entre otras, corresponden a un universo heterogéneo de la economía que hoy no tiene un patrón que quiera comprar su fuerza de trabajo, por lo tanto no son obreros sino que forman parte de los que sobran, de los excluidos, de los últimos de la fila.

Ellos, y sus diferentes formas de organización de la producción y el trabajo, son parte de un entramado que se encuentra en la frontera entre el Estado y el mercado, entre lo público y lo privado, entre lo formal/informal/registrado o no registrado.

En este sentido, otro autor, André Gorz (1998), sostiene que la necesidad que los seres humanos tenemos de obrar, de actuar, no tiene que ser pensada, necesariamente, como necesidad de trabajo asalariado para la realización del individuo, proponiendo así



... el derecho a un ingreso suficiente y estable que no esté vinculado a la ocupación permanente y estable de un empleo ya que la necesidad de actuar, de obrar, de ser apreciado por los otros ya no tendría que adoptar como única forma, la forma de un trabajo encargado y pagado (Gorz, André, 1998).

Pensar el trabajo como centro de la cuestión social y constructor de relaciones sociales implica por un lado reconocer que el trabajo asalariado constituye una institución social en extinción que debemos proteger y cuidar pero a su vez y de manera complementaria implica reconocer otras formas de trabajo, ya sean productivas o de servicio, que se configuran en la actualidad y que permiten inocular, introducir dentro de este sistema capitalista formas diferenciales de pensar la economía, los procesos sociales, las formas de vincular el Estado, la sociedad y el mercado y en especial formas diferentes de entender y ejercer el trabajo digno así como de resignificar la dignidad del trabajo, que indefectiblemente en los sectores populares estas ideas están siempre vinculadas a la ampliación de derechos, a garantías laborales y a más seguridad social (Meschini, Paula, 2017).

Es necesario preguntarse cómo se comienza a problematizar el papel que cumple el trabajo como lazo social fundamental, como productor de sociedades integradas e inclusivas. El trabajo ocupa el centro mismo de la cuestión social, convirtiéndose en la clave para pensar e intervenir en las sociedades actuales, siendo un eje constitutivo y central de cualquier proyecto de desarrollo en América Latina.

Sin embargo, resta aún dar cuenta conceptualmente de la persistencia de resabios de antiguas formas de relaciones de trabajo, la presencia de iniquidades entre los que tienen y los que no tienen, entre los que están dentro y los que están fuera de la sociedad. El desarrollo de nuevas categorías asociadas que permitan reconocer no solo los mecanismos y las formas que adquiere la exclusión social sino también las diferentes ligazones muy precarias que cuestionan las formas clásicas de vincularse con el mundo del trabajo y que forman parte de la expresión actual de la nueva cuestión social en Argentina.

Se sostiene la necesidad de reformular la definición de lo justo y equitativo, de reinventar las formas solidarias, en búsqueda de una práctica más activa de democracia y de una idea más renovada de la Nación.

Bibliografía

- AGÜERO, Juan, y MARTÍNEZ, Silvana (2014). *Trabajo social emancipador. De la disciplina a la indisciplina*. Entre Ríos: Fundación La Hendija.
- ALONSO, Guillermo, y DI COSTA, Valeria (2013). *Más allá del principio contributivo: cambios y continuidades en la política social argentina, 2003-2011*. Buenos Aires: UNSAM Edita.
- ARGUMEDO, Alcira (1993). *Los silencios y las voces en América Latina: notas sobre el pensamiento nacional y popular*. Buenos Aires: Colihue.
- BAUMAN, Zygmunt (2004). *La modernidad líquida*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- BAUMAN, Zygmunt (2005). *La globalización. Consecuencias humanas*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- BECK, Ulrich (1998). *La invención de lo político*. México: Fondo de Cultura Económica.
- BECK, Ulrich (1998). *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*. Buenos Aires: Paidós.
- BENJAMIN, Walter (2008). *Tesis de la filosofía de la historia*. México: Itaca.
- CARBALLEDA, Juan Manuel (2008). *Intervención en lo social y pensamiento crítico. Una mirada desde Nuestra América en los escenarios actuales del trabajo social*. Documento presentado en el I Foro Internacional y la I Convención Nacional de Trabajadores Sociales de la República Bolivariana de Venezuela. Valencia, Venezuela.
- CASTEL, Robert (1997). *La metamorfosis de la cuestión social*. Buenos Aires: Paidós.
- CASTEL, Robert (2001). Empleo, exclusión y las nuevas cuestiones sociales. En CASTEL, R. (ed.), *Desigualdad y globalización. Cinco conferencias*. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- CIAPPINA, Carlos (2007). Las tres banderas del peronismo: ¿una agenda para el siglo XXI? Recuperado el 1 de febrero de 2017, de www.claudiabernazza.com.ar
- DI TELLA, Torcuato (coord.) (2008). *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*. Buenos Aires: Emecé Editores.
- ERMIDA URIARTE, Oscar (2001). Trabajo decente y formación profesional. En *Boletín interno*, 151.
- GAGO, Verónica (2014). *La Razón Neoliberal*. Buenos Aires: Editorial Traficantes de Sueños.



- GORZ, André (1998). *Miserias del presente, riqueza de lo posible*. Buenos Aires: Paidós.
- MÉDA, Dominique (1998). *El trabajo. Un valor en peligro de extinción*. Barcelona: Gedisa.
- HOBSBAWM, Eric (2006) *El siglo XX*. Buenos Aires: Crítica.
- LANDER, Edgardo (2011). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- MCLUHAN, Marshall (1996). *La aldea global: Transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI*. Barcelona: Gedisa.
- MESCHINI, Paula (2017). *Notas para pensar-actuar en el territorio desde la economía popular*. Texto sin publicar.
- MOUFFE, Chantal (2007). *En torno a lo político*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- NEFFA, Julio César, DE LA GARZA TOLEDO, Enrique, y MUÑOZ TERRA, Leticia (comp.) (2009). *Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales*. Buenos Aires: CLACSO.
- NEFFA, Julio (2003). *El trabajo humano. Contribuciones al estudio de un valor que permanece*. Buenos Aires: Lumen.
- REGUILLO, Rossana (2007). *Formas del saber. Narrativas y poderes diferenciales en el paisaje neoliberal*. En GRIMSON, Alejandro (coord.), *Cultura y Neoliberalismo*. Buenos Aires: CLACSO.
- RIFKIN, Jeremy (1997). *El fin del trabajo*. Buenos Aires: Paidós.
- ROJAS VILLAGRA, Luis (coord.) (2015). *Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias, alternativas*. Asunción: CLACSO.
- ROSANVALLON, Pierre (1995). *La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia*. Buenos Aires: Manatíal.
- ROSANVALLON, Pierre (2006). *El Capitalismo Utópico. Historia de la idea de mercado*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- STONE, Oliver (director/entrevistador) (2010). *South of the border*. [película]. Estados Unidos.
- TORRADO, Susana (2004). *Ajuste y cohesión social. Argentina: el modelo para no seguir*. En *Revista Tareas*, 117, pp. 15-24.
- VALDOVINOS, Oscar (2015). *La cuestión social en el mundo posindustrial. La nueva pobreza y los nuevos actores sociales*. En TAIANA, J.; FILMUS, D., y HELLER, C. (eds.), *Debatir para construir. Hacia el segundo tomo del Proyecto Nacional*. Buenos Aires: Ediciones Ciccus.
- VASILACHIS DE GALINDO, Irene (2003). *Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales*. España: Gedisa.

VILAS, Carlos (2011). *Después del neoliberalismo: Estado y procesos políticos en América Latina. Primera edición*. Remedios de Escalada, Buenos Aires: Ediciones de la UNLa.

YANNUZZI, María de los Ángeles (2007). *Estado y sociedad en la era global*. Rosario: Fac. de C. Política y RRII, UNR.

Fecha de recepción: 30 de enero de 2017

Fecha de aceptación: 19 de julio de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



Mariana Ayelén Pereyra

Universidad Nacional de Cuyo. Argentina

marianamza1986@gmail.com

LA RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL EN LOS/AS OBREROS/AS DE BODEGAS DEL GRAN MENDOZA (2003-2014)

Resumen: *El siguiente trabajo muestra los primeros resultados de una investigación mayor que aborda la relación entre el trabajo precario y los niveles educativos de los/as trabajadores/as de bodega de la zona del Gran Mendoza entre 2003 y 2014. El trabajo precario se profundiza en los años 90 y con esto, los requerimientos educativos para acceder al empleo se elevan. En las bodegas mendocinas, la precarización laboral y el trabajo informal han crecido, por lo cual encontramos trabajadores/as de distintos niveles educativos ocupando puestos de operarios/as. Sin embargo, sus tareas no muestran relación con sus niveles educativos.*

Palabras clave: *precarización, educación, trabajadores de bodega*

The relationship between educational levels and labour precariousness regarding winery workers from Gran Mendoza (2003-2014)

Abstract: *The following study shows the first results of a research addressing the relationship between precarious work and educative levels proper of winery workers from Gran Mendoza since 2003 to 2014. Precarious work rose in the 90s, and along with this, the educative requirements to access to employment also increased. In Mendoza's wineries, worker precariousness and informal work has grown, for this reason, we find workers with different educative levels carrying out the same task. However, their work does not show connection whit their educative levels.*

Keywords: *precariousness, education, winery workers*



El siguiente trabajo es un informe que muestra los primeros resultados de una investigación que analiza la relación entre los niveles educativos y la precarización laboral de los/as obreros/as de bodegas del Gran Mendoza. La precariedad del trabajo afecta a miles de trabajadores/as en la provincia y esto implica que sea un problema importante a investigar. Entre las causas de esta problemática resulta necesario indagar en los niveles educativos a los que acceden, para determinar si esto incide en la calidad del empleo obtenido.

Si bien hay antecedentes sobre este tema¹, deben actualizarse permanentemente los cambios que se suceden en cada coyuntura. En esta tónica se plantea la necesidad del siguiente estudio, ya que abarca un período reciente (2003-2014) en una zona definida. Este período atravesó numerosos procesos en cuanto a precarización laboral y educación.

El objetivo general que trazamos fue: indagar qué tipo de relación se establece entre las figuras de precarización laboral y los niveles educativos alcanzados por los/as operarios/as de bodegas de la región del Gran Mendoza (2003-2014). Este objetivo se plantea para observar si hay una relación simétrica o asimétrica entre las dos variables. Es decir, si a menor nivel educativo, menor calidad del empleo o a la inversa. Los objetivos específicos fueron: identificar los niveles educativos alcanzados por los/as operarios/as de bodega del Gran Mendoza, investigar las figuras de precarización laboral de las bodegas del Gran Mendoza², aproximarnos a comprender la percepción de los/as operarios/as precarizados/as de bodegas del Gran Mendoza sobre la relación entre sus condiciones de trabajo y su nivel educativo.

Nuestra perspectiva teórica se ubica dentro del marxismo. Así, entendemos que la precarización o “pauperismo”, como es llamado por Marx, es parte de la reproducción del sistema capitalista. Es decir, entendemos que existe una tendencia del capitalismo a degradar las condiciones laborales siguiendo su lógica de aumentar las ganancias permanentemente. Particularmente sobre la situación en Argentina, a partir de la década del 70, las condiciones laborales atraviesan un proceso de degradación que, en líneas generales (y con las particularidades de cada gobierno) se extiende hasta nuestros días. La suerte que corrió el movimiento obrero en las nuevas condiciones del capitalismo argentino puede resumirse en

¹ Ver Martín, María (2001). *Reproducción social: Juventud, educación y trabajo en la Provincia de Mendoza*, y Salvia, Agustín (2014). *Educación y mercado de trabajo. El caso argentino 1993-2003*; entre otros.

² Se realizaron entrevistas a trabajadores de cinco bodegas: El Robiano (Maipú). Furlotti (Maipú); Pequeña Bodega (Chacras de Coria, Luján de Cuyo); Trivento (Maipú); Chandon (Lujan de Cuyo).



...máxima jornada de trabajo con mínimo salario para la parte de esa clase que consigue vender su fuerza de trabajo, mientras creció la parte que, imposibilitada de obtener esos medios de vida, se hundió en el pauperismo y la miseria consolidada (Iñigo Carrera, Nicolás, 2009: 124).

En el Gran Mendoza, una importante parte de los/as asalariados/as no está registrada en sus respectivos empleos, con niveles que se ubican en un porcentaje mayor a 50% (Cortese, Carmelo, 2015). A su vez, encontramos diferentes formas precarias de contratación en las bodegas: empresas de servicios eventuales, cooperativas de trabajo, entre otras. Éstas son intermediarias entre trabajadores/as y empresas, lo cual permite a los/as empleadores/as manejarse con una gran flexibilidad y limitar sus costos y compromisos laborales (Fabio, Francisco, 2010). El empleo en negro, por otro lado, supone un arreglo de palabra entre las dos partes intervinientes e implica una forma ilegal de contratación. Asimismo, esta industria paga uno de los salarios más bajos del país. Este dato sirve para entender los niveles de precarización laboral, que se da también en los sectores de planta permanente. Así, observamos que en 2005 mientras los salarios vitivinícolas rondaban entre \$699 y \$972, el salario medio nominal nacional era de \$1.293. En 2015 el salario vitivinícola oscilaba entre \$5.735 y \$7.812 mientras que el salario medio nominal nacional era \$14.830 (Simonovich, Mario, 2016).

Respecto del problema de la educación, partimos de entender que la diferenciación de clase es lo fundamental para conocer a quiénes y cómo acceden a los niveles educativos. Christian Baudelot y Roger Establet (1976) analizan la base real sobre la que se afirma la escuela en el capitalismo, la cual es la división de la sociedad en dos clases antagónicas: proletariado y burguesía. Critican la idea de que la “escuela capitalista” es democrática, unificadora, continua. Así, muestran cómo solo algunos sectores pueden acceder a la cima de la pirámide, donde está planteada la educación de manera ideal. La mayoría de la población accede a la enseñanza primaria “profesional corta” que no desemboca en el siguiente nivel escolar, sino en el mercado de trabajo, que a su vez, es el mundo del desempleo y la descalificación. En un nivel más concreto, María Martín plantea que las credenciales que obtienen las personas en las instituciones educativas condicionan en parte su inserción en el mercado,

pero ésta también depende de la disponibilidad de puestos de trabajo, de la devaluación de estas credenciales y de la calidad de los puestos (2001:7). Es decir, hay una relación entre educación y trabajo, que a su vez depende de las condiciones materiales concretas que hacen que este vínculo sea más determinante en algunas coyunturas. En este sentido Martín (2001) hace referencia al período que analiza demostrando que hay modalidades flexibles e inestables de contratación, y que para acceder al trabajo es necesario poseer importantes capacidades racionales y una capacitación polivalente (p. 9).

A su vez, Salvia (2014) plantea que entre 1993 y 2003 hay un aumento de fuerza de trabajo ocupada con secundario o nivel superior completo, en detrimento de los sectores con niveles educativos más bajos. Asimismo, esta transformación en el empleo se da, en un nivel más general, debido a una reducción de trabajadores/as con escasa instrucción.

Estos estudios representan un gran avance del tema en cuestión, aunque creemos que es necesario una actualización que abarque un período reciente tomando los cambios que se registraron en la posconvertibilidad, en un espacio concreto y que refleje la percepción de los/as trabajadores/as. En este sentido la hipótesis general que planteamos fue: “Los/as trabajadores/as de bodega que poseen menores niveles educativos acceden a trabajos más precarios en la región del Gran Mendoza (2003-2014)”. La hipótesis específica fue: “Los/as trabajadores/as jóvenes poseen una percepción ‘negativa’ en relación con sus niveles educativos y su inserción laboral”.

Nuestra investigación es explicativa. Para realizar el análisis tomamos datos de la Encuesta Permanente de Hogares, donde se abarcan aspectos tales como “educación” y “ocupación” entre otros. Por otro lado, se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas a trabajadores/as de bodega que se desempeñaron entre 2003 y 2014. La muestra fue intencional, con trabajadores/as de diferentes sexos y edades, y de bodegas de distinto tamaño, para observar las diferencias en estos aspectos. Esta muestra representa solo una aproximación a la percepción de la población analizada. Los datos cuantitativos y cualitativos serán triangulados a fin de obtener resultados.

Algunos resultados a los que hemos llegado hasta el momento han implicado contextualizar el problema, entendiendo que, como planteábamos previamente, a partir de los 70 comienzan a degradarse las condiciones laborales.



³ Según Marticorena (2015) durante el período de posconvertibilidad no hubo cambios importantes en la legislación laboral. El salario fue regulado a través del salario mínimo, vital y móvil y por el Impuesto a las Ganancias que limitó los aumentos salariales; siguieron vigentes los contratos temporales y el trabajo tercerizado, expandiéndose a otras ramas. Entre los cambios realizados se registra la Ley de Ordenamiento Laboral N°25.877 (2004), que centraliza y regula las negociaciones, aunque no excluye la negociación por empresa. Además, se limita (sin eliminarlo) el sistema de pasantías que implica una forma de abaratar costos laborales.

Esto se profundiza en los 90 con las leyes de flexibilización laboral y se ha mantenido en el período de posconvertibilidad con algunas modificaciones que no han sido sustanciales³.

Por otro lado, realizamos un cuadro donde observamos a los/as trabajadores/as que tienen contrato con fecha de finalización y aquellos que no, y esto está relacionado con sus niveles educativos. Este dato fue tomado teniendo en cuenta que los contratos cortos (y por ende, con fecha de finalización) son una de las características del trabajo precario actual, a diferencia del trabajo en planta permanente. Así, observamos que a medida que el nivel educativo va elevándose, los contratos cortos van descendiendo. En este sentido, vemos que aquellos sectores que poseen primaria incompleta son los que poseen mayor cantidad de empleo con fecha de finalización (12,75%), mientras que aquellos que poseen nivel universitario o superior completo son los que tienen menos empleo con fecha de finalización (4,07%). Si bien este dato es limitado, nos da una aproximación a observar una relación de simetría entre precariedad y bajos niveles educativos.

Asalariado (excepto servicio doméstico) por Tiempo de finalización del empleo según nivel de instrucción. Aglomerado Gran Mendoza. Segundo semestre 2014

	Tiene Finalización del empleo			Total
	Si	No	Ns/nc	
Sin instrucción	0%	0%	0%	
Primaria incompleta	12,75%	87,25%	0%	
Primaria completa	9,16%	89,34%	1,50%	
Secundaria incompleta	8,49%	90%	1,51%	
Secundaria completa	6,28%	92,55%	1,17%	
Universitaria/ superior incompleta	7,20%	90,55%	2,25%	
Universitaria/ superior completa	4,07%	95,17%	0,76%	
Total	6,68%	92,02%	1,30%	100%

Fuente: EPH-INDEC.

Asimismo, y ante la escasez de bases de datos cuantitativos sobre el tema, relevamos datos de avisos publicados en búsquedas laborales online⁴, donde observamos los requerimientos de bodegas para contratar personal. Dicho relevamiento arrojó que la mayoría de las empresas no especifican el nivel educativo requerido. Esto implica que no hay un fomento del requisito educativo, sino que se enfatiza en la necesidad de que el/la operario/a sea joven, con experiencia en tareas similares, residencia cercana al establecimiento, movilidad, entre otros requerimientos.

Finalmente, hemos recogido datos en base a las entrevistas realizadas hasta el momento de redactar este informe, en las cuales observamos que los niveles educativos/as de los/as entrevistados/as eran variados (primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, universitaria incompleta). Algunos/as entrevistados/as planteaban que lo importante en sus empleos era la formación que obtenían internamente, que no tenía relación con la educación formal, sino con la experiencia y el conocimiento transferido por sus compañeros/as de trabajo.

Algunos de los objetivos planteados han sido alcanzados en parte. Hemos podido dar cuenta de los tipos de contratos precarios que existen en el sector, así como algunas de las percepciones de los/as trabajadores/as. También pudimos analizar la relación entre los niveles educativos y los contratos cortos de los/as asalariados/as del Gran Mendoza.

Las conclusiones a las que arribamos han demostrado que, para el caso analizado, en general los requisitos para alcanzar un puesto de trabajo son cada vez mayores. Así, encontramos trabajadores/as con primaria, secundaria y hasta universitario incompleto en puestos de operarios/as de bodegas con condiciones precarias. Si bien hay una relación entre niveles educativos y empleo, donde en general a mayor nivel educativo, hay más posibilidades de acceso a empleos de mayor calidad, dicha condición no es determinante para acceder a puestos cuya contratación resulta más endeble o precaria, o incluso a trabajos no registrados en la seguridad social. Por su parte, los resultados de las entrevistas, de la EPH y de los avisos online, nos muestran que para las empresas vitivinícolas es indiferente la educación obtenida. Esto se debe a que en este tipo de trabajos, lo primordial es la experiencia y conocimiento ganado dentro de la bodega, entre otras características. En este sentido, observamos que

⁴ Computrabajo.com.ar; indeed.com; kitempleo.com y; bolsadetrabajo.com.ar



estos/as obreros/as tienen una formación propia del trabajo al interior de las fábricas.

Estas son algunas de las conclusiones a las que hemos llegado hasta el momento, y creemos importante seguir desarrollándolas a fin de avanzar no solo en el conocimiento del tema, sino para plantear políticas específicas que corrijan esta situación de precariedad.

Bibliografía

- BAUDELLOT, Christian, y ESTABLET, Roger (1976). *La escuela capitalista en Francia*. España: Siglo XXI Editores.
- Bocco, Adriana (1999). *Mendoza, agricultura y ruralidad. Reflejos de la estructura social y agraria del oasis rural de San Carlos*. Mendoza: EDIUNC.
- CORTESE, Carmelo, y LLANO, María del Carmen (2015). Trabajadores privados informales y trabajadores públicos precarios. Dos caras de la “inclusión” en la explotación laboral. En *12° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- FABIO, Francisco (2010). Regulación social de la transitoriedad. El mercado de trabajo en la producción de uvas en Mendoza, Argentina. En *Cuadernos de Desarrollo Rural*, Bogotá, 7 (64), pp. 31-55.
- HEREDIA, Mariana, y POBLETE, Lorena (2013). La estratificación socio-laboral en un caso de globalización exitosa: la vitivinicultura mendocina (1995-2011). En *Mundo Agrario*, 14(27).
- IÑIGO CARRERA, Nicolás (2009). La situación de la clase obrera en la Argentina del capital financiero. En *Revista Theomai*, 19, pp. 119-134.
- MARTÍN, María (2001). Reproducción social: Juventud, educación y trabajo en la Provincia de Mendoza. En *5° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- MARTÍN, María (2013). Configuraciones socioproductivas y trayectorias educativo-laborales de los jóvenes en la vitivinicultura mendocina: Un cuestionamiento al aporte de los estudios de trayectorias en los análisis con perspectiva territorial en Argentina. En *Trabajo y Sociedad. Santiago del Estero*, 20, pp. 281-292.
- MARTIN, María (2015). Los agentes en la inserción de los jóvenes

- en el sector vitivinícola en Mendoza. 2003-2013. En 12° *Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- MARX, Karl (2011). *El Capital*. Tomo 1. Vol. 3. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- NEIMAN, Guillermo, y BLANCO, Mariela (2005). Estructura de la ocupación en establecimientos vitícolas de la provincia de Mendoza. En 7° *Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- POL, María (2013). Estrategias de gestión de la mano de obra como determinantes de la estructuración de los mercados de trabajo locales. Un análisis aplicado a la industria vitivinícola mendocina. En 11° *Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- ROMAGNOLI, Cristina (2012). De la casa a la escuela. Ingresos diferentes al nivel primario en un sistema educativo desigual. En *VII Jornadas de sociología de la UNLP*. Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
- SALVIA, Agustín (2014). Educación y mercado de trabajo. El caso argentino 1993-2003. En *SITEAL, Foro de debate*, 6. Tendencias en la relación entre la estructura del empleo no agrario y la educación de los ocupados. Recuperado el 22 de setiembre de 2017, de http://ceyds.sociales.uba.ar/files/2014/06/d5_07.pdf
- SIMONOVICH, Mario (2016, marzo 7). Así retrocedió la vitivinicultura en la última década. En *Diario MDZ online*. Recuperado el 28 de enero de 2017, de <http://www.mdzol.com/nota/660477-asi-retrocedio-la-vitivinicultura-en-la-ultima-decada/>

Fecha de recepción: 28 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 11 de agosto de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



Romina Accossatto

Universidad Nacional de Cuyo. Argentina

romina.accossatto@gmail.com

SUJETOS POLÍTICOS, DIGNIDAD Y MOVILIZACIÓN APORTES DE ARTURO ROIG AL ESTUDIO LATINOAMERICANO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LAS IDENTIDADES POLÍTICAS

Resumen: *El presente trabajo busca explorar aspectos de la propuesta filosófica de Arturo Roig que tengan la potencialidad de contribuir al estudio de la emergencia de los movimientos sociales en el contexto de crisis de legitimidad del modelo neoliberal. La noción de a priori antropológico, la propuesta de una moral de la protesta y las formas de historización del pensar-hacer latinoamericano como comienzos y recomienzos, constituyen construcciones teóricas del filósofo argentino que permiten agudizar la mirada sociológica sobre los procesos de movilizaciones y acciones colectivas contestatarias y potenciar el análisis de la emergencia de subjetividades políticas que persiguen el quiebre de las totalidades opresivas.*

Palabras clave: *movimientos sociales latinoamericanos, neoliberalismo, Arturo Andrés Roig, moralidad de la protesta*

Political subjects, dignity and mobilization. Arturo Roig's contribution to the Latin American studies of the social movement and the political identities

Abstract: *This work aims to analyze aspects of Arturo Roig's philosophical approach that may contribute to the study of the emergence of social movements during the crisis of legitimacy of the neoliberal model. The concept of anthropological a priori, the proposal of a morale of the protest and the historicizing ways of Latin American thinking and doing as a start and restart, constitute the Argentine philosopher's theoretical construction that allow sharpening the sociological view about the processes of mobilizations and collective rebellious actions and enhances the analysis on the emergence of political subjectivities that pursue the break of oppressive totalities.*

Keywords: *Latin American Social Movements, Neoliberalism, Arturo Andrés Roig, Morale of the protest*



Introducción

América Latina se ha constituido en las últimas dos décadas en el escenario de emergencia de nuevos sujetos políticos y movimientos sociales que se formaron en contestación a los efectos regresivos de las políticas neoliberales. Estas novedosas expresiones sociales estimularon renovados debates en el campo académico regional que tuvieron la intención de comprender sus particularidades y modalidades de emergencia.

El propósito del presente trabajo es realizar un aporte a estas nuevas matrices de análisis de los movimientos sociales latinoamericanos, poniendo especial atención en los elementos de las elaboraciones filosóficas que puedan contribuir al estudio de la emergencia de sujetos colectivos contemporáneos. La filosofía y el pensamiento social latinoamericano representan una fuente de insumos para los abordajes sociológicos a través de los cuales profundizar el trabajo teórico y enriquecer la imaginación sociológica. Teniendo en cuenta esto, se intentará realizar una aproximación a los elementos conceptuales de la obra del filósofo argentino Arturo Andrés Roig que apunten a contribuir al estudio de las particularidades regionales de la acción colectiva y la construcción de identidades políticas. Su obra realiza invalorable aportes en el campo de la historia de las ideas latinoamericanas, la filosofía latinoamericana y el pensamiento ético. En el marco de este trabajo, nos enfocaremos en algunas nociones centrales de su obra que permiten potenciar el análisis de la emergencia de subjetividades políticas contestatarias: la noción de “a priori antropológico” y la existencia de una “moralidad de la emergencia” que se manifiesta a través de una dinámica discontinua, a partir de “comienzos y recomienzos”.

Teorías latinoamericanas sobre movimientos sociales y acción colectiva: críticas y problemáticas

La apertura de un nuevo ciclo de conflictividad y protesta social que se desplegó en la región, iniciado a fines de los 90, tuvo como característica principal la emergencia de numerosas organizaciones y movimientos sociales que se constituyeron en actores fundamentales de la resistencia a las políticas neoliberales. Este nuevo período, que puede ser reconocido como el de crisis de legitimidad del modelo



neoliberal, presentó diferentes características e intensidades según los países y realidades nacionales.

Uno de los aspectos paradigmáticos de este período se vinculó a las manifestaciones y reivindicaciones de organizaciones sociales que ensayaron novedosas formas de organización y vías de politización, multiplicando y extendiendo su capacidad de representación: movimientos indígenas y campesinos, urbanos territoriales y socio-ambientales, colectivos feministas y LGBT, organizaciones culturales y de derechos humanos, agrupaciones de trabajadores/as desocupados/as y fábricas recuperadas, etcétera. Esta emergencia de organizaciones sociales y políticas dio cuenta de la existencia de un conjunto de reivindicaciones que complejizaron la conflictividad entre capital y trabajo, condicionando diferentes clivajes identitarios y configurando un campo multiorganizacional extremadamente complejo en sus posibilidades de articulación.

Este contexto de movilización y emergencia de organizaciones sociales relanzó al centro del debate académico, la problemática de las dimensiones políticas de los nuevos sujetos y de las identidades colectivas en el contexto neoliberal. Las transformaciones sociales que se dieron como producto de las políticas neoliberales –recorte fiscal, privatizaciones, desindustrialización, crisis del mercado laboral, vaciamiento de la política institucional y aumento de la pobreza y marginalidad– provocaron un desacoplamiento de los marcos clásicos de acción colectiva. En consecuencia, se produjo un proceso de desinstitucionalización de los soportes colectivos que estructuraban las identidades políticas en los que el “trabajo” como ámbito de socialización política y la participación en partidos tradicionales dejaban de ser una referencia exclusiva para su constitución (Garretón, Manuel, 2011).

El intento por explicar y comprender los cambios regionales en las identidades y subjetividades que se dieron como producto del impacto de las políticas neoliberales abrió nuevos campos de indagación científica. De este modo, en América Latina se fue afianzando una tradición analítica propia sobre el estudio de los movimientos sociales y las acciones colectivas vinculada al campo de las ciencias sociales que apuntó a la construcción de un paradigma comprensivo y de carácter ecléctico. Una de las particularidades de estas teorías latinoamericanas sobre movimientos sociales y acción

colectiva es que se encontraron signadas por la influencia que ejercieron las escuelas anglosajonas y las teorías europeas¹ en el estudio de la conflictividad social y la emergencia de nuevos sujetos políticos en la región (Gohn, María da Gloria, 2014; Svampa, Maristella, 2009). Esta incorporación de elementos de teorías exógenas en el interior del campo académico latinoamericano, si bien permitió ampliar el horizonte analítico de los movimientos sociales, impuso marcos de interpretación que no lograban aprehender las complejidades de la emergencia de los sujetos políticos de la región, provocando en algunos casos una omisión de las particularidades de las identidades y movimientos sociales emergentes. Así, según José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati “...la influencia de estas perspectivas no solo propendía al ocultamiento de la cuestión social sino también al enmascaramiento de la dominación colonial” (2009: 21).

Sin embargo, al margen de estas fuentes a través de las cuales se nutrieron las investigaciones latinoamericanas vinculadas a esta temática, se encuentran numerosos abordajes elaborados desde América Latina que proporcionan herramientas que permiten trascender estas limitaciones y dar cuenta de las configuraciones particulares que han adoptado los sujetos en la región. La obra del filósofo argentino Arturo Andrés Roig puede ser considerada un elemento de gran valor para indagar la ardua e incesante emergencia de movimientos de resistencia y organizaciones populares latinoamericanas que, a través de sus acciones de lucha, manifiestan su plena condición de sujetos políticos.

A priori antropológico y acción colectiva. Hacia un horizonte ético-político del “nosotros/as”

En la obra de Arturo Roig, la noción de *a priori antropológico* se encuentra vinculada con la problemática del sujeto y los distintos modos de valorización-desvalorización que ha ido asumiendo a lo largo de los procesos históricos latinoamericanos. El referente de este modo de subjetivación es América Latina: realidad histórico-cultural específica en la que se constituye una “sujetividad”² herida y violentada. Su punto de partida es la destrucción originaria que representa la colonización europea, a la cual, el padre Bartolomé de las Casas llamó “la destrucción de las Indias”.

¹ La escuela anglosajona – Enfoque de los enmarcados interpretativos y Teoría de la movilización de los recursos – y europea –Teorías de los nuevos movimientos sociales– constituyen el campo de las teorías clásicas sobre movimientos sociales, que surgieron a partir de las décadas de los 70 y 80, al calor de la emergencia de nuevas formas de conflictividad social en los países centrales.

² En lugar de la noción de subjetividad que remite a lo individual y lo personal, Roig prefiere hablar en términos de sujetividad, entendiendo que el sujeto es siempre colectivo.



Podemos, pues, hablar de partir de cero, cifra que lo es y plenamente siempre respecto de un sujeto que es negado en su subjetividad. Se trata de un grado cero socio-histórico que es aquel en el que se queda una sociedad humana cuando sufre la catástrofe que Fernando Ortiz ha caracterizado como “huracán cultural”. Se trata, asimismo, con sus palabras, de una “desculturalización” que “arranca de cuajo” las instituciones de los pueblos y “destroza sus vidas” (Roig, Arturo, 1993: 152).

Al mismo tiempo que se reconoce una identidad violentada a partir de esta situación primigenia y ruptural, el autor toma la elección de pensar desde la alteridad latinoamericana como un lugar propicio para indagar la experiencia humana general. Esto supone oponerse a la pretensión de universalidad que sostiene el lugar de enunciación autorreconocido como único y singular, que procura hablar en nombre de todos/as en un acto de desconocimiento del otro/a.

En este contexto, en el que se constituye una *subjetividad* devaluada, toma relevancia la noción de a priori “antropológico” que Arturo Roig propone. Lo formula como el ejercicio de un sujeto que logra reconocerse a sí mismo/a como valioso y considerar valioso el ocuparse de sí mismo/a. En otras palabras, es el término que señala la prioridad del sujeto sobre sus objetivaciones, “desde cuya *subjetividad* se constituye toda objetividad posible” (Roig, Arturo, 2009: 15). Por lo tanto, el a priori antropológico como valorización de sí mismo/a es el fundamento no solo del comienzo de la filosofía³ sino de la experiencia en general.

³ Es importante aclarar que la propuesta de Arturo Roig se enmarca en los debates sobre la existencia de una filosofía latinoamericana. En este contexto, la postulación del *a priori antropológico* representa la emergencia del filosofar de Nuestra América.

De esta manera, el sujeto que se establece como tal en el ejercicio del a priori antropológico no es, sostiene Roig, un sujeto metahistórico tal como Hegel plantea, “el cual corre el riesgo permanente de disolverse en un mítico sujeto absoluto” (Roig, Arturo, 2009: 12). Sino que es, ante todo, el acto de un sujeto empírico, que exige el rescate de la cotidianidad dentro de los marcos de su propia historicidad y que posee, por tanto, una función contingente y no necesaria. Otro rasgo constitutivo del sujeto que emerge a partir del acto de ponerse a sí mismo/a como valioso es que, aunque surja de una afirmación discursiva de un sujeto particular, es plural y colectivo/a. El sujeto “... no es ni puede ser nunca un ser singular, sino plural, no un ‘yo’, sino un ‘nosotros’, que se juega por eso mismo dentro del marco de las contradicciones sociales” (Roig, Arturo 2009: 11).

En este sentido, las contribuciones de Arturo Roig en torno a la emergencia del a priori antropológico habilita

indagar sobre los modos específicos de construcción de un “nosotros/as” desde un aspecto ético-político, el cual puede considerarse un aporte de relevancia para estudio de los movimientos sociales y las organizaciones políticas. Para algunos autores insertos en la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales (Touraine, Alain, 1987; Offe, Clauss, 1992; Melucci, Alberto, 1999) las acciones colectivas tienen lugar siempre y cuando existan actores con capacidad de erigir una perspectiva común, un “nosotros/as” que elabore conjuntamente un diagnóstico de la situación y se asuma como grupo con capacidad de acción. Para el italiano Alberto Melucci,

Los actores colectivos “producen” la acción colectiva porque son capaces de definirse a sí mismos y al campo de su acción (...) Los individuos crean un “nosotros” colectivo (más o menos estable e integrado de acuerdo con el tipo de acción), compartiendo y laboriosamente ajustando por lo menos tres clases de orientaciones: aquellas relacionadas con los fines de la acción (el sentido que tiene la acción para el actor); aquellas vinculadas con los medios (las posibilidades y límites de la acción) y, finalmente, aquellas referidas a las relaciones con el ambiente (el campo en el que tiene lugar la acción) (Melucci, Alberto, 1999: 14).

Para el autor, erigir un “nosotros/as” que posibilite la acción colectiva como producto construido no implica únicamente considerar que lo que se construye es la acción (organizarse, movilizarse, protestar) sino el colectivo mismo. La introducción de una mirada analítica que indaga la construcción de una identidad común de un colectivo permite desplazar las pretensiones instrumentales que focalizan en el cálculo o maximización de intereses de las acciones políticas –característica de la teoría de la movilización de los recursos, entre otras–, centrándose en los modos de conciencia grupal, la identidad colectiva, la ideología y la solidaridad.

Sin embargo, el aporte de Roig centrado en el a priori antropológico puede ser entendido como ahondando en un nivel más profundo de análisis. El aspecto ético que posee la enunciación de un “nosotros/as” radica en la dignidad humana como fundamento de la emergencia social, donde la construcción identitaria colectiva se constituye como afirmación humana de una vida digna.

El a priori antropológico –posición *subjetiva* que implica la autoconciencia y el autorreconocimiento de sí como valioso y que Roig considera condición



de posibilidad de una filosofía latinoamericana— posee un aspecto ético. Por una parte, es expresión del principio conativo de perseverancia en el ser, que Spinoza atribuye a todos los entes; pero, además y en la medida en que está referido a la condición humana, supone el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todo hombre y de su valor como fin en sí mismo. Este reconocimiento empero no es de carácter puramente teórico ni surge “naturalmente” en las relaciones humanas; según Roig el mismo se origina históricamente cuando tiene lugar un proceso de emergencia, que siempre se encuentra impulsado por necesidades humanas insatisfechas. De este modo, la afirmación de la dignidad humana está asociada en la historia al fenómeno de la emergencia social (Fernández Nadal, Estela, 2001: 124).

La posibilidad de erigir un “nosotros/as” no se basa únicamente en la capacidad de definirse a sí mismo/a y a su campo de acción como sostienen los autores de la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales, sino que constituye una instancia anterior donde el autorreconocimiento de sí mismo/a como valioso/a, de la dignidad como condición necesaria, impregna de sentido y significación las acciones que los sujetos colectivos realizan. Es decir, la construcción de un “nosotros/as” no se asienta de manera exclusiva en los fines y medios que enmarcan la acción sino que es precedida por un valor que es un fin en sí mismo: la dignidad humana como un principio común a todos los hombres y mujeres. Como idea reguladora, la dignidad emerge como una necesidad fundamental, núcleo de la disidencia y brújula para la acción; más allá de que sus manifestaciones puedan corporizarse históricamente en vías expresivas de lo más diferentes entre sí. Un ejemplo de la construcción de un “nosotros/as” asentada en la afirmación de dignidad son las numerosas organizaciones de derechos humanos que emergieron en Argentina a partir de la década del 80. El repudio y la denuncia de los delitos de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado a finales de la década del 70 y el reclamo por “Memoria, Verdad y Justicia”, que aglutina a dichas organizaciones, no pueden ser comprendidos únicamente como el conjunto de fines y medios de la acción colectiva que comparten estos movimientos sociales. Existe una necesidad fundamental que motoriza la organización y la construcción de una identidad común: el reconocimiento de la vida de los/as torturados/as, asesinados/as, desaparecidos/as por el terrorismo de Estado como un derecho humano fundamental y el merecimiento

pleno de justicia y memoria. La significación de esta instancia de reconocimiento de dignidad humana impregna de sentido las novedosas formas de lucha y organización que estos movimientos fueron adoptando a lo largo de la historia reciente argentina.

Para Roig, la construcción de un “nosotros/as”, que se encuentra en el comienzo de cualquier experiencia humana que busca su dignificación, se vincula con la emergencia de una subjetividad política necesaria para la realización de cualquier acción colectiva. En sintonía con el planteo de Roig, Norbet Lechner sostiene que

... las capacidades de la sociedad de intervenir sobre su propio desarrollo dependen de la autoimagen que ella tenga de sí misma. Vale decir, solo una sociedad que disponga de una imagen fuerte del Nosotros como actor colectivo, se siente en poder de decidir la marcha del país (Lechner, Norbert, 2002: 12).

Para estos autores, la edificación identitaria de un “nosotros/as” es condición *sine qua non* para la acción política y la emergencia de un horizonte de emancipación.

Ahora bien, en el marco de esta contribución, el a priori antropológico no emerge únicamente cuando las movilizaciones sociales y políticas logran cumplir sus objetivos ni cuando se llevan adelante prácticas exitosas de reclamos y conquistas. Como se viene expresando, la construcción de un “nosotros/as” se origina cuando tiene lugar un proceso de emergencia social impulsado por necesidades humanas insatisfechas. Es a partir de una *subjetividad* devaluada, constituida en el marco de una historia de dominación de nuestro continente, desde el cual surge la resistencia a los diversos modos de opresión, constituida a partir del autorreconocimiento como valioso/a que reclama una subjetividad política emancipatoria. Incluso se podría decir que los momentos de crisis en nuestro continente han generado un terreno fértil para la constitución de nuevas identidades políticas y reactualizaciones de novedosas acciones colectivas de los sectores oprimidos.

Un ejemplo de ello es el impacto que ha tenido el neoliberalismo latinoamericano en las identidades políticas subalternas. En este contexto, estos sectores mostraron fuertes dificultades para postular un “nosotros/as” con capacidad de acción en términos clásicos. La desarticulación del tipo societal estado-céntrico, que las políticas neoliberales



de la décadas del 80 y 90 trajeron aparejada, produjo una serie de problemáticas sociopolíticas: reducción del papel del Estado, crisis del mercado laboral, vaciamiento de la política partidaria y sindical, aumento exponencial de la pobreza y la marginalidad y deslegitimación de las ideologías que proponían un cambio social. Como consecuencia de este panorama, los/as “trabajadores/as” como sujeto político primordial de los sectores populares comienzan a perder su lugar de protagonismo, al tiempo que se produce un vaciamiento y una deslegitimación de la política institucional. Esta situación de marginalidad socioeconómica y de crisis de identidades políticas que atravesó a los sectores populares fue la antesala de la emergencia de estas nuevas identidades políticas en América Latina. Y es en ese tránsito, que va de la exclusión, el despojo y la crisis de representación a la constitución de un nuevo ciclo contrahegemónico en la región, donde se revitaliza la noción de a priori antropológico como condición previa a la posibilidad de cuestionar el poder establecido desde un espacio colectivo. En un contexto caracterizado por la polarización social, la marginación y el individualismo neoliberal, esta noción permite explicar y comprender de qué manera los sujetos políticos se constituyen como tales a partir del necesario momento de autoafirmación colectiva que implica todo proceso de transformación social.

La posición de sujeto –que llama Roig “a priori antropológico” y que configura el rasgo distintivo de la humanidad– implica siempre una emergencia y una resistencia frente a formas de sometimiento o marginación (...) La condición humana se pone de manifiesto cuando el ser humano, aplastado, despreciado, marginado, responde afirmando: “yo también soy humano”. Afirmamos nuestra condición o índole cuando ejercemos el a priori antropológico, esa “posición de sujeto” que emerge, resiste y recomienza. En este sentido, la condición humana es una meta y un camino de lucha para alcanzarla (...) Y las luchas contra las diversas formas de alienación “solo son posibles si el sujeto comienza sabiéndose sujeto” (Fernández Nadal, Estela, 2005: 87).

La connotación al autorreconocimiento e interreconocimiento del sujeto como radicalmente histórico y social permite comprender la reelaboración de identidades en el campo de la acción política. La constitución de estos movimientos sociales y políticos no pueden ser entendida en profundidad, si no se tiene en cuenta un momento necesario

de reelaboración y cuestionamiento crítico de la atribución de identidades como “pobres”, “desocupados” o “marginados”, que ciertos estudios intentaron asignar, en los primeros años de los 90, a la metamorfosis sufrida por los sectores populares (Feijoó, María del Carmen, 2001; Mallimaci, Fortunato, y Salvia, Agustín, 2005).

El paso de nomenclaturas que va de “trabajadores/as” en los años 60 y 70 a la de “pobres” en la década del 90 constituye una redefinición de las problemáticas sociales y una asignación de identidades políticas que condicionan las posibilidades para pensar y actuar lo social. Así, a primera vista, se pasaba de un sujeto político activo y homogéneo a una masa amorfa, que lo único que tenía en común era su situación de desposesión y pobreza, por lo que difícilmente podría constituir acciones organizativas y de resistencia. Desde esta perspectiva, el panorama neoliberal parecía condenado a la anomia, la disolución de los lazos sociales, la polarización social y la escasez de espacios organizativos. Sin embargo, fue desde la acción de los denominados “pobres” y “marginados” donde surgen los nuevos formatos de acción colectiva y movimientos sociales, a partir de la superación del estigma y la postulación de nuevas identidades emergentes, sostenidas en novedosos parámetros de participación, movilización y expresión social.

La valorización de sí mismos como sujetos políticos, constituidos como resistencia a la dominación del poder neoliberal, permitió la construcción de una perspectiva crítica, la emergencia de acciones de resistencia y la constitución de novedosas modalidades de identificación y organización colectiva.

Moralidad de la protesta y conflictividad social

Otro aporte significativo para el estudio de la movilización colectiva y la emergencia de sujetos políticos en la obra roigeana es el rescate de una tradición moral en América Latina que se ha denominado “moral de la emergencia”. En cuanto forma de pensamiento, puede ser considerada una “moral heroica” que constituye el espíritu humanista latinoamericano que viene expresándose de diferentes modos desde el siglo XVIII (Roig, 2002: 28). Sin embargo, esta doctrina no surge como producto del trabajo intelectual académico sino que es fruto de la acción de movimientos



sociales que, como sujetos colectivos, llevan adelante modos de autorreconocimiento y afirmación como tales. Por lo tanto, según Roig, no puede ser considerada una escuela de filosofía ni alcanza niveles teóricos, sin embargo, se muestra viva en las acciones de resistencia de los actores sociales que han padecido y padecen formas de desconocimiento y marginación. Así, puede ser caracterizada como una praxis moral, no necesariamente acompañada de una praxis teórica, que se manifiesta como una razón práctica en ejercicio. Sobre estas morales de la emergencia, Roig apunta:

Éstas surgen dentro de un ámbito menos institucional y, diríamos más social. Ernst Bloch, según nos lo dice Javier Muguerza (132-163), ha hablado de una “justicia desde abajo”, exigida por movimientos sociales que con diversos grados de espontaneidad y en circunstancias diversas, expresan, de modo constante, sus requerimientos de libertad, de igualdad, de respeto por la dignidad mediante formas diversas de resistencia, desobediencia y, según le gusta decir a Muguerza, de disenso, con la voluntad no siempre clara de quebrar todo lo que oprime y aliena (Roig, 2002: 148).

La moral emergente se asienta en la ya larga historia de luchas de los movimientos de emancipación y liberación de nuestro continente que surgen oponiéndose a la opresión del poder dominante. Como un ejercicio de la razón práctica, ha funcionado como idea reguladora a la que se han aferrado, con distintos niveles de conciencia, los sectores subalternos de nuestro continente. Ahora bien, ¿de qué trata esta práctica moral a la que Roig alude?

En primer lugar, sostiene que la escala de valores sobre la que se organiza el pensamiento moral emergente, se encuentra constituida por el *disenso*, en relación con un ejercicio vivo de la función *utópica* y una afirmación de *alteridad* como lo no comprendido en los marcos de una lógica imperante, expresada como *resistencia* (Roig, 2002). Para caracterizar a las morales de la emergencia en sus líneas profundas sobre las que se sustentan, se encuentra, primeramente, la exigencia de un reconocimiento de la dignidad humana como bien universal; otro aspecto constitutivo es la consideración de las necesidades no solo como cuestión económica sino también moral, es decir, que la dignidad humana misma es percibida como necesidad primaria que justifica, ordena y da sentido al universo de las necesidades; en tercer lugar,

el rescate de la subjetividad como motor de la conducta, que nos lleva a reconocer la prioridad de la subjetividad moral frente a las formas opresivas de eticidad en una sociedad organizada estructuralmente sobre la injusticia social. A su vez, las morales emergentes se han manifestado, de modo espontáneo, como solidaridad, de modo que la causa de uno/a es siempre, cuando prima la exigencia de dignidad, la causa de los/as otros/as. Y, por último, la vigencia constante de formas de un pensar utópico como fuente de regulación de la propia emergencia (Roig, 2002).

Dentro de la moralidad de la protesta o de la emergencia, el valor central es la dignidad. Tal como se mencionó en el apartado anterior, el a priori antropológico entendido como tenerse a sí mismo como valioso, se encuentra consustanciado con la afirmación de dignidad. Sin embargo, esta valorización no se deriva del lugar que nos toca ocupar en la sociedad ni de las funciones que en ellas cumplimos, sino que la dignidad –que es una sola con el a priori antropológico y que actúa como una línea constitutiva de la moral emergente– se configura como una virtud que poseemos en sí y que consiste en el respeto que nos tenemos a nosotros/as mismos/as y que tenemos a los demás por el simple hecho de ser seres humanos. Además de ser constituida como un fin en sí mismo, la dignidad no aparece escindida de las necesidades, en cuanto que constituyen dos facetas que integran el *conatus* o impulso que nos mueve a mantenernos en nuestro ser.

Se trata, pues, de una moral emergente que busca afirmar sus propios principios en un horizonte de universalidad y en la cual la “dignidad” –principio sin el cual los demás “bienes” se dan falaces e inseguros– es la necesidad primera, la forma por excelencia de toda necesidad humana que da sentido e introduce un criterio para la evaluación del universo de necesidades y de los abigarrados modos que la humanidad ha generado para satisfacerlas. Se trata de una “dignidad humana” plena y que es, por eso mismo, también nacional y continental (Roig, 2002: 115).

Roig afirma que la dignidad misma es una necesidad, en cuanto que nuestro perseverar en el ser quiere serlo como seres humanos. Por otra parte, juega como un principio ordenador y de sentido tanto de las necesidades, como de sus modos de satisfacción.

Otro rasgo relevante de la moral de la emergencia es que se constituye en oposición a lo que Roig denomina la ética del



poder. Esta tendencia moral se construye como la expresión de los que detentan el poder en una sociedad en la que rige la dominación y la explotación y, por tanto, se presenta como la moral de lo instituido, con un aparente status de objetividad y universalidad. Esta ética se encuentra representada, entre otras cosas, por la organización jurídica del Estado, ya que supone necesariamente una eticidad como fruto de un largo proceso de objetivación. La constitución y consolidación del aparato jurídico, en el marco de las luchas por el poder social, representa la eticidad vigente y pretendidamente universal, por lo que fácilmente puede entrar en conflicto con la moral emergente. Por su parte, la moralidad subjetiva o emergente a la que Roig alude se presenta como lo instituyente, como la emergencia, es la expresión de la conciencia moral enfrentada a las leyes establecidas y se constituye a través de un principio subversivo que es corrosivo de la eticidad vigente. Se trata de un sujeto colectivo “con una conciencia moral fruto de su sometimiento, de su explotación y de su miseria que a través de las grietas de su propia enajenación, surge con voz de protesta y de denuncia” (Roig, 2002). Por lo tanto, la moralidad subjetiva es la expresión normativa de las necesidades. Así, el conflicto entre la ética del poder y la moralidad de la protesta se plantea sobre el ejercicio del poder instituido y la satisfacción de las necesidades. Y este conflicto, como lo sostiene Roig, se expresa en el pensamiento latinoamericano desde el siglo XVIII hasta nuestros días, como “el quiebre de totalidades opresivas que impedían las diversas formas de emergencia” (Roig, 2002).

Esta ética del poder Roig la encuentra integrando otra tendencia moral, específica del período neoliberal, que denomina egoísmo racional. Se expresa, por lo general, en un discurso pragmático que acompaña a las políticas neoliberales y que, paradójicamente, se justifica a sí misma sobre pretendidas virtudes del egoísmo, aun cuando no lo explicita plenamente. El hecho de que este tipo de conducta sea racional se asienta en que la eficacia exige necesariamente una fuerte racionalidad en los medios. En esto radica, desde el punto de vista teórico, la intrínseca debilidad de esta tendencia moral que, en cuanto razón, se ha desembarazado de la reflexión sobre los fines como medida de sí misma. Así, se vuelve imposible decir que un sistema económico o político es irracional, por cruel y despótico que sea, con tal que funcione. Es lo que, el filósofo y economista

Franz Hinkelammert (1998) denomina la irracionalidad de lo racionalizado, es decir, la racionalidad instrumental sobre la que se sustenta el egoísmo racional, es racional en tanto que plantea una relación medio-fin eficiente

Celebramos la racionalidad y la eficiencia, sin embargo estamos destruyendo las bases de nuestra vida sin que este hecho nos haga reflexionar acerca de los conceptos de racionalidad correspondientes. Estamos como dos competidores que están sentados cada uno sobre la rama de un árbol, cortándola. El más eficiente será aquel que logre cortar la rama sobre la cual se halla sentado con más rapidez. Caerá primero, no obstante habrá ganado la carrera por la eficiencia (Hinkelammert, Franz, 1995: 301).

Siguiendo esta imagen que propone el autor, podríamos decir que la racionalidad instrumental no logra discutir el hecho de si estoy sentado o no en el árbol que estoy cortando porque, justamente, ambas opciones son igualmente racionales. Así, en términos éticos, el egoísmo racional que Arturo Roig menciona está sustentado en una racionalidad que se abstrae de la vida humana y su dignidad. De este modo, lo justo y lo injusto quedan más allá del sistema que se justifica a sí mismo en función de su propia capacidad de perduración y reproducción, lo cual se encuentra en relación directa con un proyecto de sociedad que instala la mercancía como eje categorial ordenador de los restantes valores y normas de conducta. Es precisamente contra las diferentes manifestaciones de esta tendencia moral que se ha organizado la moral de la emergencia en nuestros días. En la cual el valor principal que funciona como principio ordenador de prácticas y saberes es la dignidad humana, a diferencia del egoísmo racional, cuyo principio conformador no es precisamente moral, sino extramoral: el régimen de acumulación cuyo espíritu se encuentra, a su vez, en la mercancía, la más universal de las categorías posibles.

Ahora bien, frente a lo expuesto, podríamos preguntarnos cuál es la relevancia del análisis ético y de la moralidad de la protesta en las formas de emergencia política de los sujetos colectivos en el contexto de crisis de legitimidad del período neoliberal. Arturo Roig, en un diálogo con el escritor Ramón Plaza (Roig, 1993), define a la ética como el fundamento normativo de los ideales de una cultura, es decir, en la construcción de una sociedad, pautamos cómo debe ser.

Las tendencias morales de nuestro tiempo son variadas



y responden de diferentes maneras al complejo enunciado sobre “cómo debe ser nuestra sociedad”. Frente a esto, se trazan valores en disputa que entran en juego en el campo político. Por un lado, las ideologías neoconservadoras, neoliberales y posmodernas plantean, en este aspecto, una paralización de la conciencia ética y un desarme de las conciencias sustentándose en un pragmatismo que esconde entramados éticos que fundamentan sus acciones e intereses en el actual sistema de acumulación de capital. Roig pone al descubierto los valores de las éticas del poder y, en especial, la que se constituye en el período neoliberal: el egoísmo racional. La mercancía como eje ordenador de los restantes valores permite generar un marco de racionalidad que justifique la abstracción de la vida humana: pobreza, marginalidad, desocupación, devastación de los recursos naturales, sometimiento y discriminación de los pueblos indígenas, violencia machista, etcétera.

Las políticas neoliberales, en los diferentes países, comparten el mismo trasfondo moral. Sin embargo, Roig afirma que este modelo ético encuentra resistencia y disenso, en el campo de disputa de valores, en los movimientos que postulan “otra” moralidad. La alteridad, el disenso y la resistencia dibujan el espacio valorativo de la moral emergente en América Latina. Esta afirmación se encuentra en consonancia con las postulaciones de Maristella Svampa (2009) y Álvaro García Linera (2004) que identifican como un rasgo distintivo de los movimientos sociales latinoamericanos su carácter plebeyo. Es decir que su emergencia se encuentra ligada a un proceso de autoafirmación –en cuanto ser negado y excluido– y a una impugnación, de carácter antielitista, de la cultura dominante. La moralidad de la protesta a la que Roig alude representa el carácter plebeyo de la emergencia de los sujetos colectivos en el plano ético-político. En este sentido, sus aportes tienen la potencialidad de proponer nuevos universales normativos sobre los cuales organizar las acciones políticas de un modo no ajeno a formas de movilización social de los sectores subalternos. De esta manera, los movimientos sociales que emergieron a fines de los 90 en contraposición a las políticas neoliberales, se insertan en esta larga tradición moral latinoamericana

Las morales emergentes son un pensar y un obrar, dado en la misma praxis social, expresado espontáneamente y sin pretensiones teóricas por

sectores de población femenina, campesina, indígena, negra, mestiza, proletariado industrial, sectores de los suburbios, clases medias empobrecidas, niños arrojados a la calle y la masa, en nuestros días creciente, de desocupados y parados, abandonados a las medidas derivadas de un sistema que ha hecho opción entre riqueza financiera y vida humana, desconociendo que la verdadera riqueza es precisamente la vida humana y, por cierto, la vida humana realizada dignamente (Roig, 1997: 11).

Así, la dignidad como principio ordenador de la moral emergente logra objetivarse de múltiples modos en las acciones colectivas de los movimientos sociales de nuestra región. El reclamo por la conservación de los bienes comunes y por la conquista de la autonomía de las comunidades indígenas, las reivindicaciones por tierras y trabajo, el repudio a todas las formas de opresión machista y patriarcalista, el pedido de reconocimiento de las identidades sexuales, el reclamo de juicio y castigo por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, entre otras tantas reivindicaciones, comparten un espacio moral común: la valorización de sí mismos/as como sujetos que, en un contexto de opresión, desconocimiento y sometimiento neoliberal, emergen anteponiendo la vida humana digna como valor supremo por encima de cualquier determinación.

El aspecto ético-político que presentan los sujetos que encarnan la moralidad de la protesta no solo manifiesta una eticidad que favorece el desarrollo libre y creador de una moralidad subjetiva sino que postula una legitimación de otras formas de pensar la política y las relaciones sociales. Los movimientos sociales latinoamericanos, que emergieron en contraposición a las políticas neoliberales, constituyeron divergentes postulados sobre “cómo debe ser la política”. Su constitución se produjo, entre otras cosas, en el marco de una confrontación con las instituciones políticas neoliberales, lo cual se tradujo en un creciente cuestionamiento al régimen político tradicional, al modelo de la democracia representativa y a la forma que adoptó la constitución del Estado-nación en América Latina. La reinención de las formas democráticas desarrollada en la praxis de los movimientos sociales muestra al menos tres dimensiones: la búsqueda de formas más participativas, democráticas y horizontales como la organización asamblearia; la construcción de convergencias multisectoriales más amplias y flexibles aglutinadas en la consigna de “acuerdo para la acción”, a través de mecanismos



de articulación como foros o coordinadoras; y, finalmente, propuestas de democratización radical de la dinámica estatal, desarrollando variados instrumentos de democracia semidirecta como las exigencias de referéndum, plebiscitos o las asambleas constituyentes (Seoane, Taddei y Algranati, 2009). Por tanto, la renovación de la política institucional, que se postula desde la praxis de los diferentes movimientos, constituye fundamentos normativos sobre las relaciones políticas que se oponen a los ideales de una democracia representativa e indirecta. El lema zapatista “gobernar obedeciendo” se alza como un postulado desafiante a las formas tradicionales de concebir el poder político.

Ahora bien, la emergencia y existencia de esta moralidad de la protesta en América Latina no ha sido un hecho histórico dado ni se ha manifestado de manera constante hasta nuestros días. Precisamente las estrategias de dominación que despliegan los sectores en el poder influyen, de manera compleja, en la emergencia y el devenir histórico de la moral de la emergencia. Arturo Roig, en este sentido, advierte que esta moral no posee un punto inaugural ni se desarrolla en un continuum histórico, sino que se construye a partir de “comienzos y recomienzos”, donde lo episódico y las emergencias tienen una particular presencia

...sin olvidar que esos “modos de objetivación” son, por cierto, históricos y no siempre se ha logrado, a través de ellos, una afirmación de subjetividad plena. Más aun, diríamos que esa afirmación ha sido y es altamente defectiva, a tal extremo que nos vemos obligados a exponer nuestro pensamiento como sucesivos “comienzos” y “recomienzos”, como una búsqueda de “huellas”, o como una serie de “emergencias” (Roig, 1997: 29)

La emergencia y re-emergencia de una subjetividad en nuestro continente, que se nos muestra renaciendo entre las distintas formas de opresiones y explotación, se manifiesta en la historia a través de un esfuerzolento y pleno de contracciones. La problemática de nuestra afirmación como sujetos es relanzada una y otra vez, de manera ardua y laboriosa.

Esta forma de comenzar y recomenzar es un aspecto que puede ser vinculado con el carácter dinámico que poseen los procesos sociales en los que se conforma el pensamiento y quehacer latinoamericano y que deben ser ubicados al interior de las luchas –nunca definitivas– de nuestro continente. Esta dinámica discontinua puede ser analizada como producto

de una dialéctica del poder en la cual la construcción social y política para los sectores subalternos resulta ardua y dificultosa, ya que se les presenta como una lucha desigual contra los sectores dominantes.

En términos éticos-políticos, la solidaridad distintiva de la moral emergente –que se traduce en diversas formas de organización y colectivización de los movimientos– es fuertemente atacada por el egoísmo racional. La construcción de un “nosotros/as” como producto identitario de las organizaciones sociales, como se mencionó anteriormente, posee su sustento en una ética del bien común en la cual el respeto a sí mismo/a se encuentra consustanciado con el respeto a los/as otros/as y a la naturaleza. El egoísmo racional fragmenta las comunidades humanas a través de la postulación de un individualismo basado, entre otras cosas, en una lógica de las necesidades según la cual constituye una cuestión subjetiva e individual, nunca social. Los modos de satisfacción propios del consumismo que demanda el mercado nada tienen que ver con los históricos reclamos de vida digna y justicia social de los movimientos que expresan la moral de la emergencia

... una moral en la que reine un espíritu de solidaridad, no ocasionalmente y por oportunismo, será incompatible con otra en la que un individualismo liberado de compromisos sentimentales con la humanidad, responda a la necesaria fragmentación de los agentes sociales que exige el desarrollo del mercado (Roig, 1997: 52).

Las estrategias de fragmentación aplicada por los sectores dominantes a las organizaciones sociales tienen ya su larga historia en nuestro continente, entre las que se encuentran diversos modos de desmovilización y deshistorización de las luchas sociales. En tanto estrategias de dominación, se producen apropiaciones parciales y resignificaciones de algunos elementos –fundamentalmente discursivos– de la moralidad emergente por parte de los poderes de turno, a fin de neutralizar demandas y vaciar su contenido. Este campo de disputas, desigual y asimétrico, que enfrenta a los sujetos emergentes con los poderes instituidos, imposibilita una emergencia plena de la *sujetividad* de los sectores subalternos. Pero también, la “dialéctica discontinua” propia de la moral de la protesta muestra en cada “recomienzo” la recurrente vocación de movilización y colectivización de demandas que



atraviesan nuestra historia, como también la enorme creatividad que supone la reactualización de repertorios utilizados por los actores movilizados del continente. El sujeto latinoamericano que recomienza una y otra vez posee como rasgo distintivo la manifestación de rebeldía frente al atropello de su dignidad. Se constituye como tal en ese acto de desobediencia y rebelión, por el cual busca liberarse de la opresión y la cosificación que le imponen las “totalidades opresivas”.

Consideraciones finales

El estudio de una dimensión ética-política en el pensamiento y el quehacer latinoamericano que la obra de Arturo Roig habilita permite insertar los procesos de conflictividad y surgimiento de movimientos sociales, que irrumpieron al calor de la crisis neoliberal, en una larga tradición de nuestro continente. Los impulsos humanizadores que emergieron y emergen de nuestras tierras se manifiestan como la voz de los sectores olvidados, oprimidos y explotados que, a través de sus luchas, reclaman su reconocimiento como sujetos. La moralidad de la protesta se encuentra como una tendencia dinámica en América Latina que alberga gran variedad de actores sociales, movimientos de resistencia y organizaciones populares que impulsan de modo constante el ejercicio cada vez más pleno y consciente del a priori antropológico. Estos movimientos sociales, en un contexto de exclusión neoliberal, se enfrentaron a las diversas éticas del poder instituido y levantaron su voz de denuncia y de protesta a través del disenso, la alteridad y la manifestación profunda de una vida digna para todos/as. El análisis roigeano en este punto permite comprender los fuertes lazos que unen los postulados éticos con la praxis política y de qué manera se entrelazan atravesando nuestra larga historia de dominaciones y resistencias.

Sin embargo, el devenir de esta moralidad de la protesta y la emergencia de los sujetos subalternos en la región se manifiesta, nos advierte Roig, de manera episódica, intermitente. Los modos de comenzar y recomenzar de la moral emergente revisten una peculiar significancia en el análisis de los procesos socio-políticos de emancipación latinoamericanos, ya que marca el pulso constante de emergencias y re-emergencias de nuestra afirmación de soberanía e independencia en un contexto de imperialismo neoliberal.

Otro aspecto significativo de los aportes roigeanos a los estudios de los movimientos sociales que hemos destacado es el abordaje de la problemática de las identidades políticas y sus particularidades regionales. En su propuesta, la postulación del a priori antropológico –como la afirmación de un “nosotros/as”– permite desplegar una concepción de las identidades colectivas vinculadas a una autovalorización y autoafirmación de los sujetos que son constantemente negados/as, oprimidos/as, explotados/as. Concebidas de este modo, la conformación de identidades políticas es un proceso complejo y conflictivo, donde la afirmación de sí no es ajena a la lucha frente a otro que amenaza la emergencia o la continuidad histórica del sujeto en cuestión; un proceso de carácter histórico, en el que, en cada coyuntura, emergen formas específicas de reconocimiento y autovaloración. Este aspecto presenta elementos superadores a la propuesta de los estudios clásicos sobre movimientos sociales ya mencionados, que no lograban aprehender en su magnitud las particularidades de las identidades políticas en el contexto latinoamericano.

Siguiendo a Arturo Roig, se puede afirmar que en la emergencia de una identidad común no es suficiente que los sujetos compartan orientaciones, diagnósticos y campos de acción, sino que se construye una instancia previa, un necesario momento ético-político de auto e interreconocimiento de la dignidad humana que orienta y da sentido a las acciones colectivas. Esta valorización de sí mismos/as como sujetos políticos, constituidos en contraposición a la dominación que ejerce el poder establecido, posibilita la construcción de una perspectiva crítica, la emergencia de acciones de resistencia y la constitución de novedosas modalidades de organización y de protesta. La dignidad como autorreconocimiento de sí mismo/a y de los demás como sujetos permite comprender la reelaboración de identidades en el campo de la acción política latinoamericana.

Bibliografía

- FEIJOÓ, María del Carmen (2001). *Nuevo país, nueva pobreza*. México: Fondo de Cultura Económica.
- FERNÁNDEZ NADAL, Estela (2001). Arturo Andrés Roig (1922). En JALIF DE BERTRANOU, C. (Comp.), *Semillas en el tiempo. El latinoamericanismo filosófico contemporáneo*. Mendoza: EDIUNC.



- FERNÁNDEZ NADAL, Estela (2005). La condición humana como problema filosófico en Arturo Roig. La conformación de la subjetividad en las fronteras de la contingencia. En *Latinoamérica. Revista de estudios latinoamericanos*, 40, 73-92.
- GARCÍA LINERA, Álvaro (Coord.) (2004). *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*. La Paz: Diakonia y Oxfam.
- GARRETÓN, Manuel Antonio (2011). Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina. En *Serie Políticas Sociales CEPAL*, 56.
- GOHN, Maria da Gloria (2014). *Novas Teorias dos Movimentos Sociais*. Brasil: Loyola.
- HINKELAMMERT, Franz (1998). *El Grito del Sujeto. Del teatro-mundo del Evangelio de Juan al perro-mundo de la Globalización*. San José, Costa Rica: Editorial DEI.
- LECHNER, Norbert (2002). *Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política*. Buenos Aires: LOM ediciones.
- MALLIMACI, Fortunato y SALVIA, Agustín (2005). *Los nuevos rostros de la marginalidad: la supervivencia de los desplazados*. Buenos Aires: Biblos.
- MELUCCI, Alberto (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: Colegio de México.
- OFFE, Clauss (1992). *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*. Madrid: Sistema.
- ROIG, Arturo Andrés (1993). *Rostro y filosofía de América Latina*. Mendoza: EDIUNC.
- ROIG, Arturo Andrés (1997). Las morales de nuestro tiempo: un reto para las nuevas generaciones. En ARPINI, A. (comp.), *América latina y la moral de nuestro tiempo. Estudios sobre el desarrollo histórico de la razón práctica*. Mendoza: EDIUNC. pp. 7-14.
- ROIG, Arturo Andrés (2002). *Ética del poder y moralidad de la protesta: respuestas a la crisis moral de nuestro tiempo*. Mendoza: EDIUNC.
- ROIG, Arturo Andrés (2009). *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano*. Buenos Aires: Una ventana.
- SEOANE, José, TADDEI, Emilio, y ALGRANATI, Clara (2009). El concepto 'movimiento social' a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana recientes. Recuperado el 15 de julio de 2017, de http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/50otrabajo.pdf
- SVAMPA, Maristella (2009). "Protestas, movimientos sociales y

dimensiones de la acción colectiva en América Latina”.
Ponencia presentada en las Jornadas de Homenaje a
Charles Tilly, Universidad Complutense de Madrid-
Fundación Carolina, Madrid, España.

TOURAINÉ, Alain (1987). *El regreso del actor*. Buenos Aires: EUDEBA.

Fecha de recepción: 14 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 20 de marzo de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



Esteban Iglesias

estebantatiglesias@yahoo.com.ar

Juan Bautista Lucca

juanlucca@hotmail.com

CONICET. Universidad Nacional de Rosario. Argentina

EL PROTAGONISMO POLÍTICO DEL SINDICALISMO EN LA CIUDAD DE ROSARIO (2003-2007)

Resumen: *En este artículo se analiza la gravitación política del sindicalismo en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe durante el período 2003-2007. Nuestro propósito es complementar los estudios que abordan esta temática en el orden nacional durante el período, presentando las singularidades y continuidades de los derroteros subnacionales. En efecto, la recomposición política del sindicalismo en Rosario y Santa Fe (provincia) estuvo encabezada, por un lado, por UPCN, cuya principal estrategia fue la de participar dentro el “peronismo santafecino”, mantener un diálogo fluido con el gobierno provincial e ingresar en el juego electoral y parlamentario. Y, por el otro, por el gremio que representa a los maestros del nivel primario, AMSAFE, cuya estrategia fue la presencia en el espacio público mediante marchas, actos y huelgas. De esta manera, a través de una estrategia cualitativa de análisis y un abordaje teórico que pone en diálogo las definiciones identitarias e institucionales, el estudio logra dar cuenta de las principales características que adquiere el protagonismo político del sindicalismo en el caso estudiado.*

Palabras clave: *sindicalismo, peronismo santafecino, identidades*

The political protagonism of trade unionism in the city of Rosario (2003-2007)

Abstract: *This article analyses the political gravitation of trade unionism in the city of Rosario and in the province of Santa Fe during the period 2003- 2007. Our purpose is to complement the studies that address this issue at the national level during the previously mentioned period, describing the singularities and continuities of subnational courses. In fact, the political recomposition of trade unionism in Rosario and Santa Fe province was led, on the one hand, by UPCN, whose main strategy was to participate in the “Santa Fe Peronism”, to maintain a fluid dialogue with the provincial government, and to take part in the electoral and parliamentary game. And, on the other hand, it was led by AMSAFE, the union that represents the teachers of the primary level, whose strategy was to be present in the public space through marches, acts and strikes. Thus, through a qualitative analysis strategy and a theoretical approach that puts in dialogue institutional and identity definitions, the study manages to give an account on the main characteristics that the political protagonism of the unionism acquire in the studied case.*

Keywords: *syndicalism, Santa Fe Peronism, identities*



Introducción

Tras décadas de implantación de la matriz neoliberal, en el nuevo siglo XXI latinoamericano, se produce la recomposición de una estructura de oportunidades para la recuperación y movilización del sindicalismo en su accionar en el mundo del trabajo y de la política. En el caso argentino, tras la crisis de 2001, la reactivación económica fue un catalizador de la actividad sindical, especialmente en aquellas zonas metropolitanas de la Pampa Húmeda donde las actividades vinculadas al modelo agrícola-ganadero, la construcción y paulatinamente la actividad industrial tuvieron una fuerte pujanza económica (Iglesias, Esteban. 2013).

Paralelamente, en la ciudad de Rosario, el acuciante nivel de desempleo vivido durante la década de 1990 se revirtió a partir de octubre de 2002 con un descenso de 24% a 18%, poniendo fin a la caída de la masa de trabajadores formales, especialmente en aquellos sectores vinculados a la gestión privada de la economía, que claramente habían tenido como correlato el debilitamiento sindical por la pérdida de los contingentes de afiliados. La posterior estabilización y crecimiento de la actividad económica en el período 2003-2010 se dio junto al crecimiento generalizado del empleo, lo cual permitía inferir que al igual que en el contexto nacional, la estructura de oportunidades económicas abrían un espacio para la revitalización sindical, especialmente en los sectores de mayor pujanza económica como sucedía en el contexto nacional (Lucca, Juan Bautista, 2013).

En este sentido, el presente escrito tiene como objetivo complementar los aportes relativos a la producción de alcance nacional acerca de la recomposición política del sindicalismo durante el período 2003-2007, momento en que se inició el ciclo político kirchnerista y de la posconvertibilidad económica en Argentina. En este sentido analizaremos los cursos de acción política de las organizaciones sindicales que encabezaron la renovada gravitación política durante este período en la ciudad de Rosario. El interés por estudiar este caso radica en que la gravitación política del sindicalismo presenta una clara distancia con lo sucedido a nivel nacional, donde los sectores de la construcción, comercio, servicios, transporte y la incipiente industria fueron quienes se reposicionaron rápidamente en la vanguardia política del sindicalismo en detrimento de los sectores de servicios y el empleo estatal (Delfini, Marcelo, y Ventrici, Patricia, 2016).



En contraste, en la ciudad de Rosario, la conflictividad y activación sindical estuvo liderada principalmente por aquellos sectores vinculados al empleo público (Unión Personal Civil de la Nación –UPCN– y los gremios docentes) e incluso por fuera del arco cegetista (como es el caso de la Central de Trabajadores de la Argentina –CTA–, Seccional Rosario).

Esta singularidad del contexto sindical rosarino no se presenta únicamente como un fenómeno acotado al período 2003-2007 que nos interesa estudiar, sino que puede observarse de forma continuada en los años subsiguientes, ya que entre los conflictos sindicales de mayor envergadura mediática, como también de clara relevancia política, se destacan las medidas de fuerza llevadas a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social a partir de octubre de 2008, en un primer momento por UPCN, y luego secundada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que tuvo su continuidad durante el 2009, inclusive con huelgas de hambre. Sin embargo, limitamos el recorte temporal al período 2003-2007 porque en el 2007 se produce un cambio sustantivo en la dinámica política provincial con la llegada del socialismo a la gobernación, que modifica las condiciones políticas del accionar sindical.

Ahora bien, este fenómeno singular de “gravitación política” del sindicalismo, en tanto capacidad de incidencia y de modificación en las pautas de interacción en los procesos decisionales de la clase política puede ser abordado en diversas esferas: en primer lugar, en la institucional a través de la participación sindical en la instancia de negociación paritaria; en segundo lugar, en la búsqueda de penetración en el interior del peronismo; en tercer lugar, en la vinculación con otras organizaciones sindicales y la posibilidad de constituir agrupamientos colectivos; en cuarto lugar, en la cantidad de afiliados de cada organización y la acción por parte de las redes de militantes; y finalmente, en la presencia en el espacio público a través de la protesta –marchas, actos, huelgas, entre otros– (Torre, Juan Carlos, 2004; Mayorga, Fernando, 2014).

Sin embargo, para llevar adelante el análisis de la gravitación política de las principales organizaciones sindicales en el período, es necesario precisar teóricamente que abordar al sindicalismo en tanto actor político –siempre heterogéneo y diversos en sus organizaciones y cultura

política– implica plantear la mutua incidencia e interacción entre las definiciones político-institucional e identitarias. Con ello, entendemos que se subsanan las unilateralidades teóricas de los abordajes más relevante: por un lado, la del neo-institucionalismo, que entiende el comportamiento político del actor sindical a partir de la influencia de los “legados” e “instancias” institucionales, y, por otro lado, la de la perspectiva de los movimientos sociales, que minimiza la incidencia de las políticas públicas en las orientaciones de la acción colectiva (Iglesias, Esteban y Lucca, Juan Bautista, 2016).

Aspectos teórico-metodológicos

La renovada gravitación política del sindicalismo desde comienzos de siglo XXI en América Latina en el marco de los denominados gobiernos “progresistas” o “nueva izquierda” ha sido abordada desde diferentes perspectivas teóricas, siendo las principales el neo-institucionalismo y la perspectiva de los movimientos sociales¹. En efecto, se las considera relevantes por su influencia en los estudios académicos sobre la temática considerando que fueron muy prolíficas en la elaboración de conceptos y, a su vez, por los resultados empíricos novedosos que arrojaron. Con todo, entendemos que ambas perspectivas adolecen de un aspecto fundamental en su enfoque: del análisis equilibrado y de mutua incidencia entre la dimensión político-institucional e identitaria del actor sindical. Esta será la principal orientación teórica de nuestro abordaje.

El neoinstitucionalismo

En América Latina circulan conceptos que se han vuelto habituales en el vocabulario politológico y que fueron forjados por esta corriente teórica, por ejemplo: “desindustrialización partidaria”, “gobierno de base sindical”, “partido de base laboral”, “revitalización sindical”, “neocorporativismo segmentado”, otros.

¿Qué tienen estos conceptos en común? Que fueron producidos atendiendo al modo en que las distintas instancias institucionales del régimen político incidieron en el comportamiento y organización política del actor sindical. En este sentido, se destaca la investigación de Esteban Etchemendy y Ruth Collier (2008)², quienes analizan la recomposición política del sindicalismo en

¹ En Iglesias (2013) se analizaron las ventajas analíticas del enfoque casuístico desarrollado ampliamente por Fernández, 1993 y 2007; así como la perspectiva de la movilización de recursos desarrollada por Auyero, 2007; Gómez, 2009; Pereyra, Pérez y Schuster, 2009; entre otros.

² Esta literatura es extensa, consultar a Etchemendy, 2013; Levitsky, 2004; Levitsky y Mainwaring, 2007; Murillo 2005; Natalucci, 2013; Pontoni, 2013; Senén González, 2008; entre otros.



torno a dos factores: por un lado, en el regreso del conflicto laboral bajo la modalidad de la huelga y, por otro lado, en la centralidad otorgada a la negociación colectiva durante este período. Para los autores, ambos factores funcionaron complementariamente en la medida en que la movilización y las huelgas se sucedieron al momento que se realizaba la negociación paritaria. Finalizada la negociación, la amenaza efectiva de la huelga se diluía. Con todo, el “neo-corporativismo segmentado” refiere a una lógica en la que el gobierno restablece el poder de los líderes sindicales poniéndolos como interlocutores privilegiados ante las asociaciones empresariales. Sin embargo, este acuerdo institucional protagonizado por las cúpulas sindicales generaba una segmentación, observable en la “... brecha entre los que están afuera y dentro del sector formal del mercado de trabajo” (Etchemendy, Esteban y Collier, Ruth, 2008: 149).

Cecilia Senén González complejiza el debate en el marco del neoinstitucionalismo preguntándose si la revitalización del conflicto laboral responde a las características de la coyuntura económica o a la capacidad de presión de los actores socio-políticos. En esta línea, junto a Bárbara Medwid, se proponen “... conocer si efectivamente es la nueva coyuntura o son las características de los actores –entendidas por su capacidad de presión– las que influyen en el surgimiento, modalidad y resultados de los conflictos” (Senén González, Cecilia y Medwid, Bárbara, 2007: 209).

De todas maneras será el concepto de “revitalización sindical” el que le permitirá un análisis de mayor profundidad y alcance. Para Cecilia Senén González este concepto es el que se ajusta con precisión para el análisis de la situación sindical en este ciclo político. Recuperado de la literatura anglosajona, para la autora, este concepto captura de forma fidedigna la renovada gravitación política del actor sindical en su dimensión institucional durante el kirchnerismo. Así, analiza la tasa de afiliación, la evolución de la negociación colectiva y las características de la conflictividad laboral. De los tres elementos el más interesante es el de la negociación colectiva, señalando que:

...en la actualidad (entre 2001 y 2008) la negociación salarial es el contenido que predomina. La negociación colectiva se caracteriza por el predominio de las cláusulas salariales y adquiere un rol central como instituto laboral de determinación salarial y

como mecanismo de diálogo social para la resolución de la puja distributiva. Entre 2002 y 2008, todos los convenios colectivos de mayor cobertura tuvieron un incremento salarial por impulso de la política oficial o por decisión de los actores sociales en la negociación colectiva (Senén González, Cecilia 2011: 55).

A pesar de los resultados investigativos novedosos que arroja, este enfoque teórico presenta falencias en un punto crucial: el de la incidencia del actor sindical sobre los marcos institucionales. En efecto, este enfoque acentúa las condiciones y oportunidades políticas que brindan las instancias institucionales. Sin embargo, poco sabemos cómo se construyen las orientaciones del actor sindical y el modo en que este accionar político influye sobre el proceso decisional de las autoridades institucionales.

La perspectiva de los movimientos sociales

Con especial preocupación por los procesos identitarios, esta perspectiva encuentra en la producción de Maristella Svampa a su principal exponente. A fines de la década del 90 del siglo XX, junto a Danilo Martucelli, estudiaron el modo en que el peronismo histórico viró hacia una fuerza neoconservadora. Los autores se concentraron en abordar la dimensión “subjetiva” de esta mutación, más que la mirada que posaba su atención en las razones por las que los sectores populares “toleraban” el ajuste económico y, al mismo tiempo, continuaban votando a quienes perjudicaban directamente sus intereses. En este sentido, el peronismo es definido como un “lenguaje político” que a partir de la “experiencia social” hace “inteligible” el mundo de los sectores populares al mismo tiempo que transforma su fisonomía (Martucelli, Danilo y Svampa, Maristella, 1997).

Con la publicación de *La transformación de las identidades sociales* en 2000 y *La sociedad excluyente* en 2005, Maristella Svampa complementa las transformaciones que experimentaron los sectores populares urbanos, describiendo el modo en que las modificaciones identitarias del peronismo impactaron en el vínculo entre organización partidaria y organización sindical. Así, sostiene que se produjo una reconfiguración del “mundo popular”, la que estuvo a cargo del Partido Justicialista y que derivó en la constitución de nuevos sujetos políticos, siendo el más relevante el de las organizaciones piqueteras. Estas organizaciones, a juicio



de la autora, inscribieron su surgimiento en el cruce de dos procesos paralelos, por un lado, el que marca el contexto de políticas públicas promercado y, por el otro, el de la desvinculación del Partido Justicialista con las organizaciones sindicales peronistas. Este último proceso fue explicado, sobre todo, por las transformaciones en la dimensión subjetiva que experimentó el Partido Peronista.

¿Cómo explica la perspectiva de los movimientos sociales los procesos de constitución identitaria de los actores sociales? Numerosos conceptos dan cuenta del modo en que culturas políticas existentes en la sociedad colaboran en la emergencia de nuevas identidades políticas. Para la identidad piquetera, en la que anidaban organizaciones provenientes de diferentes tradiciones políticas, Svampa ha utilizado los términos “lógicas de acción política” o “corrientes político-ideológicas”. Con estos ha dado cuenta del modo en que coexisten diferentes culturas políticas en una misma identidad política. En el caso del movimiento piquetero se reconoce que “las organizaciones de desocupados más importantes pueden comprenderse a partir de tres lógicas: una lógica sindical, una lógica político partidaria y una lógica de acción territorial” (Svampa, Maristella, 2005: 142).

Si bien esta perspectiva muestra particular interés por abordar los procesos de identificación política, entendemos que minimiza la incidencia de las iniciativas estatales y políticas públicas en los cursos de acción de la acción colectiva, inclinando el fiel de la balanza hacia un análisis “societalista” de los actores socio-políticos.

Considerando las principales características de las perspectivas teóricas, entendemos que ambas perspectivas, con modalidades diferentes, realizan un abordaje unilateral del sindicalismo en tanto actor político. Por un lado, el neoinstitucionalismo hace un análisis que puede ser caracterizado de “arriba hacia abajo”, donde los legados y características de las instancias institucionales moldean el accionar del actor sindical. Por el otro, la perspectiva de los movimientos sociales enfatiza los procesos de construcción identitaria dejando de lado el modo en que las iniciativas estatales inciden en los cursos que asume la acción colectiva. Por tal motivo, nos proponemos realizar un abordaje equilibrado, consistente en analizar la mutua incidencia entre la dimensión político-institucional y los procesos de constitución identitaria.

Entendemos que esta orientación teórica permite captar, por un lado, los cambios en las pautas de interacción de los procesos decisionales producto de la acción colectiva y, por otro lado, la incidencia de las políticas públicas en las orientaciones de la acción colectiva. Finalmente, la mutua incidencia permite capturar el modo diverso en que diferentes organizaciones que inscriben su accionar en una misma identidad política –sindicalismo, piqueteros, movimiento de empresas recuperadas, otros– ofrecen respuestas diferentes ante un mismo contexto institucional.

Esta orientación teórica, aunado a la importancia del estudio del sindicalismo rosarino entre 2003-2007 en tanto estudio de caso, debe acompañarse necesariamente de algunas decisiones metodológicas para su abordaje. En este sentido, se tomará a la entrevista cualitativa y la observación de documentos como las principales técnicas de recolección de la información, y al análisis documental como la técnica de análisis de la información, que nos permitirán fehacientemente comprender el contenido y el contexto, cómo se dice y qué es lo que dicen los protagonistas políticos.

La gravitación política liderada por UPCN

En la provincia de Santa Fe hay tres organizaciones sindicales relevantes en lo que concierne a la representación política de empleados públicos, UPCN, ATE y los municipales de la ciudad de Rosario. A esto hay que agregarle que el gobierno provincial estuvo encabezado desde el retorno democrático hasta 2007 por el peronismo, mientras que la ciudad de Rosario estuvo gobernada primero por el radicalismo y luego, desde 1991, por el socialismo. En lo que respecta a su dimensión identitaria es preciso destacar que lo que caracteriza a estas tres organizaciones sindicales es su inscripción en el peronismo. Sin embargo, su historia y trayectoria política fueron muy diferentes. En primer lugar, durante los 90 ATE y los municipales de Rosario resistieron las políticas de ajuste económico implementadas por Carlos Menem, mientras que UPCN las convalidó políticamente, desmovilizó sus bases y se subordinó a los designios del gobierno (Menéndez Diana, Nicolás, 2008:9). En segundo lugar, el sindicato de municipales de Rosario integró el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, creado por Juan Manuel Palacios y Hugo Moyano, y, posteriormente, lo que



fue la “CGT-opositora” durante 1999 y 2000. En cambio UPCN siempre se mantuvo “oficialista”. Finalmente, la relación con las distintas instancias del Estado las plantean de forma diferente. UPCN muchas veces se comporta como un “interlocutor” del gobierno provincial ante las organizaciones gremiales y convalida las negociaciones realizadas frente a sus afiliados. Por el contrario, ATE posee un proceso decisonal que remite al “asambleísmo”.

La recomposición política del sindicalismo peronista en las ciudades de Santa Fe y Rosario estuvo liderada por UPCN, dirigido por Alberto Maguid. Los espacios hacia los que orientó su accionar fueron, por un lado, el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe habida cuenta de su concepción identitaria, y, por otro lado, la arena legislativa provincial producto de su vocación de inserción en la representación política institucional. En ambos, este líder sindical desplegó su accionar político, inclusive sin dejar de renunciar a la Secretaría General de UPCN, lo que motivó críticas de referentes gubernamentales, partidarios y sindicales.

La literatura demuestra que, a nivel nacional, el protagonismo político³ del sindicalismo estuvo apuntalado por Hugo Moyano, líder del sindicato de camioneros en ese período. En este sentido, los estudios observan, en términos generales, que la estrategia política de Moyano consistió en una tentativa de devolverle al sindicalismo peronista el lugar privilegiado que había tenido y perdido en el interior del Partido Justicialista desde mediados de los 80 del siglo XX en adelante. El proyecto de “la patria camionera” emulaba el de la “patria metalúrgica” de Lorenzo Miguel, durante el período sustitutivo de importaciones de Argentina (Torre, Juan Carlos, 2012). En este sentido, Hugo Moyano construyó una relación privilegiada con Néstor Kirchner, la que le permitió incrementar la cantidad de sus afiliados a costa de otras organizaciones gremiales, lideró la Confederación General de los Trabajadores, buscó espacios partidarios de poder y mantuvo una posición predominante en los espacios institucionales como las convenciones colectivas de Trabajo en las que el incremento salarial pactado por su sindicato se constituía en la “pauta” de aumento para el resto de las organizaciones gremiales (Etchemendy, Esteban y Collier, Ruth, 2008).

En la ciudad de Rosario la proyección política del “moyanismo” fue limitada y encontró diversos obstáculos.

³ Mencionamos algunas referencias: Fernandez, 2008; Etchemendy, 2013; Etchemendy y Colliers, 2008; Iglesias, 2013; Natalucci, 2013; Pontoni, 2013; Senén González, 2008; Svampa, 2008; otros.

El apoyo político de Moyano fue la conducción de la CGT regional Rosario, presidida por Néstor Ferrazza, del sindicato de municipales, y las 62 Organizaciones Peronistas, presidida por Oscar Daniele, del gremio de judiciales. Sin embargo, el principal obstáculo fue la prevalencia del liderazgo político de Carlos Reutemann, quien planteó sus diferencias políticas desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner y que se acentuaron desde 2005, momento en que el kirchnerismo se proyectó como principal fuerza política a nivel nacional.

Sin embargo, en el panorama sindical rosarino, lo más novedoso en este período fue la constitución de la Intersindical, en 2002. Éste era un agrupamiento que revestía rasgos particulares, sobre todo por su composición. En efecto, estaba integrado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), los trabajadores municipales nucleados en la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), la Asociación de Magisterio Docente (AMSAFE), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza (FTLyF) y el Sindicato de Empleados Municipales de la ciudad de Rosario. Básicamente, lo que motivó la constitución de este espacio sindical fue el pedido al gobierno provincial de aumento salarial y el blanqueo de determinados ítems que figuraban como “no remunerativos”.

La Intersindical fue una experiencia novedosa y, al mismo tiempo, de escasa duración. A pesar de su peso político –ya que se representaban a 130 mil trabajadores– abrigaba en su interior una heterogeneidad en las tradiciones políticas y culturas políticas, distintos modos en que cada sindicato enfrentaba el proceso de toma de decisiones y diferentes posiciones frente al peronismo en el gobierno provincial. Contemplando las escalas salariales, el salario de un trabajador del gremio de Luz y Fuerza triplicaba el salario de uno del de AMSAFE. Esto, sin dudas, fue captado por las autoridades provinciales, cuya estrategia consistió en el enfrentamiento político, la división y el desgaste sindical.

Daniel Germano, ministro de Educación provincial, declaró que “... pueden incendiar la provincia, que el gobierno no tendrá los \$200” (*La Capital*, 6/7/2003). Además, el gobierno enfrentó los sindicatos de UPCN con ATE y, al mismo tiempo, a ambos con el Sindicato de Empleados Municipales de la ciudad de Rosario. No contentos con esto, cuando se realizó



la reunión negociadora entre autoridades gubernamentales y los gremios, impidió el ingreso de Néstor Ferrazza, líder del Sindicato de Trabajadores Municipales. Se escuchó decir “... que los municipales vayan a reclamar a la puerta de la intendencia” y, además, “... Ferrazza es empleado de Binner, no de Reutemann” (*La Capital*, 10/7/2003). Finalmente, la Intersindical, mediante protestas y paros, obtuvo un incremento salarial poco significativo, de los \$200 recibió \$60. Paradójicamente, el sindicato de empleados municipales de Rosario, que por la fuerza de los sucesos terminó reclamando por su cuenta, percibió un aumento salarial mayor. En 2003, luego de las elecciones provinciales este espacio sindical se disolvió.

En la coyuntura política-electoral de 2003 parte del sindicalismo peronista se lanzó de lleno a la arena partidaria, con el propósito de incidir en los destinos del peronismo santafecino. Este fue el intento de Alberto Maguid, líder de UPCN, afín al peronismo y que, desde el retorno de la democracia, ha mantenido un alto grado de autonomía política con los sucesivos gobiernos peronistas que gestionaban la provincia. Lo cierto fue que el vínculo entre organización partidaria y organización sindical se reorganizó en un contexto político-social muy diferente del de la década del 80 del siglo XX. Ante la falta de correspondencia entre “condición obrera” e “identificación política de clase”, el desafío consistía en la construcción permanente de la relación entre las organizaciones del movimiento obrero y el Partido Justicialista (Torre, Juan Carlos, 2012).

En ese contexto Alberto Maguid decidió presentarse liderando un sublema en el marco del PJ. En efecto, su espacio político se denominaba Producción y Trabajo. Durante su campaña electoral, declaraba públicamente que el sindicalismo “debía” recuperar el protagonismo político y, asimismo, que su candidatura expresaba lo más genuino del peronismo. Para Alberto Maguid: “Este es un sublema que ha creado el movimiento sindical santafesino desde sus propias fuentes, desde su propio origen, con los trabajadores y las organizaciones sindicales que lo representan” (*La Capital*, 29/7/2003). Este discurso estaba orientado hacia el interior del partido peronista, ya que los dos candidatos con mayores posibilidades en la categoría a gobernador eran la de Jorge Obeid y Alberto Hammerly. Maguid apoyó políticamente a Hammerly, quien fue derrotado categóricamente por Jorge

Obeid. Mientras tanto Carlos Reutemann mantenía de ambos candidatos su equidistancia política, al menos en el plano del discurso.

Jorge Obeid salió electo gobernador y Alberto Maguid obtuvo su banca de diputado provincial. Luego de la elección Maguid declaró: “Apoyaré a Jorge Obeid mientras no ofenda ni lesione los derechos de los trabajadores; no seré opositor y tampoco chupamedias. Formaré parte del bloque justicialista pero no respondo a ningún jefe ni mando superior. No voy a renunciar a UPCN, ya que fueron los afiliados los que me colocaron en ese lugar” (*La Capital*, 25/10/2003). Con ello, Maguid intentaba mantener su autonomía política, conservar su tradición identitaria dentro del peronismo, y, a su vez, fortalecía su espacio político a través de un esquema de alianzas que involucró a Jorge Cura, líder de SMATA, y a Oscar Daniele, de las 62 Organizaciones Peronistas. Así, el sublema Producción y Trabajo se constituyó en el ámbito legislativo, Cura presidió la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, y, también, en la esfera partidaria, constituyéndose, tanto Cura como Daniele, en congresales partidarios por el departamento.

Lo más destacado de la incidencia política de Producción y Trabajo en el ámbito legislativo fue, por un lado, la aprobación del proyecto de “blanqueo salarial” y, por el otro, la incorporación a la instancia de negociación paritaria a la Asociación de Trabajadores del Estado.

La recomposición salarial reclamada durante 2004 y 2005 por los estatales estuvo guiada por los aumentos otorgados vía decreto por el entonces presidente Néstor Kirchner. Entonces, disuelta la Intersindical cada gremio actuaba de forma individual. Por su parte, UPCN en 2004 exigió un aumento de \$250 y en 2005 un aumento de 20%, cifra que, supuestamente, equipararía el retraso salarial que habría experimentado el sector público en el orden provincial durante el año anterior.

En 2006 comenzó a exigirse el blanqueo de sumas que hasta ese momento eran consideradas “no remunerativas”. En lo que respecta a la dimensión institucional, asume relevancia el accionar político de Maguid en la Legislatura en el marco del bloque Producción y Trabajo y de UPCN. Así, el proyecto que se presentó fue conocido como el del “blanqueo salarial”, que se proponía beneficiar a los empleados públicos provinciales. En realidad cuando se produjo el principal conflicto con la



Intersindical, las autoridades del gobierno provincial habían observado que se requería de un ordenamiento salarial en lo que respecta a las escalas de los diferentes empleados públicos. En ese momento desistieron de hacerlo. El proyecto de “blanqueo salarial” se aprobó en setiembre de 2005. Y, en 2006, ante los reclamos de recomposición salarial realizada por los gremios del sector público, el gobierno provincial decidió incluir en este pedido a policías, médicos, jubilados y pensionados. Así, el gobernador Jorge Obeid indicó que “... se producen los aumentos salariales en la docencia y la administración pública, hoy tiene su correlato en médicos, policías y el sector pasivo” (*La Capital*, 22/3/2006).

La otra iniciativa de relevancia política para las organizaciones gremiales del sector público, presentada por Alberto Maguid, fue la modificación del régimen de convenciones colectivas de trabajo para el sector. En efecto, él fundamentó la presentación del proyecto en el hecho de que “... luego de 19 años de esta norma que otorga exclusividad al gremio mayoritario, queremos readaptarla a las nuevas épocas, realidades y desafíos de la organización sindical y de ahí la propuesta para dejar sin efecto la cláusula que solo admite en las discusiones al sector con mayor cantidad de afiliados” (*La Capital*, 7/6/2006). En 2007 se aprobó el proyecto, modificándose la Ley 10.052 de convenciones colectivas del sector público. En este sentido, se aprobó que los trabajadores estatales fueran representados en la comisión de negociación paritaria por la entidad mayoritaria y, a su vez, por la minoritaria⁴.

⁴ La comisión paritaria será integrada por cuatro representantes del Estado y cuatro de los trabajadores designados por las distintas entidades con personería gremial, un 75% por el gremio mayoritario del sector y el restante 25% para la entidad que le siga en orden de representatividad dentro de los empleados.

El contrapunto del accionar de UPCN lo representaba el sindicato de municipales de Rosario, que a pesar de su tradición peronista se opuso a las políticas de ajuste económico y despido masivo de la última década del siglo XX. También, a diferencia de UPCN, mantuvo relaciones con el sindicalismo peronista opositor, primero con el MTA desde 1994 hasta 1999 y luego con la CGT opositora en el período 1999-2001.

Las tensiones en los espacios sindicales pudieron observarse durante la experiencia de la Intersindical. En efecto, como se sostuvo, era un espacio heterogéneo y con una identidad política débil, organizada en torno al reclamo de aumento salarial al entonces gobernador Carlos Reutemann. En esa ocasión, UPCN se ubicaba como una especie de “interlocutor” del gobierno frente las organizaciones que

integraban la Intersindical. Esto perjudicó al Sindicato de Municipales de Rosario ya que en una de las instancias y reuniones de negociación con el gobierno provincial a Néstor Ferrazza, líder de los municipales, se le impidió el ingreso. A pesar de la estrategia del gobierno provincial de división de las organizaciones sindicales, los municipales terminaron obteniendo mejores resultados que los gremios que actuaban en el orden provincial ya que el aumento obtenido fue mayor. Así, Miguel Lifschitz, entonces intendente de la ciudad de Rosario, otorgó incrementos salariales de \$70 en noviembre a los que hay que sumarle otros de \$80 y \$100 durante 2004.

Con posterioridad, durante el período 2004-2007, el sindicato de municipales se concentró en los reclamos de aumento salarial y blanqueo de ítems no remunerativos. En 2005 el gremio forzó al gobierno municipal a establecer como prioridad en su agenda la cuestión del blanqueo de sumas no remunerativas en la composición del salario. En este sentido, se constituyó una comisión, integrada por representantes del Ejecutivo y gremiales que estableció un cronograma para el blanqueo de las sumas que hasta ahora continúan cobrando en forma no remunerativa. Néstor Ferrazza explicó que “son unos 160 pesos fijos que queremos que se blanqueen para que también beneficien a los jubilados” (*La Capital*, 15/7/2005).

Paralelamente, Néstor Ferrazza concentró su actividad política en la conducción de la CGT Rosario, cuyo principal apoyo político fue la Asociación Bancaria de Rosario y la de Hugo Moyano, que desde 2004 se constituyó como secretario general de la CGT. El protagonismo político de la CGT Rosario fue relativo y circunscripto a las cuestiones del mundo del trabajo. De todas maneras, comparado con el grado de inactividad que presentó la regional Rosario producto de la justificación de las políticas de ajuste económico de la última década, con la nueva conducción el compromiso de la nueva dirigencia con los trabajadores fue mucho mayor. En este sentido, la CGT participó activamente de los conflictos de los trabajadores que se suscitaron en la ciudad de Rosario y en su cordón industrial.

Las izquierdas y sus orientaciones políticas

A diferencia de la dirigencia sindical peronista, que realizó intentos de penetración en la arena partidaria, los referentes políticos de la izquierda orientaron su accionar



hacia los espacios sindicales, lo que daba la pauta de la modificación de las condiciones políticas. En este sentido se destaca que desde mediados de los 90 parte de la izquierda partidaria identificó al “desocupado” como un sujeto político, pasible de ser organizado políticamente. Entre los ejemplos destacables se encuentran: la Corriente Clasista y Combativa, que surge en 1994 y se vuelve numerosa cuando estableció su alianza con el Partido Comunista Revolucionario en 1996, con el propósito de organizar políticamente a los desocupados; la formación de Polo Obrero, gracias a los miembros del Partido Obrero y; finalmente, la experiencia de las “coordinadoras”, producto de la tradición autonomista de la izquierda. La crisis política de 2001 catapultó a las organizaciones piqueteras al escenario político nacional (Svampa, Maristella, 2005). Sin embargo, la elección de Néstor Kirchner en 2003, y la posterior restitución política de la autoridad presidencial junto al proceso de reactivación económica motivó una mejora en el funcionamiento del mercado de trabajo produjeron una notable modificación del escenario político. A nivel nacional, el desempleo disminuyó, según información del INDEC, de 17,3% en 2003 a 8,5% en 2007. Y, el cordón industrial de Gran Rosario mostró un comportamiento similar, observándose que durante el mismo período en ese aglomerado se incorporaron al circuito productivo alrededor de 68.600 personas, a su vez, se ofrecieron más de 100 mil oportunidades laborales y, finalmente, se registró una disminución del desempleo de 19,4% en el tercer trimestre de 2003 a 10,4% en primer trimestre de 2007 (Crucella, Carlos, 2007).

¿Qué factores políticos intervinieron en el marco decisional de los actores sociales? Los casos testigos acerca de cómo los referentes de izquierda se orientaron hacia espacios políticos sindicales son AMSAFE, COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario) y la CTA-Rosario⁵.

Desde 2003 a 2005 hubo un proceso de recambio de autoridades en estas tres organizaciones gremiales que inscribían su accionar político en el marco de las izquierdas. Por su parte, COAD, gremio de los docentes universitarios, experimentó un cambio profundo. Si bien desde su fundación coexistieron grupos con diferentes tradiciones políticas, hasta 2003 la constante era que el grupo mayoritario que gobernaba venía del peronismo con componentes de izquierda y, con el recambio de autoridades, esta ecuación

⁵ El análisis de casos similares al que aquí se estudian, especialmente focalizado en la CTA, UPCN y ATE se concentraron prioritariamente en el contexto porteño y bonaerense. Para ello, consultar Armelino, Martín (2005 y 2007), Menéndez, Diana (2008) y Villarroel, et al. (2011).

se dio vuelta: las autoridades principales fueron de izquierda y el grupo minoritario pasó a ser el peronismo. Así, en 2005 gana la lista encabezada por Gustavo Brufman, el que se desempeñará como secretario general. Anteriormente éste había estado en la secretaría gremial de la organización y, con la victoria electoral, pasó a liderar la misma. Con el acceso de la izquierda a la conducción de la COAD, la orientación política se modificó abruptamente, enfatizándose, desde ese momento, una perspectiva “latinoamericanista” de la organización y, en términos de encuadramiento nacional, con mayores afinidades a la CONADU Histórica que no era la reconocida por el Estado nacional.

Por otra parte, la CTA-Rosario también renueva sus autoridades. Desde sus inicios los referentes políticos locales eran Alberto Piccinini y Victorio Paulón, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, y Héctor Quagliaro, de ATE. Éste venía experimentando un fuerte desgaste político en su propio gremio. En efecto, durante las elecciones internas de ATE de 2003, se presentaron otras opciones electorales que, incluso, tenían fuerza para alzarse con la victoria. Con lo cual no solo el liderazgo de Héctor Quagliaro se encontraba en tela de juicio sino que su posición de poder era bastante débil. Lo cierto fue que en mayo de 2003, la histórica “lista verde”, que lideraba Héctor Quagliaro, disputó voto a voto con una lista opositora, denominada “lista tricolor”, liderada por dirigentes cuya base de acción política se ubicaban en el PAMI I.

Finalmente, la lista que encabezaba Quagliaro triunfó en las elecciones de forma muy ajustada, incluso hubo denuncias de fraude por parte de la lista opositora ya que consideraban que había electores que no habían sufragado. Este suceso le quitó legitimidad a su triunfo, un dirigente que se había constituido en un referente de los sectores gremiales y políticos de izquierda en la ciudad. Con posterioridad, durante 2004, se produjo un recambio de autoridades en la CTA-Rosario, esta vez a manos de un sector de la izquierda, espectro político más radicalizado y sin afinidad al proyecto kirchnerista. Los flamantes ganadores de las elecciones son Gustavo Guevara y Gustavo Terés, provenientes de la universidad y del nivel primario respectivamente.

Con la nueva conducción la impronta política de la CTA-Rosario se desprendía de los sucesos producidos en diciembre de 2001. En este sentido, sus principales dirigentes señalaban



“... nosotros somos hijos de la crisis de 2001”, eslogan que se constituiría marca identitaria que orientaría su accionar político. De acuerdo con esto, se potenció el costado y la dinámica de “movimiento social” que en sus orígenes había tenido la CTA al momento de su fundación con Víctor De Gennaro. Esta decisión no fue casual. En un contexto político modificado, en el que se detecta un mejor funcionamiento del mercado de trabajo y los sindicatos recomponen su protagonismo político, la CTA-Rosario intentó ocupar un espacio político donde priman las situaciones de los trabajadores precarizados y que, por tal condición, no obtienen apoyo gremial. Esta orientación política se mantuvo durante todo el período.

Finalmente, en AMSAFE la renovación de autoridades gremiales se produjo en 2004. Y, entre los principales factores se puede registrar el relativo a los realineamientos partidarios ocasionados en el orden nacional. En este caso jugó un rol preponderante el liderazgo de Elisa Carrió, que, con conformación del ARI (Argentina para una República de Iguales), incorporó a su partido político la conducción de AMSAFE provincial. En este sentido, la principal figura del gremio, José María Tessa, se involucró en esta fuerza política en busca de una representación legislativa y el gremio quedó a cargo de funcionarios de segundas líneas. De modo que cuando fueron las elecciones de 2004 esta situación impactó, a tal punto que la oposición hablaba de “acefalía” gremial en el orden provincial. Lo cierto fue que el 2 de junio de 2004 se produjo la elección en la participaron cerca de 32.000 docentes en el territorio provincial, mientras que en Rosario lo hicieron alrededor de 7.400. Las listas presentadas fueron la oficialista, que había gobernado 12 años consecutivos, y fue encabezada por José María Tessa, denominada Trabajadores de la Educación; Educación Popular, conocida como la lista de Ediberto Sánchez –que había sido secretario general del gremio– y que estaba encabezada por Ana Martín a nivel provincial y en Rosario por Cristina Fernández Torres; la Lista Violeta-Tribuna Docente, encabezada en Rosario por Gustavo Téres, cuyos orígenes políticos fueron en el Partido Comunista; y, finalmente, la lista Frente de Unidad Docente, encabezada por docentes que militaban en la Corriente Clasista y Combativa y el Partido Comunista Revolucionario. El resultado fue que la lista encabezada por José María Tessa salió victoriosa en el orden provincial logrando así su re-

elección y en Rosario hizo lo propio Gustavo Téres de la lista Violeta-Tribuna Docente. En Rosario perdió el oficialismo, encabezado por Leonardo Pannozzo, conocido militante del Partido Socialista. El impacto de mayor relevancia fue la escisión que se produjo entre la dirigencia sindical de AMSAFE, que se mantuvo en todo el período, ya que las representaciones políticas a nivel provincial y departamental diferían notablemente en sus posiciones políticas. Así, en el departamento Rosario, el de mayor cantidad de afiliados en la provincia, obtuvo la victoria Gustavo Téres.

En estas organizaciones gremiales se produjo un recambio de autoridades y, consecuentemente, su orientación política también se ha modificado inclinando el fiel de la balanza hacia la izquierda del espectro político. Esto se observó con mayor claridad en el accionar político de AMSAFE Rosario, el que mantuvo durante todo el período diferencias políticas, expresadas en internas gremiales, con la conducción a nivel provincial. En efecto, las instancias de negociación y disputa política que AMSAFE mantuvo con el gobierno provincial estuvieron teñidas, y muchas veces sujetas, de las internas gremiales, sin que por ello se minara la vía institucional del diálogo con el gobierno o su oposición a él cuando esto le resultara productivo (Gindin, Julián, Rodríguez, Gloria y Soul, Julia, 2003).

En cuanto a esta esfera institucional en la que se desempeñaba el gremio, recordemos una de las características del sector de la educación primaria en el espacio provincial, la ausencia de marco normativo para la realización de paritarias⁶, lo que marcó una diferencia sustantiva con el orden nacional. La “provincialización” educativa producida durante los gobiernos de Carlos Menem implicó, visto desde este aspecto, que la paritaria nacional ofició de “referencia” para la negociación en las provincias. Por otro lado, había diferencias en lo concerniente a la política salarial del gobierno nacional con el gobierno provincial. En este sentido, se destaca que una de las primeras disputas políticas en el orden provincial se produjo en torno a la política salarial desatada por los aumentos de \$100 que Néstor Kirchner implementó vía decreto para el sector privado. En este marco, los reclamos políticos de las organizaciones gremiales de los trabajadores de la administración pública provincial estuvieron orientados por los aumentos realizados por el gobierno nacional.

En el caso de AMSAFE las peticiones de mayor relevancia

⁶ La ley de paritarias del sector docente se promulgó en 2008, Ley N°12.958. En 2007 se produce un recambio de signo político en el gobierno provincial, ahora conducido por una coalición encabezada por el socialismo y, el entonces gobernador Hermes Binner del Frente Progresista Cívico y Social, una de las primeras medidas relevantes que toma en el ámbito de la educación primaria fue la de promulgar la ley de paritarias docente.



estuvieron caracterizadas por los aumentos salariales, la derogación del “presentismo” docente y el blanqueo de ítems no remunerativos en lo que concierne a la composición del salario. La cuestión del “presentismo” tenía el mismo peso que el de la recomposición del salario ya que influía fuertemente en el monto total del salario en caso de que el docente se ausentase o no los días laborables. De modo que durante 2004 los principales reclamos gremiales de los docentes primarios fueron relativos a los aumentos salariales y a la eliminación del “presentismo”. Estas peticiones se efectuaron en un contexto político favorable ya que el gobierno nacional había decretado aumentos salariales y Jorge Obeid, en ese momento gobernador, había prometido, durante la campaña electoral, la derogación del “presentismo”.

Así, desde mediados de 2004, AMSAFE realizó jornadas de huelga docente y también amenazas de paro; el 28 de setiembre, el gobierno provincial ofreció al gremio un aumento salarial y derogar el “presentismo”. De modo que AMSAFE, vía votación en las delegaciones de toda la provincia, aceptó la propuesta de las autoridades gubernamentales. Entonces, el gobernador, escoltado por la vicegobernadora, María Eugenia Bielsa, y su gabinete en pleno, informó que a partir de octubre se elevará el básico de los maestros de \$145 a \$210. También confirmó que el sueldo mínimo de bolsillo de un docente nunca estará por debajo de los \$650, y afirmó que con el incentivo llegarán a percibir \$760. Como corolario de los anuncios, Obeid dejó en claro que el presentismo quedó derogado definitivamente (*La Capital*, 28/9/2004).

En la dinámica interna de la organización sindical, desde 2005 las disputas políticas entre la conducción del gobierno a nivel provincial y la de Rosario cobraron mayor notoriedad, por un lado, en la relación con las autoridades del gobierno provincial y, por otro lado, en la radicalización de los reclamos. Desde ese año en adelante, en el panorama de AMSAFE se observó una disputa ininterrumpida entre la conducción provincial con la de Rosario.

A los incrementos salariales y al blanqueo de ítems no remunerativos se exigió el incremento de jubilaciones docentes, con el horizonte de llegar a 82% móvil. Nadie en el gremio estaba en desacuerdo con este último punto. Sin embargo, los dirigentes de AMSAFE Rosario eran los que motorizaban la iniciativa. En los primeros reclamos gremiales se exigía una recomposición salarial de \$250 mientras que

el gobierno provincial ofrecía \$100. Luego de varios meses de tensión política el conflicto culminó con la conciliación obligatoria dictaminada por el gobierno provincial. En este marco, el gobierno realizó su última oferta salarial enfatizando que “un docente que recién se inicia, en febrero cobraba \$650, ahora va a ganar \$765, sin contar el incentivo. Un director que recibía \$1.200, ahora va a cobrar 1.500”, explicó la ministra de Educación Carola Nin. Claro está que este último ofrecimiento no difería mucho del inicial. Sin embargo, se avanzó en el blanqueo de ítems no remunerativos. En este sentido, el gobernador Jorge Obeid declaró que “cuando inauguré el ciclo lectivo el año pasado, en Casilda, prometí incorporar al básico las sumas no bonificables y no remunerativas; bueno, se trata de cumplir con esa promesa” (*La Capital*, 13/2/2005). La consideración sobre esta propuesta fue dispar en la dirigencia gremial. Las autoridades provinciales, José María Tessa, no emitieron opinión sobre la misma, lo que indica cierta afinidad, y lo deja a consideración de los agremiados. Mientras que la conducción de AMSAFE-Rosario lo consideraba “insuficiente”. Esto fue expresado públicamente por Gustavo Téres. Finalmente, se aceptó la oferta gubernamental luego de una reñida votación en las delegaciones de AMSAFE de toda la provincia.

Las tensiones gremiales entre representantes de la conducción provincial y los de la delegación de Rosario se hicieron más frecuentes durante 2006 y 2007. En 2006 en el marco de reclamos de recomposición salarial las autoridades provinciales tenían la postura de iniciar las clases y después continuar con medidas de protesta mientras que la conducción de Rosario impulsaba el “no inicio” del ciclo lectivo. El ciclo lectivo primario comenzó en tiempo y forma. Sin embargo, el conflicto entre el gobierno y el gremio se prolongó durante todo el año, al igual que las internas dentro del gremio. En la segunda mitad de 2006 el gremio reclamó la reapertura de paritarias y luego de varias jornadas de huelga en octubre, el gobierno dictaminó la conciliación obligatoria. La misma fue aceptada por las autoridades provinciales mientras que las de AMSAFE Rosario no lo hicieron. Gracias a la intransigencia AMSAFE logró un aumento de \$300, que el gobierno provincial no tenía planificado otorgar y que alertó a otros gremios de la administración provincial. Por último, insatisfechos con lo logrado a fines de noviembre, AMSAFE Rosario decidió instalar una carpa frente a la delegación provincial del Ministerio de



Educación en Rosario, en la plaza San Martín, peticionando contra la precariedad laboral y contra la realización del censo educativo. A este reclamo no hubo respuesta oficial.

2007 fue un año atravesado por la contienda electoral en el que el gremio aprovechó para radicalizar sus demandas como también para aumentar la tensión de la protesta. En efecto, AMSAFE exigió al gobierno provincial un salario mínimo de \$2.300, el blanqueo de sumas en negro, rechazó la modalidad de los concursos y peticionó la creación de 800 nuevos cargos en el departamento Rosario. Esto era claramente imposible para una administración provincial. Ante la oferta del gobierno, el gremio respondió con un importante cronograma de paros que se prolongaba durante tres semanas, primero de 48 horas y luego de 72 horas. El conflicto se agudizó, a tal punto que el gobernador Jorge Obeid tuvo que respaldar a su ministra, Adriana Cantero, declarando que “ella va a ser mi ministra de Educación hasta el fin de mi mandato” (*La Capital*, 24/2/2007). Ante la avanzada gremial, que incluía una movilización docente el 15 de marzo, el gobierno provincial amenazó con reinstaurar el “presentismo” y dictaminó la conciliación obligatoria. El ministerio de trabajo nacional instó al gremio a aceptar la conciliación obligatoria y AMSAFE la aceptó acordando que el gobierno provincial abone los días de paro realizados, el cobro del incremento retroactivo a febrero sobre la base de un sueldo básico de maestro inicial de \$1.210 y pasar al salario la suma de \$80 (bonificable por antigüedad) que se pagaban por ese concepto.

Conclusiones

Del análisis anterior, es posible destacar que la gravitación política del sindicalismo en la ciudad de Rosario y en el orden provincial no estuvo liderada como en el plano nacional por el moyanismo, cuyos anclajes políticos fueron la CGT-Rosario y las 62 Organizaciones Peronistas. Además, por razones estrictamente políticas, tales como las diferencias entre Carlos Alberto Reutemann y Néstor Kirchner, y la presencia y relevancia de los representantes de gremio público-estatales, hicieron que la proyección política de Hugo Moyano no posea en el plano subnacional santafecino la relevancia que sí tuvo en el plano nacional, o especialmente en otros distritos como el de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con esto, sostuvimos que UPCN encabezó el protagonismo político del sindicalismo, cuyo poder no proviene de su pertenencia a una actividad económica o sector en auge por la recuperación económica, sino de su penetración al interior del peronismo gracias a su tradición identitaria, y de las iniciativas legislativas que logró aprobar. Ciertamente, las leyes del blanqueo salarial y la modificación de la ley que regulaba la negociación paritaria de los empleados públicos provinciales mediante la incorporación del gremio minoritario como ATE constituyeron una piedra de toque.

De esta manera, es posible señalar que en la dimensión de la identidad política, la construcción de UPCN estuvo signada por un liderazgo indiscutido, ausencia de fracciones en disputa dentro de la organización y una orientación político-ideológica anclada en el peronismo santafecino que logró repeler los intentos de reconfiguración de este espacio político ante el avance del kirchnerismo. Asimismo, el accionar de Maguid en la arena legislativa y la puesta en escena de una forma de negociación basada en la cooperación e intercambio estratégico con las autoridades del gobierno provincial permitió que UPCN obtuviera innumerables incentivos selectivos y colectivos. En síntesis, UPCN gravitó políticamente en el escenario provincial y local por la retroalimentación positiva entre su definida construcción identitaria y su papel decisivo en el plano institucional.

En la dimensión de la identidad política, AMSAFE mostró diferencias notables respecto de UPCN. En este sentido, destacamos la complejidad de su construcción identitaria producto de la heterogeneidad de posiciones y facciones políticas en disputa en términos ideológicos y territoriales, una abierta competencia por el liderazgo y una relación de confrontación con el gobierno provincial con mayor énfasis en la ciudad de Rosario. En el plano institucional, este lugar de oposición y resistencia de AMSAFE y la ausencia de una voz propia en la arena legislativa complejizaron la obtención de incentivos selectivos y colectivos en la negociación salarial y condiciones de trabajo que obtuvo gracias a su posición antagónica con la instancia gubernamental. En síntesis, AMSAFE gravitó gracias a la retroalimentación entre la multiplicidad de voces internas y su capacidad para expandir las esferas de conflicto, poniendo en tensión la arena político-institucional, sin prescindir de ella.

Creemos que este estudio sobre la gravitación política



del sindicalismo en Rosario y la provincia de Santa Fe contribuye, matizando a partir de sus singularidades, con los análisis que refieren al orden nacional. Asimismo, permitió observar cómo dos modalidades de interacción entre lo político-institucional y lo identitario –una centrípeta en el caso de UPCN y otra centrífuga en el caso de AMSAFE– describe ajustadamente quiénes lideran el protagonismo político del sindicalismo en la ciudad de Rosario entre 2003-2007.

Bibliografía

- ARMELINO, Martín (2005). Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los noventa. El caso de la CTA. En SCHUSTER, F., NAISHTAT, F., NARDACCHIONE, G. y PEREYRA, S. (comps.). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo. pp. 275-311.
- ARMELINO, Martín (2007). Acción colectiva e historia. Notas para el estudio de la acción sindical de ATE (1976-2005). Trabajo presentado en las Cuartas Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino Germani (UBA), Buenos Aires.
- AUYERO, Javier (2007). *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la argentina contemporánea*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- CRUCELLA, Carlos (2009). La evolución reciente del empleo y los salarios en el Gran Rosario. Una primera aproximación a la evidencia empírica. En *Pampa Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales*, 5(5), pp. 123-152.
- DELFINI, Marcelo, y VENTRICE, Patricia (2016). Qué hay de nuevo en el sindicalismo argentino. En *Trabajo y Sociedad*, 27, pp. 24-41.
- ETCHEMENDY, Sebastián y COLLIER, Ruth (2008). Golpeados pero de pie. Surgimiento sindical y neo-corporativismo segmentado en Argentina (2003-2007). En *Postdata*, 13, pp. 145-193.
- ETCHEMENDY, Sebastián (2004). Represión, exclusión e inclusión: relaciones gobierno-sindicatos y modelos de reforma laboral en economías liberalizadas. En *Revista SAAP*, 2(1), pp. 135-164.
- ETCHEMENDY, Sebastián (2009). Consejo Económico y Social, crisis y concertación en la Argentina. Perspectiva histórica y comparada. En *Revista Umbrales*, 8, pp. 129-140.
- FERNÁNDEZ, Arturo (1993). *Las nuevas relaciones entre sindicatos y partidos políticos*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- FERNÁNDEZ, Arturo (2007). El análisis político frente al problema

- del trabajo y los movimientos sociales. En FERNÁNDEZ, A. (comp.), *Estado y sindicatos en perspectiva latinoamericana*. Buenos Aires: Prometo. pp. 11-33.
- GINDIN, Julián, RODRÍGUEZ, Gloria y SOUL, Julia (2003). Políticas de organización gremial en Rosario. Apuntes sobre experiencias docentes y mercantiles. Ponencia presentada en el Sexto Congreso Nacional sobre Estudios de Trabajo: Los trabajadores y el trabajo en crisis, Buenos Aires.
- GÓMEZ, Marcelo (2009). La acción colectiva sindical y la recomposición de la respuesta política estatal en la Argentina 2003-2007. En NEFFA, J., DE LA GARZA TOLEDO, E. y MUÑIS TERRA, L. (comp.), *Trabajo, empleo y calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales*. Buenos Aires: CLACSO. pp. 161-205.
- IGLESIAS, Esteban y LUCCA, Juan Bautista (2016). Decisiones teórico-metodológicas para el estudio de las interacciones entre partidos políticos y organizaciones sindicales. En IGLESIAS, E., VENTICINQUE, V., LUCCA, J. B. y FERRI, M. N. (comp.), *Partidos políticos y sindicatos en Rosario*. Rosario: UNR Editora. pp. 8-24.
- IGLESIAS, Esteban (2013). Kirchnerismo y sindicalismo peronista. La persistente desarticulación de un vínculo en un contexto de revitalización sindical. En FERNÁNDEZ, A. (comp), *Rasgos y perspectivas de la nueva izquierda en América del Sur. Partidos políticos y movimientos sociales*. Rosario, Argentina: Homo Sapiens. pp. 57-80.
- LEVITSKY, Steven y MAINWARING, Scott (2007). Movimiento obrero organizado y democracia en América Latina. En *Postdata*, 12, pp. 107-138.
- LEVITSKY, Steven (2004). Del sindicalismo al clientelismo: la transformación de los vínculos partido-sindicatos en el peronismo, 1983-1999. En *Desarrollo Económico*, 173 (44), pp. 33-32.
- LUCCA, Juan Bautista (2013). Política y Sindicalismo en Santa Fe (2007-2011). En ROCCHI, G. (comp.), *Saliendo del barrio*. Rosario, Argentina: Laborde. pp. 113- 130.
- MARTUCELLI, Darío y SVAMPA, Maristella (1997). *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*. Buenos Aires: Losada.
- MAYORGA, Fernando (2014). *Incertidumbres tácticas. Ensayos sobre democracia, populismo y ciudadanía*. Bolivia: Plural Editores.
- MENÉNDEZ DIANA, Nicolás (2008). La trama compleja de la acción sindical: los casos de ATE y UPCN. En *Trabajo y sociedad*, 9(10).



- MURILLO, María Victoria (2005). *Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en América latina*. Barcelona, España: Siglo XXI.
- NATALUCCI, Ana (2013). Revitalización sindical y sindicalismo peronista: encrucijadas entre el corporativismo y la política (Argentina, 2003-2012). En *Les Cahiers ALHIM*, 1-10. Recuperado el 2 de mayo de 2017, de <http://alhim.revues.org/4745>.
- PEREYRA, Sebastián, PÉREZ, Germán, y SCHUSTER, Federico (2008). *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después del 2001*. Buenos Aires: Al Margen.
- PÉREZ, Germán y NATALUCCI, Ana (2010). La matriz movimientista de acción colectiva en Argentina: la experiencia del espacio militante kirchnerista. En *América latina hoy: Revista de ciencias sociales*, 54, 97-112.
- PONTONI, Gabriela (2013). Conflictos sobre ruedas: nuevas y viejas estrategias de acción sindical. El caso de Camioneros en la posconvertibilidad. En SENÉN GONZÁLEZ, C. y DEL BONO, A. (comp.), *La revitalización sindical en Argentina: alcances y perspectivas*. Buenos Aires, Argentina: Prometeo. pp. 104-127.
- SENÉN GONZÁLEZ, Cecilia (2011). La revitalización sindical en Argentina durante los Kirchner. En *Revista Trabajo*, 8(5), pp. 39-64.
- SENÉN GONZÁLEZ, Cecilia y DEL BONO, Andrea (2013). *La revitalización sindical en Argentina: alcances y perspectivas*. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.
- SENÉN GONZÁLEZ, Cecilia y MEDWID, Bárbara (2007). Capacidad de presión sindical y conflictividad laboral en la Argentina posdevaluación: el caso del sector aceitero. En FERNÁNDEZ, A. (comp.), *Estado y sindicatos en perspectiva latinoamericana*. Buenos Aires: Prometeo.
- SENÉN GONZÁLEZ, Cecilia, TRAJTEMBERG, David y MEDWID, Bárbara (2009). La expansión de la afiliación sindical: análisis del módulo de relaciones laborales de la EIL. En Ministerio de Trabajo (ed.), *Trabajo, Ocupación y Empleo: Estudios laborales 2008*. Buenos Aires. Recuperado el 10 de marzo de 2010, de http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/toe/toe_08_01.pdf.
- SVAMPA, Maristella (2000). Identidades astilladas. De la patria metalúrgica al heavy metal. En SVAMPA, M. (comp.), *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*. Buenos Aires: Biblos. pp. 121-155.
- SVAMPA, Maristella (2005). *La sociedad excluyente: la Argentina*

- bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.
- SVAMPA, Maristella (2008). Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008). En *Osal*, IX(24), pp. 17-49.
- SVAMPA, Maristella (2016). *Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo*. Buenos Aires: Edhasa.
- TORRE, Juan Carlos (2004). *El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- TORRE, Juan Carlos (2012). *Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- VILLARROEL, Amalia, GARCÍA VOLONTÉ, Juan Pablo, ECHAÛE, Oscar y VÁZQUEZ, Norberto (2011). Estado, ATE y UPCN: La Negociación Colectiva en la mirada de sus protagonistas. Trabajo presentado en las IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Entrevistas

- LÓPEZ, Rubén (2010) Entrevista realizada en la ciudad de Rosario. Argentina.
- LAYÚS, Matías (2012). Entrevista realizada en la ciudad de Rosario. Argentina.
- FERNÁNDEZ, Anahí (2014). Entrevista realizada en la ciudad de Rosario. Argentina
- FERRAZA, Néstor (2012). Entrevista realizada en la ciudad de Rosario. Argentina
- PANOZZO, Leonardo (2014). Entrevista realizada en la ciudad de Santa Fe. Argentina
- TÉRES, Gustavo (2014). Entrevista realizada en la ciudad de Rosario. Argentina

Fuentes Hemerográficas

- La Capital*. Disponible en <http://www.lacapital.com.ar/>
Período consultado: del 01/01/2003 al 01/01/2008.

Fecha de recepción: 6 de junio de 2017
Fecha de aceptación: 13 de julio de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



Jorge Rubén Afarian

Universidad de Buenos Aires. Argentina

jorge.afarian@gmail.com

EL OFICIO DE LA HISTORIA O “LA HISTORIA DEL OFICIO”

La vida en el archivo. Goces, tedios y desvíos en el oficio de la historia, de Lila Caimari. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2017. 144 p.



Cuando sus resultados por fin ven la luz y se multiplican las ocasiones de discutir sus implicancias, la atención del investigador ya ha tomado otro rumbo.

Lila Caimari (2017)

Una obra es susceptible de ser reseñada no solo por su importancia teórica y/o práctica, sino también por razones que escapan a lo que efectivamente se encuentra volcado en el papel. Muchas veces la respuesta es tan simple que puede parecer insuficiente: *porque es inspiradora*.

Es lo que ocurre con *La vida en el archivo* (2017) de Lila Caimari. Concretamente, la obra que comentamos es una guía técnica (pero la mayoría de las veces ética y “espiritual”)

sobre la relación entre el profesional historiador y el archivo, pero no *solo* para los que ejercen dicho oficio, puesto que las problemáticas, pensamientos y conclusiones a las que arriba son útiles para cualquier situación en la que se encuentre un miembro de la comunidad investigadora.

Pensados como “variaciones entre la reflexión ensayística, la narrativa más o menos analítica, la bitácora de trabajo, la crónica y el diario semificcionalizados” (Caimari, 2017:18),

los escritos que componen la obra se dividen en las siguientes secciones: Introducción: Materias primas y experiencia de la historia; 1. Entre el panóptico y el pantano; 2. Ver y no ver; 3. Escenas del archivo policial; 4. Archivos del crimen y giro digital; 5. Fugas; 6. Beaubourg y Sciences Po; 7. Partículas; 8. Todos los nombres, y; 9. Diario de la hemeroteca.

Bajo el subtítulo “Avatares de una historia de la prisión argentina” del primer acápite, la autora relata la experiencia, luego de la finalización de la tesis de doctorado, sobre su incursión en la historia del castigo en la Argentina¹. Dicha aventura comenzó con una mera curiosidad en la Biblioteca Pública de Nueva York en relación con un *Boletín del Patronato de Recluidas y Liberadas* de la Ciudad de Buenos Aires, el que relataba la experiencia de un grupo de abogadas porteñas que desde los años 30 había intentado socavar el poder de la Iglesia católica en la gestión de las cárceles femeninas (la llamada “cárcel eclesiástica”, que buscaba el saneamiento moral de las mujeres delincuentes).

Posteriormente, al adentrarse en los detalles del régimen penitenciario, señala que aquél se relacionaba íntimamente con otras instituciones clave de la sociedad como la educación, la salud, la infancia y el matrimonio. A partir de ello, y con el objeto de presentar la evidente oposición con la penitenciaría masculina, su investigación, que comenzó como un desvío de la tesis principal, como un argumento tangencial e instrumental, termina por convertirse en el centro de la atención. La autora se encarga de aclarar que “fue ocurriendo” (2017:26), sin que mediara una decisión determinante al respecto.

Relatando su estrecha “relación” con la línea de investigación foucaultiana y sus concepciones sobre la tortura, el castigo y la prisión panóptica, Caimari expresa que un nuevo abordaje de las teorías de Foucault en esta nueva etapa de la vida académica implicaba una reformulación, la que se centraba en las técnicas de dominación en el interior de la institución carcelaria, relativas al poder de la mirada en los establecimientos penitenciarios, la medicalización de los penados y la relación entre ciencia y castigo. Es allí donde entra la vida en el archivo, las bibliotecas y hemerotecas, además de la consulta de diversas revistas especializadas sobre medicina, criminalística y métodos punitivos modernos.

Luego, a partir de una especial atención al Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional, fundada a

¹ Experiencia que derivó en una de sus obras más celebradas: *Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina moderna, 1880-1955* (2004). Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.



principios del siglo XX por un grupo de médicos psiquiatras de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó la etapa de indagación de sus informes y diagnósticos respecto del delincuente masculino (mediciones antropométricas, revisiones y entrevistas individuales), intentando captar lo más fielmente posible el “punto de vista de los penados” (2017:37).

La autora advierte que, al ser la institución carcelaria un objeto “por definición” cerrado al escrutinio público, es decir, con el propósito de ser aislada del exterior, era doblemente difícil el acceso a los documentos y archivos necesarios para la investigación. Sin perjuicio de ello, y luego de reflexionar sobre aquella cuestión, Caimari previene acerca de los excesivos matices de los archivos, y que el bagaje conceptual y teórico no debe verse desdibujado por tales razones.

Por último, la autora finaliza el primer acápite con el paso del control social a través del sistema penitenciario al castigo propiamente dicho, todo ello a través de la “tecnología del poder”, la ciencia del crimen y los límites de ésta en el Estado y en la cárcel.

Como podrá apreciar quien lea esta obra, los relatos de tinte personal y conocedor de los vaivenes del oficio historiográfico dan cuenta de los diferentes estadios de la actividad, y cómo se arriba a un tema específico de investigación

En el tercer acápite titulado “Escenas del archivo policial”, la autora nos relata su experiencia en el marco del Centro de Altos Estudios Policiales Francisco Romay. Plagado de simbolismos, introspecciones y relatado como quien escribe una novela, Caimari nos sumerge brillantemente en aquel ambiente, tanto personal y psicológico como circunstancial de la experiencia en el archivo, con sus hallazgos y frustraciones ante la imposibilidad de encontrar lo que se busca.

Posteriormente, en el cuarto acápite que lleva por nombre “Archivos del crimen y giro digital”, la escritora reflexiona sobre las novedosas herramientas electrónicas de acceso a la información, que hasta hace poco era inaccesible, tanto por la inexistencia de plataformas tecnológicas adecuadas, como por la reticencia de ciertas instituciones recipiendarias de dichos documentos en ponerlos a disposición. Aquí la autora opone la imagen del *investigador-detective*, inmerso en el archivo, en el detalle, en el “oficio”, a un *investigador abrumado* por el exceso de información disponible, a veces inabarcable (2017:72).

A su vez, la expansión documental no debe distraer al

científico de la imprescindible necesidad de integración plena de los materiales recolectados para así aprovecharlos acabadamente. Citando a Roy Rosenzweig (2003), asevera que “el quehacer de la historia transita el paso de un régimen de escasez a uno de abundancia” pero que, al mismo tiempo, dichos extremos conviven y se resignifican en una nueva configuración (2017:74).

Respecto de ello, numerosos grupos de investigación e instituciones (tanto privadas como estatales) han puesto a disposición los materiales obtenidos a raíz de sus indagaciones, lo que contribuye a la socialización de la información, suprimiéndose la visión individualista de la profesión historiográfica y de la correlativa noción del archivo propio, celosamente guardado bajo siete llaves.

Independientemente de la injerencia y la facilitación en el acceso a materias primas por parte de la revolución tecnológica, la autora no soslaya la importante cuestión de la producción, preservación y acceso a los documentos. Por otro lado, la figura del *investigador privilegiado* que hace posible lo imposible en el archivo ha sido reemplazada por la imagen de uno mucho más “complejo”, es decir, con mayor documentación disponible y con teorías e hipótesis más específicas (2017:79).

Reconociendo la importancia de las nuevas herramientas tecnológicas en el quehacer de la investigación, Caimari también observa que la “extracción” del historiador de la “situación de archivo”, es decir, del vínculo personal y material con el pasado mismo, ha modificado sensiblemente el oficio del historiador (2017:83).

En los acápites sexto y séptimo, la escritora relata su experiencia de investigación en el exterior, en los archivos del Instituto de Estudios Políticos de París (llamado Sciences Po), con ciertas reminiscencias y alusiones a su actividad en Buenos Aires, todo ello con el hilo conductor del nuevo marco de estudio: el papel de la prensa y de la circulación de información del exterior por parte de los medios de comunicación argentinos de finales del siglo XIX.

Finalmente, el acápite noveno ofrece un exhaustivo “Diario de la hemeroteca”, con relatos, sensaciones, experiencias y perspectivas tanto en lo atinente al objeto de estudio de aquél momento como al futuro del oficio historiográfico y su relación con las nuevas tecnologías.



Consideraciones finales

Las contribuciones de la obra que comentamos son claras: además de constituir una guía útil de investigación, los relatos en primera persona de las experiencias y sensaciones de la autora nos enseñan numerosas cuestiones que no se aprenden en los libros de metodología.

Es decir, la tarea investigativa (sea de historia, antropología o, en nuestro caso particular, el derecho) está plagada de problemáticas metodológicas que son aún más importantes que el objeto mismo de estudio. Particularmente, la tarea de archivo es un pilar fundamental de la investigación, y la relación tanto con los “facilitadores” de ese medio, como con el medio mismo es una tarea ardua y constante².

Caimari nos recuerda la estrecha relación que otrora poseía la historia con el archivo, la que se ve modificada por el avance de las nuevas tecnologías en este campo, que si bien son positivas en muchos casos pueden dispersar la atención que debería merecer el cuidado de las colecciones archivísticas (en particular en la historia, que muchas veces debe recurrir a documentos muy antiguos).

La mayoría de las veces, la interesada en el mantenimiento de las documentaciones es la comunidad científica, y una de las preguntas que nos sugiere la autora es, si el oficio de la historia se “desapega” del archivo mediante el recurso a las bases de datos informáticas, ¿quién velará por la integridad de ellos? La respuesta, para quien se encuentra inmerso en dicha problemática es obvia, pero muy difícil siquiera sugerirla.

² La autora advierte: “Venir al archivo es como ir de pesca”, puesto que muchas veces las expectativas (tanto positivas como negativas), difieren de la realidad (2017:124).

Fecha de recepción: 25 de junio de 2017
Fecha de aceptación: 8 de agosto de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



Elsa Lázara Hernández Sabourín

ehernandezs@udg.co.cu

Herlinda Remón Castillo

hremonc@udg.co.cu

Jesús Fernando Garcés Fonseca

jfgarcesf@udg.co.cu

Fidel Alejandro González Peña

fgonzalezp@udg.co.cu

Universidad de Granma. Cuba

EL TRABAJO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD RURAL DE ALEGRÍA DE PÍO, PROVINCIA DE GRANMA, CUBA

Resumen: *El insuficiente conocimiento de la biodiversidad y la necesidad de su conservación fue la principal causa para desarrollar el trabajo. Se realizó un diagnóstico y caracterización del área, encuestas y entrevistas a los pobladores (alumnos, maestros, médico, guardabosque y líderes comunitarios), observaciones de las condiciones higiénico-sanitarias y estado de conservación de la biodiversidad en la localidad. Las dificultades se relacionan con el insuficiente conocimiento de la flora y fauna local, la deforestación, caza indiscriminada y desconocimiento de los documentos normativos que rigen la política y legislación ambiental. Se diseñaron actividades educativas para contribuir a la formación de una cultura ambiental.*

Palabras clave: *educación ambiental, comunidad, biodiversidad*

Environmental Education Labour at the Rural Community of Algeria de Pío in Granma Province, Cuba

Abstract: *The insufficient knowledge about biodiversity and the necessity of its conservation is the main cause of this research work. A diagnosis and a characterization of the area were carried out, as well as some surveys and interviews (to the students, teachers, doctors, forest-keepers and leaders from the community). We carried out a diagnosis and characterization of the area, as well as some surveys and interviews with students, teachers, doctors, forest-keepers and community leaders. Furthermore, we made some observations on the hygienic-sanitary conditions and the state of conservation of the local biodiversity. The difficulties are closely related to the insufficient knowledge regarding the local flora and fauna, deforestation, wild hunting, and the lack of knowledge of the normative documents governing policy and environmental legislation. Many educative activities were carried out to contribute to the formation of an environmental culture.*

Keywords: *environmental education, community, biodiversity*



Introducción

Como se señala, en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental cubana para el quinquenio 2010-2015 (2007: 21) entre los temas priorizados que las diferentes instituciones científicas deben centrar su atención se encuentra la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, pues el incremento acelerado de la pérdida de esta diversidad biológica ha sido reconocida como uno de los principales problemas ambientales de Cuba y del mundo. Es necesario que para incursionar en este tema se requiera de la activa participación de los comunitarios que conviven con ella, entendiéndose que la comunidad es

...un escenario importante para el trabajo social ya que en ella es donde se dinamizan los procesos de participación para reafirmar los valores, la identidad con una incidencia plurifactorial, para transformar el estado actual en el deseado (Fernández, Argelia, 2003: 2).

En tal sentido la escuela, como institución educativa insertada en ella, juega un importante rol como centro trasmisor de conocimientos y valores conservacionistas.

El insuficiente conocimiento de la biodiversidad, el acelerado deterioro de los elementos naturales-socio-económicos-culturales y su impacto sobre los procesos de desarrollo y calidad de vida observados en la comunidad de Alegría de Pío constituyó la principal causa que motivó a los investigadores a reforzar el trabajo de educación ambiental, partiendo de la necesidad que tiene esta comunidad, insertada en un área natural, de un manejo adecuado por los valores naturales y por haber sido escenario de relevantes acontecimientos de nuestra vida histórico cultural.

La comunidad se encuentra enclavada en el extremo noroeste del Parque Nacional Desembarco del Granma, que debe su nombre al yate “Granma”, donde desembarcaron los expedicionarios el 2 de diciembre de 1956 para dar inicio a la Revolución cubana. Este parque en 1999 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad condicionado por elementos de gran significación, entre los que se destacan el desarrollo de accidentes del relieve (escarpes, dolinas, sistemas cavernarios, cuevas) de gran relevancia por su magnitud, destacándose el sistema de terrazas marinas (20 niveles), que alcanza su altura máxima en la zona de Alegría de Pío, el sendero interpretativo Cueva del Fustete, caverna que se encuentra ubicada al sur de Alegría de Pío en el cuarto



nivel de terrazas marinas, la flora y la fauna de este territorio revisten gran importancia nacional por su alto endemismo al ubicarse en llanuras cársicas aterrazadas sobre diente de perro con clima seco, condiciones extremas estas que han permitido una evolución diferenciada y la especiación de estas especies, la presencia de arrecifes coralinos, de cuevas y el registro de sitios arqueológicos que evidencian el desarrollo de culturas aborígenes dan fe de que haya sido el primer sitio en Cuba que recibe esta alta distinción.

Los antecedentes de estudio en el parque comenzaron desde el siglo XVIII, realizando expediciones para estudios y colectas, se destacan eminentes botánicos, zoólogos y naturalistas como Juan Cristóbal Gundlach (zoólogo), los botánicos Marie Victorin y Julián Acuña Galé, entre otros, en la década de los 90, profesores y estudiantes de las licenciaturas de Biología y Geografía de la Universidad de Granma han investigado la flora y la fauna desarrollando proyectos de Educación Ambiental con la participación de las escuelas en otras comunidades insertadas en el parque como Cabo Cruz, Las Coloradas y Farallones.

La novedad científica de la investigación radica en que, además de realizar aportes al conocimiento de la biodiversidad local, por medio de los inventarios realizados, tiene un impacto social pues los resultados del diagnóstico propiciaron desarrollar acciones educativo-ambientales para lograr una mejor percepción y transformación del entorno y fortalecer las relaciones armónicas con la biodiversidad sin detener el desarrollo socio-económico de la comunidad. El objetivo de esta investigación es contribuir al desarrollo de una cultura ambiental en la comunidad Alegría de Pío en función de la conservación de biodiversidad.

Metodología empleada

La investigación se desarrolló en un período comprendido entre 2014 y 2016, aprovechando el período de clases y el tiempo necesario para la implementación y evaluación de las actividades educativas planificadas. Para una mejor organización se estructuró en dos momentos. El primero correspondió al diagnóstico, el que consistió en la caracterización físico-geográfica, con información contenida en el Nuevo Atlas Nacional de Cuba (1989), Borhidi (1996) y el Libro de manejo del Parque Nacional Desembarco del

“Granma” (2002), caracterización de la comunidad (historia, desarrollo social, población) (ver Tabla N°1), caracterización de la biodiversidad y aplicación de instrumentos (encuesta, entrevistas y guía de observación).

La encuesta se aplicó a los alumnos de la escuela primaria Eugenio Pérez Quezada, único centro educacional de la comunidad, donde se imparte la educación primaria hasta el sexto grado, tiene una matrícula de 25 estudiantes, se tomó como muestra 15 alumnos que representan el 60%, 6 son del primer ciclo (3° y 4° grado) y 9 del segundo ciclo (5° y 6° grado) (ver Tabla N°3), con el objetivo de constatar el nivel de conocimientos que poseen sobre la flora y fauna local, principales causas que la afectan y obtener información acerca de las principales motivaciones referidas al sentimiento hacia la naturaleza (Anexo I).

Las entrevistas se efectuaron a 68 pobladores, comprendidos entre 16 y más de 64 años de ambos sexos (trabajadores, amas de casas, guardabosque, médico de la familia, maestros, dirigentes políticos y administrativos) (ver Tabla N°4).

La selección fue aleatoria buscando representatividad en todas las esferas sociales y laborales de la localidad, lo cual posibilitó un diagnóstico representativo acerca del conocimiento de la biodiversidad y principales causas que la afectan y también a los comunitarios (Anexo 2). La guía de observación (Anexo 3) permitió a los investigadores constatar las condiciones higiénicas-ambientales de la comunidad mediante las observaciones en las diferentes visitas realizadas. Para la determinación de las especies de la flora y fauna se realizaron inventarios y descripciones en la formación vegetal más extensa y mejor representada en el área, el bosque del Castillo, la cual representa una considerada extensión boscosa que reguarda parte importante de la flora y la fauna local, los especímenes se determinaron con el auxilio de la literatura taxonómica tales como los tomos de la *Flora de la República de Cuba* de los hermanos León y Alaín (1957) y por comparación con ejemplares depositados en los herbarios del Instituto de Ecología y Sistemática de La Habana, conocido por las siglas (HAC), herbario del Jardín Botánico Nacional (HJBN) y herbario y colecciones zoológicas de la Universidad de Granma. El segundo momento de la investigación se dedicó a la tabulación de los resultados arrojados en los instrumentos aplicados (encuesta, entrevistas y guía de observación) y se



diseñaron las diferentes actividades educativo-ambientales encaminadas a resolver las deficiencias detectadas, tomando la escuela como centro irradiador, para lo cual se utilizó el método de participación comunitaria, siguiendo la metodología de los trabajos realizados por las autoras Cecilia Díaz (1995) y Argelia Fernández (2003).

Caracterización físico-geográfica

Alegría de Píon es una zona rural del municipio de Niquero en la Provincia de Granma, Cuba, situada a 28 kilómetros de la cabecera municipal, tiene una extensión de 181 hectáreas, limita al norte con la zona de Juba del Agua Arriba y Las Palomas, al este con el río Calabazas y la loma de Ojo del Toro, al sur con el área de Los Muertos y al oeste con la zona de Agua Fina y Ojo de Agua. Esta comunidad se encuentra situada dentro del Parque Nacional Desembarco del Granma uno de las zonas protegidas mejores conservadas del Caribe, con una rica flora y fauna, además de accidentes naturales únicos y de gran belleza que convierten a la zona en paradigma de la geografía cubana. Desde el punto de vista geológico esta área se encuentra en el extremo occidental del Megabloque Hórstico de la Sierra Maestra, está constituida por calizas, destacándose dos formaciones geológicas: Cabo Cruz y Manzanillo. El relieve se corresponde con una superficie ondulada abrasivo-cársico-denudativa, son frecuentes entre lomas y montañas bajas la presencia de arroyos o corrientes pequeñas intermitentes por el carácter cársico del relieve. Las precipitaciones alcanzan los valores más elevados entre los 1.200 y 1.400mm como promedio anual. Los suelos son esqueléticos, asociados al carso desnudo o parcialmente desnudo, también hay presencia de suelos húmedos calcimórficos y pardo fersialíticos (*Nuevo Atlas Nacional de Cuba*, 1989).

Las peculiaridades geólogo-geomorfológicas, edáficas y climáticas descritas anteriormente para la zona condicionan la existencia de varias formaciones vegetales costeras. Según los criterios de Capote y Berazaín (1984: 3-12), éstas se clasifican en “manglar, matorral xeromorfo costero y subcostero, vegetación de costa rocosa, bosque semideciduo micrófilo”, esta vegetación alberga valiosas especies de animales tales como: dos especies de moluscos terrestres, *Polymita venusta* especie endémica y *Liguus vitattus*, endémico

que solo se encuentra en pequeñas porciones del territorio del parque, la lagartija de hojarasca (*Crycosaura tipica*), género endémico monotípico cubano y en peligro de extinción, el rabijunco (*Phaeton lepturus*), ave marina que solo nidifica en Cuba, la paloma perdiz (*Starnoenas cyanocephala*), endémico cubano en peligro de extinción, el tocororo (*Priotelus temnurus*), considerada el ave nacional, el zunzún (*Chlorostilbon ricordii*) de color esmeralda y ave de pequeño tamaño, así como la cotorra (*Amazona leucocephala*), en la flora destacan especies como *Amyris polimorpha*, *Cordia dumosa*, *Catalpa brevipes*, *rhytidophyllum minus*), la orquídea enana *tetramicra malpighiarum* y el aguacate cimarrón, especie endémica de Cuba y una de las cactáceas de mayor tamaño (9 metros de altura y la longitud de su circunferencia es de 2,65 metros), *Dendrocereus nudiflorus*.

Caracterización de la comunidad

La comunidad la integran 207 personas, entre los que se encuentran niños, jóvenes, y un predominio de adultos entre los 16 a más de 64 años, las mujeres preferentemente son amas de casa y los hombres se dedican al trabajo agrícola, la producción de carbón vegetal, hay también un porcentaje elevado de ancianos jubilados que siempre han vivido ahí y resultó muy importante para los investigadores los criterios expuestos por ellos durante la entrevista que se les realizó, la composición por edades y sexo se puede observar en la Tabla N°1.

Tabla N°1. Composición de los pobladores por edades y sexo

Edades	Sexo		Cantidades
	Masculinos	Femeninos	
0 - 2	7	5	12
3 - 6	13	14	27
7 - 15	18	13	31
16 - +64	72	65	137
Totales	114	93	207

Fuente: Elaboración propia.

El desarrollo social de los comunitarios se manifiesta de la siguiente forma: el batey de Alegría de Pío, que da nombre a toda la zona que lo rodea, está situado casi en el centro de una extensa plantación cañera, siendo éste un cultivo importante



aunque también el elemento económico lo conforma sus producciones en el cultivo de leguminosas (frijoles), tubérculos, viandas y cultivos varios, se ha incrementado la producción de carbón vegetal, siendo la misma un rubro importante para el ingreso de la economía familiar y local. La ganadería presenta poco desarrollo, la que más abunda es la ganadería caprina y ovina, además de la porcina que se utiliza fundamentalmente para consumo personal por parte de los pobladores, la pesca y la caza también se practica.

La salud es atendida en el Consultorio del Médico de la Familia, integrado por un médico y una enfermera y se prestan todos los servicios de atención primaria de la Salud. Con respecto a la Educación, hay una escuela primaria que recibe el nombre de Eugenio Pérez Quezada en honor al mártir caído en las luchas revolucionarias, donde se imparte la educación primaria hasta el sexto grado. Las personas de Alegría de Pío se caracterizan por ser joviales, divertidas, jaraneras y entre las expresiones culturales se preservan elementos de las tonadas y el punto guajiro, además de los rasgos del arte rústico campesino en vasijas y en construcciones de casas, los movimientos de artistas aficionados en la comunidad son llevados a través de programas implementados entre la Casa de la Cultura Municipal y la coordinadora cultural, existe un grupo musical que conjuga la música tradicional cubana con ritmos locales y extranjeros, además es importante el vínculo entre la escuela y la promotora cultural para la preservación de la identidad y las tradiciones. Hay una sede social que se utiliza para actividades culturales recreativas y deportivas, estas últimas, se caracterizan principalmente por el dominó como juego tradicional de mesa, el cual forma parte de sus costumbres y las corridas de caballo unido a la música del órgano oriental. La religión que se profesa el espiritismo como variante del cristianismo católico.

Caracterización de la biodiversidad

Los inventarios florísticos y faunísticos reflejaron los siguientes resultados:

Composición florística

125 especies, 100 géneros y 60 familias botánicas, de ellas 20 son endémicas de Cuba (16%) y cinco endémicos locales (Tabla N°2).



Tabla N°2. Relación de especies endémicas de la localidad

Especies endémicas	Nombre vulgar	Estado actual
Amyris polymorfa		Endémico Local (Niquero)
Copernicia humicola	Palma	Endémico Local (Niquero), en peligro crítico
Coccothrinax saxicola	Guano de costa	Endémico Local, en el Parque Nacional Desembarco del Granma
Coccothrinax victorini	Guano de costa	Endémico Local, en el Parque Nacional Desembarco del Granma
Leptocereus sylvestris	Cacto	Endémico Local, en el Parque Nacional Desembarco del Granma

Fuente: Elaboración propia.

Composición faunística

118 especies y subespecies de animales, 12 especies de anfibios, 36 especies de reptiles, 7 especies de mamíferos, 20 de moluscos (caracoles terrestres), 43 insectos (37 mariposas y 6 mosquitos). La fauna endémica está representada por un total de 78 especies, lo que representa 66% de endemismo, de ellas 6 son exclusivas de la localidad, el chipoyo ceniciento (*Chamaleolis agueroi*), la salamanquita (*Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal*), lagartijas como (*Anolis guafe* y *Anolis confusus*), bayoya (*Leiocephalus macropus phylax*) y el perrito de costa (*Leiocephalus carinatus*).

Hay especies que manifiestan algún grado de amenaza, entre ellas se encuentran: la iguana (*Cyclura nubila*), la cotorra (*Amazona leucocephala*), el majá de Santa María (*Epicrates angulifer*), el sijú platanero (*Glaucidium sijú*).

La formación vegetal mejor representada en la comunidad y donde se realizaron los inventarios florísticos fue en el bosque semidesiduo micrófilo (Capote y Berazaín, 1984), conocido como monte o bosque del Castillo.

Una parte del área está constituida por vegetación secundaria producto de la degradación que sufrió la vegetación natural, observándose diferentes grados de modificación antrópica y los más significativos son: tala selectiva de especies de valor forestal, tala excesiva de árboles como leña y para la elaboración del carbón, alteración de ecosistemas por la construcción de caminos y trochas, pesca como actividad económica fundamental, caza furtiva.



Resultados de los instrumentos aplicados (encuesta y entrevistas)

La siguiente tabla muestra la composición del claustro de profesores y estudiantes de la escuela primaria Eugenio Pérez Quezada, así como la muestra seleccionada.

Tabla N°3. Composición del claustro de profesores y estudiantes

Población	Muestra	Primer ciclo (3ro-4to)	Segundo ciclo (5to-6to)
25 estudiantes	15 (60%)	6	9
7 profesores	7 (100%)	4	3

Fuente: Elaboración propia.

La encuesta aplicada a los 15 estudiantes arrojó los siguientes resultados:

El 100% marca el inciso a) de la pregunta N°1, “Me gusta mucho”, en la pregunta N°2 sobre las actividades que desarrollan en la escuela para cuidar las plantas y los animales, 6 niños de 5° y 6° grado respondieron que entre las actividades desarrolladas se encuentra el círculo de interés Amiguitos del Parque, que se presenta cuando llegan visitas a la comunidad y la atención la reciben a través de la promotora cultural, 3 niños de 3° y 4° grado y 4 de 5° y 6° grado se refirieron a la realización de comedias, poesías y coros hablados relacionados con la flora y fauna local en matutinos y otras actividades extraescolares, la atención al jardín de la escuela, y 13,3% (2 niños) no respondieron la pregunta. La pregunta N°3 permitió conocer que 100% plantea que existen algunas personas que se dedican a maltratar animales y plantas, sobre todo niños en la escuela que cazan con honda lagartijas, pajaritos y palomas y algunos pobladores que talan árboles para utilizarlos como leña y elaboración del carbón y de ellos sólo 3 niños plantearon requerir a los que utilizan hondas. En la pregunta N°4 se evidenció que 100% de los encuestados mencionó animales y plantas de la comunidad y sus alrededores, pero las respuestas estuvieron referidas a plantas cultivadas y ornamentales como helechos, rosas, mango, plátano y en el caso de los animales fue curioso la inclinación totalitaria por las mariposas, lagartijas y pajaritos,

solo un alumno hizo referencia a aves como el tocororo y la Carta Cuba y ninguno se refirió a animales acuáticos, cuando se les preguntó sobre las actividades desarrolladas en la escuela, 100% de los alumnos planteó que los maestros sí les hablan en sus clases de plantas y animales, 10 alumnos refirieron que les mencionan la palma real, la mariposa y el tocororo, lo cual evidencia el marcado énfasis en los elementos de la flora y la fauna vinculados a los atributos nacionales, expresan además que las maestras insisten en la necesidad de que hay que cuidarlos y quererlos por la importancia que tienen para la alimentación, medicina y la industria.

Como se observa, estos resultados demuestran que priman las actividades extradocentes y extraescolares y cómo la mayoría de los niños hacen énfasis en las actividades culturales. Ningún niño hizo referencia a las excursiones como vía importante para el conocimiento de la biodiversidad, no se les habla de las plantas y animales endémicos o que tienen algún grado de amenaza y solo reseñan la importancia desde la visión utilitaria y no hacen referencia a la biológica y/o conservacionista.

Para las entrevistas se tomaron muestra teniendo en cuenta los diferentes sectores de la población y de edades, los menores ya que fueron encuestados en la escuela.

Tabla N° 4. Composición poblacional y muestra tomada abarcando diferentes sectores

Pobladores (16 - +64 años)	Muestra	Trabajadores	Amas de casa	Médico	Dirigentes políticos, de masas y administrativos	Jubilados
137	68 (49,6%)	45	8	1	10	4

Fuente: Elaboración propia.

El 100 % de los entrevistados responde afirmativamente que conocen plantas y animales, pero 88,2 % se refiere a plantas cultivadas y ornamentales y a los animales domésticos, solo 11,8% señala entre los animales del bosque la paloma torcaza, tocororo, cotorra, el catey, la lagartija de hojarasca y refieren plantas como la orquídea enana y la cuaba, estas últimas respuestas fueron emitidas por trabajadores del Parque Nacional, guardabosque y algunos directivos.

Tres personas (4,41%) manifiestan haber participado en actividades convocadas por la escuela, Delegado del Poder Popular, la promotora cultural y el guardabosque, los cuales expresan estar centradas en actividades culturales que



realizan los alumnos, en tal sentido puede inferirse que el trabajo de educación ambiental es insuficiente y que la escuela no se ha convertido en el centro promotor encaminado a la divulgación y preparación de los integrantes comunitarios; debe destacarse que los restantes miembros de la muestra, que constituyen el 95,6% de los entrevistados, no han participado en ninguna de las actividades desarrolladas por la escuela y solo uno (guardabosque) ha recibido capacitación por parte de la dirección de la empresa de flora y fauna del parque.

Las principales problemáticas que refieren los pobladores se concretaron en:

- 1- La sequía y falta de agua para regar las plantas (58,8%).
- 2- La tala excesiva de árboles para utilizarlas fundamentalmente como leña y carbón (deforestación en el bosque del Castillo) (95,6%).
- 3- La caza, principalmente de aves, para la satisfacción de las necesidades de la comunidad (90,1%).
- 4- Los incendios que se originan en la zona principalmente por la sequía (60,4%).

La percepción sobre las problemáticas ambientales está sobre todo en situaciones que afectan directamente a los pobladores, independientemente de incidir en ella.

Las respuestas más significativas en torno a cómo contribuyen a la protección de la naturaleza fueron:

- 1- Regaño oportuno cuando maltratan animales o plantas (17,2%).
- 2- No cortar los árboles que consideran importantes para la zona (95,6%).
- 3- Sembrar plantas ornamentales en sus casas (24,6%).
- 4- No tener animales que viven en la zona enjaulados (18,5%).

Es significativo que no hagan referencia a las charlas familiares o talleres comunitarios en función de llevar el mensaje del cuidado de la naturaleza.

Resultados de la observación

La observación (Anexo 3) se desarrolló realizando recorridos por la comunidad, se visitaron 20 núcleos familiares, la bodega, el círculo social, el médico de la familia, la escuela y sus alrededores pudiéndose constatar:

El frente de la escuela y más de 50% de las casas tienen jardines con variadas plantas ornamentales (cactus y otras

suculentas, mantos y helechos), los moradores desconocen la denominación científica de las plantas y si son endémicas o no.

El 40% de las familias visitadas se dedican a la cría de palomas mensajeras pero no tienen conocimientos profundos de su cuidado y destacan reiteradamente que el guardabosque del parque se dedica a la crianza de cotorras y otras aves de la zona.

En el momento de la visita no se pudo constatar la realización de actividades o acciones encaminadas a proteger y conservar la naturaleza, tampoco se observaron focos o fuentes contaminantes que afecten a la flora y fauna.

Se observó un vivero de medianas condiciones para la repoblación forestal.

Se evidenció la tala de muchos árboles en el bosque del Castillo para el uso de leña y elaboración de carbón.

Como elemento conclusivo del resultado del diagnóstico y a modo de regularidades más significativas deben señalarse el escaso conocimiento de la flora y fauna características del área y el evidente desconocimiento de la flora y fauna endémica, además de la deforestación, lacaza y cautiverio de especies.

No se aprovechan las actividades docentes y extraescolares para lograr una adecuada Educación Ambiental en la comunidad y no siempre se vincula el contenido de la clase para el conocimiento de la flora y fauna local, las especies que se abordan en su mayoría están relacionadas con los atributos nacionales.

La percepción de las problemáticas ambientales no está centrada en la naturaleza, sino en los problemas que más afectan a la vida de los pobladores y sus actividades cotidianas (escasez del agua, transporte y productos alimenticios que tienen que adquirir en zonas distantes a la comunidad).

Después de analizados los resultados del diagnóstico se diseñaron actividades educativas ambientales, teniendo como centro a la escuela y las mismas son:

1.- Proyección de videos.

Se proyectaron videos en la escuela, con la participación de alumnos, profesores y comunitarios de todas las edades referidos a las áreas de interés para el parque que incluye ecosistemas y complejos territoriales naturales que albergan poblaciones de especies endémicas, amenazadas, de importancia científico nacional y de interés para la conservación de los recursos genéticos que están enclavados



en las cercanías del poblado de Alegría de Pío. Como cierre de la actividad, se comentó acerca de los valores naturales del área, se hizo un llamado a la protección de la flora y fauna para evitar la tala y caza indiscriminada.

2.- Charlas educativas.

Se desarrollaron dos charlas educativas en la comunidad teniendo como escenario la escuela, una de ellas referida a la flora y fauna local, su cuidado y protección, con la participación del maestro de ciencias naturales y los alumnos, la que sirvió para despertar el interés por el cuidado y conservación de su entorno escolar, dotarlos de conocimientos sobre algunas especies representadas en el área, principalmente especies de la flora y fauna de interés científico. La otra charla tuvo como objetivo principal impulsar la capacitación y actualización de quienes utilizan, transforman, conviven o regulan los recursos del área y fue dirigida a la especialista de Educación Ambiental del parque, técnicos y cuerpo de guarda bosques de la localidad con temáticas referidas a la biodiversidad del Parque Nacional Desembarco del "Granma".

3.- Excursiones e itinerarios a diferentes áreas.

Se realizaron dos excursiones dirigidas por el profesor de Ciencias Naturales de la Escuela Primaria y con los alumnos del segundo ciclo (quinto y sexto grados), auxiliándose de una guía previamente elaborada que vincula los contenidos del programa con el entorno natural. La finalidad de la misma es aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en las clases, el reconocimiento de la biodiversidad local y la consolidación de los contenidos de la asignatura Ciencias Naturales mediante la identificación de plantas y animales y otros componentes del medioambiente.

La segunda consistió en un itinerario que se desarrolló en el bosque del Castillo con la participación de alumnos, maestros, guarda bosques y padres, dirigido a la observación e identificación por sus cantos de las aves en su mayoría endémicas y amenazadas o en peligro de extinción. Durante la caminata se les habló de la importancia de las aves, el porqué hay que cuidarlas y la significación que éstas tienen para el ecoturismo, actividad que se desarrolla en la localidad.

4.- Concurso de artes plásticas.

Se convocaron dos concursos de dibujos titulados Amemos la Naturaleza y Conozcamos Nuestro Entorno, participaron todos aquellos niños que deseaban, aunque bajo títulos diferentes se organizaron con un objetivo

común, sensibilizar a los niños con el amor y protección de la naturaleza, y a través de éste se desarrollaron habilidades y reflejan lo conocido y lo que desean conocer. En esta modalidad concursaron alumnos del primer y segundo ciclo. Los resultados se expusieron en el mural de la escuela y los ganadores fueron estimulados.

5.- Recital Poesía y Naturaleza.

Esta actividad se llevó a cabo por seis niños del segundo ciclo (5° y 6° grados), ellos seleccionaron poesías relacionadas con la naturaleza y en especial referidas a la flora y fauna, algunas de su propia inspiración y otras recogidas en los libros. Esta actividad fue dirigida por la promotora cultural de la comunidad y en ella participaron niños, jóvenes y adultos. Esto sirvió para despertar los sentimientos de amor y respeto por la naturaleza y para intensificar el hábito por la lectura.

6.- Taller Amigos del Bosque.

Se desarrolló un taller por el guardabosque con la participación voluntaria de varios comunitarios de todas las edades, en el que se habló sobre las especies forestales de gran valor para el área, aquellas que se pueden utilizar para la elaboración del carbón y como leña, la fauna que vive en ellas, así como las principales causas que la afectan. El objetivo fue capacitar a los pobladores y propiciar la conservación y uso sostenible, partiendo de la premisa de la necesidad de su uso pero con una adecuada selección como lo es el soplillo, especie forestal muy abundante y de rápido crecimiento.

7.- Elaboración en la escuela del Rincón Natural.

Se escogió un área en la biblioteca para construir el rincón natural para mantenerlo de forma permanente y ser actualizado sistemáticamente con diferentes exposiciones relacionadas con trabajos científicos sobre la flora y fauna local, plantas herborizadas y animales conservados del área, libros y otros documentos con la finalidad de divulgar y promover los valores naturales del área.

8.- Juego “Los componentes del medio ambiente”.

Este juego desarrolla en el niño distintas funciones tales como estimular las capacidades sensoriales e intelectuales, satisfacer necesidades de orden afectivo, proporcionar el desarrollo de las relaciones sociales con otros niños, la imaginación y la creatividad, permitiéndoles la asimilación de las informaciones, la aplicación y reafirmación de los conocimientos.

Por ello se elaboró un juego depositado en la ludoteca



de la escuela que se puede utilizar tanto dentro de la clase como fuera de ella y tiene como objetivo identificar los componentes vivos y no vivos del medioambiente, lo cual permite que además de consolidar los conocimientos de la asignatura Ciencias Naturales, los conduce a apropiarse de conocimientos relacionados con la flora y fauna local.

9.- Discusión con entidades responsabilizadas con las principales problemáticas detectadas.

Una vez terminada la investigación se presentaron los resultados del diagnóstico a los principales líderes comunitarios (directora de la escuela, delegado del Poder Popular, cuerpo de guardabosques, médico de la familia) a fin de que colaboren en la mitigación y solución de la problemática detectada.

Después de ejecutadas las diferentes actividades educativo-ambientales en la comunidad, se aplicaron nuevamente los instrumentos y los resultados aparecen recogidos en el Anexo N°4.

Conclusiones

Las actividades descritas en el trabajo han tenido efectos satisfactorios, posibilitándole a los comunitarios la adquisición de conocimientos relativos a la diversidad biológica del área protegida, elemento fundamental para mejorar los modos de actuación en función del cuidado y uso sostenible de los recursos allí existentes.

El trabajo de Educación Ambiental efectuado con los maestros y alumnos puso a la escuela como centro promotor y trasmisor de valores conservacionistas, lográndose con ello un mayor vínculo escuela-comunidad.

Se logró que los comunitarios identificaran la problemática local y realizaran acciones encaminadas a mitigar los daños que les causan a la flora y fauna local.

Bibliografía

- BORHIDI, Attila (1996). *Phytogeography and Vegetation Ecology of Cuba*. Budapest: Ediciones Akadémiai-Kiadó.
- BOSQUE SUÁREZ, Rafael (1993). *Las excursiones a la naturaleza en los centros de Pioneros Exploradores*. Ponencia presentada en Congreso Internacional sobre Pedagogía, La Habana, Cuba.
- BOSQUE SUÁREZ, Rafael (1995). *Los trabajos de campo: Una*

- estrategia para la enseñanza de las ciencias naturales. En *Revista del Instituto Pedagógico Enrique José Varona*, Vol. I.
- CAPOTE, René, y BERAZAÍN, Rosalina (1984). Clasificación de las formaciones vegetales de Cuba. En *Revista del Jardín Botánico Nacional*, Vol. II, pp. 27-75.
- INSTITUTO DE GEOGRAFÍA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA (1989). *Nuevo Atlas Nacional de Cuba*. La Habana: Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Cuba.
- MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DE CUBA (2010). *Estrategia Nacional de Educación Ambiental*. La Habana: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.
- DÍAZ, Cecilia (1995). El diagnóstico para la participación. En *Selección de lecturas sobre trabajo comunitario*, Colectivo de Investigación Graciela Bustillos, I(1), pp. 33-37.
- FERNÁNDEZ DÍAZ, A. (2003). Interrelación escuela-familia-comunidad y metodología de los proyectos comunitarios. En *Selección de lecturas sobre trabajo comunitario*, Colectivo de Investigación Graciela Bustillos, I(1), pp. 2-12.
- GIRAL GUTIÉRREZ, Adalberto (1994). La excursión docente recreativa, una variante alternativa para la educación popular. En *Revista del Instituto Pedagógico Enrique José Varona*.
- GONZÁLEZ OLIVA, Lisbet, GONZÁLEZ TORRES, Luis Roberto, PALMAROLA, Alejandro y BARRIOS, Duniel (eds.) (2014). Categorización de taxones de la flora de Cuba. En *Boletín sobre Conservación de Plantas del Jardín Botánico Nacional de Cuba*, 8(1), pp. 1-314.
- HERNÁNDEZ SABOURÍN, Elsa (1999). *Flora y Vegetación de Cabo Cruz. Sus potencialidades docentes*. Tesis de Maestría sin publicar. Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.
- IGLESIAS, Luis (1997). *La Educación Ambiental como vía para el conocimiento de la biodiversidad*. Trabajo presentado en Primera Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo [Versión CD]. La Habana, Cuba.
- LEÓN, Hermano, y ALAÍN, Hermano (1957). *Flora de la República de Cuba*. La Habana: Editora Museo de Historia Natural del Colegio La Salle.
- PALACIO, Ernesto y CISNEROS, Gabriel (2002). *Libro de Manejo del Parque Nacional Desembarco del Granma*. La Habana:
- REMÓN CASTILLO, Herlinda, HERNÁNDEZ, Elsa, y TORRES, Sergio (2014). La relación hombre-sociedad-naturaleza. Una mirada desde la Educación Ambiental. En *Revista*



- Electrónica Roca*, Vol. X.
- POUYÚ, Enrique y HERRERA, Pedro (1996). Flora sinantrópica de Cuba. En *Revista del Instituto de Ecología y Sistemática*, V(2), pp. 300-321.
- ROQUE, Marta (1990). Programa director de educación ambiental para la formación de docentes. En *Revista del Instituto Superior de la Enseñanza Técnica y Profesional*. (ISPETP), Vol. II.
- ROQUE, Marta (1995). Proyecto de educación ambiental para las escuelas asociadas a la UNESCO. En *Revista del Centro de información y documentación de Educación Ambiental* (CIDEA), Vol. II.
- ROQUE, Marta (1996). El vínculo universidad-comunidad. En *Revista de formación ambiental*, Universidad de La Habana, Vol. 1.
- SIMPSON, Michael (2006). *Plant Systematics*. San Diego, California: Elsevier Academic Press.
- TORRES ZAMORA, Sergio, REMÓN, Herlinda y HERNÁNDEZ, Elsa (2014). Sistematización de resultados científicos mediante la en Educación Ambiental. Retos para los educadores de la Universidad. En *Revista Electrónica Roca*, Universidad de Granma, X(VI).

Anexos

Anexo 1: Encuesta a los alumnos

Objetivo: constatar el nivel de conocimientos que poseen sobre la flora y fauna local, principales causas que la afectan y obtener información acerca de las principales motivaciones referidas al sentimiento hacia la naturaleza.

Querido pionero (a):

Estamos interesados en saber algunos de tus conocimientos, motivaciones e intereses acerca de la naturaleza de tu entorno escolar. Agradecemos tu cooperación al responder esta breve encuesta. Gracias.

1. ¿Cuál es tu sentimiento hacia la naturaleza (paisaje, plantas y animales)?

—Me gusta mucho.

—Me es indiferente.

—Me gusta poco.

—No me gusta nada.

2. Menciona algunas actividades que desarrollan en la

escuela con el objetivo de cuidar las plantas y los animales.

3. Conoces algunas personas que se dedican a maltratar los animales y plantas de tu comunidad.

3.1- ¿Qué haces cuando ves eso?

4. Menciona 3 plantas y 3 animales que estén presentes en tu comunidad y sus alrededores

4.1- Tus maestros te hablan en clases de ellos. ¿Qué te dicen?

Anexo 2: Entrevista a los pobladores de la comunidad

Compañeros:

La Universidad de Granma se encuentra desarrollando una investigación acerca de la Educación Ambiental en función del conocimiento de la flora y fauna local. Agradecemos su colaboración que contribuirá al éxito de nuestro trabajo. Gracias.

Edad: _____ Profesión: _____

1. ¿Usted tiene conocimiento de las diferentes plantas y animales que están presentes en su comunidad y que deben cuidar para que no desaparezcan, por ser únicas en la zona?

Sí: ___ No: ___

a) En caso afirmativo, exprese cuáles.

2. ¿Ha participado en alguna actividad que la escuela u otro miembro de la comunidad ha desarrollado para dar a conocer o divulgar la necesidad de proteger y conservar la flora y la fauna de la localidad?

Sí: ___ No: ___

a) En caso afirmativo, exprese cuáles.

3. A su criterio, ¿cuáles son las principales problemáticas de su comunidad que afectan el medioambiente y en especial a la flora y la fauna?

4. Como ciudadano de la comunidad donde vive, ¿qué usted hace para contribuir a la protección y conservación de la naturaleza?

Anexo 3: Guía de observación

Objetivo: Constatar las condiciones higiénico-ambientales que presenta la comunidad, principales problemas y actividades que pueden contribuir a la protección y conservación de la naturaleza.

Aspectos a tener en cuenta para la observación.



1. Existencia de jardines, criaderos de aves u otras especies en las casas.
2. Actividades o acciones que se encuentren realizando en el momento de las visitas para proteger y conservar la naturaleza.
3. Principales focos y fuentes contaminantes en la comunidad que afecten la biodiversidad.
4. Algún aspecto de interés que se considere oportuno destacar.

Anexo 4: Resultados finales de los instrumentos aplicados.

a) Encuesta a los alumnos.

1- El 100% aprecia altamente la naturaleza.

2- Acerca de las actividades desarrolladas en la escuela hay que destacar que inicialmente mencionaron el círculo de interés y actividades culturales, actualmente, el 78,9% mencionó más de tres actividades, entre ellas: las excursiones, charlas educativas, juegos y videos, el 15,8% refirieron de 1 a 3 actividades y solo el 5,3% se refirió a las excursiones.

3- El 100% de los alumnos aportaron elementos con respecto a lo que deben hacer cuando observen el maltrato de la flora y la fauna y estos se centraron en: regañar a los niños que maltratan animales, requerir a todos aquellos que atentan contra alguno de los componentes de la naturaleza, cuidar las plantas, sembrar árboles para establecer el equilibrio entre su crecimiento y la tala, respetar el período de veda establecido para los animales.

4- Conocimiento de plantas y animales de la comunidad.

El 100% menciona plantas y animales, entre las plantas se refirieron a: la orquídea enana, al guano de costa (*Coccolobium*) y el guao (*Comocladia dentata*), entre los animales mencionaron aves como el tocororo, carta Cuba, zunzún, el 52,6% se refirió a plantas silvestres presentes en el área y a las aves, entre ellas citan a los endémicos: cotorra, el 26,3% se refirió a las aves, pero también mencionan otros animales como lagartijas del género *Anolis* y el caracol endémico *Liguus vittatus*, el 21,1% además de mencionar animales reconoce plantas endémicas como el aguacate cimarrón, la orquídea enana y algunas palmas (*Coccolobium*).

b) El 100% de los alumnos plantearon que sus maestros les hablaron en clases de las plantas y animales, el 66,7% se refirieron no solo a los atributos nacionales, sino que

mencionaron otras plantas y animales representados en la comunidad, el 33,3% restante mencionó plantas y animales endémicos y amenazados de extinción que están presentes en el área (cotorra, iguana, polymitas) y entre las plantas se refieren a especies de cactus de los géneros *Dendrocereus* y *Leptocereus*.

c) Entrevista a pobladores.

1.- El 80%, además de mencionar plantas cultivadas y animales domésticos pudieron referirse sobre todo a aves endémicas como (tocororo, carta Cuba, cotorra) y a algunas plantas silvestres presentes en el bosque del Castillo (aguacate cimarrón, guao de costa, cuaba, lirio de costa), el 15% menciona solo aves endémicas, el 5% restante solo hizo alusión a plantas cultivadas (manto, rosas, claveles) y animales domésticos (perro, gato, gallinas).

2- El 85% manifestó haber participado en las actividades convocadas por la escuela tales como (excursiones y los videos), el 10% se refirió, además, a actividades convocadas por la comunidad (siembra de árboles) y el 5% respondió que no participaron en ninguna actividad, pero que sí tienen conocimiento de que las mismas se realizaron

3- El 100% de los entrevistados reconocieron otros problemas, sobre todo los relacionados con el deterioro de la flora y la fauna (caza, pesca excesiva, deforestación, maltrato de animales)

4- Sobre las medidas para mitigar estos problemas.

El 95% mencionó 5 o más medidas referidas principalmente a la necesidad del uso racional de los recursos florísticos y faunísticos, reforestación del bosque, limpieza y embellecimiento de los jardines en las instituciones, respetar la época de veda de los animales, el 5% mencionó solo tres medidas, pero también encaminadas a este fin.

Fecha de recepción: 30 de enero de 2017

Fecha de aceptación: 21 de marzo de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



María Carolina Ozollo

carolinaozollo@gmail.com

Cecilia Baldini Doménech

baldinicecilia@gmail.com

Bárbara Gisel Márquez

barbaramarquez29@gmail.com

Florencia Santos Fassi

mfsantosfassi@gmail.com

Universidad de Congreso. Argentina

LAS PLAZAS DE MENDOZA COMO PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTOS ESPACIOS PARA EL CIUDADANO MENDOCINO

Resumen: *Las plazas de Mendoza son patrimonio de la sociedad debido a la importancia histórica y cultural que han tenido y tienen en la vida del ciudadano. En la actualidad se observa que su deterioro es directamente proporcional al desinterés de la sociedad y a la inadecuada gestión pública de las mismas. En este artículo se expresan los beneficios ambientales y sociales que ellas proveen, como también los lineamientos internacionales para la creación de ciudades sustentables.*

Palabras clave: *plazas, sociedad, ambiente*

The squares of Mendoza as heritage of society. Brief description of the importance of these spaces for the citizens of Mendoza

Abstract: *The squares of Mendoza are society's heritage due to the historical and cultural importance that they have had and still have in the lifetime of each citizen. Nowadays, it is notorious that their deterioration is directly proportional to the lack of interest of the society and their inaccurate public management. In the following article, the social and environmental benefits that the squares provide are expressed, as well as the international guidelines for the creation of sustainable cities.*

Keywords: *squares, society, environment*



Las plazas, esos espacios verdes que adornan la ciudad, fueron construidas en Mendoza gracias a la histórica relación del hombre cuyano con el arbolado público para forjar su oasis.

En los albores del desarrollo vitivinícola de la provincia, el productor entendió que necesitaba generar espacios verdes que lo ayudaran a mantener su cosecha en buenas condiciones al reparo del sol, hasta que llegara de la finca a la bodega y así fue como comenzó plantando plátanos y carolinos a lo largo de los carriles mendocinos –hoy, carril San Martín, Cervantes, Ruta Provincial N°15, entre otros–.

Luego del 20 de marzo de 1861, cuando se registró el mayor sismo en la historia de la provincia de Mendoza, surge la importancia de contar con un espacio común, abierto, de rápido acceso para toda la población, nacen así, sumándose a la originaria Pedro del Castillo, las cinco principales plazas de la Ciudad de Mendoza: Independencia, España, Italia, Chile y San Martín. Así nació la costumbre, muy arraigada ya en los ciudadanos de la provincia, que luego de un sismo la plaza sea el punto de encuentro y refugio.

Con el correr del tiempo, estos espacios verdes se han tornado muy importantes para la cultura mendocina, ya sea por su uso social y recreativo, como también por los vastos servicios ambientales que brindan.

En los días de verano cuando las temperaturas se tornan agobiantes, estos pulmones verdes proveen un sitio donde encontrar aire fresco y sombra reconfortante con espacio para el disfrute del aire libre. Los espacios verdes evitan la formación de las llamadas “islas de calor”, ese fenómeno que ocurre al aumentar las temperaturas en las ciudades debido a la gran cantidad de edificios cuyas alturas provocan menor circulación de aire –disminuyendo la dispersión de calor y contaminantes– y sus materiales que absorben y acumulan energía térmica, generando así mayor radiación calorífica. Esta última hace referencia al proceso en el que el sol emite ondas infrarrojas (calor) que inciden en la superficie de los edificios y éstos a su vez la reflejan al entorno inmediato (suelos, paredes, techos de edificios más bajos, calles, otros). Sumado a ello, la presencia de vegetación provee un servicio ambiental primordial como es la captación de polución, permitiendo así que las ciudades cuenten con una renovación del aire un tanto más eficaz. Dentro de esta temática se puede distinguir una innovadora forma de espacios verdes que podrían revolucionar la manera en que la población vive esos



¹ Ley N°4.428 de Techos y Terrazas Verdes. Ciudad de Buenos Aires.

sitios: las terrazas verdes. Este concepto se está arraigando poco a poco en distintas metrópolis del mundo, tal es el caso de la ciudad de Buenos Aires, que ha regulado¹ la instalación de estas terrazas en sus edificios a fin de contribuir al bienestar social, ahorro energético y diversos atributos ambientales. Así estos lugares se encontrarían más próximos para disfrutar las virtudes de rodearse de vegetación en medio de la urbe. Tal es su importancia que la Organización Mundial de la Salud determina que en las ciudades deben existir entre 10 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por habitante para ser ciudades más saludables para la población.

Desde lo social y recreativo, se destacan aquellas actividades que se realizan en las plazas, como manifestaciones sociales, deportivas y comerciales de economías locales, tales como la maratón de Mendoza y los mercados de artesanos; como también las celebraciones culturales, como las fiestas de Vendimia, ya sean departamentales o distritales; la Fiesta de las Colectividades y las propias de España e Italia en sus plazas homónimas.

Capítulo aparte amerita el personaje del placero. Si bien hoy en día es una figura existente, no tiene el respaldo social que solía presumir hasta hace 20 años atrás, que no solo limpiaba, regaba y cuidaba las plantas de la plaza, sino también era una autoridad para regañar al infractor que hiciera algo indebido, dañando la infraestructura o el patrimonio ambiental o cultural, además daba un marco de seguridad a la plaza que él mismo vigilaba. Era todo un personaje, querido, respetado y reconocido, que amerita volver a ponerse en valor, sobre todo por la riqueza que le da a la sociedad. Desde hace un par de años algunos municipios del área metropolitana están tratando de instaurar nuevamente este oficio y sería, en parte, un resurgir para la estrecha relación entre el hombre cuyano y sus espacios verdes.

En cierta forma, el imaginario popular, cuando piensa en una plaza se figura un lugar de entretenimiento con juegos para niños. Hoy en día, en la mayoría de los espacios verdes, se siente que ya no hay lugar para esos juegos donde los más chicos se divertían, canalizaban su energía, hacían amistades, aprendían a compartir y se alejaban del sedentarismo; como también ocurría con los padres que podían acercarse más al mundo de sus hijos, compartir con ellos un tiempo de calidad y conocer qué pasaba en su entorno. Esto conformaba un importante canal de comunicación entre padres, hijos y vecinos.

Pero el tiempo pasa para todos y no en vano. Así como en el pasado se observaba el nacimiento de ese romance entre el hombre cuyano y sus espacios verdes, en el presente se es testigo de un desapego, con algo de desinterés, despecho y vandalismo entre estos espacios y algunos individuos de la sociedad. Ocurre que con el avance de la urbanización estos lugares fueron perdiendo protagonismo y hace algunos años se está dando una transformación de la percepción de la sociedad en relación con las plazas, lo que resulta en una disminución en el sentido de pertenencia, “lo que no es propio no se cuida”.

Debido a esto, los gobiernos han optado por empezar a cercar las plazas tratando de protegerlas del vandalismo y por ello están dejando de ser lugares libres y accesibles para el vecino, transformándose en sitios de encuentros clandestinos e inseguros.

Es fundamental encontrar un equilibrio entre los diversos usos que se le da a los espacios verdes, donde coexisten sus elementos y los actores sociales. Para ello se debe conocer el origen de esos sitios, entender cuál fue el motivo de su creación y cuál es la importancia de éstos en el barrio. La educación ambiental, orientada al conocimiento de la relación del hombre y sus impactos en el entorno en pos de un desarrollo sustentable, es cardinal ya que representa un instrumento clave para dar a conocer a la sociedad los beneficios de los espacios verdes y crear conciencia colectiva sobre ellos. Definitivamente se debe aprender a gestionarlos de forma responsable y así potenciar los servicios ambientales que proveen a la sociedad.

Según la organización internacional Project for Public Spaces, que ha analizado innumerables sitios públicos del mundo, establece que estos espacios, cuando son funcionales y exitosos, sirven de escenario para nuestra vida pública. Para ello deben presentar cuatro características fundamentales: 1. Ser de fácil acceso: si estos espacios están alejados, no cuentan con adecuadas vías de circulación y acceso, tienen barreras físicas o de otro tipo, no cumplen su rol. Tienen que ser accesibles para toda persona, independientemente de su edad, capacidad física o nivel económico-social. El reciente cercado de algunos espacios verdes mendocinos dificulta el cumplimiento de esta característica; 2. Desarrollar actividades sociales: debe haber instalaciones o acciones que motiven a la población a desplazarse hacia ellos, tales como parques infantiles, mercados de alimentos y artesanías, eventos



deportivos, conciertos, otros. Cuantas más actividades y personas se sientan cautivadas será mejor. Esto ocurre habitualmente en Mendoza con las fiestas y eventos sociales que se generan y promueven de manera cotidiana (Vendimia, Cantapueblo, mercados de artesanías, eventos gastronómicos y culturales, otros); 3. Ser confortables, seguros y con buena imagen: deben ser atractivos, amigables y percibidos positivamente. Es importante prestar especial atención al diseño del sitio, teniendo en cuenta los activos culturales del entorno para que sean valorados como patrimonio de la sociedad. Además, deben ser seguros, bien iluminados, limpios, con lugar para sentarse, y en caso de ser factible, contar con zonas de sombra y/o parquizadas con especies de vegetación autóctona. Mendoza cuenta con plazas de gran valor arquitectónico, con diseños espaciosos y bien iluminados, con vegetación abundante, mobiliario de distintos estilos y generalmente poseen fuentes, esculturas u otras figuras que las adornan. Algunos espacios tienen zonas de flora autóctona, tal es el caso del Parque Central, pero son muy pocos estos ejemplos, ya que este tipo de follaje posee escasa cobertura vegetal debido a que sus hojas son de pequeño tamaño por sus adaptaciones al clima local, y; 4. Ser lugares sociables que favorezcan las relaciones interpersonales: el ciudadano debe concebir este lugar como propio, fortaleciendo el sentimiento de identidad. Estos espacios deben articular la estructura social de las ciudades, convirtiéndose en polos de atracción. Es fundamental que sean sentidos con orgullo por la población local y que consideren que deben protegerse.

Generalmente en las plazas distritales o departamentales mendocinas se percibe fácilmente que su comunidad los aprecia como espacios propios, que reflejan parte de su historia de vida. Como ejemplo se puede mencionar la plaza Espejo, del distrito Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo, Mendoza; la cual a pesar de ser muy pequeña ha logrado hacerse un lugar importante entre los sitios de interés turístico de la provincia, gracias al esfuerzo de su propia comunidad.

Estos factores sirven de base para apoyar lo expresado en el artículo 41 de la Constitución nacional que dice: "... todos los habitantes tienen derechos a un ambiente sano y equilibrado apto para el desarrollo humano (...) y tienen el deber de preservarlo", por lo tanto, es fundamental que, para

hacer uso de estos espacios verdes, se tiene que ser consciente de su importancia y hacerlo con respeto hacia el bien público y a sus vecinos.

Hoy la plaza dejó de ser un lugar seguro. Es necesario que se revierta esa situación y se vuelva a institucionalizar. Actualmente dado el aumento de la densidad poblacional, los edificios superpoblados y los trabajos de jornada extendida acompañados de estrés y malos hábitos, es primordial contar con un lugar que permita un momento de paz, aire puro, sombra, descanso y reflexión, o admirar el paisaje.

Mendoza sin sus plazas forestadas sería una ciudad más en el mundo, ya que en otros países cuando se habla de “plaza” se hace referencia a una explanada de encuentro, revestida de hormigón sin ningún tipo de vegetación o lugar para sentarse. Por todo esto, es esencial que Mendoza siga manteniendo el apodo de “ciudad bosque” y que junto con su arbolado público, otorgue al mendocino un sitio de reunión, libre de contaminación y seguro para su esparcimiento.

Las plazas de Mendoza son símbolo de su historia y cultura ya que fueron testigo de su creación y reconstrucción. Hoy estos espacios verdes ofrecen beneficios como servicios ambientales y lugares de recreación y esparcimiento. Es fundamental que se vuelvan a gestionar de manera responsable, institucionalizándolas como en épocas pasadas, teniendo en cuenta que son un bien público y para que el mendocino recupere su sentido de pertenencia y así las proteja de la adversidad.

Solo cuando la sociedad identifica y hace suyo el uso y función de un espacio público, comienza a preocuparse de su dimensión estética. Pero también es cierto lo contrario: la calidad estética de un fragmento urbano tan importante para la ciudad como es su espacio público, potencia su uso y por lo tanto mejora su percepción social (García Doménech, Sergio, 2014:313).

Bibliografía

- CONSTITUCIÓN NACIONAL (1994). Artículo 41. Buenos Aires: INFOJUS.
- GARCÍA DOMÉNECH, Sergio (2014). Percepción social y estética del espacio público urbano en la sociedad contemporánea. En *Revista Arte, Individuo y Sociedad*, 26(2), 301-316.
- GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (2013). Ley N°4.428 de Techos y Terrazas Verdes. Argentina.



Fecha de recepción: 2 de julio de 2017

Fecha de aceptación: 11 de agosto de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional





Weimar Giovanni Iño Daza

Universidad Mayor de San Andrés. Bolivia

willkaweimar13@hotmail.com

UNA MIRADA A LAS CONCEPCIONES SOCIALES DE LAS INFANCIAS EN LAS CONSTITUCIONES Y CÓDIGOS DEL MENOR DE BOLIVIA (1950-1980): MINORIDAD Y SITUACIÓN IRREGULAR

Resumen: El artículo inicia con una explicación de la historia de las infancias y un breve panorama de la búsqueda de los derechos de las infancias en el siglo XX. El trabajo enfatiza las concepciones sociales que tuvo el Estado de las infancias en Bolivia, específicamente en las leyes, marcos jurídicos e institucionales que se aplicaron en los períodos del nacionalismo (1952-1964) y en los gobiernos militares (1964-1982). En ambos contextos se desplegaron marcos jurídicos e institucionales destinados a proteger mediante derechos a las infancias, ejemplo de ello son los Derechos del Niño Boliviano de 1955, los Códigos del Menor de 1966 y 1975. Desde lo jurídico e institucional se dilucida determinadas concepciones sociales respecto de las infancias: la niñez “desprotegida”, la “minoridad”, la “situación regular e irregular” y finalmente la niñez como “futuro de la sociedad” o “sujetos de derechos”.

Palabras clave: concepciones de infancias, derechos de la niñez, historia de las infancias

A view to the social conceptions of the childhoods in the constitutions and juvenile code of the minor of Bolivia (1950-1980): minority and irregular situation

Abstract: The article begins with an explanation of the history of the childhoods and a brief overview of the search for the rights of infancy in the twentieth century. The work emphasizes the social conceptions that the State of the children had in Bolivia, specifically in the laws, and legal and institutional frameworks that were applied in the periods of nationalism (1952-1964) and during the military governments (1964-1982). In both contexts, legal and institutional frameworks were deployed to protect children's rights through the rights of the Bolivian Children of 1955, the juvenile codes of 1966 and 1975. Certain specific social conceptions regarding the childhoods are elucidated in this article from both legal and institutional frameworks: “unprotected” children, the “minority”, “the regular and irregular” situation, and, finally, childhood as “the future of society” or “subjects of rights”.

Keywords: conceptions of the childhoods, children's Rights, history of childhoods



Introducción¹

El estudio de la historia de las infancias permite comprender su concepción social, ésta se refiere a la definición que tienen las diferentes instituciones y grupos sociales de las infancias. Cada Estado, sociedad y cultura define explícita o implícitamente qué es la(s) infancia(s), cuáles son sus características y, en consecuencia, qué períodos de la vida incluye. Según Martínez (2008), las concepciones se refieren a que la infancia no es algo que se pueda atrapar o señalar con precisión, si bien es una construcción desde el lenguaje a la que corresponden muchas acepciones, opera mejor como territorio y en este sentido, escribir sobre ella tiene algo que ver con significar, pero mucho más con deslindar, cartografiar, mapear, mojonar.

En el trabajo se enfatiza la definición y concepción que tuvo el Estado de las infancias en Bolivia, desde la descripción y explicación de las leyes y marcos jurídicos que se desplegaron a partir de los 50. Esto no quiere decir que la historia de las infancias sea simplemente el estudio de fuentes jurídicas e institucionales, sino que la historia abarca un sentido global de la construcción social de las infancias. Sin embargo, se debe mencionar que interesa desarrollar lo jurídico e institucional proveniente del *ethos* del Estado, porque contribuye a delimitar la concepción social de las infancias, por medio de leyes, políticas e instituciones, por ejemplo, define el lugar de las infancias en la sociedad.

El artículo se sitúa en dos momentos históricos: el nacionalismo (1952-1964) y los gobiernos militares (1964-1982). En el nacionalismo de 1952 se visibiliza a las infancias, a partir de la Declaración de los Derechos del Niño Boliviano de 1955 y la puesta en marcha de leyes que incluyen su atención por parte del Estado en materia de salud y educación. Las normativas emanadas hacen hincapié en la igualdad de condiciones, su protección y asistencia. En los gobiernos militares se aplicaron dos códigos del menor que tuvieron como enfoque el asistencialismo y la doctrina de “situación regular e irregular”, en donde las infancias fueron comprendidas desde su minorización y judicialización, así como la diferenciación entre infancias: los de situación regular y los de situación irregular.

¹ El presente artículo forma parte del proyecto de investigación: “El horizonte histórico de la(s) infancia(s) en Bolivia: concepciones sociales y derechos en las Constituciones y Códigos del menor (1900-2010)” realizado en el Postgrado en Ciencias del Desarrollo, Universidad Mayor de San Andrés y financiado por UNICEF Bolivia, en las gestiones 2012-2013. Para su publicación se ha procedido a su modificación y revisión respectiva.



Historia de las infancias una forma de re-significar su lugar en la sociedad

En los estudios de la historia de las infancias existen varios enfoques: historia de la vida privada, mentalidades y psicogénica, y el pedagógico-educativo. En la historia de la vida y mentalidades, los estudios se ocupan de los cambios realizados por el Estado para ver el mejoramiento de la educación. En el pedagógico-educativo, los trabajos toman en cuenta al naturalismo pedagógico y la historia de la educación, con énfasis en la escolarización.

En los estudios de la historia de la educación un aporte pionero es el de Jean J. Rousseau, Kate Douglas y Ellen Key. Rousseau en su obra *Emilio o la educación* (1762) establece la comprensión de la infancia desde la infancia: “Buscan siempre al hombre en el niño, sin considerar lo que éste es antes de ser hombre” (Rousseau, Jean J., 1998: 5). Según Nikolai Konstantinov, E. N. Medinski y M. F. Shabaeva (1977: 58) exigía respetar la personalidad del educando y tener en cuenta sus intereses y deseos, Rousseau afirmaba que la infancia no es conocida, y que existen ideas falsas.

Douglas Wiggin en 1892 publica *Los derechos del Niño*, propuesta que abre el debate de los derechos. De acuerdo a Galviz (2009: 599), para Douglas el derecho no era la asistencia o privilegio, sino su pertenencia en ellos mismos. En 1900 Key, en *El siglo del Niño*, identifica a la familia y escuela como instituciones que oprimen. Según Galvis (2009: 599), buscó la emancipación de los niños de la familia, frente al contexto social y ante al Estado.

En la historia de la infancia, uno de los primeros aportes es el de Philip Ariès, *El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen* (1960), quien da a conocer la actitud de los adultos respecto de las infancias que se fueron transformando a través del tiempo. Para Ariès la educación delimitó y estableció la construcción de la identidad infantil. Asimismo, fue el resultado de decisiones y acciones de actores sociales históricos particulares, en el marco de sus luchas económicas, políticas y culturales (Alanen, Ambert, 1988, citado en Soares, Alice, 2012: 32).

Por su parte Loyd De Mause en *Historia de la infancia* (1982) plantea que los cambios psicogénicos de la personalidad son el resultado de las interacciones entre padres e hijos, las formas de crianza conciben un tipo de relaciones paterno-filiales: 1) infanticidio (Antigüedad a s. IV), 2) abandono (s. IV-

XIII), 3) ambivalencia (s. XIV-XVIII), 4) intrusión (s. XVIII), 5) idealización (s. XIX-XX) y 6) ayuda (mediados del s. XX).

En los estudios bolivianos² desde un enfoque histórico, se tiene a Laura Escobari: *Mentalidad social y niñez abandonada. La Paz, 1900-1948* (2010) y *La Paz. Salud pública, niñez y pobreza 1900-1950* (2006), desarrollado a partir de tres perspectivas de interpretación: la visión de la clase dominante, la de los pobres y la de los propios niños; reconstruye el imaginario social de la sociedad paceña y las acciones desarrolladas a favor de la niñez desde la filantropía y la instrucción gratuita.

Siguiendo la línea histórica y pedagógica se encuentra Pamela Catarí con *El reconocimiento a lo desconocido en la modernidad orureña (1892-1932)* (2010) y *El surgimiento de la pedagogía especial en Bolivia, bajo el gobierno liberal* (2012) aborda la situación de la niñez abandonada en el siglo XIX y principios del XX, teniendo un enfoque asistencialista desde el Estado y la sociedad a través de las sociedades humanitarias.

Mario Yapu en su estudio *Políticas públicas, socialización y experiencias en torno a la infancia* (2010) realiza algunas reflexiones sobre las políticas y proyectos en torno a la primera infancia desde 1986 al 2000.

La disciplina de la historia ha sufrido transformaciones a lo largo de los siglos, muestra de ello es su tránsito de la narración histórica de la genealogía de los reyes al estudio del Estado social. De acuerdo a María Victoria Alzate (2004), el campo de estudio científico de la historia ha registrado una notable ampliación de horizonte, del histórico tradicional (política e institucional) hacia diferentes ámbitos de la realidad social como el caso de las infancias. Este giro temático ha conducido a la denominada historia de la esfera o de la “vida privada”. La familia, las mujeres y las infancias han pasado a ser sujetos posibles de estudios históricos. “Dar voz a este silencio histórico es una tarea difícil y compleja, pero no imposible” (Salinas Meza, René, 2001: 11).

Según Sandra Carli (2011), la infancia se torna objeto de investigación a partir del reconocimiento común de su dimensión de *historicidad*. Por ende, la historia de las infancias, tiene diferentes escenarios y campos discursivos –que se encuentran en los distintos saberes de las ciencias y de los quehaceres de la humanidad–, y que necesitan ser ampliados hacia un horizonte que permita entender sus distintas historias, tanto individuales como colectivas. El repensar el lugar de las infancias en la sociedad: su participación y

² Las investigaciones sobre las infancias que se han desarrollado en las últimas décadas han sido desde los estudios culturales como Carter y Mamani Irpa Chico: individuo y comunidad en la cultura aymara (1989); Molina y Rojas La niñez campesina. Uso del tiempo y vida cotidiana (1995); Ulpian López (1999) “Niños, cargos y yatiris en Carangas. Una aproximación al caminar andino”; Arnold y Yapita El rincón de las cabezas. Luchas textuales, educación y tierras en los andes (2000); Iño, Weimar: “El pensamiento educativo andino: una forma de entender la educación comunitaria” (2008a); “Educación Intercultural Bilingüe desde las Naciones y Pueblos indígenas originarios en la educación inicial” (2008b). Asimismo, se tiene una variada literatura sobre trabajo infantil publicada desde los 90.



protagonismo desde sus propias identidades, narraciones. Es decir, deconstruir las concepciones sociohistóricas vigentes que se tienen en la lógica adultocentrista: minoridad, incompletud, el futuro del mañana, desprotegidos, medicados, mediatizada-tecnologizada, mercantilizada, desamparada, expulsada, entre otros. Las cuales fundamentan la existencia de las “infancias temporada por el adulto.” En donde “los adultos son la autoridad y los niños, los subalternos” (Soares, Alice, 2012: 32).

Entonces, las infancias no constituyen una incompletud, un futuro, sino una historia y un presente, Esto conduce a que se puede tener la presencia de una pluralidad y diversidad de infancias. La historia de las infancias permite repensar sus lugares y roles en las sociedades contemporáneas. Cuestiona la concepción del niño como un ser natural e inherentemente vulnerable e inocente, argumenta que esta vulnerabilidad es estructural y socialmente construida (Montandon, Cléopâtre, 2001, citado en Soares, 2012: 39). María Colángelo (2003) sugiere que la infancia puede dejar de ser pensada desde un concepto neutro y abstracto, signado por caracteres biológicos invariables, para recuperar toda la riqueza de sus determinaciones sociohistóricas. De este modo, se comenzará a hablar de *infancias*, plurales, múltiples, en el contexto de las sociedades.

Una mirada breve a las iniciativas de protección y derechos de las infancias en el siglo XX

A principios del siglo XX se establecieron normativas dirigidas a la protección de las infancias. Un antecedente es la Carta de Derechos de la Infancia (1913), la presencia de grupos sociales de hombres y mujeres buscaron cimentar derechos específicos, como la activista Eglantyne Jebb en 1919 fundó en Londres *Save the Children Fund* (Fundación Salvada a los niños). Asimismo, se fueron creando instituciones como la *Union Internationale de Secours aux Enfants* en 1920 y la *Union Internationale de Protection à l'Enfance* en 1921.

La Declaración de Ginebra de 1924 planteó cinco aspectos a favor de las infancias: el desarrollo normal del niño, alimentación, asistencia a los enfermos, recojo de los huérfanos y abandonados, protección ante la explotación y los desastres y la necesidad de la educación. Según Galvis (2009, 595), de estos planteamientos se deriva la teoría de la situación irregular que caracterizó el desarrollo de las

legislaciones penales con la infancia y la adolescencia.

En América Latina, en base a la Declaración de Ginebra (1924) varios países elaboraron códigos y tablas de derechos del niño (Garibo, Ana Paz, 2004), por ejemplo en Brasil (1924), Costa Rica (1932), Uruguay (1934), Ecuador (1938) y Venezuela (1939), para el caso de Bolivia se tuvo la contemplación en la Ley de Trabajo (1942). Según Paulí Dávila y Luis Naya (2006), todas estas políticas de protección a la infancia estaban en consonancia con el proceso de internacionalización de los derechos del niño llevado a cabo a lo largo del siglo XX.

En 1927 se establece el Decálogo de los Derechos del Niño suscrito en Montevideo. Según Ligia Galvis (2009: 593), los derechos hacen referencia a la vida como la principal que sintetiza todos los derechos. En 1940 en Santiago Chile se realiza una declaración orientada al bienestar de la infancia que comprende trece postulados que empiezan con el derecho a la vida prenatal, el nacimiento, la alimentación, el vestuario, la educación, la salud, la alegría, el juego, la vida familiar, la personalidad, los derechos jurídico-sociales, la defensa y los beneficios de la civilización (Galvis, Ligia, 2009: 594).

En plena Segunda Guerra Mundial se retomó el debate de la declaración de nuevos derechos, como lo sucedido el 12 de abril de 1942, en Londres se reunieron expertos en educación de diecinueve Estados participantes de la *Conference of the New Education Fellowship*, firmaron la llamada *Children's Charter for the Post-War-World* (Veerman, Philip, 1992: 237). En esta conferencia se decidió promover la atención, la igualdad de oportunidades para todos los niños, el derecho a la asistencia a la escuela a tiempo completo y a la educación religiosa.

La Organización de las Naciones Unidas, en 1946, por medio del Consejo Económico y Social, realizó recomendaciones que fueron orientadas a la reactualización de los derechos del niño. El 11 de diciembre se decidió la creación de una sección dedicada solamente a la atención de la infancia, UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

En la celebración de la XIV Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959 con la resolución N°1.386, se presentó la Declaración de los Derechos de la Infancia, aprobada por unanimidad con 78 votos de los países miembros. En la parte introductoria de la declaración se hace mención que la infancia necesita de protección especial para generar su bienestar, felicidad y gozo de su propio bien y para el bien de la sociedad.



Esta declaración cuenta con diez principios que se refieren a los derechos de los niños en lo concerniente a la igualdad, protección especial, nacionalidad, alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos, una familia, educación y al juego, recibir auxilio, a no ser maltratado ni explotado, a no ser discriminado, vivir en paz, tolerancia y comprensión. Como se aprecia se tiene la presencia del enfoque proteccionista para el bien de la sociedad y de la humanidad.

Después de la Declaración de los Derechos del Niño se realizaron otros acuerdos internacionales dirigidos a contribuir el ejercicio de los derechos de la infancia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica (1969), Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) (1979), entre otros.

En posteriores años se declara la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (1989). Galvis (2009) menciona que la convención reconoce la titularidad y el pleno ejercicio de los derechos de las niñas y los niños de manera universal; la presencia del paradigma de los derechos y la protección integral adquiere sentido de integralidad cuando se convierte en el instrumento de reconocimiento, ejercicio y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cualquiera de las situaciones de emergencia en que se encuentren.

Para Leandro Luciani (2010: 894) dejan de ser mera promesa futura y pasa a ser un sujeto niño o niña en acto, en presente. Según Ferrán Casas (1998), la infancia como sujeto de derechos se establece a partir de las políticas y sus derechos configuran en sí mismas formas de interrelación entre la infancia y los adultos como grupos o categorías sociales.

Un aspecto a mencionar es que la CDN ofrece una concepción de las infancias desde un sentido plural y diverso. De acuerdo a Bácares (2012), la gran novedad de la CDN es crear un modelo de derechos especiales, entre los cuales la participación de los niños, en todos y cada uno de los asuntos que los trazan, los define y tiene que ver con ellos. Según Liebel (2006), es el derecho a expresar libremente su opinión y a tener acceso a información y medios, asimismo, a celebrar reuniones pacíficas y a conformar asociaciones. En palabras de Casas (1998), es capaz de gozar de derechos integrales

que se orientan hacia un mayor reconocimiento del niño y la niña como persona y como ciudadano o ciudadana, hacia la superación de antiguos esquemas de dominación, autoritarismo, machismo y paternalismo, y hacia un mayor reconocimiento y participación social de la infancia como grupo de población.

Las infancias en Bolivia durante el nacionalismo (1952-1964): protección y derecho

En 1951 las elecciones presidenciales en Bolivia dieron la victoria al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con el 51% de 125.000 votos, elección que fue anulada y originó el descontento social de la población, en especial en los sectores obreros y mineros. En palabras de Klein,

... la insurrección popular de abril, los tres días de lucha armada entre los civiles y mineros por un lado y el ejército por otro desembocaron en el derrumbe de los militares y su gobierno. Este fue el acontecimiento realmente conmovedor de abril de 1952: en un momento quedó derrotado todo el aparato represivo del Estado (Klein, Herbert, 1997: 237).

El nacionalismo de 1952 propició cambios fundamentales en el Estado boliviano a través de la nacionalización de minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa, que se concretó en el Código de la Educación Boliviana (CEB), puesto en vigencia el 20 de enero de 1955 (Iño Daza, Weimar, 2012: 150). Buscaron implementar un modelo de desarrollo hacia adentro por medio de un centralismo económico y la aplicación de medidas sociales para reducir las desigualdades en la población boliviana.

En el caso de los derechos de las infancias se inicia con la atención y la puesta en marcha de derechos, para la propuesta boliviana se tiene por ejemplo la Declaración de Derechos del Niño a la III Asamblea General de Asistencia Social de la ONU, reunida el 6 de abril en Nueva York. Así también la atención y protección fue modificada, el Patronato Nacional de Menores pasó a constituirse en la Dirección Nacional de Menores y Protección de la Infancia (Decreto Supremo del 9 de marzo de 1950) cuyo funcionamiento duró hasta los 60. En 1960 se creó el Consejo Boliviano del Menor para otorgar mayor organicidad y funcionalidad a la puesta en marcha de los Derechos del Niño Boliviano de 1955.



En la Declaración de Derechos del Niño, proposición boliviana, en su articulado,

1. Derecho de nacer sano. Todo ser humano tiene derecho a nacer sano, íntegro y sin defectos que le hagan infeliz en el futuro. 2. Los padres deben vivir junto a sus hijos, derecho a un hogar. 3. Derecho a la protección de la salud y crecimiento. 4. Derecho a su educación integral. 5. Derecho a una protección legal eficaz. 6. Derecho a no ser explotado. 7. Derecho a la defensa de sus atributos físicos, morales y espirituales en la infancia y la juventud. 8. Derecho a una vida feliz en su hogar respetable, firme por las leyes y las costumbres (Declaración de Derechos del Niño, 1950: 2-3).

La protección fue concebida como responsabilidad de la familia y del Estado. Por lo que el ejercicio de derechos quedó condicionado a la familia, solo en caso de ausencia de ésta el Estado asumió su protección.

Los derechos del niño son las obligaciones de los padres. Solo en ausencia de ellos por muerte o imposibilidad absoluta el Estado los protege con sus patronatos e instituciones. El patronato es el subsidiario de los padres, y es el Estado el que por su intermedio debe velar por el cumplimiento de los deberes de los padres para con sus hijos (Declaración de Derechos del Niño, 1950: 1).

En los derechos a la vida y a la educación se tiene a la mujer como la responsable de “cuidados y bondades”. “Ninguna mujer debe entregarse a las pasiones materiales para dar al mundo un hijo defectuoso o insano” (1950: 2). Aspecto que es ampliado en el derecho a la educación integral: que se “proporciona en el hogar, más concretamente la madre” (1950: 3) y la instrucción se la da en las escuelas que están a cargo del Estado en forma gratuita y obligatoria.

Derechos del Niño Boliviano (1955)

Es la primera normativa dirigida a la protección y asistencia de las infancias. “El gobierno de la Revolución Nacional ha dictado disposiciones que protegen a la familia y al niño en especial, ya sea en forma de subsidios o por medio de instituciones de carácter social” (Anales de Legislación Boliviana, 1955: 10). Los derechos que se instituyeron en el gobierno nacionalista pretendían mejorar las condiciones de las infancias bolivianas. El propósito fue llevar adelante “medidas protectoras” para el:

...desarrollo sistemático de las aptitudes morales, intelectuales y físicas de los materiales o moralmente abandonados, de los desvalidos y de los menores trabajadores, como también contribuir al afianzamiento de la familia sustituyéndola o remplazándola en los casos en que legalmente corresponda (Anales de Legislación Boliviana, 1960: 69).

Para ello se aplicaron “acciones encaminadas a la protección y seguridad social, económica y espiritual de los menores” (1960: 69). En los derechos aún no se visibiliza la equidad de género, el Estado y la familia se constituyen en los responsables del cuidado y bienestar de las infancias.

Asimismo, su enfoque es altamente proteccionista y que tiene como fin velar por el bienestar de las infancias dentro de las familias y en la misma sociedad. Los derechos enfatizan la vida, a conocer a sus progenitores, a una identidad, a la alimentación, a la educación, a no ser explotado laboralmente, entre otros.

En la declaración de los Derechos del Niño Boliviano (1955)

a) El derecho a nacer en condiciones adecuadas rodeado de las máximas atenciones higiénico-médicas. b) El derecho a conocer a sus padres, y llevar un nombre que no sea lesivo a su condición humana ni constituya un estigma social de reconocimiento negativo. c) El derecho a todas las oportunidades de la vida desde su nacimiento hasta el desarrollo completo de su personalidad. d) El derecho a ser alimentado, asistido, instruido y educado suficientemente para gozar de las prerrogativas de todo ser humano. e) El derecho a no ser maltratado moral o materialmente por los suyos o por cualquier miembro de la colectividad. f) El derecho a la igualdad, a la relación social y al contacto con todos los niños. g) El derecho a ser respetado en sus creencias religiosas. h) El derecho a escoger las actividades y juegos de su preferencia y la orientación libre para su profesión. i) El derecho preferencial de protección y ayuda con relación a los otros miembros de la sociedad. j) El derecho a todas las medidas de previsión y seguridad sociales. k) El derecho de reclamar contra la explotación de su trabajo por parte del Estado, sus padres, tutores y apoderados. l) El derecho al respeto de parte de los demás en cuanto a su dignidad y al goce de todo lo bello. m) El derecho a la protección integral (Anales de Legislación Boliviana, 1955: 10).



Protección y asistencia al menor en la Constitución Política del Estado de 1961

⁴ Sancionada el 31 de julio y promulgada en la presidencia de Paz Estenssoro el 6 de agosto de ese año.

La Constitución Política del Estado (CPE) de 1961⁴, incluye como derecho fundamental a la salud y a la vida. La infancia, la familia, el matrimonio y la maternidad “están bajo la protección del Estado” (CPE, 1961 en Galindo, Marcelo, 1991: 575). Específicamente “el Estado defiende los derechos del niño al hogar y a la educación” (1991: 580), al defender estos derechos se refuerza el rol que se le asigna a la familia u hogar como el espacio de cuidado de las infancias. Por lo tanto, el ejercicio del derecho a la educación y su acceso está condicionado por la familia y por el adulto.

Por encontrarse en una etapa hacia a la adultez, la infancia necesita protección. “Uno de los postulados de la Revolución Nacional es proteger al niño por ser el capital humano más importante en la nueva estructura del país, estableciendo principios de justicia social que regulen la política de protección y asistencia al menor” (Anales de Legislación Boliviana, 1955: 10). En este período, las infancias fueron clasificadas en tres grupos: “a) menores de 10 años; b) menores entre los 10 y los 17 años; y c) jóvenes entre los 17 y 21 años” (Saavedra, María Josefina, 1950: 37).

Los derechos se centraron en salud, familia y educación. En la salud se menciona que “es deber primordial del Estado, la defensa de la salud física, mental y moral de la infancia” (CPE, 1961 en Galindo, Marcelo, 1991: 584). En el derecho a la familia, su protección y como el ente garante del ejercicio de derechos de la niñez que se encuentra en “situación regular”, mientras que el Estado se hace responsable de los que no tienen familia:

Otorgar albergue, abrigo y alimentación a los menores en situación familiar irregular (...) proteger a los menores huérfanos o abandonados por sus padres, tutores o curadores (Anales de Legislación Boliviana, 1960: 70).

El derecho a la educación se refiere a la obligatoriedad del nivel primario y “... la enseñanza fiscal es general y gratuita; se la imparte sobre la base de la escuela única democrática” (CPE, 1961:). De este modo, la infancia en este contexto solamente es visibilizado en la responsabilidad de la familia y hogar con respecto a su derechos a la educación y salud.

Para finalizar, en el nacionalismo del 52 hay un intento

de formulación de una política pública en el ámbito social, de protección de la familia y la niñez. Se incorporan los primeros intentos de planificación global y sectorial que enfocan su atención y protección desde una perspectiva integradora y enfoque asistencialista. La familia se hace cargo del cuidado de sus hijos (aunque solamente reciben apoyo aquellos que cuentan con un empleo formal) juntamente con el Estado, y éste se hace responsable solo de las infancias abandonadas y en situación de orfandad.

Las infancias en los gobiernos militares (1964-1980): minoridad y “situación irregular”

En el segundo mandato presidencial de Paz Estenssoro, se dio el golpe de Estado protagonizado por René Barrientos Ortuño, que inició un nuevo ciclo de gobiernos militares dictatoriales en Bolivia (1964-1982)⁵. En este período se realizaron reformas sociales (salud, educación) y agrarias que se orientaron a la búsqueda de la formación de generaciones con una vocación utilitaria y nacionalista.

En el gobierno de Barrientos se dio continuidad a la protección de las infancias, con la planificación y formulación de políticas públicas. También se produjo la reorganización de la atención, realizada en el primer gobierno de Alfredo Ovando. En 1969, el Consejo Boliviano del Menor es reemplazado por la Oficina de Acción Social de la Presidencia⁶.

En 1971 la Junta Nacional de Desarrollo Social funda la Comisión Nacional del Menor (CONAME) para la “protección” de la niñez y la juventud⁷. El CONAME realizó acciones desde la doctrina de la “situación irregular” y de la “seguridad nacional”. Estamento que fue reemplazado por la Dirección Nacional del Menor en 1973, vigente hasta los 80 bajo el modelo de “bienestar social”⁸.

Atención y la doctrina de “situación irregular” en el Código del Menor de 1966

Por influencia de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y las recomendaciones del Instituto Interamericano del Niño, en el primer gobierno de Ovando, el 1 de agosto de 1966 se promulga el Código del Menor, elaborado por el CONAME.

La concepción de la infancia que tuvo el Estado se refiere

⁵ Presidencias: René Barrientos (1964-1965 y 1966-1969), Alfredo Ovando (1966 y 1969-1970), Juan José Torres (1970-1971), Hugo Bánzer (1971-1978), Juan Pereda (1978), David Padilla (1978-1979), Alberto Natusch (1979) y Luis García Mesa (1980-1981).

⁶ Se crea para que el Estado tenga control absoluto. La responsabilidad ejecutiva cayó en la primera dama, para la acción social y protección de sectores vulnerables: mujeres, infancia, personas con discapacidad e indígenas.

⁷ Estaba encargada de planificar y ejecutar políticas de protección a través del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Integrado por dos órganos: uno consultivo asesor y otro permanente de carácter ejecutivo (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Código del Menor, 1966: 20).

⁸ Este modelo procedió a redistribuir y descentralizar la protección social en cuatro ministerios: Salud, Educación, Justicia y Bienestar Social. Esta organización en vez de generar cambios, originó que las políticas sean dispersas. Su objeto de atención se centró en la población en “situación irregular”, desde acciones compensatorias, focalizadas y asistencialistas.



a su consideración como el futuro del país, el capital social y humano “... siendo deber del Estado proteger a la niñez boliviana como el capital humano más valioso del país, urge ejercitar en su favor una acción preventiva técnicamente coordinada” (MTySS, Código del Menor, 1966: 3). “Pido al gobierno, al pueblo y, muy especialmente, a los padres de familia comprender la trascendencia de este instrumento legal cuyas pragmáticas van dirigidas a proteger lo más preciado que puede tener un país: su niñez” (de Ovando, Elsa, 1966: 18).

Se consideraba a las infancias como minoridad hasta los 21 años, esta concepción surge desde las teorías del derecho y la filosofía. Según Graciela Frigerio (2008), el concepto de *menor de edad* constituye una categoría jurídica que concierne a todos los niños, con independencia de su origen, en un menor, noción que responde a un orden clasificador que unifica las dos vertientes interpretativas de la ley: la de protección y la de sanción y castigo. Como lo ha expresado claramente Antonio Gomes da Costa (1992), son el producto del proceso aprehensión, judicialización e institucionalización que resultan en la concepción del menor. De acuerdo a Frigerio (2008) en el marco de las teorías de la minoridad, protección y castigo son dos caras de la misma moneda: se castiga/encierra para proteger la infancia en peligro material o moral. Se trata de aquellos que no ingresaban al circuito de socialización a través de la familia y de la escuela.

El código recurre a la distinción entre infancia regular e irregular. Los de situación irregular son los

... menores huérfanos, abandonados materiales, inadaptados, enfermos, débiles mentales, de conducta irregular, carentes de recursos y a los que estén acogidos o internados en los establecimientos de CONAME [y los vagabundos⁹] (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Código del Menor, 1966: 33).

⁹ Son los que se hallaban “en la calle o lugares públicos, cinematógrafos, bodegas, despacho de bebidas alcohólicas, billares, etc., en horas normalmente dedicadas a labores escolares o pasadas las 22 horas del día” (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Código del Menor, 1966: 56).

Para Emilio García (1992: 425), esta doctrina percibe a la infancia como portadora de la anomia y la encasilla como pre-delincuente al ejercer sus roles de vida en escenarios que no encajan con la normalidad social. Por lo tanto, la situación irregular se sostiene en una potencial acción judicial indiscriminada sobre aquellos niños y adolescentes en situación de dificultad. Estas condiciones personales del sujeto son las que habilitan al Estado a intervenir ante la presencia de “menores en situación irregular”.

El código dispuso la protección de

... los derechos del menor (...) que asegure el desarrollo armónico de su personalidad y aplique los principios normativos de asistencia integral incorporados a la legislación moderna. Con el fin de otorgar derechos y condiciones necesarias para su desarrollo físico, educativo, moral, intelectual que conduzcan hacia el bienestar social (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Código del Menor, 1966: 3).

Los derechos se orientaron a la familia, educación, a la vida, salud y regulación del trabajo. En el derecho a la vida, en la etapa prenatal se estableció que “la mujer cualquiera sea su estado civil, gozará del derecho de asistencia cuando se encuentre en estado de gravidez. La conducta de la madre no afectará este derecho de asistencia” (MTySS, Código del Menor, 1966: 34). El derecho a la alimentación planteaba que “... los padres o ascendientes están obligados al sostenimiento de sus hijos” (MTySS, Código del Menor, 1966: 38). La salud debía ser garantizada con la atención desde la concepción hasta la juventud “...cubrirá los siguientes períodos: prenatal, perinatal, recién nacido, lactante, preescolar, escolar, prepupal, pubertad, adolescencia y juvenil” (MTySS, Código del Menor, 1966: 85).

En el derecho a la educación, se garantizaba su accesibilidad al nivel primario. También se contempló el desarrollo de programas educativos, culturales y deportivos, así como la difusión de métodos y técnicas relativas a la “conducción del menor en el hogar, en la escuela y en el colegio...” (MTySS, Código del Menor, 1966: 92).

La familia se abocó a ser una instancia fundamental para la protección y asistencia, como la responsable del cuidado. “Ningún menor de veintiún años podrá ser privado por sus padres, tutores o guardadores de los derechos de asistencia, relación o integración en la vida familiar” (MTySS, Código del Menor, 1966: 38). Esta responsabilidad se traduce en el cumplimiento de sus deberes con sus hijos como la protección moral y social. El Estado buscó promover la prevención de la desintegración familiar a través de servicios: médico, social y pedagógico. El servicio médico tenía la responsabilidad de crear escuelas de padres y “consultorios de higiene mental” (MTySS, Código del Menor, 1966: 88); el social debía realizar “campañas de sensibilización social en problemas relativos a la integración de la familia y a la protección del menor” (MTySS, Código del Menor, 1966: 90); y el pedagógico, asesorar en la organización de asociaciones de padres de familia con



el fin de buscar “la integración entre la escuela y el hogar con igual objeto creará los clubes de madres” (MTySS, Código del Menor, 1966: 92).

Entonces, al asignar a la familia como la responsable de la infancia en “situación regular”, el cuidado recae principalmente en la mujer, lo que da lugar a una iniquidad de género. A la vez, en el código no se vislumbra este enfoque, sino la igualdad universal de los derechos.

Enfoque asistencialista en la CPE de 1967

¹⁰ El 2 de febrero de 1967 se promulga en la presidencia de René Barrientos.

La concepción del CPE¹⁰ fue situada como “minoridad” que necesita protección por parte del Estado y la familia. El Estado protege la maternidad y la familia por medio de los derechos a la educación, a la familia, a la vida y la salud (CPE, 1967, citado en Galindo, Marcelo, 1991: 575).

La educación se establece como “... la más alta función del Estado (...) deberá fomentar la cultura del pueblo (...), es fiscal y gratuita” (Galindo, 1991: 559), solo en el nivel primario. Al igual que en el período nacionalista se produce la implementación de una nueva ley de educación¹¹.

¹¹ El sistema educativo se estructuró en educación regular, de adultos, especial y extraescolar, la educación regular contempló los niveles primario, medio y superior.

En la salud, “el Estado protegerá la física, mental y moral de la infancia” (Galindo, 1991). El derecho a un hogar y familia implicaba que éstas son las responsables de protección y cuidado. Por ende, se tiene un Estado que no asume la corresponsabilidad del cuidado de las infancias en “situación regular.” Un aspecto que hace referencia es la “igualdad de derechos y deberes de los cónyuges al interior de los matrimonios” (Galindo, 1991: 576). Esta igualdad no profundiza la corresponsabilidad que debe existir en el cuidado de los hijos.

Atención y protección de la minoridad en el Código del Menor de 1975

En el gobierno del general Hugo Banzer, en 1973, se crea la Comisión Revisora del Código del Menor para elaborar un nuevo código, puesto en vigencia el 30 de mayo de 1975. “Este código regula el ejercicio, goce y garantías de los derechos del menor en el territorio de Bolivia...” (Gaceta Oficial, Código del Menor, 1975: 11).

La concepción de la infancia continúa con la mentalidad protectora y de minoridad que necesita ser atendida por ser

el futuro y la garantía de la continuidad de la vida, por lo que la minoridad fue establecida hasta los 21 años.

El menor de edad debe merecer un consideración especial dentro del ordenamiento jurídico del país ya que su presencia es garantía de continuidad y de futuro; empero, por encontrarse en una etapa evolutiva especial debe ser tratado de un modo singular, que comprenda una educación amplia de medios y posibilidades” (Gaceta Oficial, 1973: 1).

La infancia en situación irregular es comprendida como los de conducta irregular¹², los vagabundos¹³ y mal entretenidos¹⁴. Se puede apreciar que se continúa con la doctrina de “situación regular e irregular”. Para los de situación irregular se dispuso la atención y protección en centros de observación y diagnósticos, hogares prenatales, de lactantes, infantes y para niños, escuelas técnico artesanales, agropecuarias, de educación especial, aldeas de niños, centros de terapia y hogares sustitutos.

En cuanto a los derechos se consideraron desde el momento de su concepción. Se tiene como uno de los principales, el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud (asistencia y su cuidado), a una familia, a una educación, a no ser maltratados, a no ser explotado. Un aspecto que se diferencia del código de 1966 es el pleno goce de sus derechos y la igualdad entre hijos fuera y dentro del matrimonio. En el caso de la equidad de género aún no se vislumbra derechos que enfatizan este aspecto.

a) a la vida, b) a nacer en condiciones adecuadas y con la asistencia sanitaria indispensable, c) a recibir alimentación, d) a la dotación de vestuario higiénico y apropiado a su edad y sexo, e) a la habitación higiénica, que garantice la expansión y salud del menor, f) a una educación que garantice su plena integración en la sociedad, g) al cuidado de su salud durante la infancia y adolescencia así como a una asistencia médica oportuna en caso de enfermedad, h) al trato humano respetuoso que significa no ser maltratado moral y materialmente por los que ejercen la autoridad paterna, i) a la vida familiar en su hogar, j) al respeto de su personalidad que exige: la libre expansión de sus facultades y el ejercicio de sus aptitudes individuales, k) al pleno goce de sus derechos jurídico-sociales, igualdad jurídica de todos los menores cualesquiera que sean las condiciones de su origen o nacimiento, l) a no trabajar antes de la edad adecuada y señalada por la las leyes del trabajo en vigencia y cuando

¹² Eran los adolescentes de dieciséis años que fuera “infractor, contraventor o en falta, para este código, es considerado como de conducta irregular leve o aguda” (Gaceta Oficial, Código del Menor, 1975: 55).

¹³ Los de conducta leve fueron los vagabundos, aquellos que en más de “tres oportunidades comprobadas se encuentra fuera de su domicilio pasada las 24 horas” (Gaceta Oficial, Código del Menor, 1975: 58).

¹⁴ Fue “el menor que a cualquier hora del día o de la noche se encuentra en salas de billar, casa de juego, azar...” (Gaceta Oficial, Código del Menor, 1975: 58).



éstas igualmente lo prohíban por las condiciones de insalubridad o de peligro para la moral del menor de 21 años (Gaceta Oficial, Código del Menor, 1975: 29-30).

El código puso en marcha servicios: médico, social y psicopedagógico. El médico fue destinado a la “prevención, asistencia, protección y tratamiento de menores en el campo sanitario” (Gaceta Oficial, Código del Menor, 1975: 20). El social se encargaba de la supervisión de los hogares, “el estudio e incidencia de los factores sociales que condicionan la conducta de menores, la supervisión y control de todos los establecimientos que albergan menores” (1975: 22). Y el psicopedagógico debía ofrecer la programación de la enseñanza, en “los niveles pre-escolar, básico, intermedio, medio profesional y técnico” (1975: 23).

Al ser un derecho fundamental, la familia fue considerada como la máxima instancia de responsabilidad, a cargo de la familia nuclear. Ésta asumía la responsabilidad de su cuidado y como la máxima instancia de socialización. Solo en ausencia de la familia u hogar el “Estado ejercerá la tutela de los menores abandonados y huérfanos absolutos por intermedio de la Dirección Regional del Menor” (1975: 36).

El Estado por medio del código buscó prevenir la desintegración familiar, por lo que el servicio social debía “promover cursos de sensibilización y educación en las asociaciones de padres de familia” como ente responsable del cuidado. Esta asignación genera que la responsable del cuidado sea la mujer.

Para finalizar, en los gobiernos militares dictatoriales se tiene la presencia de políticas públicas que se abocan a lo social, en especial a sectores vulnerables, su enfoque se centra en el control del Estado de los sectores vulnerables, por medio de la protección de los que no cuentan con familia y educación, es decir, de sectores en “situación irregular” como los “marginales,” los “abandonados” y los “huérfanos” aquellos que están fuera de las “normas” y de lo “normal”.

Reflexiones finales

Un aspecto a reflexionar es comprender el largo camino que ha tenido la construcción social de las infancias como “sujetos de derechos”, el cual ha recibido diferentes contribuciones desde los marcos jurídicos internacionales, los movimientos de activistas, la actuación de instituciones supranacionales y regionales. Por lo que se puede comprender

cómo las infancias han transitado por diferentes concepciones y la búsqueda de sus derechos. A nivel internacional se han reflejado los derechos y los marcos jurídicos que se originaron en el siglo XX: Carta de Derechos de la Infancia de 1913, Declaración de Ginebra de 1924, Declaración de los Derechos del Niño de 1959, acuerdos, pactos y la CDN de 1989. A nivel de Bolivia se evidenció la presencia de marcos jurídicos e institucionales sobre los derechos y la concepción de las infancias.

En lo referido a los derechos, en el nacionalismo se iniciaron a partir de la Declaración de los Derechos del Niño Boliviano de 1955 y su presencia en la CPE de 1961. Mientras en los gobiernos militares en los códigos del Menor (1966) y (1975), y en la CPE de 1967 los derechos se centraron en la vida, salud, educación, familia, identidad, a no recibir maltrato, a la igualdad, a la regulación de su trabajo, a la recreación y juego, entre otros.

En cuanto a las concepciones sociales en el imaginario estatal se centró en su minoridad presentes en la CPE, leyes y códigos del Menor. Esto conduce a comprender que primó la noción de protección, la de sanción y castigo. Desde los primeros códigos se fue asentando la condición de minoridad e incompletud de las infancias, su minoría de edad fue el argumento jurídico e institucional para otorgar el lugar que ocuparon en la sociedad, comunidad y familia: el futuro del mañana.

Entonces se advierte que la minorización es el eje de la concepción social que se construye desde el Estado y los gobiernos, sea solo desde la judicialización o su institucionalización. En este sentido, la protección estatal fue desde políticas asistencialistas que iniciaron la cultura de lo tutelar-asistencial y sectorizado, donde el Estado asumió el rol de protector y defensor de los derechos, pero no así del cuidado de las infancias por medio de servicios públicos.

También se ha apreciado en las Constituciones de (1961) y (1967) y códigos la noción de atención-protección de las infancias. De acuerdo a Emilio Bácares (2012: 27) éste enfoque produjo un fanatismo proteccionista que determinó la intervención del Estado en los espacios familiares como prioridad para salvar y resguardar a los niños abandonados, maltratados y hambrientos. La cual se relaciona con la infantilización, donde la existencia de las infancias está temporada por el adulto, una concepción de un ser incompleto y desprotegido que debe ser resguardado, y por lo tanto



dependiente en el tiempo. Como lo menciona Angélica Peña (2007), se desarrolla un control social formal de la niñez como estrategia específica, constituye un ejemplo paradigmático de la construcción de una categoría de sujetos débiles para quienes la protección, mucho más que constituir un derecho, resultaba una imposición.

Otra concepción que se aprecia es la presencia de la doctrina de “situación irregular”, lo que ha originado dos tipos de infancias: una regular con familia y educación; otra irregular sin familia y fuera de las escuelas. Por un lado, este enfoque de protección y cuidado genera que a lo largo de las décadas el Estado asume la responsabilidad de garantizar los derechos para la infancia en situación irregular, mientras que para la regular la familia es la responsable. Por otro lado, la doctrina, enfoque o sistema tutelar encuadra dentro de la escuela etiológica, reproduce criterios criminológicos propios del positivismo de fines del siglo XIX y principios del XX. Por ende, se naturaliza la discriminación hacia las infancias que están fuera de la “situación regular”. Según Mary Beloff (2004: 7) se la estigmatiza por su condición reproduciendo concepciones: “menores en situación irregular”, “estado de abandono, riesgo o peligro moral o material”, “menores en circunstancias especialmente difíciles” o “en situación de disfunción familiar”. Lo que genera que en los imaginarios colectivos se cuestione su participación y protagonismo, por ejemplo, el caso de las niñas, niños y adolescentes trabajadores.

Con respecto a la comprensión como el “futuro del país”, se debe otorgar protección y atención de parte de las familias y la sociedad. En los períodos de estudio, las infancias no representaban el presente, sino el mañana, esta es una lógica adultocentrista. Como lo sugiere Bácares (2012, 38), no puede ser capaz de participar decidida y libremente en la sociedad, so pretexto de ser protegido en una clara y manifiesta “discriminación positiva”.

Pero a partir de la CDN de 1989, las infancias pasan a constituirse en “sujetos de derechos”. En Bolivia la CDN de 1989 fue ratificada en varios marcos jurídicos, como el Código del Menor de 1992, el Código del Niño, Niña y Adolescente El Código del Niño, Niña y Adolescente de 1999 y el reciente Código Niña, Niño y Adolescente de 2001.

Frente a la consideración de las infancias como “sujetos de derechos” implica hoy problematizar varios aspectos.

¿Cómo las infancias se constituyen socialmente en sujetos de derechos? ¿Qué condiciones sociales, culturales e institucionales promueven la efectividad de los marcos jurídicos? ¿Las infancias son actores sociales y protagonistas de sus ejercicios de derechos? ¿Qué mecanismos permiten una participación política? ¿Qué prácticas sociales pueden superar los resabios de las concepciones institucionales y jurídicas del siglo pasado como la minoridad, lo irregular y la incompletud? ¿Qué estrategias sociales, institucionales y jurídicas pueden reorientar la concepción de las infancias temporada por el adultocentrismo?

Bibliografía

- ALZATE, María Victoria (2004). El “Descubrimiento” de la Infancia (I): Historia de un Sentimiento. En *Educación y Psicología*, 1(1), pp. 1-11.
- ARIÈS, Phillip (1960). *El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen*. Madrid: Taurus.
- ARNOLD, Denise y YAPITA, Juan de Dios (2000). *El rincón de las cabezas. Luchas textuales, educación y tierras en los andes*. La Paz: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UMSA, ILCA.
- BÁCARES, Camilo (2012). La Convención sobre los Derechos del Niño: Límites, posibilidades y retos para una cultura de derechos y una infancia protagonista. En *NATS Revista Internacional desde los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores*, XV-XVI (21 y 22), pp. 17-54.
- BELOFF, Mary (2004). Un modelo para armar y otro para desarmar: protección integral de derechos vs derechos en situación irregular. En BELOFF, M. (Ed.), *Los derechos del niño en el sistema interamericano*. Buenos Aires: Del Puerto. pp. 1-15
- GOBIERNO DE BOLIVIA (1955). Anales de Legislación Boliviana (1955). Decreto Supremo N°04017 de 11 de abril. Derechos del Niño Boliviano. La Paz: Facultad de Derecho-UMSA.
- CONSEJO BOLIVIANO DEL MENOR (1960). Decreto Supremo N°5.436 de 21-III-1960. La Paz: Facultad de Derecho-UMSA.
- DIRECCIÓN NACIONAL DEL MENORES Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA (1950). Declaración de Derechos del Niño, proposición boliviana (Proposición boliviana presentada a la III Asamblea General de Asistencia Social de la ONU reunida el 6 de abril de 1950 en Nueva York). La Paz.
- MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (1975). Código del Menor.



- MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (1966). Código del Menor. La Paz.
- COMISIÓN REVISORA DEL CÓDIGO DEL MENOR (1973). Decreto Supremo N° 10859. En *Gaceta Oficial*. La Paz.
- CARLI, Sandra (2011). El campo de estudios sobre la infancia en las fronteras de las disciplinas. Notas para su caracterización e hipótesis sobre sus desafíos. En COSSE, I., LLOBET, V., VILLALTA, C. y ZAPIOLA, M. C. (eds.), *Infancias: políticas y saberes en Argentina y Brasil. Siglos XIX y XX*. Buenos Aires: ANPCYT, CONICET, UNGS, Fundación Centro de Estudios Brasileiros. pp. 31-55
- CARTER, William, y MAMANI, Mauricio (1989). *Irpa Chico: individuo y comunidad en la cultura aymara*. La Paz: Juventud.
- CASAS AZNAR, Ferrán (1998). *Infancia: perspectivas psicosociales*. Barcelona: Paidós.
- CATARI, Pamela (2010). El reconocimiento a lo desconocido en la modernidad orureña 1892-1932. En MENDIETA, P. (coord.), *Vivir la modernidad en Oruro 1900-1930*. La Paz: Cooperación Sueca ASDI, IEB-UMSA. pp. 169-215.
- CATARI, Pamela (2012). Surgimiento de la pedagogía especial en Bolivia en el gobierno lliberal (1900-1920). En *Estudios Bolivianos*, 16, pp. 207-238.
- CAVAGNOUD, Robin (2011). La celebración de los quince años como rito de salida de la infancia para las chicas en el Perú. En *Umbrales*, 22, pp. 139-155.
- COLÁNGELO, María (2003). *La mirada antropológica sobre la infancia. Reflexiones y perspectiva de abordaje*. En Serie encuentros y seminarios: La formación del docente entre el siglo XIX y siglo XXI. Mesa: Infancia y juventudes. Pedagogía y formación. Recuperado el 07 de diciembre de 2012, de http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_colangelo.pdf.
- DÁVILA, Paulí y NAYA, Luis (2006). La evolución de los derechos de la infancia: una visión institucional. En *Encounters on Education*, 7, pp. 71-93.
- DE MAUSE, Lloyd (1982). *Historia de la infancia*. España: Alianza.
- DE OVANDO OMISTE, Elsa (1966). Discurso pronunciado en el acto de entrega del proyecto del Código del Menor. En Código del Menor (DS N°07760 de 01-VIII-1966). La Paz: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- ESCOBARI DE QUEREJAZU, Laura (2006). La Paz. Salud pública, niñez y pobreza 1900-1950. En *Historia y Cultura*, 31, pp. 99-122.

- ESCOBARI DE QUEREJAZU, Laura (2010). *Mentalidad social y niñez abandonada*. La Paz, 1900-1948. La Paz: IFEA, AECID, Plural.
- FRIGERIO, Graciela (2008). *La división de las infancias. Ensayo sobre la enigmática pulsión antiarcóntica*. Buenos Aires: Del estante editorial.
- GALINDO DE UGARTE, Marcelo (1991). *Constituciones bolivianas comparadas 1826-1967*. La Paz: Los Amigos del Libro.
- GALVIS, Ligia (2009). La Convención de los Derechos del Niño veinte años después. En *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 7 (2), pp. 587-619.
- GARCÍA, Emilio (1992). La Convención Internacional de los Derechos de la Infancia: del menor como objeto de la compasión-represión a la infancia-adolescencia como sujeto de derechos. En *Revista Nuevo Foro Penal*, X(57), pp. 421-432.
- GARIBO, Ana Paz (2004). *Los derechos de los niños: una fundamentación*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- GOMES DA COSTA, Antonio (1992). Del menor al ciudadano-niño y al ciudadano-adolescente. En AAVV (ed.), *Del revés al derecho. La condición jurídica de la infancia en América Latina. Bases para una reforma legislativa*. Buenos Aires: Galerna. pp. 131-154.
- IÑO, Weimar (2008a). El pensamiento educativo andino: una forma de entender la educación comunitaria. En *Estudios Bolivianos*, 14, pp. 281-306.
- IÑO, Weimar (2008b). Educación intercultural bilingüe desde las naciones y pueblos indígenas originarios en la educación inicial. *Anales de la Reunión Anual de Etnología 2007*. La Paz: MUSEF, Fundación Banco Central de Bolivia. pp. 541-552.
- IÑO, Weimar (2012). La reforma educativa nacionalista: formación técnica con vocación nacional en la educación pública de Bolivia (1955-1960). En *Anuario Estudios Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos*, 18, pp. 147-174.
- KEY, Ellen (1906). *El Siglo de los Niños*. Barcelona: Imprenta de Henrich y Compañía.
- KLEIN, Herbert (1997). *Historia de Bolivia. Versión castellana de Joseph M. Barnadas*. La Paz: Juventud.
- KONSTANTINOV, Nicolai, MEDINSKII, E. N. y SHABAEVA, M. F. (1977). *Historia de la pedagogía*. La Habana: Pueblo y Educación.
- LIEBEL, Manfred (2006). *Entre protección y emancipación: Derechos de la Infancia y Políticas Sociales*. Madrid: Facultad Ciencias



- Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid.
- LÓPEZ, Ulpian (1999). Niños, cargos y yatiris en Carangas. Una aproximación al caminar andino. En *Eco Andino*, 7-8, pp. 7-34.
- LUCIANI, Leandro (2010). La protección social de la niñez: subjetividad y posderechos en la segunda modernidad. En *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 8(2), pp. 885-899.
- MARTÍNEZ BOOM, Alberto (2008). Proemio. En FRIGERIO, G. (coord.), *La división de las infancias. Ensayo sobre la enigmática pulsión antiarcóntica*. Buenos Aires: Del estante editorial.
- MOLINA, Ramiro, y ROJAS, Rafael (1995). *La niñez campesina. Uso del tiempo y vida cotidiana*. La Paz: UNICEF.
- PEÑA GÓMEZ, Angélica (2007). La niñez en la construcción de la sociedad. En *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, Vol. XLIX (200), pp. 90-120.
- ROUSSEAU, Jean J. (1998). *Emilio o De la educación*. Madrid: Alianza.
- SAAVEDRA, María Josefina (1950). *Régimen jurídico de la menor de edad en Bolivia*. La Paz: Publicaciones de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas-UMSA.
- SALINAS MEZA, René (2001). La historia de la infancia, una historia por hacer. En *Historia social y de las mentalidades*. Santiago, 5, pp. 11-30.
- SOARES, Alice (2012). *Género e infancia y ética del cuidado*. La Paz: CIDES-UMSA.
- YAPU, Mario (2010). Políticas públicas, socialización y experiencias en torno a la infancia. En YAPU, M. (Comp.), *Primera infancia: experiencias y políticas públicas en Bolivia. Aporte a la educación actual*. La Paz: PIEB. pp. 197-224.
- VEERMAN, P. E. (1992). *The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood*. Londres: Martinus Nijhoff.

Fecha de recepción: 30 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 30 de mayo de 2017



Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional



